

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA No. 27

Quinta Época
Año III Marzo 2003

Derechos Reservados ©
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
SEVILLA 40, COL. JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.

Certificado No. 04-2001-012517410700-102

FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

- **2003**
  Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin la autorización expresa.

- El contenido de los artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores.

- ISSN 1665-0085 50027

- Página Internet del T.F.J.F.A: www.tfjfa.gob.mx
  Correo Electrónico de la Revista: publicaciones@mail.tfjfa.gob.mx

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
MARZO DEL 2003. No. 27

CONTENIDO:

- **Primera Parte:**
  Precedentes de Sala Superior 5

- **Segunda Parte:**
  Criterios Aislados de Sala Superior y de Salas Regionales.. 151

- **Tercera Parte:**
  Acuerdos Generales 431

- **Cuarta Parte:**
  Jurisprudencia y Tesis del Poder Judicial Federal 447

- **Quinta Parte:**
  Palabras pronunciadas por el Lic. Juan de Dios Castro Lozano en la ceremonia del informe de labores 2002 del Presidente del Tribunal 497

- **Sexta Parte:**

  Índices Generales 503

PRIMERA PARTE

PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

PLENO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-195

EMPRESAS ASEGURADAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DENTRO DE UNA CAUSA PENAL SEGUIDA EN CONTRA DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO.- CONTINÚAN SUJETAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE ENCUENTRAN AFECTAS.- Conforme al artículo 1° del Código Fiscal de la Federación, el sujeto pasivo de la relación tributaria lo constituye la persona física o moral que realiza los actos descritos por las normas impositivas, y a su vez, el artículo 26 del propio Ordenamiento, enumera quiénes son los sujetos de responsabilidad solidaria con los causantes directos. En esa medida, una empresa asegurada por la Procuraduría General de la República con motivo de una causa penal incoada en contra del representante legal y/o propietario de la misma, no encuentra en dicha medida precautoria decretada por la autoridad judicial, justificación jurídica alguna para demandar en el juicio contencioso administrativo la "*no causación*" de los impuestos a que se encuentra afecta, dado que la causante de los tributos es directamente la personal moral, e independientemente de que su representante legal sea responsable solidario, la situación penal de éste no puede traducirse en una causa de fuerza mayor para dejar de dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de la empresa contribuyente. Además, con independencia de que el "depositario administrador" designado por la Procuraduría General de la República realice actos de administración en la empresa asegurada, ninguna disposición legal le obliga a vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa asegurada, o a realizar el pago de los impuestos a nombre de la misma, ya que el artículo 26 señalado, no se refiere en ninguna de sus hipótesis al "depositario administrador" de un bien asegurado, como responsable solidario para el pago de los impuestos. (1)

Juicio No. 1133/99-05-02-3/731/00-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de enero de 2002, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barrandas.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de enero de 2002)

EN EL MISMO SENTIDO:

V-P-SS-196
Juicio No. 1132/99-05-02-4/517/10-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de octubre de 2002, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Petriz Herrera.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- Esta Juzgadora considera que resultan INFUNDADOS los agravios sostenidos por la actora, en razón de lo siguiente:

La resolución a debate deviene de la visita domiciliaria practicada a la empresa CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., al amparo de la orden número RIM060097/97 de 20 de octubre de 1997 (folio 570 del expediente), notificada el 21 de octubre de 1997, según se advierte de la razón asentada en su parte final, la cual no es controvertida por la demandante.

En la fecha de recepción de la orden de visita, se levantó el "*ACTA PARCIAL DE INICIO*" (folios 559-569 del expediente), exhibida por la parte actora en copia certificada, y en donde se hicieron constar los motivos que llevaron a los auditores a realizar la entrega de la orden de visita a un tercero que se encontraba en el domicilio de la contribuyente destinataria. La parte del "*ACTA*" en la que se advierte tal circunstaciación, es del siguiente tenor:

> "En el Municipio de Rioverde, S.L.P.,----------
> siendo las 10:00 horas del día 21 de octubre de 1997, los CC.- MA. ELENA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO IBARRA REYES, ----------
> visitadores adscritos al Servicio de Administración Tributaria. Administración Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constituyeron legalmente en: MORELOS No. 86, en este Municipio, domicilio fiscal del contribuyente CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. ----------
> con el objeto de levantar la presente acta parcial de inicio, en la que se hacen constar los siguientes hechos: ----------
> ----------H E C H O S----------
> -Siendo las 15:00 horas del día 20 de octubre de 1997, los visitadores antes mencionados se constituyeron en el domicilio también referido para hacer entrega del oficio No. 324-SAT-R6L59-II7967 (sic) de fecha 20 de octubre de 1997, el cual contiene la orden de visita domiciliaria No. RIM060097/97 girado por el C. Administrador Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí, el al (sic) contribuyente CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. ----------
> relativo al período comprendido del 01 de enero de 1992 al 21 de octubre ----
> de 1997, e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada. ----------
> Al requerir la presencia del destinatario del oficio o el Representante Legal del contribuyente, y al no encontrarse presente se le dejó citatorio con el C. ----
> MA. DEL CARMEN JUÁREZ RODRÍGUEZ,----------
> en su carácter de ----------
> ADMINISTRADORA, del contribuyente visitado a efecto de que estuviera presente el día 21 de octubre de 1997 a las 10:00 horas, para desahogar la

diligencia. Ahora bien, siendo las 10:00 horas del día 21 de octubre de 1997, los visitadores antes mencionados se constituyeron en el domicilio también referido para hacer entrega del oficio que contiene la orden de visita ya referida e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada. ----------
Para ese efecto fue requerida la presencia del destinatario de la orden o el representante legal idóneo del contribuyente ----------
CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. ----------
al no haberse presentado en ese momento, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente se entendió la diligencia con el C. JOSÉ FELIPE ISMAEL FLORES FLORES -- en su carácter de tercero, quien 'bajo protesta de decir verdad' y apercibido de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad competente, manifestó tener la calidad de DEPOSITARIO ADMINISTRADOR Y DIRECTOR GENERAL del contribuyente: ----------
CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. ----------
circunstancia que quedó debidamente acreditada a través de ----------
Oficio No. DGABA/1272/97, expedido por el DIRECTOR GENERAL DE OFICIALÍA MAYOR.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, LIC. JORGE FRANCISCO MIRANDA NORICUMBO, con fecha 01 de abril de 1997, en el que se le designa Depositario Administrador del contribuyente visitado: ----------
CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. ----------
quien manifestó ser de nacionalidad mexicana, de estado civil casado, ser mayor de edad de 41 años, de ocupación Medico (sic) Cirujano y tener su domicilio particular en: Avenida México 3, Colonia San Hipólito Xochiltenango, en Tepeaca, Puebla.----------
y se identificó con: ----------
Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral.- Registro Federal de Electores, con número de folio 040457684, con año de registro 1991, clave de elector FLFLFL56060621H000 y número de credencial 207876480264, en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su

portador, en lo sucesivo 'el compareciente' y quien manifestó estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula personal No. FOF560606 Hecho lo anterior, los visitadores entregaron el oficio que contiene la orden de visita en cuestión, con firma autógrafa del C. P. RICARDO ARTEAGA CARRIÓN, Administrador Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí,----- así como un ejemplar de la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado, al compareciente, quien para constancia estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: ----------
'Previa lectura e identificación de los visitadores recibió original del presente oficio, así como un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, siendo las 10 horas del día 21 de octubre de 1997', anotando a continuación los siguientes datos: su nombre, su firma y su cargo.----------
Los visitadores, en el orden indicado en el primer folio de esta acta, se identificaron, ante el C. JOSÉ FELIPE ISMAEL FLORES FLORES----------
en su carácter de TERCERO (DEPOSITARIO ADMINISTRADOR) ----------
como a continuación se indica:----------(...)"

Como consta en el documento preinserto, al inicio de la visita precedió citatorio diligenciado el 20 de octubre de 1997, que es también aportado por las autoridades demandadas en copia certificada (folio 572 de los autos) y consentido tácitamente en sus términos por la parte actora.

Tenemos así que la diligenciación de la visita se llevó a cabo con quien se ostentó como "*Depositario Administrador*", **ante la ausencia del representante legal de la empresa actora**, quien, como se señaló, fue legalmente emplazado; aspecto que, se reitera, no es materia de impugnación.

Ahora bien, el C. Ramón Cervantes Verástegui, representante legal de CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., sostiene haberse encontrado imposibilitado para intervenir en la visita domiciliaria, y en general, para llevar la administración de la empresa (de su propiedad), durante un lapso de aproximadamente 9 años, preten-

diendo justificar tal imposibilidad con la narración de hechos que expone en su demanda, y que medularmente son los siguientes:

- Que con fecha 10 de noviembre de 1989, el C. Ramón Cervantes Verástegui (representante legal de la actora) fue detenido en la Ciudad de San Luis Potosí, instruyéndosele la Averiguación Previa 5280/D/89.

- Que a partir del 7 de noviembre de 1989, el C. Ramón Cervantes Verástegui fue puesto a disposición del Juez Segundo de Distrito en Materia Penal, originándose el expediente 258/89.

- Que el 20 noviembre de 1989 se le dictó auto de formal prisión, quedando recluido desde esa fecha en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, Distrito Federal, hasta el 17 de febrero de 1998 en que obtuvo su libertad definitiva.

- Que durante el tiempo en que estuvo sujeto a proceso, concretamente a partir del 14 de noviembre de 1989, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República decretó el aseguramiento de todos y cada uno de sus bienes.

- Que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo en revisión 192/92 resolvió concederle la protección de la justicia federal, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Mesa I-D de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República pusiera a disposición del Juez Federal del conocimiento, los bienes asegurados.

- Que a la fecha de presentación de la demanda, la Procuraduría General de la República no había puesto a disposición del Juez Penal correspondiente los bienes asegurados, derivando en una posesión y depositaría ilegal; sin embargo, la empresa CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. le fue

devuelta (al C. Ramón Cervantes Verástegui) en el mes de marzo de 1998 por orden del C. Juez Primero de Distrito con residencia en San Luis Potosí, S.L.P., pero sin que compareciera la Procuraduría General de la República a efecto de hacer la entrega material y sin rendir para ello cuenta de especie alguna.

- Que por sentencia del Tribunal Unitario del Noveno Circuito, dictada el 6 de febrero de 1997 en el expediente 456/96-A, se modificó el fallo del Juez Primero de Distrito en San Luis Potosí en la causa penal 53/90 y se resolvió que el C. Ramón Cervantes Verástegui es responsable en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína, no así respecto de los diversos delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; y del mismo modo, se confirmó la sentencia del Juez Primero de Distrito en comento, en lo relativo a que "*se deja insubsistente el aseguramiento judicial decretado sobre* (...) *el inmueble que ocupa la Clínica Santa Catarina* (sic)".

- Que con fecha 6 de febrero de 1998 el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito dictó sentencia en el expediente de amparo directo penal 139/97, concediéndole la protección de la Justicia Federal, resolviendo entre otros aspectos, que quedaron expeditos sus derechos "*para que en la vía y forma que corresponda, solicite la devolución de los bienes asegurados por el representante social que nunca tuvo el juez a su disposición* (...) (sic)".

- Que desde el año de 1989 el C. Ramón Cervantes Verástegui dejó la administración de sus bienes muebles e inmuebles, e ignora en lo absoluto cuál ha sido la suerte en el manejo de los mismos.

- Que el 26 de noviembre de 1998 interpuso demanda de garantías, de la que conoció el Juez Segundo de Distrito con residencia en San Luís Potosí, en el expediente 695/98, y que el fallo recaído fue en el sentido de concederle

el amparo, y que en contra de dicha sentencia tanto él como la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público Federal interpusieron recurso de revisión, el que fuera resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, S.L.P., en el expediente de revisión principal 140/99, otorgándole el amparo solicitado.

- Que por los hechos narrados "*no tiene conocimiento de todo el procedimiento de auditoría* (...)" y que por tanto "(...) *no puede ser estrictamente contribuyente* (...) *menos aún puede considerársele -imposible claro está- retenedor de dineros que sencillamente estuvieron a cargo de las Dependencias, Depositarios, Interventores Administradores o como quiera llamárseles de la Procuraduría General de la República* (...) (sic)"

Las manifestaciones anteriores, en manera alguna conducen a concluir que la empresa actora pudiere ubicarse en algún supuesto legal de "*no causación*" de los tributos que se le fincan en el acto a debate, pues como primer aspecto trascendental, se tiene que los créditos fiscales en controversia le fueron determinados a la empresa denominada CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., y no al C. Ramón Cervantes Verástegui en su calidad de persona física.

En efecto, sin perjuicio de la secuela de los actos judiciales que involucran y atañen al C. Ramón Cervantes Verástegui, representante legal de CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., por la comisión de delitos contra la salud, la imposibilidad material para administrar su negociación por habérsele privado de su libertad y encontrarse la empresa actora asegurada por la Procuraduría General de la República, en manera alguna puede concebirse como una causal de excepción al cumplimiento de las obligaciones tributarias que se señalan en el acto a debate a cargo de CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., **persona moral causante de los tributos controvertidos en la especie.**

Esto es, la imposibilidad física o material del representante legal de la persona moral causante de los impuestos para cumplir a nombre de su mandante con las

obligaciones fiscales a que se encuentra afecta, no exime de ninguna forma a la causante principal del pago de los tributos, pues se reitera, en el caso el sujeto pasivo de la relación tributaria lo es la persona moral CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., y no así el C. Ramón Cervantes Verástegui como principal obligado o como persona física independiente de la empresa que representa.

Al respecto, cabe señalar que el sujeto pasivo de la relación tributaria lo constituye la persona física o moral que realiza las situaciones de hecho previstas en la norma impositiva, conceptualización que se deriva de lo establecido por el artículo 1° del Código Impositivo Federal:

> "**ARTÍCULO 1°.-** Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. Sólo mediante Ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.
>
> "(...)"

A manera ilustrativa, citamos la definición de "*sujeto pasivo*" aportada por Raúl Rodríguez Lobato[*] :

> "El vigente Código Fiscal de la Federación, a diferencia del anterior, no define al sujeto pasivo de la obligación fiscal, sin embargo, siguiendo los lineamientos que señala la doctrina y que recogía el anterior Código podemos precisar que **sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona física o moral, nacional o extranjera, que de acuerdo con la ley está obligada al pago de una prestación tributaria**.
>
> "(...)

* RODRÍGUEZ Lobato, Raúl, *Derecho Fiscal*, segunda edición, Harla, México, 1995, pp. 63-64.

"**El sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia o de un tercero, o bien se trate de una obligación fiscal sustantiva o formal** (...)"

De tal suerte que no se justifica en manera alguna la supuesta "*no causación*" en la especie de los tributos, que infundadamente pretende sostener el representante legal de la contribuyente, por una pretendida "*causa de fuerza mayor*", puesto que con entera independencia de que la empresa actora hubiere sido objeto de aseguramiento por parte de la Procuraduría General de la República, tal circunstancia no se contempla legalmente como un caso de excepción al cumplimiento de las obligaciones tributarias que le asisten a la persona moral; destacándose al respecto que CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal, en ningún momento pone en tela de juicio ser sujeto de los impuestos determinados en el acto a debate.

Aunado a lo expuesto, la empresa demandante estuvo en posibilidades de designar diverso representante, por el período en que el C. Ramón Cervantes Verástegui se encontró imposibilitado materialmente para llevar a cabo la administración de la negociación; por lo que aun cuando la visita domiciliaria de la que deriva la resolución a debate hubiere sido entendida con el "*depositario administrador*" designado por la Procuraduría General de la República (como lo reconocen las partes), tal actuación no resta legalidad al ejercicio de las facultades revisoras de la autoridad demandada ni puede traducirse en motivo de la "*no causación de los impuestos*" o en que la carga tributaria se traslade al "*depositario administrador*", como infructuosamente arguye la demandante.

Esto es así, pues en principio se corrobora de las constancias de autos que la autoridad demandada, en cabal observancia del artículo 44, fracción II del Código Fiscal Federal, realizó el debido emplazamiento al representante legal de la empresa actora, para hacer entrega de la orden de visita, y que al no apersonarse en la fecha y hora señaladas en el citatorio, la orden de visita se entregó a quien se encontraba

presente en el domicilio, diligenciándose la auditoría con persona diversa del representante legal, únicamente por causa imputable a la visitada, quien en ningún momento designó persona con facultades de representación para atender la visita; lo cual pone de manifiesto que la autoridad enjuiciada salvaguardó el derecho de la **persona moral auditada** para intervenir, por conducto de la persona idónea, en el desarrollo de la revisión, no generándose el "*estado de indefensión*" que aduce la demandante; luego entonces, el hecho de que el representante legal o persona autorizada no hubiere tomado parte en la práctica de la auditoría, no puede en ninguna forma derivar en la ilegitimidad de la visita domiciliaria.

En segundo lugar, tampoco puede considerarse que las obligaciones fiscales incumplidas y que motivaron la emisión del acto a debate puedan trasladarse al "*depositario administrador*" designado por la Procuraduría General de la República, pues sin prejuzgar sobre la gestión que dicho funcionario hubiere desarrollado con tal carácter sobre la negociación "*asegurada*" hoy actora; entratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de un contribuyente, los únicos sujetos que en todo caso deberán responder conjuntamente del pago de los tributos causados por aquél, son los contemplados por el artículo 26 del Código Fiscal Federal, no advirtiéndose que su texto se refiera al "*depositario*" o al "*depositario administrador*" entratándose de bienes asegurados:

"**ARTÍCULO 26.-** Son responsables solidarios con los contribuyentes:

"I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones.

"II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos.

"III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquéllas que se causaron durante su gestión.

"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se refiere este Código y su Reglamento.

"La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las sociedades mercantiles, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas sociedades durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la sociedad que dirigen, cuando dicha sociedad incurra en cualquiera de los siguientes supuestos.

"a) No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

"b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del Reglamento de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio de una visita y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte respecto de la misma, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.

"c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.

"IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma.

"V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones.

"VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado.

"VII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos.

"VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria.

"IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado.

"X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate.

"XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido y enterado, en caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales o, en su caso, haber recibido copia del dictamen respectivo.

"XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento de la escisión.

"XIII. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, por el impuesto que se cause por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y por mantener inventarios en territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados en los términos del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo, hasta por el monto de dicha contribución.

"XIV. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios personales subordinados o independientes, cuando éstos sean pagados por residentes en el extranjero hasta el monto del impuesto causado.

"La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones propios."

No se omite señalar que la hipótesis de la fracción IX del artículo anterior, al referirse a los "*terceros* (...) *que constituyan depósito* (...)", comprende los casos en que se constituya depósito "*para garantizar el interés fiscal*", y en la especie, el "*aseguramiento*" de la negociación no fue de tal naturaleza, en tanto se trata de una medida precautoria dictada en una causa penal.

Abundando en lo anterior, al remitirnos a la legislación federal común, encontramos la conceptualización legal genérica de lo que debe entenderse por "*depositario*", en los términos siguientes:

CÓDIGO CIVIL EN MATERIA COMÚN PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EN MATERIA FEDERAL PARA TODA LA REPÚBLICA

"**ARTÍCULO 2516.-** El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquél le confía, **y a guardarla para restituirla cuando la pida al depositante**."

"**ARTÍCULO 2522.-** El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito, según la reciba, y a devolverla cuando el depositante se lo pida, aunque al constituirse el depósito se hubiere fijado plazo y éste no hubiere llegado.

"En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia."

"**ARTÍCULO 2532.-** El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido."

Por su parte, el artículo 34 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, que el demandante invoca como fundamento de sus pretensiones, dispone:

"**ARTÍCULO 34.-** El administrador tendrá independencia respecto al propietario, los órganos de administración, asamblea de accionistas, de socios o de partícipes, así como de cualquier otro órgano de las empresas, negociaciones y establecimientos asegurados. Responderá de su actuación únicamente ante el Servicio de Administración y, en el caso de que incurra en responsabilidad penal, se estará a las disposiciones aplicables."

A su vez, el Código Federal de Procedimientos Penales señala:

"**ARTÍCULO 181.-** Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, así como aquellos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con éste, serán asegurados; ya sea recogiéndolos, poniéndolos en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Tratándose de delitos de imprudencia, ocasionados con motivo del

tránsito de vehículos, éstos podrán asegurarse por el Ministerio Público, en cuyo caso se entregarán en depósito a su conductor o a quien se legitime como propietario, quienes deberán presentarlos ante la autoridad competente cuando ésta lo solicite. En caso de incumplimiento del depositario, se procederá conforme lo que dispone el artículo 385 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

"De todas las cosas aseguradas se hará un inventario, en el que se las describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas.

"Cuando se trate de plantíos de marihuana, papaver somniferum o adormidera u otros estupefacientes, el Ministerio Público, la Policía Judicial o las autoridades que actúen en su auxilio, procederán a la destrucción de aquéllos, levantando un acta en la que se haga constar: el área del cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie.

"Cuando se aseguren estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público acordará y vigilará su destrucción, si esta medida es procedente, previa la inspección de las sustancias, en la que se determinará la naturaleza, el peso y las demás características de éstas. Se conservará una muestra representativa suficiente para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa o en el proceso, en su caso.

"Cuando la autoridad investigadora asegure un bien distinto de los señalados en el párrafo anterior, deberá notificarlo al interesado dentro de los diez días posteriores al aseguramiento, para que alegue lo que a su derecho convenga dentro de un plazo de treinta días, transcurrido el cual, la autoridad resolverá lo conducente en términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

> "Esa notificación y cualquier otra que se haya de hacer con respecto a sacar a subasta bienes no reclamados o a la aplicación del producto de la venta que no se reclame por el interesado, se harán en la siguiente forma: personalmente al interesado si se hallare presente; por cédula que se deje en su domicilio; con alguno de los moradores o de los trabajadores que ahí asistan; o mediante publicación de la cédula en el Diario Oficial de la Federación, por dos veces con intervalo de tres días, si no se conociere el domicilio o la identidad del interesado.
>
> "Si los bienes asegurados, de acuerdo con el dictamen pericial que se recabe, son terrenos destinados o susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, no serán objeto de subasta, debiéndose entregar a las autoridades que por la naturaleza de ellos resulten competentes, para su regularización en términos de las leyes respectivas."

Como se advierte de las disposiciones anteriores, la figura del "*depositario*" de bienes asegurados no encuentra impuesta la obligación de responder por el cumplimiento de obligaciones de carácter tributario, relativas al bien resguardado, ya sea por virtud de un acuerdo de voluntades o por mandato judicial (*aseguramiento*); sino que esencialmente, la finalidad de dicha figura es la guardia y custodia del bien por encargo del depositante.

Además, el desempeño del "*depositario administrador*", dada su naturaleza, no obstaculiza ni incide en la gestión de quien se encuentre ostentando el cargo de administrador o representante de la persona moral, pues incluso la norma especial que el accionante invoca (artículo 34 preinserto), claramente define que "*el administrador* (del bien asegurado) *tendrá independencia respecto al propietario* (...)"; haciéndose evidente la posibilidad de que ambas figuras coexistan respecto de una misma negociación ("depositario administrador" y "representante legal"); no advirtiéndose justificación legal alguna que hubiere limitado a la demandante para acatar sus obligaciones fiscales por conducto de persona con facultades de representación.

En esa tesitura, no se demuestra en el caso la supuesta "*falta de capacidad jurídica*" para el cumplimiento de las obligaciones tributarias; pues como se ha señalado, los tributos se liquidan a la persona moral denominada CLÍNICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., y no a su representante legal como causante directo del tributo; a más de que la empresa demandante tuvo la posibilidad de designar persona facultada para intervenir en la visita domiciliaria y realizar el entero de los impuestos a su cargo.

Caber señalar, en relación a lo expuesto, que la "*capacidad*", en el ámbito del derecho privado, puede ser de dos tipos, a saber: "*capacidad de goce*" y "*capacidad de ejercicio*"; entendida la primera como la posibilidad que tiene un individuo de ser sujeto de derechos y obligaciones, y la segunda como la potestad de accionar al órgano jurisdiccional para el reconocimiento de un derecho subjetivo; sin embargo, en materia tributaria la capacidad del sujeto pasivo de la obligación fiscal no se identifica con la capacidad jurídica del derecho privado, pues en nuestro ámbito sólo es menester la existencia de la capacidad de goce para así poder ser sujeto de la obligación fiscal, esto es, para adquirir el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria; de tal suerte que aun ante la ausencia de capacidad de ejercicio, el particular que se ubique en la norma impositiva deberá cumplirla indefectiblemente, aun entratándose de aquellos sujetos que en el derecho común se definen como "*inimputables*".

Por lo que aun en el supuesto no concedido de que la empresa actora se hubiere encontrado limitada en su "*capacidad de ejercicio*" por la imposibilidad de designar un nuevo representante, tal hipótesis no la exceptúa de la observancia a las normas fiscales que le resultan aplicables.

Por tanto, el argumento de la impetrante relativo a la "*inexistencia del hecho generador*" por la supuesta "*falta de capacidad jurídica*", sobreviene infundado, en tanto que la actualización del hecho que genera la carga impositiva no se supedita a la "*capacidad de ejercicio*" del contribuyente, bastando la comisión de la conducta descrita en la norma impositiva para adquirir el deber de observarla; enfatizándose que la accionante no demuestra bajo ningún planteamiento fundado o elemento de

prueba idóneo, que en el caso no se hubiere actualizado el hecho generador de los tributos, en tanto que nada manifiesta en relación a no ser causante de los impuestos que son objeto de determinación en el caso, ni demuestra tampoco la afirmación que vierte en el sentido de que sólo tiene el carácter de retenedor.

De igual manera, es ineficaz la pretensión de la accionante en cuanto aduce que la Procuraduría General de la República debió haber requerido a los funcionarios depositarios la presentación y pago de las declaraciones anuales y provisionales, toda vez que, como ya se señaló, el aseguramiento de la negociación no traslada al "*administrador depositario*" las cargas tributarias que le asisten a la empresa asegurada, ni la citada Procuraduría tiene atribuciones legales para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y ordenar su cumplimiento en el ámbito meramente administrativo.

Aunado a lo expuesto, resulta importante destacar la personalidad jurídica autónoma que revisten las sociedades, respecto de la de sus socios o accionistas, como se desprende del artículo 2° de la Ley General de Sociedades Mercantiles:

> "**ARTÍCULO 2**.- Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios.
>
> "Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio.
>
> "**Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan exteriorizado como tales, frente a terceros consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica**.
>
> "Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo, y, en su defecto, por las disposiciones generales y por las especiales de esta Ley, según la clase de sociedad de que se trate.

"Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados.

"Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad irregular."

(Énfasis añadido)

La hipótesis legal anterior corrobora nuestra conclusión en el sentido de que los deberes fiscales asisten a la persona moral y es ella la obligada legalmente a la retención, entero, y demás obligaciones tributarias de la sociedad, y con independencia de la acción que ésta pudiera ejercer en contra de la autoridad judicial que administró la negociación; la posible responsabilidad del "*administrador depositario*" frente a la empresa actora no incide en la responsabilidad que ésta tiene ante el Fisco Federal; es decir, de ninguna forma se relevaría a la persona moral por esa indebida administración, de las obligaciones que la ley impositiva establece, aun en el caso de que el manejo indebido de la negociación se debiera a una incorrecta gestión de sus propios socios o accionistas pues, se reitera, la sociedad reviste una personalidad jurídica autónoma de las personas físicas que la integran.

En otro orden de ideas, la manifestación relativa a que las autoridades relacionadas con el aseguramiento de la negociación hoy actora constituyen "*autoridades de facto*", no es susceptible de analizarse en la presente contienda, toda vez que se trata de autoridades que ninguna injerencia tuvieron en el procedimiento fiscalizador que antecede al acto impugnado, o en la emisión de éste, y en términos del artículo 238, fracción I del Código Fiscal de la Federación, sólo pueden someterse al conocimiento de este Órgano Jurisdiccional, cuestiones relativas a la competencia de las autoridades que hubieren emitido el acto en controversia, u ordenado o tramitado el procedimiento del cual deriva.

Así mismo, las cuestiones referentes a la forma en que el "*depositario administrador*" ejerció sus funciones en el período en que se encontró asegurada la empresa actora por la Procuraduría General de la República constituyen aspectos que escapan al ámbito competencial de este Tribunal, toda vez que se trata de actuaciones acaecidas dentro de una causa penal, del todo ajenas al procedimiento fiscalizador que antecede a la emisión del acto en controversia y que, por tanto, no pueden ser dilucidadas mediante el juicio contencioso administrativo, en tanto no exista una resolución administrativa que finque al "*depositario administrador*" una responsabilidad derivada de su desempeño en la administración del bien asegurado.

En las apuntadas consideraciones, la actora no logra, con sus conceptos de impugnación, demostrar ilegalidad alguna en la actuación de la autoridad demandada, siendo por tanto lo que se impone en derecho, el reconocimiento de la validez de la resolución impugnada, ante la ausencia de elementos que la desacrediten.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 239, fracción I, 239-A, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, y 16, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esta Sala Superior, actuando en Pleno, resuelve:

I.- Ha resultado infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada, por lo que no se sobresee el presente juicio;

II.- La parte actora no acreditó su pretensión, en consecuencia:

III.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada.

IV.- Notifíquese. Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Sala Regional del Centro II de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del 9 de enero de 2002, por mayoría de ocho votos a favor de la ponencia, de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, María Guadalupe Aguirre Soria, Silvia Eugenia Díaz Vega, Guillermo Domínguez Belloc y Alejandro Sánchez Hernández; y dos votos con los puntos resolutivos de los Magistrados Francisco Valdés Lizárraga y Luis Carballo Balvanera; encontrándose ausente la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue ponente en el presente asunto el Magistrado GUILLERMO DOMÍNGUEZ BELLOC, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 18 de febrero de 2002 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI, y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. Graciela Buenrostro Peña, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-197

INCIDENTES FRÍVOLOS.- PROCEDE IMPONER SANCIONES ECONÓMICAS POR SU INTERPOSICIÓN.- Con fundamento en el artículo 217, último párrafo del Código Fiscal de la Federación cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente se impondrá a quien lo promueva una multa hasta de cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal. En consecuencia, la interposición por segunda ocasión de un incidente de incompetencia por razón de territorio constituye un incidente frívolo cuando respecto del cual el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha pronunciado previamente, lo que provoca la dilación del juicio. Por tanto, es procedente la imposición de una multa al promovente del incidente frívolo. (2)

Juicio No. 16171/99-11-07-7/725/02-PL-07-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de octubre de 2002, por unanimidad 8 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de octubre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Por lo anterior, al resultar **INFUNDADO** el incidente de incompetencia por razón de territorio promovido, en virtud de que de acuerdo a lo previsto en el artículo 31, primer párrafo de la Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional, vigente al mo-

mento en que se interpuso la demanda de nulidad, es competente la Séptima Sala Regional Metropolitana para conocer del juicio número 16171/99-11-07-7/725/02-PL-07-02, por lo que se resuelve que dicha Sala continúe conociendo del juicio de nulidad aludido.

Por otra parte, es de señalar que el incidente de incompetencia planteado por el Administrador Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es frívolo dado que se interpuso no obstante que mediante resolución interlocutoria de 14 de febrero de 2001, este Pleno se pronunció sobre la competencia de la Séptima Sala Regional Metropolitana de este Tribunal para conocer del juicio de nulidad No. 16171/99-11-07-7/725/02-PL-07-02, lo que provoca la dilación del juicio.

Por ello, con fundamento en el artículo 217, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, se le impone al C. JUAN CARLOS PINSÓN GUERRA, en su carácter de Administrador Central de lo Contencioso, una **multa máxima en cantidad de $2,107.50,** equivalente a 50 veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal.

Lo anterior, en virtud de que ha quedado plenamente acreditada la frivolidad en la interposición del incidente de incompetencia que se sanciona en el artículo 217, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente al 19 de junio de 2002, fecha en que el funcionario aludido cometió la conducta infractora, consistente en la interposición del incidente de incompetencia en razón del territorio que resultó frívolo.

Cabe señalar que el salario mínimo general vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal, a que alude el artículo 217 mencionado, asciende a la cantidad de $42.15, conforme a la RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que fijan los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2001.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 16, fracción VI, 28, fracción XI y 31 de la Ley Orgánica del entonces Tribunal Fiscal de la Federación; 217, fracción I y 218, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Es procedente pero INFUNDADO el incidente de incompetencia en razón de territorio, promovido por el Administrador Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Es competente por razón de territorio para seguir conociendo del juicio de nulidad, la Séptima Sala Regional Metropolitana.

III.- Remítase copia autorizada de la presente resolución interlocutoria a la Sala mencionada a fin de que continúe conociendo del presente asunto.

IV.- Mediante oficio que se gire al Tesorero de la Federación remítasele copia de la presente resolución a fin de que efectúe el cobro de la multa impuesta al servidor público mencionado en la parte final del último considerando de este fallo.

V.- NOTIFÍQUESE.- En su oportunidad archívese este expediente.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue modificada.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de octubre de 2002, por unanimidad de 8 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alma Peralta Di Gregorio, María Guadalupe Aguirre Soria, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel L. Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y Jorge Alberto García Cáceres. Encontrándose ausentes los Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Ma. del Consuelo Villalobos Ortíz y Alejandro Sánchez Hernández.

Se elaboró el presente engrose el 18 de noviembre de 2002, y con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, ante la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Graciela Buenrostro Peña, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-198

CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS. PROCEDE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS SEAN DE ÓRGANOS DE DIFERENTE JERARQUÍA.- De la interpretación armónica de los artículos 259, 260 y 261 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que la contradicción de sentencias procede entre sentencias sustentadas entre las Secciones, entre las Salas Regionales, entre el Pleno y las Secciones, y entre el Pleno o las Secciones y Salas Regionales; interpretar lo contrario daría como consecuencia que ningún resultado práctico tendría la obligación que tienen las Salas Regionales de expresar las razones por las cuales se apartan de los precedentes establecidos por el Pleno o las Secciones, enviando copia de la sentencia correspondiente al Presidente del Tribunal, si no es para que éste lo haga del conocimiento del Pleno para que decida qué criterio debe prevalecer. (3)

Contradicción de sentencias No. 8749/01-17-05-7/706/01-PL-05-4/y otro/661/02-PL-04-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de octubre de 2002, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge A. García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de octubre de 2002)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-199

CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- QUEDA SIN MATERIA SI UNO DE LOS FALLOS SEÑALADOS COMO CONTRADICTORIOS QUEDÓ INSUBSISTENTE.- Si por razones de lógica fundamental sólo puede haber con-

tradicción entre tesis opuestas, basta que una de ellas deje de existir para que con ella se extinga todo antagonismo; por ende, no procede el estudio de una contradicción si una de las sentencias que se señalaron como contradictorias quedó insubsistente en cumplimiento de una ejecutoria dictada por el Poder Judicial, por lo que la misma quedará sin materia. (4)

Contradicción de sentencias No. 8749/01-17-05-7/706/01-PL-05-4/y otro/661/02-PL-04-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de octubre de 2002, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge A. García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de octubre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- Previamente a la determinación de la oposición formal de criterios, que es lo que da origen propiamente dicho a una contradicción de sentencias, este Pleno considera conveniente señalar que de los artículos 259, 260 y 261 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que la contradicción de sentencias procede entre sentencias sustentadas entre las Secciones, entre las Salas Regionales, entre el Pleno y las Secciones, y entre el Pleno o las Secciones y Salas Regionales; interpretar lo contrario daría como consecuencia que ningún resultado práctico tendría la obligación que tienen las Salas Regionales de expresar las razones por las cuales se apartan de los precedentes establecidos por el Pleno o las Secciones, enviando copia de la sentencia correspondiente al Presidente del Tribunal, si no es para que éste lo haga del conocimiento del Pleno para que decida qué criterio debe prevalecer.

Resulta aplicable al caso, por analogía, la siguiente tesis:

"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 205-216 Cuarta Parte
"Página: 53

"**CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE LA DENUNCIA RESPECTO DE TESIS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, FRENTE A TESIS SUSTENTADAS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-** Si bien es cierto que desde un punto de vista literal, el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y los artículos 195 y 195 bis de la Ley de Amparo, parecen restringir la procedencia de la contradicción de tesis a dos casos, a saber: cuando se trata de las sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia entre sí, y cuando las sustentan los Tribunales Colegiados de Circuito, también es cierto que tales dispositivos dejan sin resolver el caso en que la Suprema Corte de Justicia sustenta, en tesis aisladas, un criterio sobre una cuestión jurídica y un Tribunal Colegiado sostiene lo contrario, habida cuenta de que legalmente sólo está obligado a acatar la jurisprudencia, por lo que en la hipótesis mencionada podría establecer su propio criterio sin violar ningún precepto constitucional o legal. En este orden de ideas, de no hacer una interpretación extensiva o una integración de las normas antes mencionadas, ello daría lugar a la inseguridad jurídica pues podría suceder que sólo una denuncia de contradicción de tesis permitiera a la Suprema Corte avocarse al conocimiento del problema jurídico para establecer como jurisprudencia obligatoria la tesis que debiera prevalecer. **Así pues, por mayoría de razón, debe concluirse que sí procede la denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por un Tribunal Colegiado de Circuito y por una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**.

"Reclamación en contradicción de tesis 5/85. Enriqueta de Llano. 19 de marzo de 1986. Mayoría de tres votos. Disidente: (parcialmente) Noé Castañón León. Ponente: Mariano Azuela Güitrón."

Ahora bien, para que exista una contradicción de sentencias, esto es una oposición formal de criterios, se requiere que concurran los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos; tal y como se desprende de las siguientes jurisprudencias:

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, Abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76

"**CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-** De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. **Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de**

las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría

de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, Octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22

"**CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-** De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. **Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.**

"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991.

Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de Jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

En el presente caso, no se da la oposición formal de criterios, en virtud de que como quedó de manifiesto en el considerando que antecede la sentencia dictada por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana con fecha 17 de septiembre de 2001, que es una de las sentencias que originaron la contradicción, fue dejada sin efectos en cumplimiento a un amparo.

En efecto, si por razones de lógica fundamental sólo puede haber contradicción entre tesis opuestas, basta que una de ellas deje de existir para que con ella se extinga todo antagonismo.

Así las cosas, si de las sentencias que dieron origen a la contradicción, una de ellas fue dejada sin efectos mediante la diversa sentencia de fecha 17 de mayo de 2002, en cumplimiento a lo ordenado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo No. D.A.- 76/2002; resulta más que evidente que la contradicción de sentencias que se denunció quedó sin materia.

Sirven de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

"Segunda Época
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año VI. No. 59. Noviembre 1984
"Tesis: II-TASS-6928
"Página: 384

"**CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- CASO EN QUE QUEDA SIN MATERIA.-** Si al avocarse al estudio y solución de una contradicción entre sentencias se comprueba que una de las sentencias que dio origen a la contradicción aludida fue revocada por algún medio legal de defensa, desapa-

reciendo por tanto sus efectos legales, no obstante que pudiera ser procedente la denuncia de contradicción entre sentencias en el momento en que se presentó la misma, debe declararse sin materia al desaparecer los efectos legales de uno de los fallos que la motivan. (29)

"Contradicción de sentencia: 32/81.- Resuelta en sesión de 13 de noviembre de 1984, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Edmundo Plascencia Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Aurea López C."

También resultan aplicables al caso por analogía las siguientes tesis:

"Tercera Época
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año I. No. 10. Octubre 1988
"Tesis: III-TASS-527
"Página: 30

"**CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- ES IMPROCEDENTE SI ESTE TRIBUNAL REVOCA UNA DE LAS SENTENCIAS MATERIA DE LA CONTRADICCIÓN.-** Si este Tribunal revoca una de las sentencias que es materia de la denuncia respectiva, debe declararse improcedente la contradicción planteada, por haber quedado sin materia. (47)

"Contradicción de sentencias No. 3/83.- Resuelta en sesión de 26 de octubre de 1988, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. Alberto Ocampo Gómez."

"Segunda Época
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año VIII. No. 87. Marzo 1987
"Tesis: II-TASS-9726
"Página: 719

"**CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- ES IMPROCEDENTE SI ESTE TRIBUNAL REVOCA UNA DE LAS SENTENCIAS MATERIA DE LA CONTRADICCIÓN.-** Si este Tribunal ha revocado una de las sentencias que se alega contradice otra que es materia de la denuncia respectiva, debe declararse improcedente la contradicción planteada. (43 bis)

"Contradicción No. 2/83/7034/80 y 7084/80.- Resuelta en sesión de 11 de marzo de 1987, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretaria: Lic. Adriana Díaz de la Cueva."

"Segunda Época.
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año IV. No. 20. Agosto 1981.
"Tesis: II-TASS-2869
"Página: 241

"**SENTENCIAS, CONTRADICCIÓN.- NO PROCEDE SU ESTUDIO SI UNO DE LOS FALLOS SEÑALADOS COMO CONTRADICTORIOS QUEDÓ INSUBSISTENTE.-** En los términos del artículo 232 del Código Fiscal de la Federación puede denunciarse la contradicción que existe entre las sentencias dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal; sin embargo no procede el estudio de tal contradicción si una de las sentencias que se señalaron como contradictorias quedó insubsistente en cumplimiento de una ejecutoria en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, y más aún cuando la contradicción denunciada no se refiere a diversos criterios jurídicos sostenidos en las sentencias, sino a la omisión de tomar en cuenta una prueba. (79)

"Contradicción de sentencias 647/76.- Resuelta en sesión de 19 de agosto de 1981, por unanimidad de 6 votos.- Magistrada Ponente: Margarita Lomelí Cerezo.- Secretaria: Lic. Celia López Reynoso."

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 259 y 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Ha quedado sin materia la denuncia de contradicción de sentencias promovida por la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega.

II.- NOTIFÍQUESE.- A la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de octubre de 2002; por lo que toca a la temática que se refleja en la tesis cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS. PROCEDE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS SEAN DE ÓRGANOS DE DIFERENTE JERARQUÍA", por mayoría de 7 votos a favor de los Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Jorge Alberto García Cáceres, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel L. Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera y Guillermo Domínguez Belloc; y 3 votos en contra de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María Guadalupe Aguirre Soria y Alejandro Sánchez Hernández. Y por lo que toca al tema reflejado en la tesis cuyo rubro es "CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- QUEDA SIN MATERIA SI UNO DE LOS FALLOS SEÑALADOS COMO CONTRADICTORIOS QUEDÓ INSUBSISTENTE", por mayoría de 9 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Jorge Alberto García Cáceres, María del Consuelo Villalobos Ortíz, María Guadalupe Aguirre Soria, Manuel L. Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y Alejandro Sánchez Hernández; y 1 voto en contra de la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, quien se reservó su derecho para formular voto particular. Estuvo ausente la Magistrada Alma Peralta Di Gregorio.

Fue ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 21 de noviembre de 2002. Con fundamento en los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Graciela Buenrostro Peña, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

MULTAS NO FISCALES

V-P-SS-200

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE SU IMPUGNACIÓN.- En los términos del artículo 1° del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de diciembre de 1994, dicho Instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia, por lo que al ser un organismo descentralizado, forma parte de la Administración Pública Paraestatal, en los términos de los artículos 1° y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y consecuentemente forma parte de la Administración Pública Federal, por tanto, si dicho Instituto está facultado en los términos de su Ley para imponer sanciones por infracción a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, es inconcuso que las multas que imponga tienen el carácter de multas administrativas, y de no resultar procedente el recurso de reconsideración previsto en el artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, se surte la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de acuerdo con la fracción III, del artículo 11 de su Ley Orgánica. (5)

Juicio No.10696/01-17-04-6/165/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de noviembre de 2002, por mayoría de 6 votos, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de noviembre de 2002)

PRECEDENTE:

V-P-SS-11
Juicio No. 5/99-11-04-3/616/00-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 11 de agosto del 2000, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto del 2000)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 2. Febrero 2001. p. 68
Fe de Erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 3. Marzo 2001. p. 274

MULTAS NO FISCALES

V-P-SS-201

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO POR SU LEY.- En los términos del artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, medio de defensa que se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de 30 días; por tanto, si las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no son susceptibles de impugnarse a través de dicho recurso, que es el único que establece la Ley de la materia, entonces, es inconcuso que tales sanciones tienen el carácter de definitivas en los términos del último párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por tanto, son susceptibles de impugnarse ante este Tribunal. (6)

Juicio No.10696/01-17-04-6/165/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de

noviembre de 2002, por mayoría de 6 votos, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de noviembre de 2002)

PRECEDENTE:

V-P-SS-12
Juicio No. 5/99-11-04-3/616/00-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 11 de agosto del 2000, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto del 2000)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 2. Febrero 2001. p. 69
Fe de Erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 3. Marzo 2001. p. 274

SEGUNDA SECCIÓN

LEY ADUANERA

V-P-2aS-183

CRÉDITOS EN MATERIA ADUANERA.- CASO EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DETERMINARLOS EN EL PLAZO DE CUATRO MESES.- Con motivo de las innovaciones que se han dado en la actualidad en el sistema fiscal federal mexicano, sobre todo en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se han efectuado reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Aduanera, con el objeto inmediato de que la interpretación de dicho Tratado y la aplicación de los procedimientos que la autoridad aduanera lleve a cabo en relación al mismo, sean ágiles, ciertos y confiables, teniéndose como propósito agilizar la tramitación aduanera y dar mayor seguridad a las partes en los asuntos que se tramiten en materia aduanal. En este orden de ideas, uno de los cambios más importantes que han sufrido los ordenamientos legales en cita es el establecido en el artículo 153 de la nueva Ley Aduanera, cuya vigencia inició a partir del 1° de abril de 1996, en donde se prevé un plazo obligatorio de cuatro meses a cargo de las autoridades aduaneras para emitir la determinación, que en su caso proceda, de contribuciones omitidas, derivadas de los supuestos que en el propio artículo se señalan. Por tanto, si en el juicio contencioso administrativo ha quedado demostrada la violación a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley Aduanera, en virtud de que la resolución recurrida fue emitida fuera del plazo de cuatro meses a que se ha hecho referencia, debe declararse su nulidad lisa y llana, al demostrarse que se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas, en los términos del artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación. (7)

Juicio No. 2431/01-17-03-9/90/01-S2-08-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de abril de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado

Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de abril de 2002)

PRECEDENTE:

V-P-2aS-148
Juicio No. 15912/99-11-01-2/598/00-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de enero de 2002, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. Rafael García Morales.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de enero de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 18. Junio 2002. p. 11

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-184

AVISO PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.- SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA NO OBLIGA A CONCLUIR ANTICIPADAMENTE LA VISITA DOMICILIARIA.- El artículo 47 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año de 1997, establecía la obligación de la autoridad fiscal de concluir anticipadamente una visita domiciliaria cuando el visitado, antes del inicio de la visita, hubiese comunicado mediante aviso, que sus estados financieros serían dictaminados por contador público autorizado, siempre y cuando se presentase dentro de los plazos y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 46 del Reglamento de dicho Código. Ahora bien, este precepto en el año de referencia disponía que el aviso debería presentarse dentro del plazo de cuatro meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal, tratándose de personas físicas y de tres meses en el caso de personas morales; y exigía que se encontrara suscrito tanto por el contribuyente como por el contador público que fuera a dictaminar y que el dictamen se refiriera a los estados financieros del último ejercicio fiscal. Conforme a lo anterior, si el contribuyente visitado manifestó que no se encontraba obligado por disposición de ley a presentar el aviso y exhibió el documento correspondiente, pero el mismo fue presentado fuera de los plazos otorgados en el precepto Reglamentario ya indicado, la autoridad no estaba obligada a concluir de manera anticipada la visita domiciliaria, ya que no se surtió una de las condiciones requeridas para tal efecto. (8)

Juicio No. 15097/00-11-06-4/149/02-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de abril de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 2002)

COMERCIO

V-P-2aS-185

MEMBRESÍAS DE TIEMPOS COMPARTIDOS.- NO TIENEN LA CALIDAD DE ACCIONES.- Los artículos 111, 118, 122 y 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señalan que las acciones deben expresar la denominación, el domicilio y la duración de la sociedad; la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio; el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones; la serie y número de la acción; los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción; las limitaciones al derecho de voto, y la firma autógrafa de los administradores que deban suscribir el documento, o la firma facsímil de dichos administradores; con la condición de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la sociedad. Las membresías de tiempos compartidos no cumplen con dichos requisitos, además de que no cuentan con los cupones por medio de los cuales se hará efectivo el cobro de dividendos de la sociedad, por lo que si las membresías de tiempos compartidos no señalan que el comprador tenga un derecho a una parte proporcional en el reparto de beneficios, a una cuota de liquidación en la disolución de la sociedad y derecho de voto, no pueden ser consideradas como acciones. Adicionalmente, la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que en el caso de que en las acciones conste el plazo en que deban pagarse, transcurrido dicho plazo, la sociedad puede exigir judicialmente el pago de la exhibición o a la venta de las acciones, y en las membresías de tiempo compartido, cuando no sean pagadas, la emisora tiene el derecho a dar por terminado el contrato y a retener los pagos efectuados por el comprador, por lo que el efecto de la falta de pago es diferente en las acciones y en las membresías. (9)

Juicio No. 15097/00-11-06-4/149/02-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de abril de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado

Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 2002)

COMERCIO

V-P-2aS-186

MEMBRESÍAS DE TIEMPOS COMPARTIDOS.- NO TIENEN LA CALIDAD DE TÍTULOS DE CRÉDITO.- Las membresías de tiempos compartidos no son títulos de crédito porque son documentos que identifican a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna, definición que por disposición del artículo 6° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se encuentra excluida de la aplicación de las reglas de los títulos de crédito. Y en las membresías de tiempo compartido se estipula que una empresa la vende al comprador, y que éste adquiere la obligación de pagar un precio por dicha membresía, la cual tiene incorporados créditos vacacionales canjeables cada año y por los servicios de hospedaje, señalándose que el comprador adquiere la membresía para su uso y goce y no con fines de especulación, por lo que se encuentra precisado quién tiene derecho a exigir la prestación de los servicios de hospedaje. (10)

Juicio No. 15097/00-11-06-4/149/02-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de abril de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 2002)

COMERCIO

V-P-2aS-187

MEMBRESÍAS DE TIEMPOS COMPARTIDOS.- NO TIENEN LA CALIDAD DE UN CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN.- De acuerdo a lo señalado en los artículo 228-A, 228-B, 228-N y 228-O de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, un requisito *sine qua non* para que un documento tenga la calidad de un certificado de participación, es que sea emitido por instituciones de crédito autorizadas para efectuar operaciones fiduciarias, requisito que no cumple una sociedad anónima de capital variable, cuyo objeto sea la operación de toda clase de hoteles, moteles, centros turísticos y establecimientos destinados al hospedaje del turismo en operación hotelera o tiempo compartido. Además, tales certificados representan el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable la sociedad fiduciaria que los emita, características que no cumplen las membresías de tiempos compartidos. Finalmente, los certificados de participación deben contener la designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la misma; el importe de la emisión, con especificación de número y del valor nominal de los certificados que se emitan; el mínimo de rendimiento garantizado; el término señalado para el pago de productos o rendimientos y del capital y los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados; y el lugar y la fecha del acta de emisión, con especificación de la fecha y número de la inscripción relativa en el Registro de Comercio, requisitos que tampoco cumple la membresía de tiempo compartido. (11)

Juicio No. 15097/00-11-06-4/149/02-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de abril de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 2002)

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

V-P-2aS-188

MEMBRESÍAS, ESTÁN GRAVADAS CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Los artículos 1° y 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establecen que se está afecto al pago de dicho impuesto en el supuesto de que se otorgue el uso o goce *temporal* de bienes, y entendiéndose como tal cuando una persona permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles *a cambio de una contraprestación*, en cualquier modalidad jurídica; por lo que respecta a membresías de tiempo compartido, en ellas el comprador adquiere la obligación de pagar como *contraprestación* un precio por dicha membresía, la cual tiene incorporados créditos vacacionales que implican servicios de hospedaje que pueden ser utilizados y durante un periodo. Por lo que tales documentos cumplen con los requisitos legales, toda vez que el requisito de que se trate de uso o goce de bienes se colma al permitirle al comprador de la membresía canjear los créditos vacacionales por los productos y servicios de recreación y viajes, unidades de alojamiento u hospedaje, y otros beneficios y productos relacionados; el segundo requisito que se trate de bienes tangibles, se colma en razón de que los productos y servicios de recreación y viajes, y las unidades de alojamiento son bienes materiales o corpóreos; el tercer requisito consiste en que el uso o goce tenga el carácter de temporal se surte en la medida en que los créditos vacacionales se utilizan cada año, durante un periodo; el cuarto requisito consiste en que exista una contraprestación, se colma pues la propia membresía señala que existe un pago a cambio de su adquisición. (12)

Juicio No. 15097/00-11-06-4/149/02-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de abril de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 2002)

CONSULTAS

V-P-2aS-189

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES. SÓLO BENEFICIAN AL PARTICULAR QUE LAS GESTIONÓ.- En el caso de la emisión de una resolución por parte de la autoridad hacendaria, en contestación a una consulta planteada por un particular, se debe tener en cuenta el ejercicio fiscal al cual se refiere dicha consulta, siendo inaplicable respecto a otro ejercicio fiscal, por lo que si una consulta de referencia versa respecto a si los documentos denominados "membresías" son títulos de crédito en los términos del artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para el efecto de que su enajenación no cause el impuesto al valor agregado, y se refirió únicamente al año de 1994, entonces resulta que la situación real y concreta se refiere exclusivamente al año fiscal de 1994, por lo que no puede ser aplicado a una situación acontecida en el año fiscal de 1995, conforme a lo señalado en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. (13)

Juicio No. 15097/00-11-06-4/149/02-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de abril de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

Ahora bien, respecto al argumento consistente en que las membresías tienen la calidad de títulos de crédito y que en consecuencia están exentas del pago del impuesto al valor agregado, este Órgano Colegiado considera que deviene en infundado.

Al respecto, la actora ofrece como prueba de su parte un "certificado de confirmación de membresía", así como su respectiva traducción, misma que se localiza a fojas 295 y 296 del expediente, que es del tenor siguiente:

"**TRADUCCIÓN**

"Membrete: **ROYAL HOLIDAY**

"**Una Sociedad suiza**

"**Certificado de Confirmación de Membresía**

"**En el**

"**Plan Royal Holiday**

"Esta certificación garantiza que

"Nombre: No.
"Domicilio:

"Ha quedado registrado en los libros de Royal Holiday (Club). Esta inscripción acredita que la persona (s) antes mencionada, entre otras cosas, tiene el derecho de participar en el Plan del Club en el Nivel de Ingresos , con Créditos Holiday redimibles anualmente durante 30 años según se estipula en las Reglas Operativas.

"Este registro se realiza con base en los términos de los Artículos de Constitución del Club y en la Resolución del Consejo de Administración No. de fecha , que acredita la presente transmisión.

"Ginebra, Suiza, ,2000

"Director"

De la transcripción que antecede se desprende que a través del documento denominado “certificado de confirmación membresía” se registra a la persona ahí señalada en los libros de Royal Holiday Club, con lo que se acredita que su titular tiene derecho de participar en un determinado Plan del Club, señalándose en el propio documento que lo mismo se realiza de acuerdo con lo que se estipula en el Acta Constitutiva del Club y en una resolución del Consejo de Administración que no está especificada.

Asimismo, la actora también aporta como prueba de su parte las documentales que obran a fojas 173 a 180 del expediente, consistentes en:

a) El pagaré de 15 de junio de 1995, el Programa Vacacional Royal Holiday Club y el documento confirmatorio del Programa Vacacional del Club, relativos al contrato No. 0090596.

b) El pagaré de 22 de febrero de 1995, el Programa Vacacional Royal Holiday Club y el documento confirmatorio del Programa Vacacional del Club, relativos al contrato No. 90441.

De los cuales se desprende lo siguiente:

1. En la cláusula 1 del contrato del Programa Vacacional Royal Holiday Club, se estipula que la vendedora (COSTAMEX), por ese instrumento vende al comprador una membresía emitida por Royal Holiday Club, adquiriendo el comprador la obligación de pagar un precio por dicha membresía, la cual tiene incorporados los créditos vacacionales ahí determinados, y que pueden ser canjeados cada año (durante 30 años) por **los servicios de hospedaje y otros beneficios que integran el Programa Vacacional del Club**, de acuerdo con lo establecido en las reglas operativas del Club y de conformidad con las tablas de asignación de los créditos vacacionales.

2. En la cláusula 5 del contrato del Programa Vacacional Royal Holiday Club, se estipula que una vez que el comprador pague la totalidad del precio, COSTAMEX va a entregarle un "Certificado de Membresía", mismo que comprueba a su tenedor la calidad de miembro del Club y su derecho de participar en el Programa Vacacional del Club.

3. En el documento confirmatorio del Programa Vacacional del Club, se señala que mediante la compra de la membresía consignada en el contrato (contrato del Programa Vacacional Royal Holiday Club) tiene derecho a participar en el Programa Vacacional del Club, el cual le da derecho a disfrutar de los servicios establecidos en las reglas operativas del Club. También se señala que los únicos acuerdos válidos entre las partes son los pagarés, el contrato y las reglas operativas del Club, y que no existe ningún otro documento obligatorio para COSTAMEX o el Club. Se señala que el comprador adquiere la membresía para su uso y goce y no con fines de especulación.

Se hace necesario hacer hincapié en que la parte actora **no ofreció como prueba de su parte las reglas operativas del Club**, por lo que esta Juzgadora **únicamente va a analizar las reglas operativas transcritas por la autoridad en la resolución impugnada (fojas 80 a 83)**, las cuales no están transcritas de manera completa, lo cual es relevante señalar para resolver la presente litis, toda vez que como se señala en el propio contrato del Programa Vacacional Royal Holiday Club, los **únicos documentos que establecen los derechos y obligaciones de las partes (entendiéndose como tales a COSTAMEX y al comprador), son el referido contrato, el pagaré y las reglas operativas del Club**, y en la especie, la actora sólo ofreció como pruebas de su parte, a título ejemplificativo, dos contratos, con sus pagarés y con sus documentos confirmatorios del Programa Vacacional del Club, sin que haya exhibido las comentadas reglas operativas, no obstante que a ello se encontraba obligada en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las reglas operativas que son de nuestro interés y que se encuentran transcritas en la resolución impugnada son las siguientes:

"**1. Definiciones:**

"En las siguientes Reglas Operativas adoptadas por Holiday Club Management Company, Ltd. y aprobadas por Royal Holiday Club, los siguientes términos o expresiones tendrán los significados que se les asigna a continuación.

"**Club**

"Royal Holiday Club, una compañía Suiza que ha expedido y seguirá expidiendo acciones de participación, referidas en la Cláusula 4.1, que otorgan a sus tenedores el derecho de participar en el Programa del Club.

"**Programa del Club**

"Significa el programa mediante el cual los Miembros tienen derecho a canjear Créditos Vacacionales por Alojamiento en las Unidades de Alojamiento y/o por aquellos otros beneficios que sean Introducidos al Programa de tiempo en tiempo conforme a las disposiciones de estas Reglas Operativas;

"**Niveles de Admisión**

"Significa los diversos niveles de Membresías que otorgan a los Miembros diferentes números de Créditos Vacacionales cada año, mismos que son cualquier de las siguientes categorías: i) Bronce, ii) Plata, iii) Oro, iv) Platino y v) Royal;

"**Miembros**

"Significa las personas que han sido registradas por el Club como tenedores de acciones de participación y de Certificados de Membresías en el Programa del Club; y salvo que se especifique lo contrario, 'Membresía' tendrá el siguiente significado;

"**Certificado de Membresía**

"Significa un documento emitido conforme a estas Reglas Operativas en la forma en que el Club determine, de tiempo en tiempo, confirmando interalia, el registro de un Miembro como participante en el Programa del Club y el correspondiente Nivel de Admisión;

"**Registro de Membresía**

"Significa el registro de tenedores de Certificados de Membresías, especificado el Nivel de Admisión;

"(...)

"**3.- Objetivos**

"El objeto del Programa del Club es el proporcionar a sus Miembros diversos productos y servicios de recreación y viajes, Unidades de Alojamiento, otros beneficios y productos relacionados, cada año, y obtener otros beneficios para los Miembros, todo lo anterior conforme a estas Reglas Operativas.

"(...)

"**7.2** La Membresía y los Créditos Vacacionales que se soliciten serán indivisibles e inseparables. Sin embargo, cualquier persona podrá solicitar una Membresía a nombre de dos o más personas. Asimismo, las notificaciones sólo se les enviarán a la primera persona mencionada en la solicitud de compra o a la persona designada subsecuentemente por dichas personas. Sólo estas personas estarán autorizadas para dar instrucciones respecto de la Membresía adquirida. Cada una de estas personas está obligada solidariamente del pago de las cuotas del Club.

"(...)

"**7.6** Todos los Créditos Vacacionales caducarán al término de 30 años de Membresía y la cuenta de Créditos Vacacionales correspondiente será cancelada.

"(...)

"**10.-** Obligaciones de los Miembros al ocupar una Unidad de alojamiento y/u otros beneficios.

"Cada Miembro del Programa del Club quedará sujeto a las siguientes obligaciones (y en la medida en que dichas obligaciones sigan obligando su patrimonio después de su muerte y en tanto su Certificado de Membresía no hubiera sido transmitido a un nuevo Miembro del Programa del Club, e independientemente de que su representante personal pueda no ser Miembro):

"**10.1** A cumplir en todo momento con las disposiciones de estas Reglas Operativas, las indicaciones de la Administración, cualquier Operadora del Desarrollo o los proveedores de otros beneficios.

"**10.2** Los Miembros y sus Huéspedes deben cumplir con todas las disposiciones, reglas, reglamentos internos, estatutos, reglamentos, leyes, estatutos sociales, ordenamientos, edictos, decretos o condiciones de cualquier licencia o permiso relacionado con las Unidades de Alojamiento u Otros Beneficios vigentes, de tiempo en tiempo. En caso de que algún Miembro o sus Huéspedes incumplan con las disposiciones precisadas arriba, el Miembro quedará sujeto a las sanciones establecidas por las Operadoras de los Desarrollos o por cualquier otra entidad, por lo que el Club no tendrá responsabilidad alguna de los actos o conducta de algún Miembro o Huésped en ningún momento, al usar las Unidades de Alojamiento y/u otros beneficios."

Ahora bien, del análisis efectuado al poder que se exhibió en juicio para acreditar la calidad del representante legal de la empresa actora, que obra a fojas 68 a 71 de autos, se desprende que el **objeto social de Grupo Costamex, S.A. de C.V.,** es el siguiente:

"**c).- Con la escritura número trece mil quinientos sesenta y nueve,** otorgada en esta ciudad, el día diecinueve de octubre de mil novecientos noventa, ante el Licenciado ANTONIO VELARDE VIOLANTE, Notario Público número Ciento Sesenta y Cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el Folio Mercantil número ciento veintiocho mil sesenta y cinco, con fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa, en la que se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día dieciséis de enero de mil novecientos noventa, en la que se acordó la AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE 'PANORAMA TURÍSTICA DE MÉXICO', SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE al artículo respectivo de los Estatutos Sociales, **De dicha escritura copio**----------
'------SEGUNDA.- Los objetos de la sociedad serán:----------
" 'a) Adquirir acciones, participaciones y obligaciones en todo tipo de negocios, empresas y compañías, así como en cualquier tipo de sociedades o asociaciones. ----------
" 'b) La compraventa, representación corretaje, administración, arrendamiento y realización de avalúos por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes muebles o inmuebles, aun los ubicados en la zona restringida. ----------
" '**c) La operación por sí o por terceros de toda clase de hoteles, moteles, centros turísticos y establecimientos designados al hospedaje del turismo, en operación hotelera o tiempo compartido, así como de establecimientos conexos, tales como restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, centros nocturnos, marinas, etc.** ----------
" '**d) La construcción de casas, edificios y construcciones especiales; en estudio, proyecto y realización de fraccionamientos de cualquier tipo,**

urbanizaciones, conjuntos habitacionales, recreativos, turísticos o de terceras personas, físicas o morales. ----------

" 'e) La prestación de servicios de asistencia técnica y administrativa para la operación de empresas con objetos sociales similares o relacionados con el de esta sociedad. ----------

" 'f) La preparación, desarrollo y comercialización de diseños arquitectónicos para la construcción o remodelación de hoteles, moteles y centros turísticos, así como el diseño de instalación, mobiliario y equipo de dichos establecimientos. ----------

" 'g) La prestación de servicios de decoración y acabados, así como la compraventa, representación, comisión, consignación, importación, exportación y fabricación de toda clase de materiales de construcción.----------

" 'h) Dedicarse a toda clase de actos de comercio. ----------

" 'i) Contratar (en forma activa o pasiva) todo tipo de servicios, celebrar toda clase de contratos y convenios, así como la celebración de operaciones que tengan por objeto, adquisición, registro, obtención, uso, explotación, intercambio, manejo, valoración y venta de todo tipo de patentes, marcas y nombres comerciales, preferencias y opciones, derechos de autor o derechos de propiedad artística o cualquier licencia, así como el recibo o concesión para el uso y explotación de lo anteriormente mencionado y en general todo lo relacionado con la Legislación referente a Patentes, Marcas y Transferencias de Tecnología. ----------

" '**j) Comprar, vender o recibir por cualquier título todo tipo de acciones, títulos de crédito, partes sociales, membresías, bonos y valores emitidos en la República Mexicana o en el extranjero y realizar todo tipo de operaciones necesarias para tales fines.** ----------

" 'k) Recibir u otorgar préstamos con o sin garantía, así como expedir, endosar, aceptar, asegurar, descontar, suscribir y en cualquier forma manejar todo tipo de títulos de crédito. ----------

" 'l) Celebrar todo tipo de contratos de distribución, comisión y mediación actuando en nombre propio o de terceros ya sean personas físicas o morales,

mexicanas o extranjeras, tanto en la República Mexicana como en el extranjero. ----------

" 'm) Adquirir o por cualquier otro título poseer, usar, manejar, arrendar, intercambiar, importar, exportar, valorar, vender, construir y explotar todo tipo de bienes y derechos reales o personales. ----------

" 'n) Otorgar garantías y avales para garantizar obligaciones de empresas filiales o subsidiarias o de la matriz y aun de terceros, afectando en su caso cualquiera de sus bienes o activos. ----------

" 'o) Amortizar sus propias acciones y emitir acciones de goce. ----------

" 'p) Impartir curso de capacitación, adiestramiento, entrenamiento y enseñanza a nivel profesional de vendedores, agentes, factores y empleados de empresas de todo tipo y en todos los aspectos, la celebración de seminarios, mesas redondas, conferencias y cursos de capacitación para programas de desarrollo y problemáticas de los negocios en general, la prestación de servicios profesionales de asesoramiento y administración, para el desarrollo comercial de toda clase de empresas, el estudio, proyecto y realización de campañas de ventas y publicidad para sí o para otras negociaciones. ----------

" 'q) La celebración de todo tipo de contratos necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social (...)' ----------"

(El énfasis es nuestro)

De la transcripción anterior se aprecia que la actora tiene como objeto: la operación por sí o por terceros de toda clase de hoteles, moteles, centros turísticos y establecimientos designados al hospedaje del turismo, en operación hotelera o tiempo compartido, así como de establecimientos conexos, tales como restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, centros nocturnos, marinas; la construcción de casas, edificios y construcciones especiales; en estudio, proyecto y realización de conjuntos recreativos y/o turísticos; y comprar, vender o recibir membresías emitidas en la República Mexicana o en el extranjero, y realizar todo tipo de operaciones necesarias para tales fines.

En este orden de ideas, se tiene que la parte que interesa a este asunto es la relativa al análisis de las membresías que compra, vende o recibe la empresa actora.

Así se tiene que en los Programas Vacacionales Royal Holiday Club (membresías) y los documentos confirmatorios de dicho Programa, se asientan los derechos y obligaciones de los contratantes, y es en los propios documentos que se señala en la parte superior derecha que tienen la calidad de **contratos;** señalándose además que el contrato versa respecto de una compraventa de una membresía, y que el **comprador** se obliga a pagar un precio por dicha membresía. Se señala que la membresía tiene incorporados créditos vacacionales canjeables cada año (durante 30 años) por **los servicios de hospedaje y otros beneficios que integran el Programa Vacacional del Club,** establecidos en las reglas operativas del Club.

Ahora bien, dichas reglas señalan que a través del Programa del Club, los miembros tienen derecho a canjear créditos vacacionales por alojamiento en las unidades de alojamiento y/o por otros beneficios introducidos al Programa; que el objeto del Programa del Club es el proporcionar a sus miembros diversos productos y servicios de recreación y viajes, unidades de alojamiento, y otros beneficios y productos relacionados; que la membresía y los créditos vacacionales son indivisibles e inseparables, pero que se puede solicitar una membresía a nombre de 2 o más personas; que sólo la primera persona mencionada en la solicitud de compra o a la persona designada subsecuentemente por dicha persona, quienes son las autorizadas para dar instrucciones respecto de la membresía adquirida; y que los créditos vacacionales caducarán al término de 30 años de membresía.

Para dilucidar la naturaleza jurídica de las membresías de referencia, esto es, para determinar si son o no un título de crédito, se hace necesario acudir a lo preceptuado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigentes en la época de los hechos, a efecto de esclarecer si están o no exentas del impuesto al valor agregado.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:

"**ARTÍCULO 5o.-** Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna."

"**ARTÍCULO 6o.-** Las disposiciones de este Capítulo no son aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna."

"**ARTÍCULO 228-A.-** Los certificados de participación son títulos de crédito que representan:

"a).- El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita;

"b).- El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o valores;

"c).- O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores.

"En el caso de los incisos b) y c), el derecho total de los tenedores de certificados de cada emisión será igual al porcentaje que represente en el momento de hacerse la emisión el valor total nominal de ella en relación con el valor comercial de los bienes, derechos o valores correspondientes fijado por el peritaje practicado en los términos del artículo 228 h. En caso de que al hacerse la adjudicación o venta de dichos bienes, derechos o valores, el valor comercial de éstos hubiere disminuido, sin ser inferior al importe nominal total de la emisión, la adjudicación o liquidación en efectivo se hará a los tenedores hasta por un valor igual al nominal de sus certificados; y si el valor comercial

de la masa fiduciaria fuere inferior al nominal total de la emisión, tendrán derecho a la aplicación íntegra de los bienes o producto neto de la venta de los mismos."

"**ARTÍCULO 228-B.-** Los certificados serán bienes muebles aun cuando los bienes fideicometidos, materia de la emisión, sean inmuebles.

"Sólo las instituciones de crédito autorizadas en los términos de la Ley respectiva para practicar operaciones fiduciarias podrán emitir estos títulos de crédito.

"Los certificados que las sociedades fiduciarias expidan haciendo constar la participación de los distintos copropietarios en bienes, títulos o valores que se encuentren en su poder, no producirán efectos como títulos de crédito y serán considerados solamente como documentos probatorios."

"**ARTÍCULO 228-N.-** El certificado de participación deberá contener:

"I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del titular del certificado;

"II.- La designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la misma, autorizado para suscribir la emisión correspondiente;

"III.- La fecha de expedición del título;

"IV.- El importe de la emisión, con especificación de número y del valor nominal de los certificados que se emitan;

"V.- En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado;

"VI.- El término señalado para el pago de productos o rendimientos y del capital y los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados.

"VII.- El lugar y modo de pago;

"VIII.- La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan para la emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el Registro Público;

"IX.- El lugar y la fecha del acta de emisión, con especificación de la fecha y número de la inscripción relativa en el Registro de Comercio;

"X.- La firma autógrafa del representante común de los tenedores de certificados."

"**ARTÍCULO 228-O.-** Los términos y condiciones de las emisiones de certificados de participación deberán ser aprobados por la Comisión Nacional Bancaria, así como los textos de las actas de emisión y de los certificados y cualquiera modificación de ellos. Además, en el otorgamiento de un acta de emisión o de modificación deberá concurrir un representante de la Comisión Nacional Bancaria."

Ley General de Sociedades Mercantiles:

"**ARTÍCULO 111.-** Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley."

"**ARTÍCULO 118.-** Cuando constare en las acciones el plazo en que deban pagarse las exhibiciones y el monto de éstas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente, en la vía sumaria, el pago de la exhibición, o bien a la venta de las acciones."

"**ARTÍCULO 125.-** Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar:

"I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista;

"II.- La denominación, domicilio y duración de la sociedad;

"III.- La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio;

"IV.- El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones.

"Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las mencionas del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series.

"Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social.

"V.- Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, o la indicación de ser liberada;

"VI.- La serie y número de la acción o del certificado provisional, con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie;

"VII.- Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto, y

"VIII.- La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de

dichos administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la Sociedad."

"**ARTÍCULO 127.-** Los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones, que se desprenderán del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. Los certificados provisionales podrán tener también cupones."

(El énfasis es nuestro)

De la transcripción anterior se desprende lo siguiente:

❖ Que tienen la calidad de títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.

❖ Que no son aplicables las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a los documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar a quién tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna.

❖ Que los certificados de participación son títulos de crédito emitidos por instituciones de crédito autorizadas para practicar operaciones fiduciarias.

❖ Que los certificados de participación representan el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable la sociedad fiduciaria que los emita.

❖ Que los certificados de participación deben contener, entre otros, la designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la misma; el importe de la emisión, con especificación del número y del valor nominal de los certificados que se emitan; el mínimo de rendimiento garantizado; el término señala-

do para el pago de productos o rendimientos y del capital y los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados; y el lugar y la fecha del acta de emisión, con especificación de la fecha y número de la inscripción relativa en el Registro de Comercio.

❖ Que los términos y condiciones de las emisiones de certificados de participación deben ser aprobados por la Comisión Nacional Bancaria.

❖ Que el capital social de una sociedad anónima se divide en acciones representadas por títulos nominativos, que sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales.

❖ Que cuando conste en las acciones el plazo en que deban pagarse, transcurrido dicho plazo, la sociedad puede exigir judicialmente el pago de la exhibición o a la venta de las acciones.

❖ Que las acciones deben expresar, entre otros, la denominación, domicilio y duración de la sociedad; la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio; el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones; la serie y número de la acción; los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto, y la firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban suscribir el documento, o bien la firma facsímil de dichos administradores, con la condición de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la sociedad.

❖ Que las acciones llevarán adheridos cupones, que se desprenderán del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses.

A su vez, el Diccionario de Economía y Negocios, Espasa-Calpe, da las siguientes definiciones:

"**acción**

"Banca, Financiero, Sociedades

"Parte alícuota del capital social de una sociedad mercantil que puede ser nominativa o al portador, y estar total o parcialmente desembolsada. Se clasifican en series según los derechos que otorgan y su valor nominal. En general, da derecho a una parte proporcional en el reparto de beneficios y a una cuota de liquidación en la disolución de la sociedad. Da también derecho preferente en la suscripción de nuevas acciones y derecho de voto en las juntas generales."

"**accionista**

"Sociedades

"Poseedor de una o más acciones representativas de una fracción del capital de una sociedad."

De lo señalado en los párrafos precedentes, esta Juzgadora llega a la convicción de que las membresías que vende la empresa hoy actora no tienen la calidad de ser títulos de crédito, como se explica a continuación.

En primer lugar se hace el señalamiento de que no tiene la calidad de ser un "certificado de participación" a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que de los párrafos precedentes se aprecia que un requisito *sine qua non* es que sean emitidos por instituciones de crédito autorizadas para efectuar operaciones fiduciarias, y en el caso concreto, la empresa actora no tiene el carácter de una institución de crédito, sino que se trata de una sociedad anónima de capital

variable, tal y como se acredita con el poder exhibido por la propia actora y que obra a fojas 68 a 71 de autos.

En segundo lugar, no es título de crédito porque del análisis efectuado a las dos membresías aportadas como prueba por la actora (folios 180) se aprecia que son documentos que identifican a quién tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna, definición que por propia disposición legal (artículo 6° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito) se encuentra excluida de la aplicación de las reglas de los títulos de crédito, de ahí que no tenga el carácter de acción como lo señala la actora.

En efecto, dichos documentos no acreditan que el comprador tenga un derecho a una parte proporcional en el reparto de beneficios, a una cuota de liquidación en la disolución de la sociedad y derecho de voto, toda vez que como ya se señaló, es en tales documentos en donde se señala que sólo son vinculantes para las partes, la membresía, el pagaré y las reglas de operación, en consecuencia, si en dichos documentos no se hizo el señalamiento de referencia, se entiende que la razón de ser es que la voluntad de las partes contratantes fue que el comprador no tuviera los derechos antes señalados, y en materia contractual se debe estar expresamente a lo pactado entre las partes, de ahí que no tenga el carácter de acción como lo señala la actora.

Tiene aplicación a lo anterior las siguientes tesis sostenidas por el Poder Judicial Federal:

“Novena Época
“Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
“Tomo: XIII, Mayo de 2001
“Tesis: XVII.1o.22 C
“Página: 1113

"**CONTRATOS. SU INTERPRETACIÓN DEBE HACERSE A PARTIR DE SU CONTENIDO SIN ATENDER A ELEMENTOS EXTERNOS O AJENOS A LOS MISMOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).-** De lo dispuesto por los artículos 1745 a 1749 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, es factible deducir que para la interpretación de los contratos y, por ende, del sentido y significado de la voluntad contractual de quienes los celebran, debe estarse a lo expresado literalmente en los mismos, y sólo cuando esto no sea claro en alguna o algunas de sus partes o palabras, deben entonces analizarse de manera integral, cláusula por cláusula, las unas con las otras, para así arribar al sentido que resulte de todas, así como a la acepción más adecuada a la naturaleza y objeto del contrato, de la palabra o palabras problema; de donde se colige que para desentrañar la real voluntad de las partes al celebrar un contrato, únicamente debe atenderse a los términos en que aparece confeccionado éste, y no a elementos externos al mismo.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

"Amparo directo 266/2000. Conexión y Comunicación Oculta, S.A. de C.V., y otra. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Pablo Pérez Villalba. Secretario: José Luis Estrada Amaya."

"Novena Época
"Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, Enero de 1998
"Tesis: IV.4o.2 C
"Página: 1075

"**CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE LOS.-** Al establecer el artículo 1851 del Código Civil para el Distrito Federal, idéntico al 1748 del Código

Civil de Nuevo León, que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, y si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente, prevalecerá ésta sobre aquéllas, ha reconocido el principio de que la interpretación de los contratos debe limitarse a los casos en que se hace necesaria, porque si los términos del contrato son claros, la interpretación no tiene razón de ser, pues se entiende que en aquellos términos está precisamente la voluntad de los contratantes; de ahí que siendo clara la letra de un contrato, no cabe, con pretexto de su interpretación, alterar o cambiar su sentido literal.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

"Amparo directo 200/97. Grupo Nacional Provincial, S.A. 28 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: María Isabel González Rodríguez.

"Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXII, página 145, tesis de rubro: 'CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE (LEGISLACIÓN DE COAHUILA)'."

"Octava Época
"Instancia: OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XI, Mayo de 1993
"Página: 311

"**CONTRATOS MERCANTILES. INTERPRETACIÓN DE LOS.-** Conforme a las reglas de interpretación de los contratos mercantiles, debe atenderse en primer lugar a la literalidad de las cláusulas convenidas por las partes, y, en su defecto, es decir, de no solucionarse el conflicto conforme al sentido literal de dichas cláusulas, se deberá entonces ocurrir a la intención de

los contratantes, de acuerdo con lo establecido por los artículos 78 del Código de Comercio y 1851 del Código Civil del Distrito Federal, de aplicación supletoria al citado en primer término.

"OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 21/92. Proyecto Connie, Asociación Civil. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: Alejandro Sánchez López."

"Sexta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: Tomo IV, Parte SCJN
"Tesis: 182
"Página: 125

"**CONTRATOS. INTERPRETACIÓN DE LOS.-** La naturaleza de los contratos depende, no de la designación que le hayan dado las partes, que puede ser errónea, sino de los hechos y actos consentidos por las mismas, en relación con las disposiciones legales aplicables; atenta la regla de interpretación del Código Civil vigente: 'si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas'.

"Sexta Época:

"Amparo civil directo 4481/40. F. A. Veerkamp. 19 de enero de 1942. Cinco votos.

"Amparo directo 3374/53. Olga Padrón de Aguilar. 20 de enero de 1954. Cuatro votos.

"Amparo directo 4279/55. María Carmen Huerta vda. de Ruiz. 8 de agosto de 1957. Cinco votos.

"Amparo directo 2348/57. María Cristina Milchorena. 19 de noviembre de 1959. Cinco votos.

"Amparo directo 5484/59. María de la Cruz Consuelo Flores de Hoyos y coags. 1o. de diciembre de 1960. Cinco votos."

"Quinta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CXIX
"Página: 434

"**CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE LOS.-** Comprobado que a lo que se le llama minuta es un verdadero contrato de compraventa, por haberse llenado los requisitos establecidos para esto, en la interpretación de dicho contrato, debe estarse a la intención de las partes, pues el nombre no hace a los contratos.

"Amparo civil directo 3374/53. Padrón Aguilar Olga. 20 de enero de 1951. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Vicente Santos Guajardo. Ponente: José Castro Estrada."

"Quinta Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Apéndice de 1988
"Tomo: Parte II
"Tesis: 518
"Página: 901

"**CONTRATOS. INTERPRETACIÓN DE LOS.-** Para determinar la naturaleza de todo contrato, debe atenderse primeramente a la voluntad expresa de las partes, y sólo cuando ésta no se revela de una manera clara, habrá que recurrir a las reglas de interpretación.

"Quinta Época:

"Tomo XIV, pág. 584. Amparo civil directo. Acosta Ignacio. 7 de febrero de 1924. Unanimidad de diez votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Tomo XVI, pág. 1207. Amparo civil directo. Estrada Roque. 19 de mayo de 1925. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Tomo XVII, pág. 1388. Amparo civil directo 3647/23. González Eusebio. 12 de diciembre de 1925. Unanimidad de diez votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Tomo XXI, pág. 9. Amparo civil directo 2701/26. Garza José María de la. 1o. de julio de 1927. Mayoría de diez votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Disidente: Urbina.

"Tomo XXIV, pág. 622. Recurso de súplica 56/27. Díaz Ramón y La International Petroleum, Co. 13 de noviembre de 1928. Unanimidad de ocho votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Disidente: Urbina.

"NOTA: Este criterio está acogido en los artículos 1851 y 1852 del Código Civil para el Distrito Federal

"Esta tesis se publicó en los Apéndices a los Tomos XXXVI, L, LXIV, LXXVI y XCVII (Quinta Época) y en los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación 1917-1954, 1917-1965, 1917-1975 con el rubro 'CONTRATOS'.

"Los datos que se señalan para los Apéndices a los Tomos L y LXIV (Quinta Época) corresponden a las Partes Tercera y Cuarta, respectivamente, Sección Civil.

"Los datos de los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, 1917-1975 y 1917-1985 corresponden a la Cuarta Parte, Tercera Sala."

(El subrayado es nuestro)

A juicio de esta Juzgadora, la voluntad de las partes que se encuentra materializada en el documento denominado membresía es clara y no deja lugar a dudas en el sentido de que no fue intención de las partes firmar un título de crédito, sino una membresía, que no tiene ese carácter, como se verá a continuación.

Es más, la Ley señala que las acciones deben expresar: la denominación, domicilio y duración de la sociedad; la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio; el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones; la serie y número de la acción; los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto, y la firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban suscribir el documento, o bien la firma facsímil de dichos administradores, con la condición de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la sociedad. Y dichos requisitos no se encuentran plasmados en las membresías ofrecidas como prueba. Además de que se aprecia de los folios 175 y 179, que por parte de la actora firmó un "representante", sin que se haya acreditado que tiene el carácter de administrador, de ahí que no tenga el carácter de acción como lo señala la actora. Aunado al hecho de que tampoco cuentan las membresías con los cupones por medio de los cuales se hará efectivo el cobro de dividendos de la sociedad.

Asimismo, la Ley también señala que en el caso de que en las acciones conste el plazo en que deban pagarse, transcurrido dicho plazo, la sociedad puede exigir

judicialmente el pago de la exhibición o a la venta de las acciones, y en la especie, de los folios 175 y 179, se desprende que en el caso de que la membresía no sea pagada en los términos pactados por las partes, GRUPO COSTAMEX tiene el derecho a dar por terminado el contrato y a retener los pagos efectuados por el comprador; y del lado del comprador, tiene el derecho a solicitar la cancelación del contrato en el supuesto de incumplimiento del Club, de ahí que no tenga el carácter de acción como lo señala la actora.

En este orden de ideas, se tiene que el carácter de accionista de una sociedad de constar de manera indubitable, y la manera de probar tal carácter es con una documental pública idónea para ello, como lo es el acta constitutiva o los estatutos que rigen a la sociedad, sin que se pueda probar con otro medio de prueba ni con base en presunciones, deducciones o inferencias.

A este respecto tiene aplicación a lo anterior la siguiente tesis del Poder Judicial Federal, que a la letra dice.

"Octava Época
"Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XIV, Agosto de 1994
"Tesis: II. 2o. 195 C
"Página: 663

"**SOCIO, MEDIO PROBATORIO IDÓNEO PARA ACREDITAR EL CARÁCTER DE.-** Si en el caso el demandante se dice socio de la demandada y con ese carácter reclama el cumplimiento de derechos y obligaciones inherentes a las partes de esa sociedad; legalmente es obvio que, tanto la calidad de socio del actor como los derechos adquiridos por el solo hecho de serlo y la obligación de la sociedad de pagarle al socio lo que éste le demande, debe constar de manera fehaciente e incontrovertible en documental pública

idónea para ello, como lo podría ser el acta constitutiva o estatutos que rigen la relación de la sociedad; y no desprenderlo de otro medio de prueba ni a base de presunciones, deducciones o inferencias, como ocurre con un recibo que se extendió por concepto de pago de gastos médicos por asalto y robo de combi.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Amparo directo 59/94. Sociedad Cooperativa de Autotransportes de Pasajeros de México a Tultepec Sociedad Cooperativa Limitada de Intervención Oficial. 28 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: Eduardo N. Santoyo Martínez."

A decir del maestro Raúl Cervantes Ahumada, en su obra "Títulos y Operaciones de Crédito", la acción de una sociedad es un título de especulación típico, y en el caso concreto de los folios 176 y 180, las partes literalmente establecieron que la membresía se adquiría por el comprador *para su uso y goce, y no con el propósito de especulación,* de ahí que no tenga el carácter de acción como lo señala la actora.

Sigue explicando el autor antes citado, que la acción *es un título personal o corporativo, cuya principal función es atribuir a su titular la calidad de socio,* sin embargo, de los multicitados documentos ofrecidos como prueba por la actora se desprende claramente que el principal objetivo es que el comprador de la membresía use y goce del Plan Vacacional del Club, sin que se mencione en lo absoluto que tenga la calidad de socio.

En consecuencia, es válido afirmar que el documento de membresía es un contrato de compraventa y no un título de crédito.

A guisa de ejemplo se cita la siguiente tesis:

"Séptima Época
"Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 163-168 Sexta Parte
"Página: 28

"**ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE. NO ES TÍTULO EJECUTIVO.-** El documento que contiene un contrato de arrendamiento no puede considerarse como título ejecutivo aun cuando sea reconocido por parte del arrendatario en medios preparatorios a juicio, ya que en ese documento no se consigna una cantidad o deuda líquida, en términos del artículo 2171 del Código Civil del Estado de Hidalgo. Dicho contrato sólo constituye una fuente de obligaciones que generan el derecho de exigir su cumplimiento traducible en el pago de las pensiones rentísticas y por lo tanto no puede servir como fundatorio de la acción de pago de pesos ejercitada en la vía ejecutiva civil, apoyándose en los artículos 439, fracción IV, y 442 del Código Procesal aplicable.

"TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo directo 658/82. Alejandro Torres Regnier. 10 de noviembre de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Waldo Guerrero Láscares."

Por otra parte, en los párrafos precedentes se señaló que el carácter de accionista de una empresa se probaba con el acta constitutiva o los estatutos que rigen a la sociedad (como ya lo señaló el Poder Judicial Federal), sin embargo, si bien es cierto que la actora ofrece como pruebas de su parte el acta constitutiva y los estatutos de Royal Holiday Club, así como su correspondiente traducción, que obran a fojas 227 a 232 y 273 a 292, lo cierto es que con tales documentales no acredita que las membresías que expidió en el año de 1995 sean acciones, toda vez que la empresa actora en el presente juicio tiene como razón social la de GRUPO COSTAMEX,

S.A. DE C.V., tal y como señala en el poder que la propia actora anexó a su demanda de nulidad y que se transcribe para una mejor comprensión:

> "**LIBRO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE. ----------**
> **ESCRITURA NÚMERO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO. ----------**
> **EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco. ----------**
> **JOSÉ VISOSO DEL VALLE, NOTARIO NÚMERO NOVENTA Y DOS DEL DISTRITO FEDERAL, HAGO CONSTAR: ----------**
> **EL PODER GENERAL, que otorga 'GRUPO COSTAMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE', representada por el licenciado FERNANDO BATISTA PEÑA, a favor del licenciado AGUSTÍN GARCÍA BOLAÑOS CACHO, al tenor de las siguientes: ----------**
> **----------"C L Á U S U L A S----------**
>
> "(...)
>
> "d).- **Con la escritura número dieciséis mil novecientos ochenta y ocho**, de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, ante el Licenciado ANTONIO VELARDE VIOLANTE, Notario Público número Ciento Sesenta y Cuatro del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número ciento veintiocho mil sesenta y cinco, con fecha veintisiete de mayo del mil novecientos noventa y dos, en la que se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y dos, en la que se acordó EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE: PANORAMA TURÍSTICO DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por 'GRUPO COSTAMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE', reformándose en consecuencia la cláusula primera de sus estatutos sociales. ----------"

Mientras que las pruebas ofrecidas se refieren al acta constitutiva y estatutos de Royal Holiday Club, es decir, a una persona moral extranjera, diferente a la hoy demandante.

Además de que tales documentos no son idóneos para resolver la presente controversia, en razón de que, se reitera, los únicos documentos privados obligatorios entre la actora y los compradores de sus membresías son el contrato, el pagaré y las reglas operativas.

Por otra parte, en relación con las pruebas ofrecidas por la demandante consistentes en los oficios números 102-A-13-V-1-12233 de 13 de febrero de 1992 (que obra a fojas 169 y 170 del expediente), y 102-A-13-V-1-26701 de 6 de abril de 1994 (que obra a fojas 205 y 206 de autos), es de señalarse lo siguiente:

Respecto del oficio 102-A-13-V-1-26701 de 6 de abril de 1994, es de desestimarse tal medio probatorio, en razón de que se encuentra dirigido a:

"COSTAMEX CARIBE, S.A. DE C.V."

Y de la anterior transcripción efectuada al poder exhibido por la parte actora se aprecia que dicha empresa tuvo **un solo cambio de razón social** acreditado en autos, cuando cambió de "PANORAMA TURÍSTICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V." a su actual denominación "GRUPO COSTAMEX, S.A. DE C.V.", sin que se mencione en ninguna parte la denominación de COSTAMEX CARIBE, S.A. DE C.V., por lo que al tratarse de una persona moral distinta a la hoy actora, no es posible que se pretenda acoger a lo señalado en el oficio de referencia, en razón de que conforme a lo señalado en los artículos 34 y 36 del Código Fiscal de la Federación, la resolución por escrito favorable de las autoridades fiscales sólo beneficia a quien la gestionó pero no a personas distintas.

Tiene aplicación a lo anterior la siguiente tesis del Poder Judicial Federal, que acota:

"Octava Época
"Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: X, Octubre de 1992
"Página: 426

"**RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES. SÓLO BENEFICIAN AL PARTICULAR QUE LAS GESTIONÓ.-** La resolución de la autoridad hacendaria que autoriza la devolución de numerario a un contribuyente por concepto de saldo a favor de un determinado impuesto, no puede servir de base para declarar la nulidad de la que negó la devolución a un distinto contribuyente que se encuentra en la misma hipótesis y en idénticas circunstancias que el primero, pues el Código Fiscal de la Federación nada previene sobre el particular, ni podría ubicarse el caso en la hipótesis a que se contrae el artículo 34 del citado ordenamiento legal, puesto que de acuerdo a ese dispositivo, la resolución por escrito favorable de las autoridades fiscales sólo beneficia a quien la gestionó pero no a personas distintas, y la sentencia que en un juicio de nulidad estime lo contrario causa agravio a la autoridad administrativa emisora de la resolución impugnada en el juicio de nulidad.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

"Revisión fiscal 39/92. Subprocurador Fiscal Regional del Noreste de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: Juan Manuel Rodríguez Gámez."

Aunado al hecho de que en todo caso el oficio se refiere **expresamente al ejercicio fiscal de 1994**, siendo que en la especie la litis versa respecto del *ejercicio fiscal de 1995,* por lo que tampoco por esta razón resulta ser eficiente, desde el punto de vista probatorio, dicho documento. Es decir, si la situación real y concreta

a que se refiere el oficio de referencia se concreta al año fiscal de 1994, no puede ser aplicado a una situación acontecida en el año fiscal de 1995, tal y como se señaló en el último párrafo del oficio de referencia.

Ahora bien, por lo que toca al oficio número 102-A-13-V-1-12233 de 13 de febrero de 1992, emitido por el Administrador Fiscal Federal del Sur del Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se resolvió lo siguiente:

> "(...) sin prejuzgar sobre la veracidad de los datos aportados en su escrito, reservándose las facultades de revisión y comprobación que le otorga el artículo 42 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, así como con fundamento en el artículo 34 del Código citado, le comunica:
>
> "Que si como lo manifiesta, la membresía emitida por Royal Holiday Club Association, propiedad de Panorama Turístico de México, S. A de C. V., constituye un título de crédito en los términos del artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, procede confirmar su criterio en el sentido de que por la enajenación de dicha membresía le es aplicable lo dispuesto por la fracción VII del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor."

De la lectura anterior se desprende que contrariamente a lo afirmado por la actora, en la resolución impugnada no se revoca la diversa resolución contenida en el oficio 102-A-13-V-1-12233 de 13 de febrero de 1992, sino que tan sólo, en aplicación de lo resuelto en dicho acto de autoridad, se concluye que como el documento denominado "membresía", no es un título de crédito, y su enajenación causaba el impuesto al valor agregado de conformidad con la Lex Legum vigente en 1995.

Aunado al hecho de que en todo caso el oficio se refiere **expresamente al ejercicio fiscal de 1991**, siendo que en la especie la litis versa respecto del *ejercicio fiscal de 1995,* por lo que tampoco por esta razón resulta ser eficiente, desde el punto de vista probatorio, dicho documento. Es decir, si la situación real y concreta

a que se refiere el oficio de referencia se concreta al año fiscal de 1991, no puede ser aplicado a una situación acontecida en el año fiscal de 1995.

Desde luego, de la lectura que se realiza de la resolución impugnada, misma que obra a fojas 72 a 84 del expediente, no se desprende que la autoridad haya revocado *motu proprio* la diversa resolución contenida en el oficio número 102-A-13-V-1-12233 de 13 de febrero de 1992, recaída a la consulta formulada el 17 de febrero de dicho año, por PANORAMA TURÍSTICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., actualmente GRUPO COSTAMEX, S.A. DE C.V., actora en el presente juicio; toda vez que, contrariamente a lo afirmado por la demandante, la autoridad le otorga valor jurídico a la mencionada resolución, aplicándola en sus términos, esto es, considerando que al no actualizarse la condición establecida en la misma, consistente en que los documentos denominados "membresías" fueran títulos de crédito, en los términos del artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que entonces, la enajenación de dichas membresías causaba el impuesto al valor agregado.

En efecto, de la copia certificada del citado oficio número 102-A-13-V-1-12233, aportada por la actora como prueba de su parte, que se transcribió en los párrafos precedentes, y que esta Juzgadora valora en términos del artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se desprende que la autoridad, al resolver la consulta que le fue formulada, condicionó su resolución al hecho de que efectivamente la mencionada "membresía" fuera un título de crédito, en los términos del artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero **sin que de dicha resolución se desprenda que se haya analizado si efectivamente la referida membresía era o no un título de crédito**.

En consecuencia, toda vez que la actora no acredita en juicio que haya controvertido la citada resolución contenida en el oficio número 102-A-13-V-1-12233 de 13 de febrero de 1992, por tanto, la consintió en los términos en que fue emitida, sin que sea dable que en el presente juicio pretenda controvertir la condición establecida en la misma, puesto que ya no es el momento procesal oportuno.

En esta virtud, la autoridad podía válidamente, al ejercer sus facultades de comprobación y analizar la naturaleza jurídica de la referida membresía, concluir en la resolución impugnada, que como no se actualizaba la condición señalada en el referido oficio (que la citada membresía fuera un título de crédito), entonces, su enajenación causaba el impuesto al valor agregado; sin que lo mismo pueda estimarse como una revocación del acto administrativo en cuestión, como pretende la actora, dado que la resolución estimada como favorable fue emitida de manera condicionada, lo cual no fue controvertido por la hoy actora, por lo que fue consentida en todos sus términos; en tanto que la autoridad en la resolución impugnada, únicamente la aplica en sus términos.

(...)

SEXTO.- (...)

De la resolución impugnada se desprende que la autoridad señaló que la actora no enteró el impuesto al valor agregado correspondiente a las operaciones de ventas de membresías, según lo señalado en el artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que de la documentación aportada por la actora se desprende que las membresías son contratos de hospedaje a futuro, en términos de lo dispuesto por los artículos 2666 a 2668 del Código Civil, contrato que además es regulado por el Reglamento de la Prestación del Servicio Turístico del Sistema de Tiempo Compartido.

A fin de resolver la presente controversia es necesario transcribir los artículos 1° y 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado:

"**ARTÍCULO 1°.-** Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

"(...)

"**III.-** Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

"(...)"

"**ARTÍCULO 19.-** Para los efectos de esta Ley se entiende por uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles, a cambio de una contraprestación.

"(...)"

De la transcripción anterior se desprenden varios elementos: la **obligación** de pagar el impuesto en el supuesto de que se otorgue el **uso** o **goce** *temporal* de bienes (entendiéndose como tal cuando una persona permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes **tangibles** *a cambio de una contraprestación*), en cualquier modalidad jurídica.

Así se tiene que en los documentos ofrecidos por la actora (pagaré de 15 de junio de 1995, el Programa Vacacional Royal Holiday Club y el documento confirmatorio del Programa Vacacional del Club, relativos al contrato No. 0090596, y el pagaré de 22 de febrero de 1995, el Programa Vacacional Royal Holiday Club y el documento confirmatorio del Programa Vacacional del Club, relativos al contrato No. 90441), se conviene en que GRUPO COSTAMEX vende al comprador una membresía emitida por Royal Holiday Club, y el comprador adquiere **la obligación de pagar** *como contraprestación* **un precio por dicha membresía**, la cual tiene incorporados créditos vacacionales que pueden ser canjeados cada año (durante 30 años) por **los servicios de hospedaje y otros beneficios que integran el Programa Vacacional del Club.**

Mientras que las reglas de operación transcritas en la resolución impugnada señalan que el Programa del Club consiste en el canje de los créditos vacacionales

por **alojamiento** en las unidades de alojamiento y/o por otros beneficios, y que el **objeto** del mencionado Programa es proporcionar diversos productos y servicios de recreación y viajes, unidades de alojamiento, otros beneficios y productos relacionados, **cada año;** también se señala que los créditos caducarán en 30 años.

De ahí que esta Juzgadora estime que se cumplen con los requisitos legales establecidos en el artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a saber:

El *primer requisito* consiste en que se trate de uso o goce de bienes, y a juicio de este Órgano Colegiado se estima que se cumple con este requisito al permitirle al comprador de la membresía canjear los créditos vacacionales por los productos y servicios de recreación y viajes, unidades de alojamiento (hospedaje), y otros beneficios y productos relacionados.

El *segundo requisito* consiste en que se trate de bienes tangibles, los cuales se traducen en bienes materiales o corpóreos, que se pueden apreciar físicamente. Al respecto el Diccionario de Economía y Negocios, Espasa-Calpe, da la siguiente definición:

"**bienes materiales**

"Contabilidad, Sociedades

"Bienes de naturaleza corpórea que pueden percibirse por los sentidos. Contrapuestos a bienes inmateriales."

Y los productos y servicios de recreación y viajes, unidades de alojamiento (hospedaje), entran en esta categoría de bienes tangibles.

El *tercer requisito* consiste en que el uso o goce tenga el carácter de temporal, y como se aprecia sí se surte este requisito en la medida en que los créditos vacacionales se canjean **cada año, durante 30 años.**

El *cuarto requisito* consiste en que a cambio del uso o goce de estos bienes exista una contraprestación, la cual en el caso sí existe tal y como se señala en la propia membresía y pagaré.

Y en relación con esto, es de señalarse que en el poder exhibido por la actora (el cual se transcribió en el considerando que antecede) se señala que el objeto de la demandante es la operación por sí o por terceros de toda clase de hoteles, moteles, centros turísticos y establecimientos designados al hospedaje del turismo, en operación hotelera o tiempo compartido, así como de establecimientos conexos, tales como restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, centros nocturnos, marinas; y la construcción de casas, edificios y construcciones especiales; en estudio, proyecto y realización de conjuntos recreativos y/o turísticos.

De ahí que se encuentre gravada con el impuesto al valor agregado la actividad de la ahora actora, al tenor de lo dispuesto por el transcrito artículo 1°, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Ahora bien, la actora señala que celebró contratos de Prestación de Servicios Turísticos del Sistema de Tiempo Compartido, regulados en el Reglamento de la Prestación de Servicios Turísticos del Sistema de Tiempo Compartido, y no contratos de hospedaje regulados en el 2666 del Código Civil; sin embargo, tal aseveración no es útil para dirimir la presente controversia, toda vez que, como ya se señaló en los párrafos precedentes, la disposición legal a la cual se debe atender para determinar si la demandante está obligada al pago del impuesto al valor agregado es la propia Ley de dicho impuesto, y del razonamiento efectuado con anterioridad, esta Juzgadora ya concluyó que las membresías que la demandante vende sí se ubican en los supuestos de los artículos 1°, fracción III y 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues mediante dichas membresías se otorga el uso y goce temporal de bienes tangibles a cambio de una contraprestación, por lo que queda fuera de litis si lo que la actora celebra son contratos de Prestación de Servicios Turísticos del Sistema de Tiempo Compartido o contratos de Hospedaje, toda vez que no importa la denominación que se le dé al acto jurídico (como el mencionado artículo 19 señala), sino lo

que interesa es determinar si mediante dicho acto jurídico una persona permite a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles, a cambio de una contraprestación.

Y al efecto, se tiene que ambos tipos de contratos, el de prestación de servicios turísticos del sistema de tiempo compartido y el de hospedaje, se refieren precisamente a que una persona use o goce temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación, tal y como se desprende de las transcripciones que se efectuarán a continuación, de ahí que el pronunciamiento que esta Juzgadora efectúe respecto al tipo de contrato que son las membresías que expide la actora, no le beneficia en su argumento relativo a que no se ubica en la hipótesis del multicomentado artículo 19:

CÓDIGO CIVIL:

"**ARTÍCULO 2666.-** El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje"

REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO DEL SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO:

"**ARTÍCULO 2.-** El presente Reglamento tiene por objeto regular la prestación del servicio turístico del sistema de tiempo compartido sobre bienes muebles e inmuebles."

"**ARTÍCULO 3.-** Para efectos de este Reglamento se entiende por:

"La Secretaría: el servidor público competente, en los términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

"Sistema de tiempo compartido, independientemente de la denominación que se le dé a la forma de contratación: **todo acto jurídico por el cual se conce-**

de a una persona el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea una unidad cierta, considerada en lo individual o una unidad variable dentro de una clase determinada, durante un período específico, a intervalos previamente establecidos, determinados o determinables.

"Usuario - turista: a la persona que adquiere los derechos mencionados en el párrafo anterior, así como a cualquier otra que haga uso de los mismos, con justo título.

"Establecimiento: El bien en el que se presta el servicio turístico del sistema de tiempo compartido.

"Prestador: la persona física o moral que tenga a su cargo la administración del sistema, el mantenimiento y operación del establecimiento, debiendo estar domiciliada en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Aun cuando el prestador contrate con terceros la prestación de los servicios que se proporcionen a los usuarios - turistas y al establecimiento, aquél será el único responsable en los términos del presente Reglamento."

"**ARTÍCULO 18.-** El servicio principal de los establecimientos es proporcionar a una persona, *a cambio de un precio cierto y determinado*, el uso y goce de un bien o parte del mismo, ya sea una unidad cierta considerada en lo individual o una unidad variable dentro de una clase determinada *durante un periodo específico, a intervalos previamente establecidos,* determinados o determinables."

(El énfasis es nuestro)

De donde se desprende que si la membresía es un contrato de Prestación de Servicios Turísticos del Sistema de Tiempo Compartido, como lo señala la actora,

se sitúa perfectamente en la definición que da la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 19, respecto a lo que debe entenderse por *uso o goce temporal de bienes.*

No es óbice para lo anterior el argumento de la actora en el sentido de que las membresías otorgan a la parte contratante derecho a recibir créditos vacacionales que podrá canjear cada año, pudiendo hacer valer los beneficios que integran el Programa Vacacional del Club, y no otorgan la transmisión del uso o goce temporal de los bienes, máxime que su representada no era dueña de los hoteles y desarrollos hoteleros.

Toda vez que aquí lo medular es que la actora otorga, a través del contrato de Membresía, el uso o goce temporal de bienes tangibles de manera temporal a cambio de una contraprestación, hipótesis normativa que contemplan los multireferidos y transcritos artículos 1°, fracción III y 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como ya se analizó con anterioridad, y la propia Ley señala que no importa a través de qué forma jurídica se efectúe el permitir el uso o goce de tales bienes, sino el hecho de que se cumpla con el supuesto fáctico contenido en dicha disposición legal.

(...)

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 20, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los diversos 236, 237, 239, fracción I y 239-A, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La actora no probó su pretensión, en consecuencia,

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, la cual ha quedado precisada en el resultando 1º de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia debidamente autorizada de esta resolución, devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Sexta Sala Regional Metropolitana, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente fallo, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día treinta de abril de dos mil dos, por mayoría de cuatro votos a favor de los CC. Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, María Guadalupe Aguirre Soria, Luis Carballo Balvanera y Francisco Valdés Lizárraga, y uno en contra de la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega. Fue ponente en este asunto el Magistrado Francisco Valdés Lizárraga, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el día ocho de mayo de dos mil dos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman el Magistrado Francisco Valdés Lizárraga, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Lic. Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

V-P-2aS-190

BIENES ORIGINARIOS Y BIENES PROCEDENTES.- SU DIFERENCIA PARA EFECTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.- De acuerdo con dicho Tratado celebrado por México, un bien es originario de una de las Partes, cuando se exporte desde su territorio al territorio de otra de ellas, cumpliendo con las reglas de origen previstas por el propio Tratado y que, además, cuente con un certificado de origen válido, generando la protección, beneficios y preferencias pactadas; por tanto, dicho bien se distingue del procedente o proveniente de algún país, miembro, en el cual no se acredita que sea originario de dicho país, por lo que, no puede beneficiar a sus importadores de las tasas preferenciales pactadas, siéndole aplicables las disposiciones generales previstas por la legislación mexicana. (14)

Juicio No. 8983/99-11-05-2/275/00-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada del 1 de octubre de 2002)

LEY ADUANERA

V-P-2aS-191

EQUIPAJE DE PASAJEROS EN VIAJES INTERNACIONALES PARA EFECTOS DE LA EXENCIÓN DE LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.- De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento de la Ley Aduanera, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, definir las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros, por lo

que con apoyo en esa disposición es que la mencionada Secretaría emitió la regla 3.7.1 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1997, a través de la cual se identifican las mercancías que por su naturaleza integran el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales, sin que ello signifique limitar o condicionar la exención en el pago de los impuestos al comercio exterior por los equipajes de pasajeros en viajes internacionales establecidos por el artículo 61 de la Ley Aduanera. (15)

Juicio No. 8983/99-11-05-2/275/00-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 1 de octubre de 2002)

LEY ADUANERA

V-P-2aS-192

MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PARA USO PERSONAL DEL TENEDOR.- CARGA DE LA PRUEBA.- En términos del artículo 146 de la Ley Aduanera, vigente en 1998, la tenencia de mercancías de procedencia extranjera debe ampararse en todo tiempo con el pedimento aduanero que acredite su legal importación, con la nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal, si dichas mercancías se enajenan por ésta, o con factura expedida por empresario establecido, de adquirirse en el país, con excepción de la mercancía de procedencia extranjera que sea de uso personal; por lo tanto, si el tenedor afirma que se encuentra en la excepción de la regla general, esto es que la mercancía nueva que se le embargó era para uso personal, recae en el mismo la carga de la prueba en términos del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia. (16)

Juicio No. 8983/99-11-05-2/275/00-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 1 de octubre de 2002)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

V-P-2aS-193

TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL.- ELEMENTOS PARA OBTENERLO CONFORME AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.- Para que la tasa o arancel preferencial pactado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se aplique, no es suficiente que la mercancía importada encuadre en determinada clasificación arancelaria y provenga de los Estados Unidos o de Canadá; sino se requiere que la misma cumpla con las "Reglas de Origen" establecidas en el artículo 401 del propio Tratado y, además, se compruebe el mismo, con la exhibición de un certificado de origen válido, emitido por el productor o exportador del bien, atendiendo a lo estipulado en el artículo 501 del propio Tratado; en consecuencia, el actor sólo puede argumentar violación a las disposiciones del Tratado en cita, si al propio tiempo demuestra que los bienes que internó en territorio nacional eran originarios de alguna de las Partes y que la autoridad no siguió los lineamientos establecidos ni la oportunidad para demostrarlo. (17)

Juicio No. 8983/99-11-05-2/275/00-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 1 de octubre de 2002)

LEY ADUANERA

V-P-2aS-194

VALOR EN ADUANA, DE LA MERCANCÍA IMPORTADA. ELEMENTOS PARA SU DETERMINACIÓN.- De lo dispuesto por los artículos 64, 65, 67 y 71 de la Ley Aduanera, se desprende que la base gravable para determinar el impuesto general de importación es el valor en aduana de la mercancía, mismo que será el valor de transacción de la misma, cuando se cumpla con las siguientes circunstancias: 1.- Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador con las excepciones ahí anotadas. 2.- Que la venta para exportación con destino al territorio nacional o el precio de las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. 3.- Que no se revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuadas por el importador, salvo en el monto en que se haya realizado el ajuste señalado en la fracción IV del artículo 65 de la propia Ley, y 4.- Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción. Asimismo se establece, que en caso de que no se reúna alguna de las circunstancias enunciadas, para determinar la base gravable del impuesto general de importación deberá estarse a lo previsto en el artículo 71 de la Ley, que establece los métodos que se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión, para calcular la base gravable del impuesto general de importación cuando no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas, por lo que es necesario que la autoridad indique de manera expresa en su resolución cómo determinó el valor en aduana de la mercancía importada. (18)

Juicio No. 8983/99-11-05-2/275/00-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 1 de octubre de 2002)

LEY ADUANERA

V-P-2aS-195

VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS POR VISTA ADUANAL.- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA.- Si al emitir una resolución la autoridad determina una cantidad como valor de transacción de la mercancía, es claro que debe precisar cómo o de dónde obtuvo ese valor, al constituir esa cantidad la base del impuesto; sin que sea suficiente que la autoridad demandada, en su resolución, indique que ese valor fue determinado por el vista aduanal en la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, ya que ese hecho no implica el que en la resolución combatida pueda omitirse la fundamentación y motivación que sustenta el valor de transacción que se concluye, pues de actuar así se afectan las defensas del particular y su determinación trasciende al sentido de la resolución impugnada. (19)

Juicio No. 8983/99-11-05-2/275/00-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 1 de octubre de 2002)

LEY ADUANERA

V-P-2aS-196

VISTA ADUANAL.- NO TIENE OBLIGACIÓN DE IDENTIFICARSE EN EL ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, CUANDO NO FUE LA AUTORIDAD QUE PRACTICÓ LA DILIGENCIA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Aduanera, al levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia

aduanera, es obligación de la autoridad que practica la diligencia identificarse ante el particular interesado, en consecuencia, si el vista aduanal no practicó la diligencia y sólo emitió el dictamen relativo a la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de las mercancías, en su calidad de perito en materia aduanera y por requerimiento de la autoridad demandada, resulta claro que no estaba obligado a identificarse ante el particular. (20)

Juicio No. 8983/99-11-05-2/275/00-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SÉPTIMO.- (...)

Los Magistrados que integran la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estiman que el concepto de impugnación antes transcrito es infundado, en virtud de que al emitirse la resolución impugnada no se violó lo dispuesto por el artículo 61, fracción VI de la Ley Aduanera, por lo siguiente:

En primer término es necesario transcribir el precepto antes mencionado.

"Art. 61.- No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:

"(...)

"VI.- Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales.

"(...)"

De la transcripción anterior se desprende que efectivamente el artículo en comento establece una exención para los equipajes de los pasajeros en viajes internacionales, sin embargo, la norma no establece lo que se debe entender por equipaje, situación que se aborda por el artículo 89 del Reglamento de la Ley Aduanera, que es del tenor siguiente:

"Art.89.- Para efectos de la fracción VI del artículo 61 de la Ley, la Secretaría señalará mediante reglas, las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros residentes en el territorio nacional o en el extranjero.

"Los capitanes, pilotos, conductores y tripulantes de los medios de transporte que efectúen el tráfico internacional de mercancías, sólo podrán traer del extranjero o llevar del territorio nacional, libres del pago de impuestos al comercio exterior, sus ropas y efectos usados personales."

Del precepto en comento, se observa que de manera expresa indica que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien mediante reglas señalará las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros, por lo que con apoyo en esa disposición es que la mencionada Secretaría emitió la regla 3.7.1 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1997, que a la letra indica:

"3.7.1. Para efectos de los artículos 50 y 61, fracción VI de la Ley y 89 del Reglamento, las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros internacionales son las siguientes:

"A. Tratándose de pasajeros provenientes del extranjero, residentes en el país:

"1. Bienes de consumo personal usados o nuevos, tales como ropa, calzado y productos de aseo, siempre que sean acorde a la duración del viaje y que por su cantidad no puedan ser objeto de comercialización.

"2. Una cámara fotográfica, cinematográfica o de video grabación y, en su caso, su fuente de poder; hasta doce rollos de película virgen o video cassettes; material fotográfico impreso o filmado; un equipo de cómputo portátil nuevo o usado, laptop, notebook, omnibook o similares, en este caso no se requerirá contar con el permiso previo de importación.

"3. Un equipo personal deportivo usado, siempre que pueda ser transportado normal y comúnmente por una persona.

"4. Libros y revistas, que por su cantidad no puedan ser objeto de comercialización.

"5. Medicamentos de uso personal, debiendo mostrar la receta médica en caso de sustancias psicotrópicas.

"6. Velices, petacas, baúles y maletas necesarios para el traslado de las mercancías.

"7. Tratándose de pasajeros mayores de edad, un máximo de 20 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, y hasta 3 litros de vino, cerveza o licor, en el entendido que no se podrá introducir una cantidad mayor de puros, sin que se cumpla con las regulaciones y restricciones aplicables.

"8. Hasta 300 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, en uno o varios artículos, cuando el arribo a territorio nacional sea por vía marítima o aérea, salvo lo dispuesto en el siguiente numeral.

> "9. Hasta 50 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, en uno o varios artículos, excepto tratándose de cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco labrado en cigarrillos o puros, cuando el arribo sea por vía terrestre, así como cuando arribe por vía aérea y el aeropuerto de partida se encuentre en la franja o región fronteriza o en las ciudades del extranjero ubicadas en una franja de 25 millas a lo largo de la frontera con territorio nacional.
>
> "Cuando las mercancías sean adquiridas en la franja o región fronteriza, será aplicable el monto señalado en el numeral 8., siempre que el pasajero acredite tal circunstancia, mediante comprobante expedido en los términos de los artículos 29 y 29-A del Código.
>
> "En caso de importación de mercancías, para la determinación de la base del impuesto, podrán ser disminuidos del valor de las mercancías los montos señalados en los numerales 8. y 9. Dichas cantidades podrán acumularse por el padre, la madre y los hijos, considerando inclusive a los menores de edad, siempre que el arribo a territorio nacional se efectúe simultáneamente y en el mismo medio de transporte (...)"

Así pues, es claro que a través de la regla lo que se define, en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Aduanera, es qué mercancías integran el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales, pero no se está limitando o condicionando la exención prevista por la Ley Aduanera.

En efecto, lo único que establece la Regla emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales, ya que esa definición por mandato expreso del Reglamento de la Ley Aduanera se encomendó al titular de la Secretaría antes mencionada.

En ese orden de ideas, es claro que en el ámbito de la legalidad, al facultar el artículo 89 del Reglamento de la Ley Aduanera, a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público a determinar mediante reglas las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros residentes en el territorio nacional o en el extranjero y la resolución impugnada fundarse en esa regla, la actuación de la autoridad es legal, ya que existe una norma que la sustenta.

Ahora bien, en la especie, se cumple con el requisito de que la exención en el pago de impuestos al comercio exterior, respecto de los equipajes de pasajeros en viajes internacionales, se encuentra prevista en la Ley Aduanera, por lo que se cumple con lo establecido en la tesis de jurisprudencia que cita en su demanda el actor.

Aunado a lo anterior, es cierto lo que manifiesta el actor en su demanda, en lo relativo a que una regla emitida por una dependencia del Ejecutivo Federal no puede condicionar ni limitar una exención prevista en la Ley, ya que en nuestro sistema legal esta última está por encima de una regla, sin embargo, se debe insistir que la regla no limita o condiciona la exención prevista por la Ley Aduanera, sino únicamente define uno de sus elementos, lo que está permitido por el Reglamento de la propia Ley.

En el caso concreto, la resolución impugnada, en la parte que la autoridad resuelve, es del tenor siguiente (fojas 33 y 34 de los autos):

> "(...) B) EN CUANTO AL ESCRITO PRESENTADO DEL PLAZO LEGAL OTORGADO, MISMO QUE SE ENCUENTRA SEÑALADO EN EL RESULTANDO NÚMERO SEIS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DOCUMENTAL QUE SE VALORA POR MANDATO EXPRESO DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1998, DE CONFORMIDAD CON LOS PRECEPTOS ESTIPULADOS EN LOS ARTÍCULOS 123 Y 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, ESTA AUTORIDAD DETERMINA LO SIGUIENTE:
>
> "QUE EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN SU ESCRITO, MISMA QUE SE SEÑALA EN EL RESULTANDO NÚMERO SEIS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, NO ES DE TOMARSE EN CON-

SIDERACIÓN, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA NO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 146, FRACCIONES II Y III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1998, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 1998.

"AHORA BIEN, EN CUANTO AL ANEXO SEÑALADO EN EL RESULTANDO NÚMERO SIETE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, CABE SEÑALAR QUE SE LE OTORGÓ SU FRANQUICIA DE 300 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, A LA QUE TIENE DERECHO COMO PASAJERO INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 3.7.1, ASIMISMO SE LE ENTREGÓ MERCANCÍA CONFORME A LA REGLA 3.7.1. RUBRO 'A' NUMERAL 1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 1997, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE MARZO DE 1997, MISMA QUE SE SEÑALA EN EL RESULTANDO NÚMERO 4 DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

"(...)

"D) QUE LA C. ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA, AL ARRIBAR A TERRITORIO NACIONAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 1998, EN SU CALIDAD DE PASAJERA EN LA VÍA INTERNACIONAL, NO DECLARÓ LA MERCANCÍA QUE TRAÍA CONSIGO ANTE LA ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; OMITIENDO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO EXTERIOR, MEDIANTE DECLARACIÓN DE ADUANAS EN SU FORMA OFICIAL APROBADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN I; 40 Y 43 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1998 Y LA REGLA 3.7.1. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 1997, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE-

DERACIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DE 1997, POR LO QUE EL PASAJERO INTERNACIONAL QUE IMPORTE MERCANCÍA DISTINTA A SU EQUIPAJE EN VÍA INTERNACIONAL DEBERÁ UTILIZAR LA FORMA OFICIAL APROBADA AL RESPECTO POR ESTA SECRETARÍA, CIRCUNSTANCIA QUE NO SE CUMPLIÓ EN EL PRESENTE CASO, NI TAMPOCO APORTÓ DOCUMENTACIÓN QUE COMPROBARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA MATERIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146, FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE DE 1998, POR LO QUE LA PASAJERA ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA COMETIÓ LA INFRACCIÓN RELACIONADA CON LA IMPORTACIÓN, EN SU MODALIDAD DE INTRODUCCIÓN COMO PASAJERO DE DIVERSAS MERCANCÍAS, OMITIENDO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE, ASIMISMO, DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO PRACTICADO POR EL PERSONAL ADSCRITO SE CONOCIÓ QUE LA PASAJERA ANTES CITADA DECLARÓ CON INEXACTITUD O FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD ADUANERA, YA QUE TRAÍA MERCANCÍA EXCEDENTE A LA FRANQUICIA QUE TIENE DERECHO COMO PASAJERO INTERNACIONAL."

(El subrayado es de esta Juzgadora)

De la transcripción que antecede, se desprende que la autoridad para la emisión del crédito fiscal a cargo del actor excluyó de la mercancía que sirvió como base, los bienes que consideró eran de consumo personal de la actora y los equivalentes a la franquicia de 300 dólares de los Estados Unidos de América y determinó que la infracción cometida por la demandante fue la importación, en su modalidad de introducción como pasajero de diversas mercancías, omitiendo el pago de los impuestos al comercio exterior correspondiente, pero en ningún momento se desprende que la autoridad no haya tomado en cuenta la exención prevista en la Ley para el Equipaje de Pasajeros en Viajes Internacionales.

En otro orden de ideas, si bien en el acta de 30 de marzo de 1998 (por la que dio inicio el procedimiento administrativo en materia aduanera), la autoridad asienta que la actora "traía en su equipaje" la mercancía que posteriormente fue embargada, sin embargo, ello sólo es una expresión coloquial por parte de la autoridad, que no tiene trascendencia para discernir el sentido de lo resuelto en la resolución impugnada.

Lo anterior es así, toda vez que el término "equipaje", puede entenderse en dos acepciones, a saber, una connotación común, y una jurídica, las cuales difieren en su alcance.

Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia Española, equipaje es un "conjunto de cosas que se llevan en los viajes". Dicha acepción es evidentemente coloquial y amplia en cuanto a su alcance, y no puede emplearse en un contexto jurídico, ya que es precisamente la regla 3.7.1 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1997, la que se ocupa de proporcionar una definición jurídica de lo que debe entenderse como "equipaje", definición que, evidentemente, no tiene la misma amplitud en su alcance que la acepción coloquial.

En este orden de ideas, la expresión que utiliza la autoridad en el acta de 30 de marzo de 1998, referente a que la actora "traía en su equipaje" la mercancía que posteriormente fue embargada, evidentemente no se refiere a la definición jurídica del término "equipaje", sino al conjunto de cosas que traía consigo la hoy actora como pasajera internacional.

En consecuencia, esta Juzgadora concluye que la autoridad válidamente invocó, como fundamento de su actuación, la regla 3.7.1 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1997, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de marzo de 1997, razón por la cual, el concepto de impugnación a estudio es infundado, ya que dicha Regla no va más allá de lo establecido en la Ley, que previene la exención en el pago de los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional de los equipajes de pasajeros en viajes internacionales.

OCTAVO.- (...)

A juicio de los suscritos Magistrados el agravio en estudio resulta infundado, por lo siguiente:

En primer lugar, es la actora quien afirma que se encuentra en el supuesto de excepción previsto por el primer párrafo del artículo 146 de la Ley Aduanera vigente en 1998, por lo que no tenía la obligación de tener en su poder la documentación a que se refieren las fracciones I y II de dicho precepto, pues la ropa embargada estaba destinada a su uso personal, sin embargo, en ningún momento acredita su afirmación.

Al efecto se debe indicar que el artículo 146, fracciones I y II de la Ley Aduanera establece en la parte conducente:

> "ARTÍCULO 146.- La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:
>
> "I.- Documentación aduanera que acredite su legal importación.
>
> "Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberá exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país.
>
> "II.- Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.
>
> "(...)"

El artículo transcrito establece que la tenencia, transporte o manejo de mercancía de procedencia extranjera deberá ampararse en todo tiempo con cualquiera de los documentos que ahí se menciona, a excepción de las mercancías de uso personal.

Ahora bien, como se indicó en líneas anteriores, la actora señala que se encuentra en el caso de excepción, por lo tanto en términos del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, corresponde la carga de la prueba al actor, al estar alegando que se encuentra en la excepción de una regla general, ya que el mencionado precepto a la letra indica:

> "ARTÍCULO 83.- El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es."

En efecto, en términos del artículo 146 de la Ley Aduanera, la regla general consiste en que la tenencia de mercancías de procedencia extranjera debe ampararse en todo tiempo con la documentación aduanera que acredite su legal importación, o con nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal o institución autorizada, o con factura expedida por empresario establecido; con excepción de la mercancía de procedencia extranjera que sea de uso personal; de tal manera que si el actor afirma que se encuentra en la excepción a la regla general, esto es que la ropa que se le embargó era para uso personal, debió acreditar su dicho.

Aunado a lo anterior, se debe indicar que contrariamente a la pretensión del actor, la carga de la prueba no correspondía a la autoridad, en virtud de que la regla general no se debe probar, sino lo que se debe acreditar es la excepción.

NOVENO.- (...)

Los Magistrados integrantes de la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, consideran que el concepto de impugnación en estudio es infundado, por lo siguiente:

1.- No existe la violación a los artículos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que invoca el actor en su demanda, en virtud de que los mismos son disposiciones de carácter general que definen básicamente los objetivos que se pretenden alcanzar con la celebración del mencionado Tratado. Al efecto, resulta oportuna su transcripción:

"ARTÍCULO 101.- Establecimiento de la zona de libre comercio.

"Las partes de este Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, establecen una zona de libre comercio."

"ARTÍCULO 102.- Objetivos.

"1.- Los objetivos del presente Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:

"a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes;

"(...)

"2.- Las partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables al derecho internacional."

"ARTÍCULO 302.- Eliminación arancelaria.

"1. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna de las Partes podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo, **sobre bienes originarios**.

"2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada una de las Partes **eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios**, en concordancia con sus listas de desgravación incluidas en el Anexo 302.2.

"3. A solicitud de cualquiera de ellas, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros prevista en sus listas de desgravación. Cuando dos o más de las Partes, de conformidad con sus procedimientos legales aplicables, aprueben un acuerdo sobre la eliminación acelerada del arancel aduanero sobre un bien, ese acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o período de desgravación señalado de conformidad con sus listas para ese bien.

"4. Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el cupo de importaciones realizadas según una cuota mediante aranceles (arancel cuota) establecido en el Anexo 302.2, siempre y cuando tales medidas no tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones, adicionales a los derivados de la importación del arancel cuota.

"5. A petición escrita de cualquiera de las Partes, la Parte que aplique o se proponga aplicar medidas sobre las importaciones de acuerdo con el párrafo 4 realizará consultas para revisar la administración de dichas medidas."

De la transcripción anterior se desprenden cuestiones generales del Tratado, como lo son: que se celebra con fundamento en el artículo XXIV del GATT, absorbido hoy por la OMC, en donde se permite que los miembros de la mencionada organización celebren tratados de libre comercio entre ellos, en los cuales no se tendrá que respetar el principio de nación más favorecida, lo que significa que las ventajas que se otorgan las partes que celebran un tratado de libre comercio sólo aplican para ellas, y no para todos los miembros de la organización que pretendieran solicitar el mismo trato; el segundo habla de la eliminación de barreras y obstáculos al

comercio entre las partes; y el último se refiere a la eliminación progresiva de los aranceles respecto de los bienes originarios, lo que se traduce en que la protección o beneficios que se previenen en el Tratado sólo aplican para los bienes originarios de las partes, que son aquellos que cumplen con las reglas de origen previstas por el propio Tratado respecto de cada bien.

En ese orden de ideas, el actor no puede argumentar ninguna violación a las disposiciones antes comentadas, hasta en tanto no demuestre que los bienes que internó en territorio nacional eran originarios de alguna de las partes que celebraron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que la autoridad no siguió los lineamientos establecidos por el propio Tratado.

2.- Es cierto que en términos del artículo 133 Constitucional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es, entre otras, la Ley Suprema de toda la Unión, por lo que el contenido de los artículos autoaplicativos que prevé el mencionado Tratado no requieren de una norma de aplicación interna, es decir, tratándose de ese tipo de normas cualquier particular las puede invocar en su defensa como si fuera derecho positivo.

3.- No obstante lo anterior, es claro que el actor interpreta de manera incorrecta las disposiciones del TLCAN, ya que en ninguno de sus artículos se dispone la desgravación arancelaria de los productos provenientes de Estados Unidos o Canadá, pues aceptar eso, contraviene la naturaleza jurídica de cualquier tratado de libre comercio, cuyo objeto es otorgar beneficios y preferencias a los bienes originarios y no a los bienes provenientes o procedentes sin importar su origen. Al efecto, vale la pena reiterar un apartado del artículo 302 del Tratado: "2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada una de las Partes **eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios** (...)"

4.- Por otro lado, lo que se pactó en el TLCAN fue dar una preferencia arancelaria a los bienes originarios del territorio de una de las partes, por lo tanto, para que esa tasa o arancel preferencial se aplique, no es suficiente que la mercancía se encua-

dre en determinada clasificación arancelaria, sino lo que realmente se requiere es que se acredite su origen, lo cual sólo puede ser, en el aspecto formal con la exhibición de un certificado de origen válido, emitido por el productor o exportador del bien, tal y como se desprende del artículo 501 del propio TLCAN, que en la parte que interesa a la letra indica:

"Artículo 501. Certificado de Origen

"1. Las Partes establecerán un certificado de origen al 1° de enero de 1994 que servirá para confirmar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte, califica como originario. Posteriormente, las Partes podrán modificar el certificado previo acuerdo entre ellas.

"(...)

"3. Cada una de las Partes:

"a. exigirá al exportador en su territorio, que llene y firme un certificado de origen respecto de la exportación de un bien para el cual un importador pudiera solicitar trato arancelario preferencial en el momento de introducirlo en territorio de otra Parte; y

"b. dispondrá que, en caso de que sea el productor del bien, el exportador, en su territorio pueda llenar y firmar el certificado de origen (...)"

Ahora bien, en el aspecto material se requiere, para acreditar que un bien es originario del territorio de una Parte, cumplir con la regla de origen establecida por el propio Tratado, tal y como se previene en el artículo 401 del TLCAN, que en sus primeras líneas establece:

"Artículo 401. Bienes originarios

"Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, un bien será originario de territorio de una Parte cuando: (...)"

En ese orden de ideas, es claro que resulta improcedente la afirmación de la actora, en el sentido de que el origen de los bienes ya fue reconocido por el vista aduanal al realizar el inventario y clasificación de las mercancías, pues se insiste, la única manera de acreditar el origen de un bien para tener derecho al trato arancelario preferencial previsto en el TLCAN, es cumpliendo con la regla de origen y con la exhibición del certificado de origen correspondiente.

Así las cosas, si el actor no acreditó, ni en la instancia administrativa ni en el presente juicio contencioso administrativo, con un certificado válido el origen de los bienes que introdujo al territorio nacional, es claro que no procede la aplicación del arancel preferencial que solicita a la luz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, en consecuencia, su concepto de impugnación es infundado.

DÉCIMO.- (...)

En primer término, se debe indicar que, contrariamente a lo sostenido por el actor, el vista aduanal GERARDO CIENFUEGOS IBARRA no intervino en el levantamiento del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de fecha 30 de marzo de 1998. Para corroborar lo anterior, basta con remitirse a la parte del acta en donde se hace referencia al mencionado vista aduanal, que a la letra indica:

"DEL ESTUDIO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE EXPEDIENTE, SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

"A) QUE LA MERCANCÍA BASE DE ESTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, DE CONFORMIDAD CON LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, COTIZACIÓN Y

AVALÚO ELABORADO POR EL VISTA ADUANAL **GERARDO CIENFUEGOS IBARRA** DE FECHA 30 DE MARZO DE 1998."

"(...)

"C) CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, APARTADO 'B', FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 144, FRACCIÓN XII DE LA LEY ADUANERA, AMBOS ORDENAMIENTOS VIGENTES EN 1998, SE TOMA EN CUENTA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, COTIZACIÓN Y AVALÚO, EMITIDA POR EL VISTA ADUANAL **GERARDO CIENFUEGOS IBARRA,** PARA EMITIR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MERCANCÍA QUE LA PASAJERA **ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA,** INTRODUJO AL PAÍS, CUYO VALOR ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 3,131.42 DÓLARES AMERICANOS; AL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE ARRIBO A ESTA CIUDAD ES DE $8.5252 POR DÓLAR, EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL A $26,696.00 PESOS MEXICANOS.

"(...)

"POR LO QUE ESTA AUTORIDAD PROCEDE A DETERMINAR EL CRÉDITO FISCAL A LA C. **ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA,** CONSIDERANDO LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, COTIZACIÓN Y AVALÚO DE FECHA 30 DE MARZO DE 1998, EMITIDA POR EL VISTA ADUANAL **GERARDO CIENFUEGOS IBARRA,** PERSONAL ADSCRITO A LA ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SIGUE:"

De la transcripción anterior se desprende que lo que se hizo constar en el acta fue que el vista aduanal emitió la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de la mercancía, pero en ningún momento se indica que haya estado presente en la diligen-

cia, lo que tampoco se desprende de ninguna otra parte del acta levantada con motivo de la diligencia.

En ese orden de ideas, el concepto de impugnación es infundado, toda vez que no se incumplió con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Aduanera, que en la parte relativa indica:

> "Art. 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta Ley.
>
> "En dicha acta se deberá hacer constar:
>
> "I.- La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
>
> "(...)"

De la redacción del artículo se desprende que la obligación de identificarse es a cargo de la autoridad que practica la diligencia, lo cual se cumplió en el caso, y que incluso lo reconoce el actor, pues quienes intervinieron fueron los CC. Virginia de la Purísima Concepción Ramírez Ruíz, en su calidad de Jefe de Sala en turno, que se encontró asistida por Hugo César Martínez Murguía, orientador fiscal aduanal, que se identificaron, tal y como se asentó en el acta.

Así las cosas, es claro que el C. GERARDO CIENFUEGOS IBARRA elaboró la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de las mercancías (misma que obra a fojas 72 a 78 de los autos) con base en la cual se emitió la resolución impugnada; pero se debe insistir en el hecho de que el referido vista aduanal no intervino en la diligencia en la que se levantó el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, toda vez que tan sólo se limitó a emitir el dictamen relativo a la

clasificación arancelaria, cotización y avalúo de las mercancías, lo cual realizó en su calidad de perito en materia aduanera.

En consecuencia, el dictamen emitido por dicha persona únicamente sirvió de apoyo a la autoridad emisora de la resolución impugnada, pero ello no significa que el citado perito hubiese intervenido en la diligencia.

Por otro lado, no resulta aplicable ni por analogía, ni por mayoría de razón, la jurisprudencia cuyo rubro señala: "VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN", por dos razones esenciales:

1.- Porque la misma se refiere a un supuesto diverso, a saber, las visitas domiciliarias, que implican una intromisión de la autoridad al domicilio del visitado; y

2.- Porque en el caso, el vista aduanal ni siquiera intervino en la diligencia, en consecuencia, no pudo existir afectación a la esfera jurídica del actor por parte del mencionado servidor público.

En conclusión, el vista aduanal GERARDO CIENFUEGOS IBARRA no se encontraba obligado a identificarse ante la hoy actora, al no haber practicado la diligencia que dio inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera, razón por la cual el argumento a estudio es infundado.

DÉCIMO PRIMERO.- (...)

En primer término, en la parte conducente de la resolución impugnada, a fojas 33 y 34 del expediente, la autoridad resolvió que la hoy actora omitió el pago de los impuestos correspondientes al comercio exterior, además de que declaró con inexactitud o falsedad ante la autoridad aduanera, omitiendo manifestar el excedente de su franquicia. A continuación se transcribe la parte relativa:

"(...) D) QUE LA C. ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA AL ARRIBAR A TERRITORIO NACIONAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 1998, EN SU CALIDAD DE PASAJERA EN LA VÍA INTERNACIONAL, NO DECLARÓ LA MERCANCÍA QUE TRAÍA CONSIGO ANTE LA ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; OMITIENDO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO EXTERIOR, MEDIANTE DECLARACIÓN DE ADUANAS EN SU FORMA OFICIAL APROBADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN I, 40 Y 43 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1998 Y LA REGLA 3.7.1. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 1997, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DE 1997, POR LO QUE EL PASAJERO INTERNACIONAL QUE IMPORTE MERCANCÍA DISTINTA A SU EQUIPAJE EN VÍA INTERNACIONAL DEBERÁ UTILIZAR LA FORMA OFICIAL APROBADA AL RESPECTO POR ESTA SECRETARÍA, CIRCUNSTANCIA QUE NO SE CUMPLIÓ EN EL PRESENTE CASO, NI TAMPOCO APORTÓ DOCUMENTACIÓN QUE COMPROBARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA MATERIA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146, FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE DE 1998, POR LO QUE LA PASAJERA ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA COMETIÓ LA INFRACCIÓN RELACIONADA CON LA IMPORTACIÓN, EN SU MODALIDAD DE INTRODUCCIÓN COMO PASAJERO DE DIVERSAS MERCANCÍAS, OMITIENDO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE, ASIMISMO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO PRACTICADO POR EL PERSONAL ADSCRITO SE CONOCIÓ QUE LA PASAJERA ANTES CITADA DECLARÓ CON INEXACTITUD O FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD ADUANERA, YA QUE TRAÍA MERCANCÍA EXCEDENTE A LA FRANQUICIA QUE TIENE DERECHO COMO PASAJERO INTERNACIONAL.

"E) EN CUANTO A LA MERCANCÍA EXCEDENTE DE LA FRANQUICIA QUE INTRODUJO LA C. ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA, EN SU CALIDAD DE PASAJERO, ESTA AUTORIDAD DETERMINA QUE CON TAL ACTITUD SE UBICÓ EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 179 EN RELACIÓN CON EL 176, FRACCIONES I Y II DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1998, COMO YA QUEDÓ DEMOSTRADO AL TENER EN SU PODER, LA MERCANCÍA EN CONTROVERSIA Y OMITIR MANIFESTAR EN LA DECLARACIÓN ADUANAL PARA PASAJEROS EL EXCEDENTE DE SU FRANQUICIA, HACIÉNDOSE ACREEDORA POR TANTO A LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 178, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1998, CONSISTENTE EN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR COMERCIAL DE LAS MERCANCÍAS, ADEMÁS DICHAS MERCANCÍAS PASAN A SER PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL, TODA VEZ QUE NO COMPROBÓ HABERLAS SOMETIDO A TRÁMITE ADUANAL PARA SU LEGAL INTRODUCCIÓN AL PAÍS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 178, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, ASIMISMO, DEBERÁ PAGAR EL IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN I, 52, FRACCIÓN I, 64 Y 80 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1998, Y EN VIRTUD DE QUE LA MERCANCÍA SEÑALADA EN LOS CASOS 5, 7, 8 Y 11 DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SON DE ORIGEN CHINA, (SIC) EL PASAJERO DEBERÁ PAGAR UN PORCENTAJE DE 533% CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS COMPENSATORIAS HACIÉNDOSE ACREEDORA A LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 178, FRACCIÓN IV DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR PARA 1998, CAUSANDO ADEMÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGÚN SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 1°, FRACCIÓN IV Y PÁRRAFO SIGUIENTE, 24, FRACCIÓN I, 26, 27 Y 28, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN 1998, ASÍ COMO EL DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN

I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 1998, Y LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 1998 (...)"

De la transcripción que antecede, se desprende que la autoridad invoca, como fundamento para emitir su resolución, la regla 3.7.1, apartado A, número 1 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior, misma que se transcribe para mayor claridad:

"3.7.1. Para efectos de los artículos 50 y 61, fracción VI de la Ley y 89 del Reglamento, las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros internacionales son las siguientes:

"A. Tratándose de pasajeros provenientes del extranjero, residentes en el país:

"1. Bienes de consumo personal usados o nuevos, tales como ropa, calzado y productos de aseo, siempre que sean acorde a la duración del viaje y que por su cantidad no puedan ser objeto de comercialización.

"2. Una cámara fotográfica, cinematográfica o de video grabación y, en su caso, su fuente de poder; hasta doce rollos de película virgen o video cassettes; material fotográfico impreso o filmado; un equipo de cómputo portátil nuevo o usado, laptop, notebook, omnibook o similares, en este caso no se requerirá contar con el permiso previo de importación.

"3. Un equipo personal deportivo usado, siempre que pueda ser transportado normal y comúnmente por una persona.

"4. Libros y revistas, que por su cantidad no puedan ser objeto de comercialización.

"5. Medicamentos de uso personal, debiendo mostrar la receta médica en caso de sustancias psicotrópicas.

"6. Velices, petacas, baúles y maletas necesarios para el traslado de las mercancías.

"7. Tratándose de pasajeros mayores de edad, un máximo de 20 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, y hasta 3 litros de vino, cerveza o licor, en el entendido que no se podrá introducir una cantidad mayor de puros, sin que se cumpla con las regulaciones y restricciones aplicables.

"8. Hasta 300 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, en uno o varios artículos, cuando el arribo a territorio nacional sea por vía marítima o aérea, salvo lo dispuesto en el siguiente numeral.

"9. Hasta 50 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, en uno o varios artículos, excepto tratándose de cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco labrado en cigarrillos o puros, cuando el arribo sea por vía terrestre, así como cuando arribe por vía aérea y el aeropuerto de partida se encuentre en la franja o región fronteriza o en las ciudades del extranjero ubicadas en una franja de 25 millas a lo largo de la frontera con territorio nacional.

"Cuando las mercancías sean adquiridas en la franja o región fronteriza, será aplicable el monto señalado en el numeral 8., siempre que el pasajero acredite tal circunstancia, mediante comprobante expedido en los términos de los artículos 29 y 29-A del Código.

"En caso de importación de mercancías, para la determinación de la base del impuesto, podrán ser disminuidos del valor de las mercancías los montos señalados en los numerales 8. y 9. Dichas cantidades podrán acumularse por el

padre, la madre y los hijos, considerando inclusive a los menores de edad, siempre que el arribo a territorio nacional se efectúe simultáneamente y en el mismo medio de transporte (...)"

Por su parte, el artículo 61, fracción VI de la Ley Aduanera, a que hace mención la regla transcrita con anterioridad, establece lo siguiente:

"Artículo 61.- No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:

"(...)

"VI.- Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales (...)"

De lo transcrito se advierte que, tratándose de pasajeros en viajes internacionales, para estar en posibilidad de establecer cuál es el impuesto causado por la introducción de mercancías a territorio nacional, en los términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Aduanera, es necesario delimitar qué bienes constituyen el equipaje, por el que no se pagarán los impuestos al comercio exterior.

En efecto, toda vez que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo que ha quedado transcrito, no se pagarán los impuestos al comercio exterior por los equipajes de pasajeros en viajes internacionales, entonces, es necesario distinguir entre los bienes que pueden ser considerados como equipaje, y los demás bienes respecto de los cuales sí debe pagarse el impuesto respectivo.

Al respecto, la regla 3.7.1 a que se ha hecho mención, establece las mercancías que integran el equipaje de los pasajeros internacionales, señalando al efecto diversas fracciones, en donde de manera limitativa se comprenden los conceptos que pueden ser considerados como equipaje.

En este orden de ideas, si en el caso concreto se desprende que la mercancía embargada, y por la que se liquida impuestos al comercio exterior a cargo de la actora, es ropa, es claro que la autoridad en términos de lo dispuesto por la fracción I de la regla 3.7.1 antes transcrita estaba obligada a motivar por qué estimó que no integraba el equipaje de la actora, es decir, debió expresar si tales ropas no eran acorde a la duración del viaje o que por su cantidad podían ser objeto de comercialización y al no hacerlo de esa manera es claro que su actuación resulta ilegal.

Cabe precisar que dentro del texto de la propia resolución, la autoridad distinguió la mercancía que era de uso personal de la actora y se la devolvió, como consta en la hoja 3 de la mencionada resolución; sin embargo, faltó expresar los motivos por los cuales la demás mercancía (ropa) no tenía ese carácter, de acuerdo a los lineamientos de la propia regla.

En efecto, en el punto 4 de los resultandos de la resolución impugnada se asentó lo siguiente:

> "4.- EL DÍA 30 DE MARZO DE 1998, A LA C. **ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA** EN SU CALIDAD DE PASAJERA SE LE HIZO ENTREGA DE LA MERCANCÍA CONSISTENTE EN: **02 PANTALONES CORTOS CON PECHERA, 02 PLAYERAS NIÑO; 02 BATAS P/DAMA; 01 CAMISÓN; 05 SHORTS P/DAMA; 02 PANTALONES P/CABALLERO; 01 PAR DE ZAPATOS P/CABALLERO Y 01 PAR DE TENIS P/NIÑO,** CORRESPONDIENTE A LA FRANQUICIA DE 300 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 3.7.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 1997, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 24 DE MARZO DE 1997, Y CONFORME A LA REGLA FISCAL 3.7.1 RUBRO 'A' NUMERAL 1, SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: **01 PERFUME CAROLINA HERRERA, 03**

PARES DE ZAPATOS P/DAMA, 05 CONJUNTOS P/DAMA DE 2 PZAS. C/U, ASÍ COMO SUS EFECTOS DE USO PERSONAL."

De la transcripción anterior se desprende que la autoridad se limitó a indicar que le regresaba cierta mercancía a la actora, con fundamento en la regla 3.7.1, rubro "A", numeral 1, que corresponde a bienes de consumo personal usados o nuevos, tales como ropa, calzado y productos de aseo, siempre que sean acordes a la duración del viaje y que por su cantidad no puedan ser objeto de comercialización, sin embargo, no motiva por qué sólo esa mercancía encuadra en la hipótesis prevista por la regla.

Aunado a lo anterior, se debe resaltar que el actor, desde el procedimiento, argumentó que esa mercancía era de uso personal, por lo que es claro que la autoridad debió fundar y motivar su determinación de no aceptar el criterio del actor y más aún su determinación de liquidar a su cargo el impuesto al comercio exterior.

Lo anterior es así, ya que en el caso, la mercancía introducida a territorio nacional, respecto de la cual la autoridad consideró que no se había pagado el impuesto correspondiente, eran prendas de vestir que, en los términos de la citada regla 3.7.1, pueden ser consideradas como parte del equipaje, siempre que sean acordes con la duración del viaje y que, por su cantidad, no puedan ser objeto de comercialización.

Desde luego, en los términos de los artículos 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad, como el que en la especie nos ocupa, debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que en la propia Resolución ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y

las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa.

En efecto, los actos de autoridad, como lo es la resolución impugnada, deben encontrarse debidamente motivados, lo que no sucede en la especie; razón por la cual, la resolución impugnada deviene ilegal, ya que la demandada infringió en perjuicio de la actora lo dispuesto en los artículos 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, dado que la resolución, en la parte que nos ocupa, carece por completo de motivación, puesto que la autoridad no expresa cuáles son las razones por las que consideró que la mercancía que traía consigo la hoy actora no formaba parte de su equipaje, y por tanto, no se expresaron las razones por las que la autoridad estimó que en el caso se causaban los impuestos al comercio exterior.

Al respecto resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que a continuación se transcribe:

> "**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-** De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él

se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

"Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

"Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

"Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.

"Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez."

"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 64, Abril de 1993
"Tesis: VI.2o. J/248
"Página: 43

No es óbice para lo anterior que la autoridad, al contestar la demanda (en la foja 130 del expediente), manifieste que de acuerdo a lo asentado en la clasificación arancelaria, cotización y avalúo emitida por el vista aduanal, la mercancía introducida al país por la actora tiene un valor de $3,131.42 dólares americanos, y que por tanto, se excedió la franquicia de 300 dólares a que tenía derecho la hoy demandante; lo anterior, ya que la franquicia mencionada se refiere a mercancías distintas a los bienes de uso personal que se señalan en la fracción I, del inciso A de la regla 3.7.1, siendo que dichos bienes no fueron delimitados por la autoridad demandada, conforme a lo expresado en párrafos precedentes.

En consecuencia, se actualiza la causal de anulación prevista en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, por lo que, en los términos del artículo 239, fracción III del Ordenamiento en cita, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emita otra resolución que se encuentre debidamente fundada y motivada, de acuerdo a lo expresado en el presente fallo.

DÉCIMO SEGUNDO.- (...)

Los Magistrados de la Segunda Sección de la Sala Superior, consideran que le asiste la razón al actor, en virtud de que la autoridad omitió motivar en la resolución impugnada de qué manera obtuvo el valor de las mercancías que consideró para determinar el crédito fiscal a su cargo, además que al realizar la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, al momento de listar cada caso mencionó el término "valor normal", mismo que no es utilizado por la Ley y mucho menos es definido por la misma.

En efecto, para corroborar lo anterior, basta con remitirse a lo precisado en la resolución impugnada en la parte relativa a la liquidación, que a la letra indica:

"LIQUIDACIÓN

"POR LO QUE ESTA AUTORIDAD PROCEDE A DETERMINAR EL CRÉDITO FISCAL A LA C. ANGÉLICA TRUJILLO DE ANDA, CONSIDERANDO LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, COTIZACIÓN Y AVALÚO DE FECHA 30 DE MARZO DE 1998, EMITIDA POR EL VISTA ADUANAL GERARDO CIENFUEGOS IBARRA, PERSONAL ADSCRITO A LA ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SIGUE:

"MERCANCÍA DESCRITA EN LOS CASOS DEL 01 AL 21, APLICÁNDOSE EL TIPO DE CAMBIO DE $8.5252 POR DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 1998, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN IV, INCISO a) DE LA LEY ADUANERA VIGENTE PARA 1998.

"CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA CUOTAS Y REQUISITOS	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN.
"08 PZAS.	CASO No.: 1 MERCANCÍA: PANTALONES LARGOS Y CORTOS P/DAMA ALGODÓN. FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.62.01 TASA AD-VALOREM: 35% PZA. PERMISOS: NOM004SCFI/94 VALOR NORMAL: $1,893.00	$ 663.00
"01 PZA.	CASO No.: 2 MERCANCÍA: FALDAS DE RAYÓN P/DAMA. FRACCIÓN ARANCELARIA: N6204.59.01 TASA AD-VALOREM: 35% PZA. PERMISOS: NOM004SCFI/94 VALOR NORMAL: $ 128.00	$ 45.00

“02 PZAS.	**CASO No.: 3** **MERCANCÍA: FALDAS DE POLIÉSTER P/DAMA.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.53.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94** **VALOR NORMAL: $ 239.00**	**$**	**84.00**
“02 PZAS.	**CASO No.: 4** **MERCANCÍA BLUSAS DE ALGODÓN TEJIDO PLANO.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6206.30.01** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISO: NOM004CFI/94** **VALOR NORMAL: $102.00**	**$**	**36.00**
“02 PZAS.	**CASO No.: 5** **MERCANCÍA: BLUSAS DE RAYÓN TEJIDO PLANO CHINA.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6206.40.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOMSCFI/94** **CUOTA COMPENSATORIA 533%: $815.00** **VALOR NORMAL: $153.00**	**$**	**54.00**
“01 PZA.	**CASO No.: 6** **MERCANCÍA: BLUSA DE RAYÓN TEJIDO PLANO P/DAMA.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6206.40.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94** **VALOR NORMAL: $77.00**	**$**	**27.00**
“16 PZAS.	**CASO No.: 7** **MERCANCÍA: BLUSAS DE SEDA P/DAMA TEJIDO PLANO CHINA.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6206.90.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94** **CUOTA COMPENSATORIA 533%: $9,088.00** **VALOR NORMAL: $1,705.00**	**$**	**597.00**
“04 PZAS.	**CASO No.: 8** **MERCANCÍA: BLUSA DE FIBRA SINTÉTICA DE PUNTO CHINA.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6106.20.00** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94** **CUOTA COMPENSATORIA 533%: $2,180.00** **VALOR NORMAL: $409.00**	**$**	**143.00**

“14 PZAS.	**CASO No.: 9** **MERCANCÍA: BLUSA DE FIBRA SINTÉTICA DE PUNTO P/DAMA.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6106.20.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94** **VALOR NORMAL: $1,347.00**	**$**	**471.00**
“13 PZAS.	**CASO No.: 10** **MERCANCÍA: BLUSA DE PUNTO P/DAMA ALGODÓN.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6106.10.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $1,091.00**	**$**	**382.00**
“01 PZA.	**CASO No.: 11** **MERCANCÍA: BLUSA DE PUNTO P/DAMA ALGODÓN CHINA.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6106.10.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **CUOTA COMPENSATORIA 533%: $453.00** **VALOR NORMAL: $85.00**	**$**	**30.00**
“16 PZAS.	**CASO No.: 12** **MERCANCÍA: CONJUNTOS P/DAMA DE RAYÓN TEJIDO PLANO.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.29.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $4,902.00**	**$**	**1,716.00**
“24 PZAS.	**CASO No.: 13** **MERCANCÍA: CONJUNTOS P/DAMA DE FIBRAS SINTÉTICAS PLANO.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.23.01** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $7,161.00**	**$**	**2,056.00**
“01 PZA.	**CASO No.: 14** **MERCANCÍA: CONJUNTO P/DAMA ALGODÓN TEJIDO PLANO.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.22.01** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $213.00**	**$**	**75.00**
“04 PZAS.	**CASO No.: 15** **MERCANCÍA: VESTIDO P/DAMA RAYÓN.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.44.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $938.00**	**$**	**328.00**

“01 PZA.	**CASO No.: 16** **MERCANCÍA: VESTIDO P/DAMA POLIÉSTER.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.43.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $234.00**	**$**	**82.00**
“02 PZAS.	**CASO No.: 17** **MERCANCÍA: PLAYERA DE TODO TIPO DE PUNTO SINTÉTICAS.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6109.90.01** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $205.00**	**$**	**72.00**
“03 PZAS.	**CASO No.: 18** **MERCANCÍA: PLAYERA DE ALGODÓN DE PUNTO.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6109.10.01** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $529.00**	**$**	**185.00**
“06 PZAS.	**CASO No.: 19** **MERCANCÍA: PANTALÓN P/DAMA DE LINO PLANO.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.69.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $2,813.00**	**$**	**985.00**
“07 PZAS.	**CASO No.: 20** **MERCANCÍA: PANTALONES P/DAMA TEJIDO POLIÉSTER PLANO.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6204.63.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $1,577.00**	**$**	**552.00**
“03 PZAS.	**CASO No.: 21** **MERCANCÍA: PANTALÓN P/CABALLERO TEJIDO.** **ALGODÓN PLANO.** **FRACCIÓN ARANCELARIA: 6203.42.99** **TASA AD-VALOREM: 35% PZA.** **PERMISOS: NOM004SCFI/94.** **VALOR NORMAL: $895.00**	**$**	**313.00**

“MERCANCÍA SUJETA AL PAGO DE IMPUESTOS, CONTENIDA EN LOS CASOS DEL 01 AL 21.

“VALOR DE TRANSACCIÓN		$ 26,696.00
“IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN	$ 9,346.00	
“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7,319.00	
“CUOTAS COMPENSATORIAS	12,536.00	
“DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO	214.00	
“**TOTAL**	**$29,415.00**”	

De la transcripción anterior, se desprende que en cada caso la autoridad menciona "valor normal" de la mercancía, pero en ninguna parte de la resolución se motiva cómo o de dónde se obtuvo ese valor, lo que se traduce en un completo estado de inseguridad jurídica para el actor, al no saber cómo se obtuvo esa cantidad.

No pasa inadvertido para esta Juzgadora el hecho de que los datos que vierte la autoridad demandada en su resolución fueron los determinados por el vista aduanal en la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, sin embargo, ese hecho no implica el que en la resolución combatida pueda omitirse la fundamentación y motivación que sustenta el valor de transacción que se concluye.

Por otro lado, también debe resaltarse el hecho de que en la Ley Aduanera no se hace mención al término "valor normal"; al efecto los artículos relativos establecen:

"ARTÍCULO 51.- Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior:

"I.- General de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva."

"(...)"

"ARTÍCULO 52.- Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior las personas físicas y morales que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo (...)

"Se presume, salvo prueba en contrario, que la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancías, se realiza por:

"I.- El propietario o el tenedor de las mercancías.

"(...)"

"ARTÍCULO 64.- La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la Ley de la materia establezca otra base gravable.

"El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de esta Ley.

"Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará, en su caso, en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley.

"Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste."

"ARTÍCULO 80.- Los impuestos al comercio exterior se determinarán aplicando a la base gravable determinada en los términos de las Secciones Primera y Segunda del Capítulo III del presente Título, respectivamente, la cuota que corresponda conforme a la clasificación arancelaria de las mercancías".

Es conveniente tener presente los artículos 65, 67 y 71 de esta Ley, que se invocan en el artículo 64, antes transcrito.

"ARTÍCULO 65.- El valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos:

"I. Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías:

"a) Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra.

"b) El costo de los envases o embalajes que, para efectos aduaneros, se considere que forman un todo con las mercancías de que se trate.

"c) Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales.

"d) Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley.

"II. El valor, debidamente repartido, de los siguiente bienes y servicios, siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos, para su utilización en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio pagado:

"a) Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas.

"b) Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas.

"c) Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas.

"d) Los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas.

"III.- Las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado.

"IV.- El valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor.

"Para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo dispuesto en este artículo, sobre la base de datos objetivos y cuantificables."

"ARTÍCULO 67.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 64 de esta Ley, se considerará como valor en aduana el de transacción, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

"I. Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador, con excepción de las siguientes:

"a) Las que impongan o exijan las disposiciones legales vigentes en territorio nacional.

"b) Las que limiten el territorio geográfico en donde puedan venderse posteriormente las mercancías.

"c) Las que no afecten el valor de las mercancías.

"II. Que la venta para la exportación con destino al territorio nacional o el precio de las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar.

"III. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuada por el importador, salvo en el monto en que se haya realizado el ajuste señalado en la fracción IV del artículo 65 de este Ley.

"IV. Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción.

"En caso de que no se reúna alguna de las circunstancias enunciadas en las fracciones anteriores, para determinar la base gravable del impuesto general de importación, deberá estarse a lo previsto en el artículo 71 de esta Ley."

"ARTÍCULO 71.- Cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en los términos del artículo 64 de esta Ley, o no derive de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos, los cuales se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión:

"I. Valor de transacción de mercancías idénticas, determinado en los términos señalados en el artículo 72 de esta Ley.

"II. Valor de transacción de mercancías similares, determinado conforme a lo establecido en el artículo 73 de esta Ley.

"III. Valor de precio unitario de venta determinado conforme a lo establecido en el artículo 74 de esta Ley.

"IV. Valor reconstruido de las mercancías importadas, determinado conforme a lo establecido en el artículo 77 de esta Ley.

"V. Valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 de esta Ley.

> "Como excepción a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo el orden de aplicación de los métodos para la determinación del valor en aduana de las mercancías, previstos en las fracciones III y IV de este artículo, se podrá invertir a elección del importador."

De los anteriores preceptos se desprende que la base gravable para determinar el impuesto general de importación es el valor en aduana de la mercancía, mismo que será el valor de transacción de la misma, cuando se cumpla con las circunstancias ahí establecidas:

1.- Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador con las excepciones ahí anotadas.

2.- Que la venta para exportación con destino al territorio nacional o el precio de las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar.

3.- Que no se revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuadas por el importador, salvo en el monto en que se haya realizado el ajuste señalado en la fracción IV del artículo 65 de esa Ley.

4.- Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción.

Asimismo, se establece que en caso de que no se reúna alguna de las circunstancias enunciadas, para determinar la base gravable del impuesto general de importación deberá estarse a lo previsto en el artículo 71 de la Ley, que establece los métodos que se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión, para calcular la base gravable del impuesto general de importación cuando no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas.

En ese orden de ideas, si en el caso concreto la autoridad al final de la liquidación llegó a una cantidad que denominó valor de transacción de la mercancía, es claro que debió precisar cómo la obtuvo y no limitarse a señalarlo de manera dogmática, ya que con su actuación afecta las defensas del particular y su determinación trasciende al sentido de la resolución impugnada, ya que esa cantidad constituye la base del impuesto.

Por último, se debe precisar que la violación argumentada por el actor no puede conducir a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en virtud de que si bien en la referencia a cada caso se hace mención a un término no previsto por la ley "valor normal", también lo es que al final sí se menciona el concepto legal que es "valor de transacción", todo lo cual significa que se está en presencia de una omisión de motivación y fundamentación de la resolución impugnada en ese punto, lo que acarrea una nulidad para efectos, en términos del artículo 238, fracción II y 239, fracción III del Código Fiscal de la Federación.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción II, 239, fracción III del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La parte actora acreditó su pretensión.

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, por lo argumentado en los considerandos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de este fallo y para los efectos señalados en el último considerando del mismo.

III.- Mediante atento oficio que se gire al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remítasele copia certificada del presente fallo, como cumplimiento a la ejecutoria de 8 de octubre de 2001, dictada en el toca R. F. 2641/2001.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución; una vez que quede firme, devuélvanse los autos a la **QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA** y en su oportunidad archívese este expediente como concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2002, por mayoría de 4 votos a favor de los CC. Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, María Guadalupe Aguirre Soria, Luis Carballo Balvanera y Francisco Valdés Lizárraga, y 1 voto en contra de la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el día 16 de mayo de 2002 y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Valdés Lizárraga, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-197

TERCERO INTERESADO.- NO LO ES EL IMPORTADOR DE LOS BIENES AL NO TENER UN DERECHO INCOMPATIBLE CON EL DEL EXPORTADOR.- En el juicio contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del Código Fiscal de la Federación, tiene la calidad de parte el tercero interesado, y para tener tal condición de **tercero interesado** es *necesario* tener un derecho incompatible con la pretensión del demandante, y en los casos donde la litis se refiera a que para surtir efectos la determinación de la autoridad de que un bien importado no califica como originario es necesario que se notifique por escrito *tanto al importador del bien como a la persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara*, es evidente que el **importador de los bienes** no tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de nulidad, toda vez que *de ninguna manera tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor*, pues también afecta a sus intereses el que la autoridad determine que los bienes que importó no tienen la calidad de originarios, por la posible liquidación que puede determinarle la autoridad; en efecto, en los casos en que la autoridad es **omisa en notificar al importador la resolución que determina que la mercancía no califica como originaria**, dicho importador no puede acudir a juicio a defender sus intereses, por lo que no puede apersonarse en el juicio promovido por la empresa exportadora de las mismas mercancías, al no tener un derecho incompatible con la pretensión de dicha exportadora, pues tiene el mismo interés en que se nulifique la determinación de la autoridad de no considerar como originarios los bienes exportados por una empresa e importados por la otra. (21)

Juicio No. 11333/00-11-06-4/404/01-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de julio de 2002, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de septiembre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Tampoco es óbice para lo anterior, el argumento manifestado por la autoridad demandada en su excepción a este concepto de impugnación, relativo a que de la sentencia de 19 de octubre de 1999, emitida por esta Segunda Sección en el juicio de nulidad No. 12348/98-11-08-1/99-S2-09-03, que obra a fojas 142 a 205 del expediente de nulidad, se desprende que el representante legal de Televisión del Distrito Federal, S.A. de C.V. (importador de los televisores de 14 pulgadas que produce Hitachi) manifestó que en dicho juicio no tenía el carácter de tercero interesado, por lo que es ilegal que la actora pretenda hacer valer argumentos que legalmente está impedida.

Ello es así, toda vez que conforme a lo señalado en el antes transcrito párrafo 13 del artículo 6-07 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, cuando una Parte determine que cierto bien importado a su territorio no califica como originario (como sucedió en la especie), tal resolución **no surtirá efectos hasta que** (aquí se encuentra una condición suspensiva regulada en el Tratado ineludible de cumplir para las Partes) la notifique por escrito *tanto al importador del bien como a la persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara.*

De lo anterior se desprende que los sujetos a quien tiene la autoridad la obligación de notificar (para que surta efectos) la resolución que determine que cierto bien importado a su territorio no califica como originario (como lo es la resolución impugnada en el presente juicio), son los siguientes:

1.- Importador del bien.

2.- La persona que haya llenado y firmado el certificado de origen de dicho bien.

En el caso concreto dichos agentes son los siguientes:

El importador del bien (televisores a color de 14 pulgadas, modelo CT-1470) es la empresa denominada Televisión del Distrito Federal, S.A. de C.V., según se desprende de los folios 102 del expediente de nulidad. Mientras que quien llenó y firmó el certificado de origen fue la ahora actora en el presente juicio, según se desprende de la resolución impugnada, folios 99 y 100 del expediente de nulidad.

Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del Código Fiscal de la Federación, tiene la calidad de **parte** en tales juicios, el tercero interesado:

"**Artículo 198.-** Son partes en el juicio contencioso administrativo:

"(...)

"**IV.-** El tercero interesado que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante."

De lo anterior se aprecia que para tener la calidad de **tercero interesado** es *necesario* tener un derecho incompatible con la pretensión del demandante, y en el caso del juicio de nulidad No. 12348/98-11-08-1/99-S2-09-03, es evidente que Televisión del Distrito Federal, S.A. de C.V., efectivamente no tenía el carácter de ser un tercero interesado, por lo que fue correcto que formulara esa manifestación cuando se le emplazó en dicho juicio, toda vez que al tratarse precisamente del **importador de los bienes** *de ninguna manera tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor,* toda vez que tampoco le conviene a sus intereses el que la autoridad determine que los bienes que dicha empresa importó no tienen la calidad de originarios, pero como en la especie, la autoridad fue **omisa en notificarle a tal empresa la resolución que determinó que la mercancía no calificaba como originaria**, no puede acudir a juicio porque a ella no se le ha notificado tal resolución, y como en el juicio contencioso administrativo no existe la figura del litisconsorcio activo, no

puede apersonarse en el juicio promovido por la ahora actora, ya que, se reitera, al no tener un derecho incompatible con la pretensión de la demandante, no puede acudir como tercero interesado.

Tiene aplicación, por analogía, en lo referente al tercero interesado, el siguiente precedente de este Tribunal:

"Tercera Época.
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año V. No. 49. Enero 1992.
"Tesis: III-PSS-122
"Página: 14

"**VIOLACIÓN SUBSTANCIAL DE PROCEDIMIENTO.- LA CONSTITUYE EL NO EMPLAZAR AL TERCERO CON DERECHO INCOMPATIBLE CON LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE.-** Si en un juicio de nulidad se comprueba que el Magistrado Instructor incurrió en una violación substancial al procedimiento, como es la de no haber emplazado al representante del Sindicato o de la mayoría de los trabajadores cuando se impugne una resolución en la que se modifique el ingreso global gravable para el reparto de utilidades a los trabajadores, quien es tercero interesado en los términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 198 del Código Fiscal de la Federación, debe ordenarse la reposición del procedimiento para el efecto de que se emplace a éste, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253, fracción I del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que cualquiera que fuera la resolución emitida repercutirá en la esfera de los derechos de éstos.(7)

"Juicio de Competencia Atrayente No. 142/89.- Resuelto en sesión de 28 de enero de 1992, por unanimidad de 7 votos.- Magistrada Ponente: Ma. Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Avelino C. Toscano Toscano.

"PRECEDENTE:

"Juicio de Competencia Atrayente No. 23/9l.- Resuelto en sesión de 5 de julio de 1991, por unanimidad de 8 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Martha Gladis Calderón Martínez."

En consecuencia, la excepción de la autoridad es infundada, porque el hecho de que en el juicio de nulidad No. 12348/98-11-08-1/99-S2-09-03, la empresa Televisión del Distrito Federal, S.A. de C.V. haya manifestado que no tenía el carácter de tercero interesado en nada le beneficia, pues, como ya se señaló, efectivamente no tenía tal carácter, lo cual no se puede traducir en que no compareció a defender sus intereses, sino que legalmente no podía apersonarse a defender sus derechos, por dos razones: porque la autoridad no le había notificado la resolución que determinó que los bienes no calificaban como originarios, y porque su pretensión no es incompatible con la de la actora, sino que al contrario, tienen el mismo interés en que se nulifique la determinación de la autoridad de no considerar como originarios los bienes exportados por una empresa e importados por la otra.

Tomando en cuenta que, como ha quedado demostrado, la resolución impugnada se dictó en contravención a las normas que rigen los efectos de la resolución recaída al procedimiento de verificación del origen de los bienes a que se contrae el Tratado de Libre Comercio analizado, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en el artículo 238, fracción III del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad demandada reponga el procedimiento a partir de la violación cometida.

Esta Juzgadora se abstiene de estudiar los restantes conceptos de impugnación hechos valer por la actora, pues cualquiera que fuere su resultado en nada cambiaría el sentido de este fallo, ya que controvierten la legalidad de la resolución impugnada y en este considerando se decretó la nulidad por un vicio del procedimiento.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 20, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los diversos 236, 237, 238, fracción II, 239, fracción III y 239-A, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- En cumplimiento a la ejecutoria del recurso de revisión RF.74/2002, se deja insubsistente la sentencia de 21 de agosto de 2001, en los términos indicados en este fallo.

II.- La actora probó su pretensión, en consecuencia,

III.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, la cual ha quedado precisada en el resultando 1º, para los efectos señalados en el último considerando de este fallo.

IV.- Remítase copia de esta sentencia al Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, en vía de informe, en relación a la revisión fiscal RF. 74/2002.

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución, devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Sexta Sala Regional Metropolitana, una vez que haya quedado firme, o en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto; y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dos de julio de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos a favor de los CC. Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, María Guadalupe Aguirre Soria, Luis Carballo Balvanera y Francisco Valdés Lizárraga; estuvo ausente la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega. Fue ponente en este asunto el Magistrado Francisco Valdés Lizárraga, cuya ponencia se adecuó.

Se elaboró el presente engrose el día nueve de julio de dos mil dos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman el Magistrado Francisco Valdés Lizárraga, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Lic. Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

V-P-2aS-198

CERTIFICADO DE ORIGEN EN IDIOMA INGLÉS. FALTA DE PRESENTACIÓN DE SU TRADUCCIÓN.- El artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que todos los documentos exhibidos en idioma distinto al español deberán presentarse con su respectiva traducción. Esa es la regla general; sin embargo, el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior dispone, entre otras cosas, que se podrá presentar el certificado de país de origen en inglés, sin necesidad de acompañar una traducción. En tal virtud, con el objeto de no crear inseguridad jurídica colocando trampas procesales que afectan los medios de defensa de los particulares, las normas adjetivas deben interpretarse armonizándolas con las normas sustantivas aplicables al caso. La norma sustantiva permite que el certificado de origen se presente ante la aduana en idioma inglés y la disposición adjetiva obliga al oferente de la documental a exhibirla con su traducción. Por tal motivo, este Tribunal debe hacer uso de sus facultades y ordenar la traducción por un perito del Tribunal para auxiliarse en la valoración de la prueba, con el objeto de armonizar ambas disposiciones y lograr así que la norma adjetiva sea acorde a la sustantiva. (22)

Juicio No. 10294/00-11-09-1/205/01-S2-10-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de julio de 2002, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de julio de 2002)

PRECEDENTE:

IV-P-2aS-27
Juicio No. 100(20)43/97/2658/97.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de junio de 1998, por

unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Isabel Urrutia Cárdenas.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de junio de 1998)
R.T.F.F. Cuarta Época. Año I. No. 5. Diciembre 1998. p. 85

SEGUNDA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR Y DE SALAS REGIONALES

PLENO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

TERCERO INTERESADO. EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO EN CONTRA DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA OMISIÓN EN SU EMPLAZAMIENTO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUBSTANCIAL EN EL PROCEDIMIENTO.- Cuando una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que se desecha el recurso de revisión, promovido en contra de una diversa resolución en la que se negó la solicitud de declaración administrativa de infracción, sea impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y cuyo conocimiento corresponda conocer a la Sala Superior de este Tribunal, si se advierte que la Sala Regional de origen omitió emplazar conforme a lo dispuesto por el artículo 198, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con el carácter de tercero interesado, con un derecho incompatible al del actor, a aquella persona en contra de quien se solicitó la declaración administrativa de infracción, ello constituye una violación substancial que impide se realice el pronunciamiento correspondiente en cuanto al fondo del asunto, siendo procedente remitir los autos a la Sala de cuenta, para el efecto de que regularice el procedimiento, en términos de lo previsto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, realizando los actos correspondientes, a fin de estar en aptitud de emplazar a juicio al tercero interesado para que comparezca ante este Órgano Colegiado a hacer valer lo que a su derecho convenga, pues de otra forma se violaría su garantía de defensa. (1)

Juicio No. 11550/01-17-08-8/379/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de

septiembre de 2002, por mayoría de 6 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión de 11 de septiembre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Del análisis integral a las constancias que integran el presente juicio, se advierte que el actor en los puntos 2 y 3, del capítulo de hechos de su escrito de demanda (fojas 2 de autos), precisó lo siguiente:

"2. Con fecha 26 de enero del año en curso, la Universidad Autónoma Metropolitana presentó demanda de infracción administrativa en materia de comercio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en contra del Sr. Fernando Toledo Toledo.

"3. El día 7 de marzo del presente año, fue notificado a mi mandante el oficio número 002071, de fecha 13 de febrero del año en curso, emitido por la Subdirectora Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio; a través del cual se resuelve desechar de plano la solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio que se precisa en el punto inmediato anterior (...)"

Por otra parte, resulta conveniente dejar establecido que el artículo 198, fracción IV del Código Fiscal de la Federación dispone en la parte que nos interesa lo siguiente:

"**Artículo 198.-** Son partes en el juicio contencioso administrativo:

"(...)

"**IV.-** El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante."

En ese orden de ideas, queda de manifiesto que el C. Fernando Toledo Toledo, conforme a lo dispuesto por el artículo 198, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, resulta ser tercero interesado en el presente juicio, el cual ciertamente tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor, que al caso lo es que se admita a trámite el recurso de revisión y en su oportunidad se resuelva su solicitud de declaración administrativa de infracción, imputada precisamente al C. Fernando Toledo Toledo.

Ahora bien, en la especie, el actor no consideró al supracitado Fernando Toledo Toledo como parte en el presente juicio, sin embargo, el Pleno de esta Sala Superior estima que el Magistrado Instructor de la Sala de origen debió percatarse de que dicha persona tiene la calidad de tercero interesado y por ende, conforme a lo previsto por el artículo 208, fracción VII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 209, fracción I y antepenúltimo párrafo del mismo Ordenamiento legal, haber requerido al actor a efecto de que precisara el domicilio del tercero interesado y exhibiera en juicio un tanto más de su escrito de demanda y los documentos anexos a la misma, a efecto de emplazar a juicio a dicha persona, con el apercibimiento de ley correspondiente, lo cual no ocurrió en la especie.

Cierto, lo anterior es así, toda vez que de la lectura integral al auto de fecha 13 de agosto de 2001, por el que se admitió a trámite la demanda (fojas 25 de autos), no se advierte que se haya formulado el requerimiento citado, al precisar dicho acuerdo lo siguiente:

"México Distrito Federal, trece de agosto de dos mil uno.- A sus autos el escrito recibido en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas el 2 del mes y año en curso, a través del cual GEORGINA IBAÑEZ

MORALES, en representación legal de UNIVERSIDAD AUTONOMA (sic) METROPOLITANA, personalidad reconocida por la autoridad, demanda la nulidad de la resolución contenida en el oficio de 17 de abril de 2001, emitido por la Subdirectora Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio Exterior del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del cual resuelve que el recurso de revisión es improcedente.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 197, 198, 207, 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 11, fracciones I y II, XIII (sic), 28, 30 y 36, fracciones I y IV de la Ley Orgánica de este Tribunal, **SE ADMITE LA DEMANDA** y se tienen por ofrecidas y exhibidas las pruebas que se citan.- Córrase traslado a la Subdirectora Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como al Titular de dicha dependencia, para que la contesten dentro del término legal.- Téngase como domicilio de la parte actora el ubicado en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 4º piso, Colonia Exhacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F.- En relación con las personas que autoriza se acordará lo conducente una vez que acrediten ante esta Sala encontrarse en el legal ejercicio de la profesión de Licenciados en Derecho.- NOTIFÍQUESE.- (...)"

La transcripción anterior pone de manifiesto el vicio substancial del procedimiento en que se incurrió en el presente juicio, al haberse omitido requerir al actor para que precisara el domicilio del tercero interesado y exhibiera un tanto más de su escrito de demanda y anexos, a fin de emplazar legalmente al C. Fernando Toledo Toledo, en virtud de que, tal como se precisó en párrafos precedentes, éste sí tiene un derecho incompatible con el actor, por lo que deberán remitirse los autos a la Octava Sala Regional Metropolitana, para el efecto de que reabra la instrucción y requiera a la actora siguiendo los lineamientos vertidos en el presente fallo.

Una vez que quede cerrada la instrucción del presente juicio, la Sala Regional en comento, deberá remitir los autos del mismo a esta Sala Superior, para que proceda a emitir la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda.

Es aplicable al caso en forma analógica, la tesis Jurisprudencial II-J-70, sustentada por el Pleno de este Tribunal, consultable en la Revista del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, Segunda Época, Año III, números 13 a 15, Tomo I, Julio-Diciembre de 1980, página 135, misma que si bien es cierto invoca lo dispuesto por el artículo 173, fracción III del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1980, que preveía que era parte en el juicio de nulidad el tercero que tuviera un derecho incompatible con el del actor, es el caso que ello se encuentra actualmente previsto en el artículo 198, fracción IV del Código de la materia.

(...)

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 236 y 239-A, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I. La causal de improcedencia y sobreseimiento de la autoridad resultó infundada, en consecuencia:

II. No se sobresee el presente juicio.

III. Existe una violación substancial en el procedimiento, por tanto;

IV. Devuélvanse los autos del presente juicio a la Octava Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, para los efectos precisados en el presente fallo.

V. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de septiembre de 2002, por mayoría de 6 votos a favor de los Magistrados: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Silvia Eugenia Díaz Vega, Guillermo

Domínguez Belloc y Alejandro Sánchez Hernández; y 2 votos en contra de los Magistrados María Guadalupe Aguirre Soria y Jorge Alberto García Cáceres, reservándose su derecho para formular voto particular; estando ausentes los Magistrados María del Consuelo Villalobos Ortíz y Luis Carballo Balvanera. Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 24 de septiembre de 2002, y con fundamento en lo previsto en los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández; Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Graciela Buenrostro Peña, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL JUICIO No. 11550/01-17-08-8/379/02-PL-07-04

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se manifiesta en los siguientes términos:

VOTO PARTICULAR

En el considerando tercero de la presente resolución, la mayoría de los miembros integrantes del Pleno de la Sala Superior estimaron infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, en términos de la fracción II del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, en que alegó inobservancia del artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial e indebida interpretación de los artículos 1°, segundo y tercer párrafos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracciones I y III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia

Fiscal y Administrativa, ya que consideró que el acto impugnado se refiere a una materia de la cual no corresponde conocer al Tribunal.

La mayoría razonó que la competencia de este Tribunal no se sustenta en lo previsto en las fracciones I y III del artículo 11 de su Ley Orgánica, sino en la fracción XV; además de que el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si bien establece el recurso de revisión como medio de impugnación, dicho medio de defensa no es de agotamiento obligatorio. También, se desestimaron los argumentos planteados en cuanto a la inaplicabilidad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, porque consideró que es un tema sobre el que versará el estudio de fondo del negocio.

Disiento de la conclusión arriba resumida, por las razones que en los párrafos siguientes me permito exponer.

Estimo que la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada debió ser considerada fundada, ya que la resolución impugnada no es de los actos de que pueda conocer este Tribunal, según se advierte de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, numeral que es del siguiente contenido:

> "**ARTÍCULO 11.-** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
>
> "I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
>
> "II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

"VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

"IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados.

"X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

"XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

"XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

"XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

> "El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.
>
> "También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
>
> "No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa."

Del precepto legal transcrito, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene conferida la facultad para conocer del juicio contencioso administrativo que se promueva contra actos o resoluciones definitivas que traten de las materias que el propio precepto legal relaciona, entre los cuales no se encuentran los relativos a la Ley de la Propiedad Industrial, que resulta ser la Ley en que la autoridad demandada se apoyó para la emisión de la resolución impugnada.

Por otra parte, no se puede considerar que en el caso se surta el supuesto de la fracción XV del artículo 11, que comprende a "las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal", ya que si bien es cierto, el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la opción de que los particulares afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, de acudir al recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, entendiendo por "vía jurisdiccional" referida a este Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, también lo es que en el presente caso no resulta aplicable en forma supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, aunque la mayoría considera que la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es una cuestión de análisis de fondo del asunto, implícitamente está aceptando su aplicación, ya que nos remite a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia, ha dado al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para concluir que es procedente el presente juicio contencioso administrativo.

En el caso resulta que, si bien es cierto que la resolución impugnada fue emitida por una autoridad administrativa, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley que lo rige, también es cierto que dicha resolución no culminó un procedimiento administrativo en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como se observa de su contenido, sino que se realizó en términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Se hace notar que también la autoridad en la contestación de demanda manifiesta que no resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial.

Para demostrar lo anterior, resulta necesario analizar por qué la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no resulta ser de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial.

Respecto a la supletoriedad de las normas, el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo VI, 1a. edición, página 57, la define de la siguiente forma:

> "**Ley supletoria.-** I. Dícese de la aplicación supletoria o complementaria de una ley respecto de otra. La supletoriedad puede ser la categoría asignada a

una ley o respecto de usos, costumbres y principios generales del derecho. No procede, sin embargo, la costumbre derogatoria (a. 10 Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal), ya que la supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con principios generales contenidos en otras leyes. Este segundo aspecto es común entre las leyes especializadas y los códigos, ya sea que dichas leyes hayan sido parte integrante de un código como el de Comercio o que reglamenten un aspecto del código, como sucede con la LRPC (DO 38 de diciembre de 1972) respecto de la copropiedad regulada por el C.C."

Sobre el particular, el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito han emitido las jurisprudencias números I.3o.A. J/19 y I.4o.C. J/58, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos V y 76, de los meses de enero de 1997 y abril de 1994, páginas 374 y 33, respectivamente, cuyos textos son los siguientes:

"**SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.-** Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO."

"**SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO SE APLICA.-** La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación la establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial, que resulta ser la ley especial aplicable al caso, en su artículo 187, dispone:

"**ARTÍCULO 187.-** Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítu-

lo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

Como puede observarse, este numeral presupone que el ordenamiento jurídico de que se trata es susceptible de contener lagunas, específicamente, en lo que se refiere al procedimiento que se debe seguir para sustanciar y resolver las instancias que regula la propia Ley, por lo que prevé la forma de superar esta situación, ya que señala al respecto que se observarán supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no se opongan a la Ley.

Bajo estas premisas, resulta que el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial resulta ser claro al determinar que la norma aplicable supletoriamente lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles, con lo cual se cumple con el primer elemento o requisito que la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, transcrita anteriormente, ha señalado para que opere la supletoriedad de normas, por lo que en este caso, no se puede suponer que la norma supletoria sea la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque la Ley al ser suplida dispone expresamente otro estatuto supletorio.

Por otra parte, tampoco podría considerarse que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta ser supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, por lo previsto en su artículo 2° que señala:

"**Artículo 2.- Esta Ley**, salvo por lo que toca al título tercero A, **se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas**. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente."

Del precepto legal transcrito se desprende, que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta ser supletoria a las diversas leyes administrativas.

Ahora bien, aun cuando la Ley de la Propiedad Industrial es una ley administrativa, no podría considerarse que por este solo hecho le sea aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque la Ley citada en primer término es una ley especial, que desde su entrada en vigor, con el nombre de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991) y en sus siguientes reformas hasta la fecha, ha contemplado en su artículo 187 la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que en este caso, una ley general como es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que entró en vigor con posterioridad, esto es, el 1° de junio de 1995 (Diario Oficial de la Federación de 4 de agosto de 1994) no puede, sin disposición expresa, derogar a la ley especial anterior.

Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, página 2072, cuyo texto es el siguiente:

> "**LEYES ESPECIALES EN OPOSICIONES A LEYES GENERALES.-** Una ley especial no puede ser derogada por una de carácter general, cuando no exista la disposición expresa; ya que, por principio de derecho, la oposición aparente que puede existir entre una ley general y la especial, debe interpretarse en el sentido de que la especial subsiste como excepción a la de carácter general.
>
> "Amparo administrativo directo 5332/34. Patrón Solís Federico. 2 de agosto de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."

También es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 445, cuyo texto es el siguiente:

"**LEYES ESPECIALES Y LEYES GENERALES. REGLAS PARA SU DEROGACIÓN.-** De acuerdo con el artículo 9o, del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en Materia Federal, la reforma o derogación de una disposición normativa puede producirse en dos formas: expresamente, cuando una ley posterior claramente señala, declara o especifica que la ley anterior ha perdido vigencia; o tácitamente, cuando se produce una incompatibilidad o contradicción entre sus preceptos. Siendo esta la regla general, rige no obstante un principio distinto cuando la norma anterior es especial y la posterior es general, **según reza un aforismo tradicional en derecho (lex posteriori, non derogat priori special) recogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en repetidas ocasiones, conforme al cual una norma general posterior no deroga a una especial anterior, aunque en apariencia exista contradicción entre sus textos, a menos que el legislador manifieste expresamente su voluntad de dejar sin efectos la excepción para asimilarla a una regla general**. Si la norma posterior es especial, la derogación en cambio puede ser tácita o expresa.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 957/85. Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos."

Considero que en el caso se actualizan los supuestos de improcedencia y sobreseimiento invocados por la autoridad, con apoyo en los artículos 202, fracción II y 203, fracción II del Código Fiscal de la Federación, por lo que la mayoría debió sobreseer el juicio contencioso administrativo.

Por otra parte, en el considerando cuarto del fallo, la mayoría determinó que existió un vicio substancial del procedimiento porque el Magistrado Instructor no

emplazó al C. Fernando Toledo Toledo, en su calidad de tercero interesado, ordenando devolver el expediente a la Sala Regional de origen.

Mi desacuerdo con la mayoría es porque en el caso estimo que no es procedente devolver los autos a la Sala Regional de origen, pues no debe emplazarse a juicio al C. Fernando Toledo Toledo, toda vez que el mismo no tiene la calidad de tercero interesado, pues la litis en el asunto sólo consiste en determinar si la declaratoria de improcedencia del recurso de revisión fue o no correcta, y no si el tercero cometió o no la infracción que le imputa la hoy actora; motivo por el que considero se retrazará innecesariamente el procedimiento.

MAG. JORGE A. GARCÍA CÁCERES

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA C. LA MAGISTRADA MARÍA GUADALUPE AGUIRRE SORIA EN EL JUICIO No. 11550/01-17-08-8/379/02-PL-07-04

Disiento del criterio mayoritario que determina que el C. Fernando Toledo Toledo tiene el carácter de tercero interesado en el juicio, por las razones que a continuación se expresan:

En primer término, debe tenerse en cuenta que la resolución impugnada en juicio la constituye el oficio con número de folio 006349, de fecha 17 de abril de 2001, emitido por la Subdirectora Divisional de Infracciones Administrativas en materia de Comercio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del cual declara improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del diverso oficio 002071, de 13 de febrero de 2001, en el que se desecha de plano la solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio, solicitada por Universidad Autónoma Metropolitana, en contra de Fernando Toledo Toledo.

Esto es, la resolución impugnada resolvió un medio de defensa administrativo, por lo que sería de utilidad tener presente el concepto que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su obra denominada "Diccionario Jurídico Mexicano" (Decimotercera edición, Editorial Porrúa, México, 1999, páginas 2709 y 2710), proporciona respecto de la acepción recurso administrativo:

> "Es la denominación que la ley da a los procedimientos de impugnación de los actos administrativos, **a fin de que los administrados defiendan sus derechos o intereses jurídicos ante la administración**, generadora de los actos impugnados. **Siempre deben estar previstos en la ley**, no pueden en consecuencia tener ese carácter las secuelas o prácticas de instancias que se presenten y tramiten ante las autoridades administrativas si aquélla no las autoriza como medios de impugnación.
>
> "De los diversos conceptos de recurso administrativo que la doctrina registra, merece cita especial el del maestro Gabino Fraga, que dice: **es 'un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad y la inoportunidad del mismo**'."

En la citada obra jurídica se precisa el papel que el recurso administrativo cumple, al señalar:

> "En la experiencia mexicana, el recurso administrativo juega importantísimos cometidos. Por la naturaleza misma de ciertas resoluciones o actos administrativos, no siempre es posible satisfacer la audiencia previa para los particulares y entonces el recurso sirve a este propósito, **antes de que los intereses legales discutidos salgan de la esfera de la administración**. Su natural condición de medio de impugnación de los actos administrativos lo convierte en

> defensor de los intereses y derechos de los particulares frente a la administración, que con todo y las severas críticas que recibe de la doctrina y de litigantes, su uso como tal es generalizado en el medio social y administrativo federal y local (...). Estos aspectos últimos los hemos subrayado con otras palabras '**el recurso administrativo es el educador jurídico de la buena marcha de la Administración, el tutelador legal de los derechos e intereses legítimos de los administrados, de él mana la certeza y la seguridad en las relaciones jurídicas de la Administración y los particulares**'. (Nava Negrete, pp. 98-99)"

En la obra jurídica titulada: "Biblioteca Diccionarios Jurídicos Temáticos", volumen 3, Derecho Administrativo, autor: Rafael I. Martínez Morales, Editorial Harla, 1997, página 208, se define al recurso administrativo como:

> "(...) la posibilidad que tiene la Administración Pública de reconocer, corrigiéndolo, un error de su actuación, y lo hará en virtud de una petición del particular en ese sentido; petición que tiene su origen primario en el art. 8° de nuestro texto Constitucional.
>
> "**La Administración Pública en esta figura no actúa como parte dentro de un proceso, sino que únicamente va a intervenir para revisar (modificándolo, anulándolo o confirmando) algún acto que el particular ha considerado ilegal o inoportuno.**
>
> "**Puede definirse al recurso administrativo como el medio de defensa establecido en ley, a favor de los gobernados para que la Administración Pública revise un acto administrativo que ellos consideran ilegal, quedando aquélla obligada a anularlo, modificarlo o confirmarlo**."

En la misma obra se cita al autor Andrés Serra Rojas, a fin de señalar que los elementos del recurso administrativo son los siguientes:

"1. *Una resolución administrativa* (...)

"2. *El particular que interpone el recurso* que es a quien le interesa que la autoridad revise su actuación;

"3. *Debe afectar al particular* (...)

"4. ***Debe estar establecido en ley*** (...)

"5. *La autoridad ante la que se interpone será siempre* de carácter administrativo, **pues ya quedó señalado que a los órganos del Poder Ejecutivo se les está brindando la oportunidad de corregir un posible e involuntario error de apreciación al emitir un acto administrativo**;

"6. *Plazo para interponerlo* (...)

"7. *Requisitos de forma* (...)

"8. *Procedimiento adecuado* (...)

"9. *Obligación de la autoridad de dictar resolución* (...)"

(El énfasis es de esta Juzgadora)

De las acepciones anteriores, se desprende que todo acto de autoridad: "proviene de la potestad que tiene la autoridad administrativa en la ley. Esto significa que el acto administrativo está sometido al principio de legalidad, conforme al cual la autoridad administrativa sólo puede realizar los actos que la ley le autorice", página 76 del citado "Diccionario Jurídico Mexicano".

En nuestro país, el fundamento de la garantía de legalidad, en principio, se encuentra en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo establece:

"**Artículo 16.-** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"(...)"

En tales consideraciones, podemos concluir que el recurso administrativo se interpone por **el particular al que afecte un acto o resolución administrativa**, ante la propia autoridad que lo emitió, a fin de que **ésta revise su propia actuación** y proceda a confirmarla, modificarla o revocarla.

De donde se sigue que los particulares no pueden obligar a la autoridad administrativa a emitir resolución en determinado sentido, ya que sólo les corresponde interponer el recurso administrativo establecido en ley, cumpliendo con los requisitos de procedencia y procedibilidad que al efecto se establezcan; por tanto, la declaración de nulidad o validez de la resolución que declara improcedente el recurso de revisión intentado en contra de una resolución administrativa, únicamente constriñe a la autoridad resolutora y al recurrente, sin que ningún argumento pueda darse, en substitución de la autoridad, por algún tercero; toda vez que la relación jurídica que surge de un medio de defensa declarado improcedente, esto es, que no resuelve la cuestión planteada por el recurrente, sólo involucra a la persona jurídica que lo interpone, física o moral, y a la autoridad competente para resolverlo, sin que ésta se extienda a terceras personas.

Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 198, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, que a la letra establece:

"**Artículo 198.-** Son partes en el juicio contencioso administrativo:

"(...)

"IV.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

"(...)"

De la transcripción que antecede se desprende que tiene carácter de tercero la persona que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

Se considera relevante precisar el concepto doctrinario del término jurídico "tercero", a fin de poder deducir si en el caso el C. Fernando Toledo Toledo, encuadra en dicho concepto.

El autor Cipriano Gómez Lara, en su obra intitulada "Teoría General del Proceso", página 233, manifiesta: "Frente a esos terceros ajenos a la relación substancial existen otros terceros que no son ajenos a dicha relación, es decir, que **su esfera jurídica puede verse afectada por la resolución que en el proceso se dicte**. Hay pues ocasiones en que un tercero es llamado a juicio y la relación substancial yacente, es decir, la relación litigiosa, le podrá afectar".

En la obra denominada "Diccionario Jurídico Mexicano" del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Decimotercera edición, Editorial Porrúa, México, 1999, página 3066), se define al tercero interesado como: "**la persona que sin ser parte en un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes** si es llamada a ello, **o cuando tenga conocimiento de que cualquiera sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente pueda causarle algún perjuicio** (...) El tercero interesado es, en resumen, **un ser litigante que se encuentra obligado en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad** (...)"

De las transcripciones que anteceden se desprende que por "tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante" podemos entender aque-

lla persona que comparece a juicio a fin de deducir un derecho propio, o bien, porque pueda ser afectada en su esfera jurídica con la resolución que se dicte en el mismo.

Como ya quedó precisado en el presente voto particular, a través de la resolución impugnada en juicio, se declara improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del oficio 002071, de 13 de febrero de 2001.

En tales consideraciones, resulta que el C. Fernando Toledo Toledo no es un tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión de la demandante, toda vez que en la resolución impugnada en juicio se determinó que: "no es procedente el recurso de revisión interpuesto por el promovente"; por tanto, la relación substancial (conflicto de intereses) existe entre la actora, Universidad Autónoma Metropolitana, y la autoridad demandada, de tal manera que en el caso, sin conceder, que pudiera declararse la nulidad de la resolución impugnada, y se ordenara admitir el recurso, el C. Fernando Toledo Toledo no podría promover ningún medio de defensa en contra de tal determinación, por no tener derecho que deducir en contra de la sentencia que dilucide la legalidad del acto de autoridad.

Por otra parte, tampoco podría considerarse que Fernando Toledo Toledo deba comparecer a juicio para deducir algún derecho propio, ni mucho menos para coadyuvar con alguna de las partes; dado que la litis en el presente caso se constriñe a determinar la legalidad de la resolución con número de folio 006349, de fecha 17 de abril de 2001, que declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por la actora, razón por la cual no puede existir un derecho propio del mencionado Fernando Toledo Toledo, con relación a la improcedencia de un recurso administrativo que no fue interpuesto por él y, en tales consideraciones, tampoco podría acudir a juicio a coadyuvar con la autoridad demandada.

MAG. MA. GUADALUPE AGUIRRE SORIA

PRIMERA SECCIÓN

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN.- SUPUESTO EN EL QUE NO SE SURTE.- El artículo 124, fracción II del Código Fiscal de la Federación señala que es improcedente el recurso de revocación cuando se pretenda controvertir actos que constituyan resoluciones de un recurso previo o que se refieran al cumplimiento de éstas o de sentencias. Pero la interpretación del numeral en comento no debe hacerse en un sentido literal, ya que tal proceder implicaría que sería improcedente la interposición de un recurso de revocación en contra de todo acto que tuviere como antecedente la resolución de un recurso, lo que haría que se soslayara el sentido y alcance de la resolución del recurso antecedente, ya que si la resolución aludida permitió a la autoridad pronunciarse con plenitud de facultades sobre la cuestión planteada, como sucede cuando el motivo de la revocación es un vicio procedimental o la falta de valoración de probanzas, resulta lógico que el fondo de la controversia no ha sido aún analizado en vía administrativa, razón por la que el acto que lo resuelva será un acto nuevo, atento a que no ha sido materia de impugnación previa, y por ende, sería procedente el recurso de revocación en su contra. De esta forma, podemos concluir que el supuesto de improcedencia del recurso de revocación que nos ocupa, descrito en la fracción II del artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, sólo se surte cuando las cuestiones que se plantean en el nuevo recurso administrativo ya fueron objeto de una resolución específica y definitiva recaída a un recurso de revocación o juicio anterior, pues resulta claro que lo que se pretende evitar con la causal de improcedencia en comento es que la misma cuestión controvertida pueda ser materia de impugnación y resolución en más de una ocasión, lo que implicaría la sucesión inagotable de recursos o juicios sobre la misma cuestión, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes. (2)

Juicio No. 1437/99-04-01-4/174/01-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2001, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión privada de 26 de febrero de 2002)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

PLAZO PARA CUMPLIR LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO.- EL INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE CONFIGURA COMO CAUSAL DE NULIDAD.- El Código Fiscal de la Federación en su artículo 133, último párrafo, establece: "Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que dicha resolución se encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos 46-A y 67 de este Código". De la anterior transcripción, se tiene que si bien el legislador estableció un plazo de cuatro meses para cumplir una resolución recaída a un recurso de revocación, incluso habiendo transcurrido el término a que se refieren los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que el cumplimiento efectuado fuera de dicho plazo de cuatro meses, no es causal de nulidad del acto cuestionado, salvo que ya hubiera transcurrido también el plazo de caducidad y así se hubiera hecho valer como concepto de ilegalidad. Esto obedece a que en la disposición de que se trata, no se contempla que la autoridad ya no pueda cumplimentarla fuera de ese término, ni se estatuye sanción para el caso de que se sobrepase el plazo establecido. En consecuencia, si la autoridad administrativa cumple lo dispuesto por la resolución recaída a un recurso, fuera del plazo señalado por la Ley siempre que el particular impugne el acto administrativo, éste no podrá ser anulado por esta razón, al no configurarse ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. (3)

Juicio No. 1437/99-04-01-4/174/01-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2001, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

De esta forma, y de acuerdo a lo expuesto con anterioridad y de la valoración de autos, esta Sección llega a la convicción de que el argumento del actor es **fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada,** atento a lo siguiente:

En principio, el artículo 124, fracción II del Código Fiscal de la Federación, a la letra establece:

> "Art. 124.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos:
>
> "(...)
>
> "II.- Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de éstas o de sentencias.
>
> "(...)"

De la transcripción anterior se desprende que el artículo en comento establece como causal de improcedencia del recurso de revocación, la impugnación de resoluciones dictadas en un recurso administrativo, en cumplimiento de éstas o de sentencias, esto es, se pretende evitar que se analice un acto en la misma vía de nueva cuenta cuando ya fue estudiado previamente y existe pronunciamiento expreso al respecto.

Lo anterior resulta apegado a derecho si se considera que de permitirse interponer un recurso de revocación en contra de una resolución de otro recurso previo, estaríamos en presencia de una sucesión interminable de impugnaciones en vía administrativa que impediría resolver la cuestión efectivamente planteada, lo que afectaría evidentemente la seguridad jurídica no sólo de los gobernados sino también de la Administración Pública, ante la falta de resolución de un conflicto real y concreto.

Por lo anterior, encontramos como característica, entre otras, de la resolución recurrible, que ésta tenga la naturaleza de ser nueva, debiéndose entender por tal, en palabras del Maestro EMILIO MARGAIN MANAUTOU, (Introducción al estudio del Derecho Tributario Mexicano; Editorial Porrúa, S. A., 9ª edición, 1999, página 172), que:

> "(...) lo que ella resuelve aluda a hechos que no han sido consentidos, expresa o tácitamente, **o que no han sido materia del recurso administrativo, o que no han sido materia de juicio, o que no han sido materia de un recurso especial**."
>
> (El énfasis es nuestro)

Así las cosas, se surte el supuesto de improcedencia del recurso de revocación previsto en la fracción II del artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, cuando se pretende controvertir mediante el citado medio de defensa un acto que constituya la resolución de un recurso previo o que se refieran al cumplimiento de éstas o de sentencias.

Ahora bien, es en este punto donde debe precisarse que la interpretación del numeral que nos ocupa no debe hacerse en un sentido literal, ya que tal proceder implicaría considerar que sería improcedente la interposición de un recurso de revocación en contra de todo acto que tuviere como antecedente la resolución de un recurso de revocación previo, como acontece en la especie, ya que actuar en tal sentido haría que se soslayara el sentido y alcance de la resolución del recurso primario y la forma en que obligó a la autoridad a actuar al resolver el citado recurso, ya que si la resolución de éste permitió a la autoridad pronunciarse con plenitud de facultades sobre la cuestión planteada, como sucede cuando el motivo de la revocación es un vicio procedimental o la falta de valoración de probanzas, resulta lógico que el fondo de la controversia no ha sido aún resuelto en vía administrativa, razón por la que el acto que lo resuelva será, en los términos descritos, un acto nuevo, atento a que no ha sido materia de impugnación previa, y por ende, sería procedente el recurso de revocación de acuerdo a lo señalado con anterioridad.

De esta forma, podemos concluir que el supuesto de improcedencia del recurso de revocación que nos ocupa, descrito en la fracción II del artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, sólo se surte cuando las cuestiones que se plantean en el nuevo recurso administrativo ya fueron objeto de una resolución específica y definitiva recaída a un recurso de revocación o juicio anterior, pues resulta claro que lo que se pretende evitar con la causal de improcedencia en comento, es que la misma cuestión controvertida pudiera ser materia de impugnación y resolución en más de una ocasión, lo que implicaría una sucesión inagotable de recursos o juicios sobre la misma cuestión, significando claramente inseguridad jurídica total para las partes.

Por lo anterior, si en el presente juicio se ha acreditado en autos que por oficio 102-A-II-II-B-2347 de 30 de abril de 1993, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes determinó al hoy actor diverso crédito fiscal en cantidad total de $15’370,659.00 por concepto de impuesto sobre la renta, multas y recargos, y que dicha liquidación fue combatida mediante la interposición de un recurso de revocación ante la Administración Local Jurídica de Ingresos de Aguascalientes, que

por oficio 102-A-30-III-V-3738 de 12 de noviembre de 1993, fue resuelto por la Administración Local Jurídica de Ingresos de Aguascalientes en el sentido de confirmar el crédito combatido, pero que la hoy actora interpuso juicio de nulidad en contra del acto en comento, y que fue resuelto por sentencia de 26 de septiembre de 1996, emitida por esta Sala Superior, en la que se declaró la nulidad de la citada resolución contenida en el oficio 102-A-30-III-V-3738, de 12 de noviembre de 1993, **para efectos de que la autoridad demandada emitiera una nueva tomando en consideración las pruebas ofrecidas por el actor, mismas que habían sido solicitadas por el propio interesado a la entonces Administración Fiscal Federal de Aguascalientes,** y que en cumplimiento a la sentencia anterior la Administración Local Jurídica de Ingresos de Aguascalientes emitió el oficio 325-A-IV-7-V-2082 de 29 de mayo de 1997, en el que la autoridad analizó las probanzas ofrecidas y se pronunció sobre dos conceptos de anulación hechos valer por la entonces recurrente, y determinó lo siguiente:

a) Respecto al primer agravio, que fue enderezado en contra de la fundamentación y motivación de la orden de visita que dio origen al procedimiento fiscalizador del que derivó la liquidación recurrida, se considera que los argumentos expuestos son infundados.

b) En cambio, en el segundo agravio el entonces recurrente controvirtió la circunstanciación de la identificación de los visitadores actuantes de la autoridad, **y dicho argumento fue considerado fundado y suficiente para dejar sin efectos la resolución liquidatoria recurrida, a saber, la contenida en el oficio 102-A-II-II-B-2347 de 30 de abril de 1993,** "(...) ***para el efecto de que reponga el procedimiento a partir de que se incurrió en el vicio de la indebida identificación de los visitadores de referencia*** (...)".

Por tanto, lo que fue materia del recurso de revocación primario de la actora fue la impugnación: i) de la orden de visita en los términos en que se realizó, y ii) de la circunstanciación de la identificación de los visitadores de la autoridad. En este orden de ideas, la resolución en comento, la 325-A-IV-7-V-2082 de 29 de mayo de 1997, **no**

sería impugnable mediante recurso de revocación porque precisamente implica la resolución de uno, además de que las materias sobre las que versó tampoco serían controvertibles en la misma vía, precisamente por haber sido ya decididas en una resolución de un recurso, actualizándose perfectamente la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 124 del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, la autoridad demandada en su oficio 324-SAT-R4-L33-I-11311 de 17 de diciembre de 1997, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal número 33 de Aguascalientes, comunicó al enjuiciante la reposición de la visita domiciliaria practicada al amparo de la orden originariamente emitida, **actuando claramente en cumplimiento a la resolución del recurso de revocación primario,** ya que en ésta, una vez que se dejó sin efectos la liquidación controvertida, se ordenó *reponer el procedimiento de fiscalización a partir del vicio en que se incurrió,* esto es, la visita domiciliaria de la que derivó la liquidación controvertida debía reponerse a partir del momento en que incurrió en la ilegalidad señalada, **sin que se hubiere hecho pronunciamiento alguno sobre otro aspecto relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales revisadas al actor en el invocado procedimiento de fiscalización.** En este orden de ideas, el oficio antes mencionado que comunica la reposición del procedimiento fue notificado al hoy actor al levantarse el acta parcial de inicio de 15 de enero de 1998, que implica precisamente el reinicio del procedimiento a partir de la identificación de los visitadores actuantes de la autoridad.

En mérito de lo anterior, si una vez concluida la visita domiciliaria practicada a la demandante, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, por oficio 324-SAT-R4-L33-III-A-1-12121 de 12 de agosto de 1998, determinó un crédito fiscal a la enjuiciante en cantidad total de $113’671,333.10, por concepto de impuesto sobre la renta, recargos y multas de ley, correspondiente al ejercicio fiscal de 1991, es claro que dicha resolución, **que fue la recurrida mediante la instancia cuyo desechamiento es la resolución impugnada en la especie,** es un acto nuevo atento a que la autoridad la emitió al agotar un procedimiento de visita domiciliaria diferente al que fue dejado sin efecto, y sin que se hubiere consignado en la motiva-

ción de la liquidación recurrida aspecto alguno que hubiere sido materia del recurso primario, por lo que procede en su contra el recurso de revocación que promovió la enjuiciante, ya que en la resolución del recurso primario se analizó exclusivamente la legalidad de la orden de visita y la circunstanciación de la identificación de los visitadores, sin hacer mayor pronunciamiento sobre la legalidad del nuevo procedimiento de fiscalización o sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la actora revisadas.

De esta forma, resulta ilegal en los términos señalados que en la resolución impugnada en la especie, a saber, la contenida en el oficio 325-SAT-R4-L33-V-1438, de 30 de marzo de 1999, emitida por el Administrador Local Jurídico de Ingresos de Aguascalientes, se concluya desechar el recurso de revocación interpuesto, bajo la premisa de que "(...) *dicho recurso se hizo valer en contra de una resolución que se dicta en cumplimiento de la resolución de fecha 29 de mayo de 1997, emitida por esta Administración, en el recurso de revocación número 07/97* (...)" ya que basta la lectura de la resolución contenida en el oficio 325-A-IV-7-V-2082 del 29 de mayo de 1997, **que fue la recaída en el recurso de revocación primario,** para concluir que en ésta claramente se señala expresamente que al resultar fundado el agravio relativo a indebida circunstanciación de los visitadores, "(...) *lo procedente es dejar sin efectos la resolución impugnada*", (a saber, la contenida en el oficio 102-A-II-II-B-2347 de 30 de abril de 1993) "(...) *para el efecto de que reponga el procedimiento a partir de que se incurrió en el vicio de la indebida identificación de los visitadores de referencia* (...)", por ende, resulta claro que la manera de cumplimentar dicha resolución del recurso era mediante la reposición de procedimiento, lo que se llevó a cabo al emitirse el oficio 324-SAT-R4-L33-I-11311 de 17 de diciembre de 1997, por la Administración Local de Auditoría Fiscal número 33 de Aguascalientes, en el que se comunicó al enjuiciante la reposición de la visita domiciliaria practicada al amparo de la orden originariamente emitida, y que fue notificado al hoy actor al levantarse el acta parcial de inicio de 15 de enero de 1998, a folios IMD0508/91001, en donde consta la manera en que se llevó a cabo la reposición del procedimiento de fiscalización en los términos ordenados a partir de la identificación de los visitadores actuantes de la autoridad.

De acuerdo a lo expuesto, la autoridad demandada en la resolución impugnada interpreta indebidamente la fracción II del artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, ya que soslaya la manera en que resolvió el primer recurso de revocación de la hoy actora, atento a que solamente se ordenó reponer un procedimiento de fiscalización, dejándose en libertad a la autoridad para concluir lo que estimara pertinente respecto al cumplimiento por la actora de las obligaciones fiscales revisadas, lo que no necesariamente conlleva a una determinación de contribuciones omitidas, y por ende, los pronunciamientos al respecto que hizo la demandada en la liquidación cuestionada, al no haber sido materia de recurso de revocación previo, sí son impugnables en la vía administrativa, contrariamente a lo expuesto en la resolución impugnada en la especie.

Por lo anterior, el concepto de anulación hecho valer por la actora resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, atento a que la autoridad interpreta indebidamente el artículo 124, fracción II del Código Fiscal de la Federación y, por ende, se surte la causal de anulación de la resolución impugnada prevista en la fracción IV del artículo 238 del citado Código Tributario Federal, ya que la demandada soslayó el sentido y alcance de la resolución del recurso de revocación primario y la forma en que ésta obligó a la autoridad a actuar al resolver el citado recurso, ya que si la resolución de éste permitió a la autoridad pronunciarse con plenitud de facultades sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la actora, como sucede en la especie, ya que no hubo análisis al respecto por la resolutora del recurso, resulta lógico que el fondo de la controversia no ha sido aún resuelto en vía administrativa, razón por la que la liquidación contenida en el oficio 324-SAT-R4-L33-II-A-12121 de 12 de agosto de 1998, constituye un acto nuevo, atento a que no ha sido materia de impugnación previa, y por ende, sería procedente el recurso de revocación de acuerdo a lo señalado con anterioridad, máxime que su motivación tampoco ha sido objeto de análisis en instancia previa.

No son óbice para concluir lo anterior las argumentaciones expuestas por la autoridad contestante, ya que la demandada parte de la premisa de que el hoy actor interpuso su recurso de revocación en contra de una resolución dictada en cumpli-

miento a una diversa derivada de un recurso de revocación previo, lo que según se ha expuesto resulta incorrecto, ya que la manera de cumplimentar la resolución al recurso primario era mediante la reposición de un procedimiento de fiscalización, **que no necesariamente debe concluir mediante una liquidación,** por lo que si la autoridad demandada emitió la determinación del crédito fiscal que nos ocupa, se realizó en ejercicio de sus facultades discrecionales que no fueron limitadas en modo alguno por la resolución del recurso de revocación primario, tal y como se ha planteado con anterioridad, y por ende, dicha liquidación como acto nuevo resulta impugnable mediante recurso de revocación.

No se soslaya por esta Sección el argumento de la contestante relativo a que el procedimiento está formado por una serie de actos continuos que generalmente, culmina con la emisión de una resolución definitiva, y por ende, la liquidación contenida en el oficio 324-SAT-R4-L33-II-A-12121 de 12 de agosto de 1998, que según la demandada en sus fojas 1 y 2 señala que se emite a efecto de dar cumplimiento a la resolución 325-A-IV-7-V-2082 de 29 de mayo de 1997, forma parte del procedimiento repuesto en cumplimiento de resolución recaída a recurso de revocación, ya que, como se apuntó y lo reconoce la propia contestante, la emisión de una liquidación no necesariamente es el resultado de un procedimiento de fiscalización, y por ende, si en la especie la resolución contenida en el oficio 324-SAT-R4-L33-II-A-12121 de 12 de agosto de 1998, fue emitida por la autoridad, es claro que tal proceder se realizó en ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad que no fueron afectadas por la resolución del recurso primario de la actora, contenido en el oficio 325-A-IV-7-V-2082 de 29 de mayo de 1997, ya que en éste se ordenó la reposición de un procedimiento de fiscalización cuyo resultado implica un acto novedoso que puede ser impugnado en la vía administrativa, y que si bien, es resultado de un procedimiento administrativo de autoridad repuesto, su motivación no ha sido materia de medio de impugnación alguno, por lo que, se insiste, resulta novedoso y por ende, impugnable mediante recurso administrativo.

Finalmente, la contestante señala que la resolución liquidatoria, contenida en el oficio 324-SAT-R4-L33-II-A-12121 de 12 de agosto de 1998, señala en sus fojas 1 y

2 que se emite en cumplimiento a la resolución recaída al recurso primario contenida en el oficio 325-A-IV-7-V-2082 de 29 de mayo de 1997, pero esta Sección, de la lectura de la parte conducente del oficio 324-SAT-R4-L33-II-A-12121 en comento, que coincide con las fojas 23 y 24 de autos, llega a la conclusión de que el pronunciamiento relativo de la demandada consiste en una imprecisión imputable a la autoridad, ya que insiste en su equivocada apreciación de los hechos, al considerar que la liquidación que nos ocupa implica el cumplimiento a la resolución del recurso, lo que resulta incorrecto, ya que, como se explicó anteriormente, la cumplimentación ordenada en la resolución 325-A-IV-7-V-2082 aludida, se limita a la reposición del procedimiento de fiscalización, sin que se prejuzgara sobre el resultado de éste, motivo por el que la liquidación emitida resulta novedosa respecto del primer recurso de revocación intentado por la demandada.

Así las cosas, y debido a que la génesis de la resolución impugnada deriva de la interposición de un medio de defensa interpuesto por el actor, es dable para esta sentenciadora, no obstante que se surte en la especie la causal de anulación prevista en el artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a la indebida aplicación de los preceptos legales invocados en la resolución impugnada, declarar la nulidad del acto combatido, a saber, la contenida en el oficio 325-SAT-R4-L33-V-1438 de 30 de marzo de 1999, emitida por el Administrador Local Jurídico de Ingresos de Aguascalientes, para efectos de que la autoridad llamada a juicio, de no existir diversa causal de improcedencia, admita a trámite el recurso de revocación interpuesto por la actora con fecha 5 de noviembre de 1998 en contra de la resolución dictada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes contenida en el oficio 324-SAT-R4-L33-III-A-1-12121 de 12 de agosto de 1998, y lo resuelva conforme a derecho proceda.

Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 45/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al tenor del artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, septiembre de 1998, página 5, que dice:

"**SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.-** El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo Ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo Tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada,

dado que el Tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho.

“Contradicción de tesis 2/97. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal

Colegiado del Sexto Circuito. 29 de junio de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván."

Se hace la aclaración relativa a que esta Sección no entra al estudio del fondo de la controversia planteada, como lo permite el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en su cuarto párrafo, ya que la enjuiciante no esgrime en su demanda concepto de anulación alguno en tal sentido, motivo por el que la litis en la especie se limitó a la legalidad del desechamiento del recurso de revocación que nos ocupa.

Por otra parte, y en relación al segundo concepto de anulación que esgrime la enjuiciante, relativo a que el cumplimiento a la resolución del recurso primario se hizo con posterioridad al término de cuatro meses que establece el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, ya que no fue sino hasta el 15 de enero de 1998 que se le notificó el oficio 324-SAT-R4-L33-I-11311 de 17 de diciembre de 1997, en el que se comunica la reposición de la visita domiciliaria al amparo de la orden originalmente emitida y que no fue materia del recurso primario, esta Sección lo considera infundado en virtud de que si bien el numeral 133 del Código Fiscal de la Federación establece que la resolución recaída a un recurso que ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición de un procedimiento debe cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que se notifique al contribuyente, también es cierto que tal referencia se hace en relación a los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación, es decir, para aquellos casos en que hubiere fenecido el término para concluir la visita domiciliaria y las revisiones de escritorio, y para el supuesto de que hubiere transcurrido el término para que opere la caducidad de las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales, máxime que no existe precepto legal alguno que establezca que en caso de incumplimiento al numeral 133 del Código Fiscal de la Federación la resolución que se dicta sea ilegal y por ende deba anularse por este Tribunal, razón por la cual debe desestimarse el argumento de la accionante en comento por infundado. Cabe mencionar que esta Sección ha sostenido con anterioridad el criterio vertido en el presente considerando, al resolver los juicios 100(14)46/98/1516/97 y 1528/00-11-08-8/60/00-S1-01-03, en sesiones de 12 de enero de 1999 y 13 de febrero de 2001. En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sección al emitir

la siguiente tesis publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Cuarta Época, número 13, agosto de 1999, páginas 146 y 147, que es del tenor siguiente:

"**PLAZO PARA CUMPLIR LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO.- EL INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE CONFIGURA COMO CAUSAL DE NULIDAD.-** El Código Fiscal de la Federación en su artículo 133, último párrafo, establece: 'Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que dicha resolución se encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos 46-A y 67 de este Código'. De la anterior transcripción, se tiene que si bien el legislador estableció un plazo de cuatro meses para cumplir una resolución recaída a un recurso de revocación, incluso habiendo transcurrido el término a que se refieren los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que el cumplimiento efectuado fuera de dicho plazo de cuatro meses, no es causal de nulidad del acto cuestionado, salvo que ya hubiera transcurrido también el plazo de caducidad y así se hubiera hecho valer como concepto de ilegalidad. Esto obedece a que en la disposición de que se trata, no se contempla que la autoridad ya no pueda cumplimentarla fuera de ese término, ni se estatuye sanción para el caso de que se sobrepase el plazo establecido. En consecuencia, si la autoridad administrativa cumple lo dispuesto por la resolución recaída a un recurso, fuera del plazo señalado por la Ley, siempre que el particular impugne el acto administrativo, éste no podrá ser anulado por esta razón, al no configurarse ninguna de las causales de nulidad, previstas en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. (3)

"Juicio No. 100(20)54/98/126/98.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, el 2 de marzo de 1999, por mayoría de tres votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Dr. Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
"(Tesis aprobada en sesión privada de 20 de abril de 1999)"

A mayor abundamiento, esta Juzgadora invoca, por analogía, la Jurisprudencia 41/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para esta Juzgadora al tenor del artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, mayo 2000, página 226, que puede aplicarse en la especie *mutatis mutandi*, que a la letra dice:

"**SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.-** Conforme a las jurisprudencias 44/98 y 45/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que llevan por rubros 'SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DETERMINARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.' y 'SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.', nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues dada la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente el Tribunal Fiscal de la Federación, en relación a ciertos actos sólo actuará como tribunal de mera anulación al tener como finalidad la de controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo y, en cuanto a otros actos, como de plena jurisdicción para reparar el derecho subjetivo lesionado, siendo el alcance de la sentencia de nulidad no sólo el de anular el acto sino también el de fijar los derechos del recurrente, condenando a la administración a su restablecimiento, por

lo que para determinar cuándo una sentencia de nulidad debe ser para efectos es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, en el que el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la violación detectada que no se colma con la simple declaración de nulidad de la autoridad, sino que requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del administrado, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional en la que el Tribunal no puede sustituir a la autoridad en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes. De las anteriores determinaciones se desprende que el cumplimiento fuera del término legal de cuatro meses previsto en el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que realice la autoridad administrativa de la sentencia de nulidad para efectos no puede ocasionar la ilegalidad de la resolución en que tal sentencia se acate, concretamente la causal de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal Federal por haberse dejado de aplicar las disposiciones legales debidas, porque ello contrariaría el fin perseguido por el legislador al atribuir al Tribunal Fiscal plena jurisdicción para tutelar el derecho subjetivo del administrado en los casos en que la nulidad lisa y llana sea insuficiente para restaurar el orden jurídico violado, afectándose al administrado por una actuación que le es ajena y dejándose al arbitrio de la autoridad administrativa el cumplimiento de la sentencia mediante su decisión de cumplir dentro del plazo legal o fuera de él, pues a través de la ilegalidad de la resolución con la que diera cumplimiento podría evadir la reparación de la resolución cometida. Corrobora lo anterior el que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se haya modificado el anterior artículo 239-Ter que pasó a ser 239-B, del Código Fiscal para establecerse como supuesto de procedencia del recurso de queja, la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad si transcurrió el plazo legal, caso en el cual si la Sala resuelve que hubo omisión total concederá al funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo, procediendo

también a imponerle una multa equivalente a quince días de su salario y a notificar a su superior para que proceda jerárquicamente, pues carecería de sentido que se otorgara un término de veinte días a la autoridad para que diera cumplimiento a la sentencia de nulidad para efectos, si se considerara que la resolución relativa estaría afectada de ilegalidad, independientemente de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir la autoridad demandada.

"Contradicción de tesis 86/99-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 41/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del catorce de abril del año dos mil."

De la transcripción anterior, se puede concluir que cuando se emite una resolución emanada de un medio de defensa en la que se anula un acto de autoridad y con la finalidad de restaurar el orden jurídico violado, se ordena a la autoridad a emitir un acto en determinado sentido, el hecho de que no se dicte la referida resolución en el término que señala la ley para tal efecto, no la invalida, ya que aceptar tal proceder afectaría al administrado por una actuación que le es ajena y se dejaría al arbitrio de la autoridad administrativa el cumplimiento de la resolución del medio de defensa mediante su decisión de cumplir dentro del plazo legal o fuera de él, pues a través de la ilegalidad de la resolución con la que diera cumplimiento podría evadir la reparación de la ilegalidad cometida, motivo por el que para esta Primera Sección de la Sala Superior, la omisión de cumplimentar la resolución del recurso primario en el término legal no implica su necesaria anulación en los términos del artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, por lo que el argumento en estudio planteado por la actora resulta infundado.

En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos 237, 238, fracción IV, 239, fracción III, 239-A, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación,

20, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; en consecuencia,

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada precisada en el resultando primero de este fallo, para el efecto expuesto en el último considerando de la presente sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los presentes autos a la Sala Regional que corresponda una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 24 de abril de 2001, por mayoría de tres votos a favor de los Magistrados LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIÉRREZ, MARÍA DEL CONSUELO VILLALOBOS ORTÍZ y JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES y un voto en contra de la Magistrada ALMA PERALTA DI GREGORIO, estando ausente el Magistrado LUIS MALPICA DE LAMADRID.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIÉRREZ cuya ponencia se aprobó modificada.

Se formuló el presente engrose el día 25 de mayo de 2001, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada ALMA PERALTA DI GREGORIO, Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, que da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. ES LEGAL SI LA ACTORA FUE OMISA EN CONTROVERTIR LA CONSTANCIA RESPECTIVA AL MOMENTO DE FORMULAR SU AMPLIACIÓN A LA DEMANDA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 210, fracción II del Código Fiscal de la Federación, se podrá ampliar la demanda dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, entre otros casos, cuando con motivo de dicha contestación se dé a conocer el acto principal del que deriva el acto impugnado, así como su notificación. De acuerdo con lo anterior, si del examen al escrito de ampliación a la demanda se advierte que la demandante fue completamente omisa en hacer valer agravios tendientes a desvirtuar la legalidad de las constancias de notificación de las Órdenes de visita que la autoridad exhibió en copia certificada al momento de contestar la demanda, ante la negativa lisa y llana de la actora de haber recibido las órdenes respectivas, deberá considerarse que la notificación de dichas ordenes de visita fue legal por no haber refutado su contenido en el momento oportuno para ello. No es óbice para lo anterior el hecho de que desde la demanda la actora hubiera objetado la legalidad de la entrega de la orden por no haber mediado el citatorio respectivo, toda vez que si al contestar la demanda la autoridad acompañó las constancias respectivas para demostrar que fue legal su notificación, la actora tenía el derecho de impugnar su contenido al ampliar su demanda, razón por la que si no lo hizo, deberá considerarse que su notificación es legal, atendiendo a la presunción de legalidad contenida en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. (4)

Juicio No. 15257/99-11-07-4/387/01-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de octubre de 2002, por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales. (Tesis aprobada en sesión privada de 24 de octubre de 2002)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

Esta Primera Sección de la Sala Superior estima que resulta **INFUNDADO** el único concepto de impugnación planteado en el capítulo de hechos denominado "impugnación de las notificaciones" en virtud que del examen a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que la autoridad demuestra que las órdenes de visita RIM930091/97 y RIM930092/97, contenidas en los oficios 388-A-2598 y 388-A2599 le fueron notificadas legalmente a la demandante el 26 de marzo de 1997 al tenor de las siguientes consideraciones.

Los artículos que establecen los requisitos que deberán observarse tratándose de la notificación de los actos administrativos, como lo es el citatorio para la entrega de una orden de visita, son los numerales 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación que en la parte que interesa dicen:

"**ARTÍCULO 134.-** Las notificaciones de los actos administrativos se harán:

"**I.** Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trata de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

"(...)"

"**ARTÍCULO 137.-** Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

"Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

"Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el Reglamento de este Código."

A este respecto el artículo 44, fracción II del Código Tributario Federal señala:

"**ARTÍCULO 44.-** En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:

"(...)

"**II.-** Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.

"(...)"

Atendiendo al contenido de los preceptos transcritos, se tiene que el notificador tiene la obligación de asentar en acta circunstanciada los términos en que se desarro-

lló la diligencia, cumpliendo con las formalidades exigidas en los artículos 44, fracción II y 137, primer párrafo del Código citado; y para corroborar si en el caso se observaron tales requisitos resulta conveniente transcribir el contenido de los documentos que en copia certificada exhibió la autoridad en su contestación a la demanda a fin de acreditar que las órdenes de visita de 19 de marzo de 1997 le fueron notificadas a la demandante el 26 de marzo del mismo año.

Respecto a la notificación de la orden de visita RIM930091/97 contenida en el oficio 388-A-2598 de 19 de marzo de 1997 la autoridad ofreció como prueba de su parte copia certificada de los siguientes documentos:

- Citatorio de 25 de marzo de 1997 (folios 181)

- Acta parcial de inicio del 26 de marzo de 1997 (folios 185 a 188)

- Orden de visita RIM930091/97 de 19 de marzo de 1997 (folios 182 a 184)

En tales documentos se hizo constar respectivamente en la parte que interesa lo siguiente:

CITATORIO DE 25 DE MARZO DE 1997 (folio 181)

"***DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE AUDITORÍA FISCAL.***

"ENTREGA PERSONAL

"ASUNTO: **C I T A T O R I O**

"México, D.F. a 25 de marzo de 1997.

"C. REPRESENTANTE LEGAL DE
FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V.

"Comunico a usted que el suscrito, con esta fecha se constituyó legalmente su domicilio ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 184, Col. Reforma Social, C.P. 11650, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. a las 11:00 hrs. del día 25 de marzo de 1997, con el objeto de notificar el oficio No. 388-A-2598 de fecha 19 de marzo de 1997, girado por la C. Administradora Especial de Auditoría Fiscal.

"Requerida su presencia, se me indicó que no se encontraba en ese momento en el domicilio antes señalado, por lo que se le entregó este **citatorio** al C. Jorge Dueñas Zapata en su carácter de Representante Legal para actos de administración, con limitación para declaraciones hacendarias o fiscales, identificándose con licencia para conducir, expedida por la Secretaría de Transportes y Vialidad del Departamento del D.F. con fecha de expedición 2 de enero de 1997 y vigencia al 2 de enero del 2000 para que lo hiciera de su conocimiento, a efecto de que esté usted presente para desahogar la diligencia el día 26 de marzo de 1997, a las 10:00 hrs., en el domicilio antes señalado, apercibiéndole que de no estar presente, se procederá a iniciar la visita con quien se encuentre, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

"RECIBÍ EL CITATORIO PARA ENTREGARLO AL DESTINATARIO.

(firma ilegible)
"C. Jorge Dueñas Zapata

A t e n t a m e n t e.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL C. Visitador

(firma ilegible)
C.P. Ana Ma. Sánchez García."

ACTA PARCIAL DE INICIO DE 26 DE MARZO DE 1997 (folios 185 a 188)

"----------FOLIO No. 12162----------

"EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 1997, LAS CC. MARÍA DEL PILAR ESTRADA GARCÍA, ANA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA, LAURA ROCÍO MANCERA TORRES, VISITADORAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE AUDITORÍA FISCAL, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SE CONSTITUYERON LEGALMEN-

TE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., UBICADO EN BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 184, COL. REFORMA SOCIAL, C.P. 11650, MÉXICO, D.F., CON EL OBJETO DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO EN LA QUE SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS:

"SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 1997, EL PERSONAL DE VISITA ANTES MENCIONADO SE CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO TAMBIÉN ANTES REFERIDO PARA HACER ENTREGA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA No. RIM930091/97, CONTENIDA EN EL OFICIO No. 388-A-2598 DE FECHA 19 DE MARZO DE 1997, GIRADA POR LA C. ADMINISTRADORA ESPECIAL DE AUDITORÍA FISCAL C.P. ELADIA MARTÍN MORALES, A LA CONTRIBUYENTE FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 E INICIAR LA REVISIÓN FISCAL AHÍ ORDENADA----------

"PARA ESE EFECTO, FUE REQUERIDA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL IDÓNEO DE LA DESTINATARIA DE LA ORDEN, **Y AL NO ENCONTRARSE PRESENTE EN ESE MOMENTO SE PROCEDIÓ A ENTREGAR ORIGINAL DEL OFICIO CITATORIO** DE FECHA 25 DE MARZO DE 1997, MISMO QUE SE DEJÓ EN PODER DEL C. JORGE DUEÑAS ZAPATA, CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CON LIMITACIÓN PARA DECLARACIONES HACENDARIAS O FISCALES DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA A EFECTO DE QUE LO HICIERA DE SU CONOCIMIENTO Y ESTUVIERA PRESENTE EL DÍA 26 DE MARZO DE 1997, A LAS 10:00 HORAS PARA DESAHOGAR LA DILIGENCIA.----------

"AHORA BIEN SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 1997, EL PERSONAL DE VISITA ANTES MENCIONADO SE CONSTITU-

YÓ NUEVAMENTE EN EL DOMICILIO TAMBIÉN REFERIDO, SOLICITANDO LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL IDÓNEO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **EL CUAL NO SE PUDO PRESENTAR PARA ATENDER EL OFICIO DE CITATORIO**, APERSONÁNDOSE EL C. JORGE DUEÑAS ZAPATA PERSONA CON LA QUE SE ENTENDERÁ LA DILIGENCIA Y QUE INDICA TENER PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CON LIMITACIÓN PARA DECLARACIONES HACENDARIAS O FISCALES DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, HECHO QUE ACREDITÓ CON EL PODER NOTARIAL No. 12804 PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 86 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. JOSÉ DANIEL LABARDINI SCHETTINO QUIEN A PETICIÓN DE LAS VISITADORAS SE IDENTIFICÓ MEDIANTE LICENCIA PARA CONDUCIR, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 2 DE ENERO DE 1997 Y VIGENCIA AL 2 DE ENERO DEL AÑO 2000.----------

"HECHO LO ANTERIOR, LOS VISITADORES ENTREGARON AL TERCERO COMPARECIENTE EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN CUESTIÓN CON FIRMA AUTÓGRAFA DE LA C. ADMINISTRADORA ESPECIAL DE AUDITORÍA FISCAL, C.P. ELADIA MARTÍN MORALES, ASÍ COMO UN EJEMPLAR DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO QUIEN PARA CONSTANCIA ESTAMPÓ DE SU PUÑO Y LETRA LA SIGUIENTE LEYENDA 'PREVIA LECTURA E IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES RECIBÍ ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO Y CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO', ANOTANDO A CONTINUACIÓN LA FECHA 26 DE MARZO DE 1997, FIRMA, NOMBRE Y CARGO EN 2 COPIAS DE LA ORDEN."

Orden de visita RIM930091/97 (folios 182 a 184)

"ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA FISCAL FEDERAL
"ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE
AUDITORÍA FISCAL

"Num.: 388-A-2598
"Exp.: 307/
"R.F.C.: FCA920506SET
"RIM930091/97

"ASUNTO: Se ordena la práctica de una visita domiciliaria.

"México, D.F. a 19 de marzo de 1997.

"FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V.
"BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 184
"COLONIA REFORMA SOCIAL
"11650 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
"MÉXICO, D.F.

"Esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus facultades, le ordena la presente visita domiciliaria con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto como sujeto directo y como responsable solidario, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.

"(...)

"La revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 1994.

"Queda apercibido que de no dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden; oponerse a la práctica de la visita o a su desarrollo, y no poner a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad, o no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

"FIRMA ILEGIBLE

"***RECIBÍ ORIGINAL DEL***
PRESENTE OFICIO 26/03/97
JORGE DUEÑAS ZAPATA
GERENTE JURÍDICO.
Y CARTA DE LOS DERECHOS
DEL CONTRIBUYENTE
AUDITADO.

"A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"La Administradora Especial de Auditoría Fiscal.

(RÚBRICA)
"C.P. ELADIA MARTÍN MORALES."

Por lo que toca a la notificación de la orden de visita RIM930092/97, contenida en el oficio 388-A-2599, de 19 de marzo de 1997, la autoridad ofreció como prueba de su parte copia certificada de los siguientes documentos:

- Acta parcial de inicio del 26 de marzo de 1997 (folios 127 a 130)

- Orden de visita RIM930092/97 de 19 de marzo de 1997 (folios 124 a 126)

En tales documentos se hizo constar respectivamente en la parte que interesa lo siguiente:

ACTA PARCIAL DE INICIO DE 26 DE MARZO DE 1997
(folios 127 a 130)

"----------FOLIO No. 12166----------

"EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 1997, LAS CC. MARÍA DEL PILAR ESTRADA GARCÍA,

ANA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA, LAURA ROCÍO MANCERA TORRES, VISITADORAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE AUDITORÍA FISCAL, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SE CONSTITUYERON LEGALMENTE EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., UBICADO EN BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 184, COL. REFORMA SOCIAL, C.P. 11650, MÉXICO, D.F., CON EL OBJETO DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INICIO EN LA QUE SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS:

"SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 1997, EL PERSONAL DE VISITA ANTES MENCIONADO SE CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO TAMBIÉN ANTES REFERIDO PARA HACER ENTREGA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA No. RIM930092/97, CONTENIDA EN EL OFICIO No. 388-A-2599 DE FECHA 19 DE MARZO DE 1997, GIRADA POR LA C. ADMINISTRADORA ESPECIAL DE AUDITORÍA FISCAL C.P. ELADIA MARTÍN MORALES, A LA CONTRIBUYENTE FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 E INICIAR LA REVISIÓN FISCAL AHÍ ORDENADA ----------
"PARA ESE EFECTO, FUE REQUERIDA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL IDÓNEO DE LA DESTINATARIA DE LA ORDEN, **Y AL NO ENCONTRARSE PRESENTE EN ESE MOMENTO SE PROCEDIÓ A ENTREGAR ORIGINAL DEL OFICIO CITATORIO** DE FECHA 25 DE MARZO DE 1997, MISMO QUE SE DEJÓ EN PODER DEL C. JORGE DUEÑAS ZAPATA, CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CON LIMITACIÓN PARA DECLARACIONES HACENDARIAS O FISCALES DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA A EFECTO DE QUE LO HICIERA DE SU CONOCIMIENTO Y ESTUVIERA PRESENTE EL DÍA 26 DE MARZO DE 1997, A LAS 11:00 HORAS PARA DESAHOGAR LA DILIGENCIA.----------

"AHORA BIEN SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 1997, EL PERSONAL DE VISITA ANTES MENCIONADO SE CONSTITUYÓ NUEVAMENTE EN EL DOMICILIO TAMBIÉN REFERIDO, SOLICITANDO LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL IDÓNEO DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, **EL CUAL NO SE PUDO PRESENTAR PARA ATENDER EL OFICIO DE CITATORIO**, APERSONÁNDOSE EL C. JORGE DUEÑAS ZAPATA, PERSONA CON LA QUE SE ENTENDERÁ LA DILIGENCIA Y QUE INDICA TENER PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CON LIMITACIÓN PARA DECLARACIONES HACENDARIAS O FISCALES DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA, HECHO QUE ACREDITÓ CON PODER NOTARIAL No. 12804 PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 86 DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. JOSÉ DANIEL LABARDINI SCHETTINO; QUIEN A PETICIÓN DE LAS VISITADORAS SE IDENTIFICÓ MEDIANTE LICENCIA PARA CONDUCIR, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 2 DE ENERO DE 1997 Y VIGENCIA AL 2 DE ENERO DEL AÑO 2000.----------

"HECHO LO ANTERIOR, LOS VISITADORES ENTREGARON AL TERCERO COMPARECIENTE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN CUESTIÓN CON FIRMA AUTÓGRAFA DE LA C. ADMINISTRADORA ESPECIAL DE AUDITORÍA FISCAL, C.P. ELADIA MARTÍN MORALES, ASÍ COMO UN EJEMPLAR DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO QUIEN PARA CONSTANCIA ESTAMPÓ DE SU PUÑO Y LETRA LA SIGUIENTE LEYENDA 'PREVIA LECTURA E IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES RECIBÍ ORIGINAL DEL PRESENTE OFICIO Y CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO', ANOTANDO A CONTINUACIÓN LA FECHA 26 DE MARZO DE 1997, FIRMA, NOMBRE Y CARGO EN 2 COPIAS DE LA ORDEN."

Orden de visita RIM930092/97 (folios 124 a 126)

"ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA FISCAL FEDERAL
"ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE
AUDITORÍA FISCAL

"Num.: 388-A-2599
"Exp.: 307/
"R.F.C.: FCA920506SET
"RIM930092/97

"ASUNTO: Se ordena la práctica de una visita domiciliaria.

"México, D.F. a 19 de marzo de 1997.

"FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V.
"BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 184
"COLONIA REFORMA SOCIAL
"11650 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
"MÉXICO, D.F.

"Esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus facultades, le ordena la presente visita domiciliaria con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto como sujeto directo y como responsable solidario, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.

"(...)

"La revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 1995.

"Queda apercibido que de no dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden; oponerse a la práctica de la visita o a su desarrollo, y no poner a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad, o no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

"FIRMA ILEGIBLE

"***RECIBÍ ORIGINAL DEL***
PRESENTE OFICIO 26/03/97
JORGE DUEÑAS ZAPATA
GERENTE JURÍDICO
Y CARTA DE LOS DERECHOS
DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO.

"A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"La Administradora Especial de Auditoría Fiscal.

(RÚBRICA)
"C.P. ELADIA MARTÍN MORALES."

En este punto se hace notar que mediante acuerdo de 20 de septiembre de 2000, la Magistrada Instructora de la Séptima Sala Regional Metropolitana, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia interlocutoria de esta Primera Sección de la Sala Superior, de 11 de julio de 2000, regularizó el procedimiento otorgando a la actora el plazo de 20 días para que formulara su ampliación a la demanda, respecto a las constancias que exhibió la autoridad para acreditar la legal notificación de las órdenes de visita de 19 de marzo de 1997.

Dicho proveído le fue notificado personalmente a la enjuiciante el día 26 de octubre de 2000, como se acredita con la constancia de notificación que obra a folios 302 a 303 del expediente en que se actúa.

No obstante que mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2000, la actora formuló en tiempo y forma su ampliación a la demanda, lo cierto es que de la lectura a tal ampliación (folios 307 a 315) cuya parte relativa se transcribió en el considerando segundo de la presente sentencia, se corrobora que la demandante fue completamente omisa en hacer valer agravios tendientes a desvirtuar la legalidad de las notificaciones de las órdenes de

visita RIM930091/97, y RIM930092/97 ambas de 19 de marzo de 1997, lo que se precisa para efectos de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales salvo que el actor los impugne expresamente en su demanda, ya que el momento procesal oportuno para impugnar dichas notificaciones lo era a través de la ampliación a la demanda, supuesto que no se dio en el caso que nos ocupa.

Precisado lo anterior, esta Juzgadora llega a la conclusión de que no le asiste la razón a la demandante, en virtud que del examen al contenido de los documentos antes transcritos, que exhibió la autoridad como prueba de su parte, en su contestación a la demanda, se acredita que las órdenes de visita RIM930091/97 y RIM930092/97, ambas de 19 de marzo de 1997, le fueron notificadas a la actora el 26 de marzo del mismo año.

Lo anterior es así, ya que por lo que toca a la orden de visita RIM930091/97, y observando el citatorio de 25 de marzo de 1997, se desprende que en éste se hizo constar que habiéndose constituido el visitador en el domicilio de FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., solicitó la presencia del representante legal y que por no encontrarlo dejó el citatorio, para que lo esperara en su domicilio el día 26 de marzo de 1997 a las 10:00 horas para llevar a cabo la diligencia de notificación del oficio 388-A-2598, de 19 de marzo de 1997, advirtiéndole que de no estar presente se iniciaría la visita con quien se encontrara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo al levantarse el acta parcial de inicio de 26 de marzo de 1997, también se cumplieron con las formalidades exigidas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, pues de la transcripción que se hace en los párrafos precedentes se desprende que: están perfectamente determinados por los visitadores adscritos a la Administración Especial de Auditoría Fiscal, cuáles son los datos generales del acto de molestia, a saber la orden de visita RIM930091/97; se señaló quién era el contribuyente, en este caso FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V.; que en el momento en

que se hizo la notificación se indicó el domicilio donde se llevó a cabo precisándose que habiéndose constituido nuevamente en el domicilio del actor se solicitó la presencia del representante legal, y que por no atender el citatorio, la diligencia se entendió con el C. Jorge Dueñas Zapata, mismo que indicó tener poder para actos de administración, lo cual acreditó con el poder notarial No. 12804 pasado ante la fe del Notario Público, agregándose que una vez identificado plenamente, se le entregó la orden de visita en cuestión, quien para constancia estampó de su puño y letra "recibí original del presente oficio y carta de los derechos del contribuyente auditado"; razón por la que no se dejó en ningún momento en estado de indefensión a la demandante, porque además la entrega de la orden se realizó a las 10:00 horas del día 27 de marzo de 1997, como se había fijado en el citatorio, que están todos los datos de la empresa demandante, así como los datos generales de la persona que atendió la diligencia y a quien se entregó la orden de visita controvertida, de ahí que en este aspecto se considere que tal notificación resulta legalmente válida.

Respecto a la orden de visita RIM930092/97, también se estima que su notificación se encuentra ajustada a derecho, pues aun cuando la autoridad no exhibió con su contestación a la demanda, el citatorio previsto en la fracción II del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que de la lectura al acta parcial de inicio de 26 de marzo de 1997 que obra a folios 127 a 130 del expediente en que se actúa, a la cual se otorga pleno valor probatorio de conformidad a lo dispuesto en la fracción I del artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que también se cumplieron con las formalidades exigidas en el artículo 137 del Código Tributario Federal, pues de la transcripción que se hace en los párrafos precedentes se desprende que:

- Con fecha 25 de marzo de 1997 los auditores se constituyeron en el domicilio de la actora, para hacer entrega de la orden de visita RIM930092/97 contenida en el oficio No. 388-A-2599 de 19 de marzo de 1997, girado por el Administrador Especial de Auditoría Fiscal por el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 1995.

- Que para tal efecto, fue requerida la presencia del representante legal de la empresa demandante y que al no encontrarse presente se dejó citatorio de 25 de marzo de 1997 al C. Jorge Dueñas Zapata a efecto de que estuviera presente el día 26 de marzo del mismo año a las 11:00 horas para desahogar la diligencia respectiva.

- Que al momento en que se hizo la notificación se indicó el domicilio donde se llevó a cabo, precisándose que habiéndose constituido nuevamente en el domicilio del actor se solicitó la presencia del representante legal, y que por no atender el citatorio, la diligencia se entendió con el C. Jorge Dueñas Zapata, mismo que indicó tener poder para actos de administración, lo cual acreditó con el poder notarial No. 12804 pasado ante la fe del Notario Público, agregándose que una vez identificado plenamente, se le entregó la orden de visita en cuestión, quien para constancia estampó de su puño y letra "recibí original del presente oficio y carta de los derechos del contribuyente auditado"; razón por la que no se dejó en ningún momento en estado de indefensión a la demandante, porque además la entrega de la orden se realizó a las 11:00 horas del día 27 de marzo de 1997 como se había fijado en el citatorio, que están todos los datos de la empresa demandante, así como los datos generales de la persona que atendió la diligencia y a quien se entregó la orden de visita controvertida, de ahí que en este aspecto se considere que tal notificación resulta legalmente válida.

No es obstáculo para la determinación el hecho de que el actor sostenga que el visitador debió redactar en el cuerpo del citatorio y en la constancia de notificación respectiva, qué documentos examinó para cerciorarse del carácter con el que se ostentó el receptor de las órdenes de visita, toda vez que con ello pretende pasar por alto que por un lado, no existe precepto legal alguno que obliga a cumplir con tal requisito al expedirse el citatorio, y por otro, de la simple lectura a las actas parciales de inicio de 26 de marzo de 1997, consta que en éstas se precisaron todos los datos a que alude el enjuiciante, pues como se dijo anteriormente, se indicó el carácter con que se ostentó la persona que atendió la diligencia y que recibió las órdenes de visita de referencia, anotándose además de manera circunstanciada los documentos que se tuvieron a la vista para determinar que la persona que atendió la diligencia tenía realmente el carácter con que se ostentó al recibir las órdenes de visita, en este caso el

C. Jorge Dueñas Zapata quien manifestó tener poder para actos de administración con limitación para declaraciones hacendarias o fiscales de la contribuyente visitada, lo cual acreditó con el poder notarial 12804 pasado ante la fe del Notario Público No. 86 del Distrito Federal, quien se identificó mediante licencia para conducir expedida por la Secretaría de Transportes y Vialidad del Departamento del Distrito Federal de 2 de enero de 1997.

De igual forma, tampoco le asiste la razón al demandante, al afirmar que las notificaciones de las órdenes de visita resultan ilegales, toda vez que el citatorio correspondiente incumplió con los requisitos que establece el artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que el citatorio debió ser dirigido al representante legal, circunstanciándose con quién se entrevistó el notificador; toda vez que la enjuiciante pretende pasar por alto que de conformidad a lo señalado en el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, únicamente a falta de norma fiscal expresa se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, supuesto que no se da en el caso que nos ocupa, puesto que los únicos requisitos que dicho citatorio debe satisfacer, son los que se contienen en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, tal y como aconteció en el caso que nos ocupa.

Resulta aplicable al presente caso la Jurisprudencia No. 2a./J. 48/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Página: 140, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

> "**CITATORIOS PARA NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL. NO ES NECESARIO, PARA SU VALIDEZ, QUE SE DIRIJAN, ADEMÁS DE A LA PERSONA MORAL INTERESADA, A SU REPRESENTANTE LEGAL.-** Si un citatorio para notificación en materia fiscal se dirige a nombre de la persona moral interesada, es claro que esta situación no genera ningún estado de incertidumbre o indefensión, pues las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden apersonarse al través de dichos representantes. En este sentido, es incuestionable que si el citatorio de referencia

se dirige a la persona moral, debe entenderse que se le está dirigiendo por medio de su representante legal."

"Contradicción de tesis 3/95. Entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán:

"Tesis de Jurisprudencia 48/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión pública de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano."

Asimismo, esta Juzgadora estima que la aseveración de la actora en el sentido de que niega que las supuestas notificaciones no fueron practicadas en su domicilio ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 184, 4° piso, Col. Reforma Social, C.P. 11550 México, D.F., según consta en el alta de la empresa ante la Secretaría de Hacienda, carece totalmente de sustento legal, toda vez que como se determina en el considerando séptimo de la presente sentencia, en el caso concreto se encuentra debidamente acreditado en autos que el domicilio fiscal de la demandante se encuentra ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 184, Col. Reforma Social, C.P. 11550, México, D.F. que es el mismo donde se practicó la visita domiciliaria al amparo de las órdenes de visita de 19 de marzo de 1997, razón por la que por cuestiones de economía procesal y en obvio de repeticiones innecesarias, se tiene por reproducidos en este apartado como si fuera a la letra todas las consideraciones que llevaron a esta Juzgadora a determinar en el considerando séptimo en cita, cuál era el domicilio correcto de la empresa demandante.

Por otro lado, esta Juzgadora no pasa inadvertido que en el escrito de alegatos presentado el 6 de marzo de 2001, la actora pretendió controvertir las notificaciones

relativas a las órdenes de visita contenidas en los oficios 388-A-2598 y 388-A-2599, indicando que:

"**ALEGATOS**

"QUE CON LOS ELEMENTOS APORTADOS Y DEMÁS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL PRESENTE JUICIO SE ACREDITÓ QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES VIOLARON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE NO ACREDITARON DE MODO ALGUNO QUE HALLAN (sic) NOTIFICADO DEBIDAMENTE Y EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134 Y 137 DE (sic) CÓDIGO TRIBUTARIO FEDERAL LOS OFICIOS **388-A-2598 Y 2599 Y 324-SAT-X-2803 Y 2804**.

"EN LA ESPECIE QUEDÓ DEMOSTRADO FEHACIENTEMENTE QUE LAS NOTIFICACIONES RELATIVAS A LOS OFICIOS **388-A-2598 Y 2599** NO SE PRACTICARON CONFORME A DERECHO YA QUE AL CONTESTAR LA AMPLIACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA AUTORIDAD, ÉSTA NO CONTROVIRTIÓ DE MODO ALGUNO RESPECTO DE LAS NOTIFICACIONES CITADAS POR LO QUE SE DEBEN DE TENER POR CIERTO LOS HECHOS MANIFESTADOS POR LA PARTE ACTORA RESPECTO DE ELLOS.

"AHORA BIEN, EN EL SUPUESTO SIN CONCEDER QUE SE PRETENDA ACREDITAR LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO 388-A-2598, **YA QUE DEL 2599 NO SE EXHIBIÓ CITATORIO ALGUNO**.

"POR LO QUE SE REFIERE A LA ORDEN DE VISITA No. 2598 DE LAS CONSTANCIAS EXHIBIDAS POR LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ACEPTA Y HACE PRUEBA PLENA EN SU CONTRA FOJAS '6' '(...) **LA NOTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE**

EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE A QUIEN SE DIRIGE EL ACTO ADMINISTRATIVO (...)' **CON FECHA 25 DE MARZO DE 1997, LA AUTORIDAD FISCAL DONDE SE CONSTITUYÓ FUE EN DOMICILIO DIVERSO DE LA HOY ACTORA** COMO SE ACREDITA DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS; AHORA BIEN EN EL SUPUESTO SIN CONCEDER QUE LA AUTORIDAD SE HUBIERA CONSTITUIDO EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA HOY ACTORA (**LO CUAL NO ACONTECIÓ**) TAMPOCO ACREDITA LA LEGAL NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE VISITA IMPUGNADA 2598, YA QUE NUNCA SE REQUIRIÓ LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, YA QUE COMO SE PUEDE APRECIAR DEL CITATORIO EN CUESTIÓN (**NUNCA SEÑALA A QUIÉN SE LE REQUIRIÓ LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL**), EN EL SUPUESTO SIN CONCEDER QUE ÉSTE SE HUBIERA ENTREGADO EN EL DOMICILIO CORRECTO, LA CITA FUE PARA LAS **10:00 HRS.** Y EN EL ACTA PARCIAL DE INICIO QUE SE EXHIBIÓ COMO PRUEBA CONSTA FEHACIENTEMENTE QUE EL PERSONAL ENVIADO POR LA RESPONSABLE PARA DICHO FIN: SE PRESENTÓ **HASTA LAS 10:30 HRS.**, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCONTRÓ AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, YA QUE ÉSTE ESTUVO A LAS 10:00 HRS., COMO FUE REQUERIDO, RESULTANDO CON ELLO ILEGAL LA NOTIFICACIÓN DE MÉRITO.

"POR ÚLTIMO, EN EL CITATORIO EN CUESTIÓN NO SE HACE LA MENCIÓN DE QUE LA CITA ES PARA RECIBIR LA '**ORDEN DE VISITA**' MOTIVO POR EL CUAL TAMBIÉN RESULTA NULO EL CITATORIO EN CUESTIÓN, RESULTANDO DE APLICACIÓN AL CASO LAS JURISPRUDENCIAS QUE ENSEGUIDA SE TRANSCRIBEN:

" '**NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL, REQUISITOS QUE DEBEN HACERSE CONSTAR CUANDO NO SE ENCUENTRA A QUIEN SE DEBE NOTIFICAR.**' (Se transcribe)

" '**ORDEN DE VISITA EN EL DOMICILIO FISCAL. EL CITATORIO RESPECTIVO DEBE EXPRESAR QUE EL VISITADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ESPEREN A HORA DETERMINADA PARA RECIBIRLA.**'(Se transcribe)

" '**NOTIFICACIONES FISCALES. QUÉ DATOS DEBEN HACERSE CONSTAR EN ELLAS.**' (Se transcribe)

" '**NOTIFICACIONES FISCALES, REQUISITOS DE LAS.**'

"POR LO QUE SE REFIERE A LA ORDEN DE VISITA **2599 NO ACREDITA** CON DOCUMENTO IDÓNEO (CITATORIO) QUE SE HALLA (sic) CITADO CON DICHO FIN A LA EMPRESA QUE REPRESENTO, YA QUE DE LAS CONSTANCIAS QUE EXHIBE **NO REMITE DICHO CITATORIO**, MOTIVO POR EL CUAL SE DEBE TENER POR NO PRACTICADA LA REFERIDA NOTIFICACIÓN."

No obstante que de la transcripción anterior se advierte que la actora pretendió hacer valer como agravios: que de la orden contenida en el oficio 388-A-2599 no se exhibió citatorio alguno; que la notificación de la orden contenida en el oficio 388-A-2598 no se realizó en el domicilio de la actora, sin que se hubiere requerido la presencia del representante legal y que en el supuesto no concedido de que ésta se hubiere entregado en el domicilio correcto, la entrega se realizó en hora diversa a la señalada en el citatorio, además de que en éste no se indicó que la cita era para recibir la orden de visita; **lo cierto es que esta Juzgadora no puede considerar ninguno de tales argumentos, por no haberse hecho valer en el momento procesal oportuno para ello, en este caso en la ampliación de la demanda, pues a pesar de encontrarse debidamente acreditado que se emplazó al actor con copia de la contestación a la que se anexaron las constancias de notificación de las órdenes de visita de 19 de marzo de 1997, a fin de que las impugnara al momento de formular su ampliación de demanda, también resulta cierto que del examen al escrito de 21 de noviembre de 2000 (folios 307 a 315), se corrobora que no**

hizo valer ningún agravio tendiente a controvertir dichas notificaciones, que se presumen legales al tenor del artículo 68 de Código Fiscal de la Federación por no haber sido impugnadas en ese momento, siendo por tanto evidente que su impugnación hasta el momento de los alegatos resulta extemporánea, por lo que los mismos deben desestimarse por carecer de sustento legal, máxime que no se puede incorporar vía alegatos, lo que no fue manifestado en la demanda y en la ampliación.

Se insiste que el momento procesal oportuno en el que la actora tuvo la oportunidad de objetar o impugnar la legalidad de las notificaciones de las ordenes de visita de referencia, lo fue al formular su ampliación a la demanda, sin que en dicha ampliación se hubieran formulado agravios tendientes a desvirtuar su legalidad, no obstante que era el momento idóneo para refutar las documentales que se exhibieron por la demandada en copia certificada.

En efecto, no se pasa inadvertido que si bien desde el escrito inicial de demanda la actora había objetado la legalidad de la entrega de la orden por no haber mediado el citatorio correspondiente, lo cierto es que la autoridad al contestar la demanda, concretamente respecto a la orden RIM930092/97, exhibió copia certificada del acta parcial de inicio de 26 de marzo de 1997 en el que consta que se entregó un citatorio para la entrega de la orden de visita.

En tal virtud, si frente a la negativa de la actora la autoridad exhibió como pruebas de su parte diversas constancias para demostrar que fue legal la notificación de la orden de visita, esta Juzgadora estima que el momento oportuno para que la actora refutara tales documentales lo era el momento de formular su ampliación a la demanda, cuestión que no se presentó en la especie.

No se puede pasar inadvertido que la ampliación de la demanda tenía precisamente ese propósito, consistente en que la actora pudiera desvirtuar lo manifestado por la autoridad en contra de lo que él señaló originalmente, en el sentido de que no había citatorio, máxime si se considera que la autoridad al contestar la demanda

demostró con las constancias respectivas que sí había existido un citatorio; razón por la que la actora estuvo obligada a desvirtuar tales constancias, al momento de formular la ampliación a la demanda, pues con esa finalidad se ordenó correr el traslado correspondiente con las copias de la contestación y documentos anexos.

Además, debe señalarse que los medios de prueba que pueden acompañarse para demostrar la existencia de un citatorio, no se reducen exclusivamente al citatorio en el caso que nos ocupa, atendiendo al hecho de que el acta parcial de inicio de 26 de marzo de 1997 es un documento público, por ser una constancia de hechos, donde las partes intervinieron ante la presencia de testigos, y si ahí se hace mención de la existencia de un citatorio, debe considerarse que se expidió el mismo, ante la falta de argumentación por parte de la actora en contra de lo asentado en esa constancia, mediante ampliación a la demanda; documento que tiene pleno valor probatorio, atendiendo a que la actora fue completamente omisa en desvirtuar su contenido a través de dicha ampliación, razón por la que esta Juzgadora le otorga pleno valor probatorio en términos de lo previsto por el artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

A mayor abundamiento, debe destacarse que no se pueden incorporar vía alegatos, agravios que no fueron manifestados en la demanda y en la ampliación a la demanda, tal y como erróneamente lo pretendió hacer valer la actora en el juicio que nos ocupa, ya que si los mismos son la reiteración de lo manifestado dentro del juicio haciendo patente al juzgador que con las pruebas aportadas sí se acreditó la pretensión; debe concluirse que los alegatos no forman parte de la litis, en virtud de que no tienen por objeto el aportar argumentos ni pruebas nuevas al juicio.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 20, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 236, 237 y 239, fracción I, y 239-A, fracción I, inciso a) y fracción II, inciso d) del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

R E S O L U T I V O S :

I.- Es **INFUNDADA** la única causal de improcedencia planteada por el Administrador General de Grandes Contribuyentes, en su contestación a la demanda; en consecuencia,

II.- No es de sobreseerse el presente juicio.

III.- La parte actora no probó su acción, en consecuencia:

IV.- Se reconoce la validez de las resoluciones impugnadas contenidas en los oficios números 324-SAT-X-2803 y 324-SAT-X-2804 ambas de fecha 17 de marzo de 1999, emitidas por la Administradora Especial de Auditoría Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a las consideraciones vertidas en la parte considerativa de la presente sentencia.

V.- Mediante atento oficio que se gire al Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, remítasele copia certificada del presente fallo, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el toca DA-236/2002.

VI.- NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Sala Regional que corresponda, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto; y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 1º de octubre de 2002, por mayoría de 3 votos a favor, de los C.C. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio y 2 en contra de los Magistrados María del Consuelo Villalobos Ortíz, y Jorge Alberto García Cáceres, quien se reserva su derecho a formular voto particular.

Fue Ponente en este asunto el C. Magistrado, Luis Malpica de Lamadrid, cuya ponencia fue aprobada en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el 10 de octubre de 2002 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22, fracción III y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

SALAS REGIONALES

SALA REGIONAL DEL NOROESTE I

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

FIANZAS.- LOS INFORMES DE ASUNTOS NO DILIGENCIADOS Y LAS NOTIFICACIONES POR ESTRADOS NO INTERRUMPEN EL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES RESPALDADOS CON PÓLIZAS DE FIANZA.- El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. Haciendo la aclaración de que el término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito, luego, se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad habida dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. De ahí, resulta inexacto pretender que los informes de asuntos no diligenciados así como los acuerdos para notificación por estrados interrumpen el término para la prescripción, pues no debe perderse de vista que si la autoridad no puede efectuar gestión de cobro alguno directamente con la fiada, tiene a su alcance la posibilidad de exigir el importe pendiente de pago directamente con la afianzadora debido a que en términos de lo dispuesto en el artículo 141, fracción III del Código Fiscal de la Federación, la fianza otorgada por instituciones autorizadas, NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN DE EXCUSIÓN, lo que significa que en tratándose de créditos fiscales respaldados con una póliza de fianza, la autoridad recaudadora debe y puede jurídicamente enderezar su acción de cobro contra la afianzadora con el objeto fundamental de que no prescriba el crédito protegido con la fianza por falta de gestión legal de cobro, pues los informes de contribuyente no

localizado no pueden jurídicamente soportar su abstención de enderezar su cobro con quien la ley le permite hacerlo. (1)

Juicio No. 2653/01-01-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de mayo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Lucelia M. Villanueva Olvera.- Secretario: Lic. Juan Carlos Arballo.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Examinadas que son las constancias que integran el expediente en que se actúa y ello a la luz de los argumentos vertidos por las partes, los Magistrados que integran esta Sala consideran que en la especie **se surtió la figura jurídica de la prescripción.**

En efecto, los artículos 2812 y 2813 del Código Civil para el Distrito Federal establecen lo que al tenor se transcribe:

"**ARTÍCULO 2812.-** El fiador tiene derecho de oponer **todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal (...)**".

"**ARTÍCULO 2813.-** La renuncia voluntaria que hiciere el deudor de la prescripción de la deuda, o de toda otra causa de liberación o de la nulidad o rescisión de la obligación, **no impide que el fiador haga valer esas excepciones.**"

En los preceptos legales reproducidos líneas atrás, se establece que el fiador, empresa actora, está en la posibilidad jurídica de combatir los actos de autoridad que deriven del crédito principal cuyo deudor lo es su fiado, entre éstos se encuentra la declaratoria de prescripción de la obligación garantizada con la póliza de fianza número TIJ005-000016-00 debido a que no representa una acción intrínseca del fiado, pues en este caso la fianza se constituyó para garantizar obligaciones fiscales de éste, sin embargo, al enderezarse los actos de ejecución hacia la sociedad afianzadora aquí actora, su causa petendi encuentra su apoyo en los Ordenamientos jurídicos antes expuestos, respaldados además en la **Jurisprudencia** emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época, Apéndice de 1995, Tomo III, Tesis 847, página 648, misma que se transcribe al tenor siguiente:

"**FIANZAS. PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO GARANTIZADO CON LA FIANZA Y CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DEL FISCO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE AQUEL O PARA FIJARLO EN CANTIDAD LÍQUIDA. NO SON EXCEPCIONES PERSONALES DEL DEUDOR PRINCIPAL. Las compañías de fianzas, al impugnar ante el Tribunal Fiscal de la Federación el requerimiento de pago de una póliza, están legitimadas para aducir la prescripción del crédito garantizado**, y la caducidad de las facultades para fincarlo y determinarlo en cantidad líquida, **pues se trata de dos modos de extinción** de la obligación, que entrañan excepciones inherentes a ésta, y **no son personales del deudor principal.**

"Amparo directo 732/75. Afianzadora Insurgentes, S.A. 23 de enero de 1976. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 265/76. Compañía de Fianzas México, S.A. 8 de julio de 1976. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 335/76. La Guardiana, S.A., Cía. General de Fianzas. 2 de septiembre de 1976. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 332/77. Central de Fianzas, S.A. 21 de abril de 1977. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 405/77. Central de Fianzas, S.A. 8 de junio de 1977. Unanimidad de votos."

Ahora bien, en virtud de haber quedado precisada la legitimación de la sociedad actora para relatar la prescripción del crédito fiscal que la autoridad hacendaria le requiere con cargo a la póliza de fianza TIJ005-000016-00 de fecha 09 de enero de 1996, tal modo de extinción se analizará a la luz de lo establecido en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, precepto legal que prevé lo siguiente:

"**ARTÍCULO 146.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.**

"**El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido** y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro **QUE EL ACREEDOR NOTIFIQUE O HAGA SABER AL DEUDOR** o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. **Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución**, **siempre que se haga del conocimiento del deudor** (...)

"Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales."

El precepto legal transcrito es claro al establecer que los créditos fiscales se extinguen por prescripción cuando hubieren transcurrido cinco años **sin interrupción de gestión de cobro alguno** por parte de la autoridad hacendaria a partir del momento en que el crédito es legalmente exigible, entendiéndose por exigibilidad la posibilidad de la autoridad de requerir la efectividad de la póliza de fianza.

En el caso que nos ocupa el crédito fiscal protegido con la póliza de fianza cuyo importe se trata de hacer exigible a la actora a través del requerimiento de pago materia de este juicio, se hizo exigible a partir del mes de **septiembre de 1994**. Confirma esta decisión la relatoría de los siguientes antecedentes:

1.- Reconocen las partes que con fecha **22 de mayo de 1992** la sociedad ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN COMPUTARIZADA, S.C., fiada de la actora autocorrigió su situación fiscal en materia de impuesto al valor agregado correspondiente al período comprendido del mes de enero a noviembre de 1991, solicitando pago en parcialidades por el importe de $15'774,000.00 (quince millones setecientos setenta y cuatro mil pesos, moneda nacional vigente en el año de 1992) actualmente $15, 774.00. Esta solicitud es consultable a fojas 30 de autos.

2.- En el mandamiento de ejecución controvertido en este juicio y en el acta de incumplimiento como fiado, la autoridad hace referencia expresa al hecho de que la fiada cubrió exclusivamente cinco parcialidades hasta el día 03 de enero de 1992, dejando de cubrir la sexta, séptima y octava parcialidad sucesiva correspondientes a los meses de noviembre de 1992, diciembre de 1992, y enero de 1993, pagos que debió haber efectuado el día 04 de enero de 1993.

3.- A fojas 45 (cuarenta y cinco) del expediente en que se actúa, corre agregada el **acta de requerimiento de pago** notificada a la fiada de la actora el día **14 de septiembre de 1994**, documento a través del cual le concedió un plazo de 06 días hábiles para que enterara el importe del crédito número 3833 el cual tenía como monto histórico la suma de $15, 774.00.

4.- La empresa **FIANZAS ASECAM, S.A**., actora en este juicio con fecha 09 de enero de 1996, expidió ante la Tesorería de la Federación póliza de fianza número TIJ005-000016-00 para respaldar lo siguiente: "LOS IMPUESTOS, RECARGOS, ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 1991, DERIVADO DE IMPUESTOS IVA, PERSONA MORAL, Y FIS. DED. ACT. EMPRES. PAGOS PROVISIONALES Y COMPLEMEN. ARTÍCULO. 5 RÉGIMEN GENERAL LEY 1, QUE HACEN UN TOTAL DE $36, 086.00 (...) **CON MOTIVO DEL CONVENIO DE PAGOS EN 36 PARCIALIDADES, CRÉDITO No. Z-003833,** (...)"

5.- Posteriormente con fecha **15 de abril de 1996**, nuevamente la Administración Local de Recaudación de esta localidad emitió en contra de la fiada de la actora el **acta de requerimiento de pago** en la que le concede un término de seis días para enterar el monto del crédito convenido en parcialidades. Este requerimiento es apreciable en la foja 47 del expediente en que se actúa.

6.- El titular de la Administración Local de Recaudación de esta ciudad, advirtiendo que el crédito en referencia se encontraba pendiente de pago, esto es de que persistía el incumplimiento al convenio de pago en parcialidades, notificó a la sociedad fiada el 08 de julio de 1997, previo citatorio, la CARTA INVITACIÓN PROAFI II.

7.- Con fecha 13 de agosto de 2001, el Titular de la Administración Local de Recaudación de Tijuana en el Estado de Baja California mediante oficio número 322-SAT-02-III-10593, apercibió a la fiada de la actora de hacer efectivo el importe de la fianza número TIJ005-000016-00 con importe de $36, 086.00 con la que se protegió el adeudo controlado con el número de crédito 3833, ante la renuencia de efectuarse el pago del saldo insoluto. Este último oficio tiene **informe de asunto no diligenciado** así como **acuerdo para notificación por estrados**. Estas documentales corren agregadas en autos a fojas 50 a 54.

De la relatoría de antecedente, se colige por los Magistrados que integran esta Sala que la prescripción del crédito fiscal protegido con la póliza de fianza número TIJ005-00016-00 de fecha 09 de enero de 1996, se dio entre **el 15 de abril de 1996** (segunda interrupción de la prescripción por gestión de cobro de la autoridad notificada a la fiada [la primera interrupción lo fue el 14 de septiembre de 1994 a través del primer requerimiento de pago]) y el 24 de septiembre de 2001, fecha de notificación del mandamiento de ejecución controvertido en este juicio, como se advierte de las constancias de notificación que obran a fojas 21 y 22 de autos, pues la posibilidad de la autoridad exactora de hacer efectivo el importe del saldo insoluto, descontadas las dos interrupciones que existieron por gestión de cobro ante la fiada, venció el 15 de septiembre de 2001, luego entonces es a todas luces fundado el agravio de prescripción planteado por la actora, pues no debe perderse de vista que si la autoridad no puede efectuar gestión de cobro alguno directamente con la fiada, tiene a su alcance la posibilidad de exigir el importe pendiente de pago, con la afianzadora, debido a que en términos de lo dispuesto en el artículo 141, fracción III del Código Fiscal de la Federación, la fianza otorgada por institución autorizada, NO GOZA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN DE EXCLUSIÓN, lo que significa que en tratándose de créditos fiscales respaldados con una póliza de fianza, la autoridad recaudadora **debe y puede jurídicamente** enderezar su acción de cobro contra la afianzadora con el objeto fundamental de que no prescriba el crédito protegido con la fianza por falta legal de cualesquier gestión de cobro que efectúe con un contribuyente no localizado.

No desmerecen la determinación de esta Sala, las actuaciones que llevó a cabo la Administración Local de Recaudación de esta localidad los días 08 de julio de 1997 y 13 de agosto de 2001, por cuanto que ellas refieren a una CARTA INVITACIÓN PROAFI II y a otro requerimiento de pago, no diligenciados, por lo que al no haber sido notificados directamente a la fiada no pueden afectar los intereses jurídicos de la sociedad actora, **resultando por ello procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada**, dados los motivos y fundamentos legales expuestos en este considerando.

(...)

En mérito de lo antes expuesto y con fundamento además en los numerales 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, esta Juzgadora;

R E S U E L V E :

I.- La parte actora probó su pretensión en este juicio, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada cuyas características quedaron debidamente precisadas en el resultando 1o. de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran esta Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos, **Licenciado Juan Carlos Arballo**, quien da fe.

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- Es infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento, planteada por la autoridad demandada, toda vez que en el caso no se da la hipótesis de improcedencia a que se refiere en su escrito de contestación de demanda, dado que el artículo 291 de la Ley del Seguro Social, en relación a la instauración del procedimiento administrativo de ejecución, derivado de los créditos que se adeuden al Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que: "El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, se aplicará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por el propio Instituto a través de oficinas para cobros del citado Instituto Mexicano del Seguro Social.- Las oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución, con sujeción a las normas del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables. Las propias oficinas conocerán y resolverán los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación, relativos al procedimiento administrativo de ejecución que lleven a cabo.-", por lo que relacionando, el artículo 117, fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, que establece la procedencia del recurso de revocación en contra de los actos derivados de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, y el artículo 120 del mismo Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que la interposición del recurso de revocación será optativo antes de acudir a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; debe llegarse a la conclusión que si el actor en el presente juicio fiscal en los términos de los dispositivos legales antes mencionados, resolvió interponer el juicio de nulidad y no agotar previamente el recurso de revocación, que podía en su caso interponer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ello no es motivo para sobreseer el presente juicio fiscal en los términos que solicita la autoridad contestante, dado que no se surte la hipótesis de improcedencia, en que

la autoridad pretende encausar al promovente, puesto que no existe violación al principio de definitividad. (2)

Juicio No. 1122/01-02-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de marzo del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Mauricio Fernández y Cuevas.- Secretario: Lic. Lázaro Figueroa Ruíz.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

A juicio de los suscritos Magistrados, se considera que es infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento, planteada por la autoridad demandada, toda vez que en el caso no se da la hipótesis de improcedencia a que se refiere en su escrito de contestación de demanda.

Ello en razón de que el artículo 291 de la Ley del Seguro Social en relación a la instauración del procedimiento administrativo de ejecución, derivado de los créditos que se adeuden al Instituto Mexicano del Seguro Social, señala:

> "**ARTÍCULO 291.-** El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente al Instituto Mexicano del Seguro Social se aplicará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por el propio Instituto a través de oficinas para cobros del citado Instituto Mexicano del Seguro Social.- Las oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución, con sujeción a las normas del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables. **Las propias oficinas conocerán y resolve-**

rán los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución que lleven a cabo.- Asimismo podrán hacer efectivas las fianzas que se otorguen a favor del Instituto para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros caso en que se estará exclusivamente a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación (...)".

Ahora bien, el artículo 117, fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, establece la procedencia del recurso de revocación en contra de los actos derivados de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, puesto que dicha disposición legal establece:

"**ARTÍCULO 117.- El recurso de revocación procederá contra: (...).- II. Los actos de autoridades fiscales federales que: (...) b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley.**

"(...)"

Relacionado con la anterior disposición legal el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la interposición de dicho medio de defensa establece:

"**ARTÍCULO 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.**

"(...)"

De tal forma que si el actor en el presente juicio fiscal en los términos de los dispositivos legales antes mencionados, resolvió interponer el juicio de nulidad y no agotar previamente el recurso de revocación, que podía en su caso interponer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ello no es motivo para sobreseer el presente juicio fiscal en los términos que solicita la autoridad contestante, dado que no se

surte la hipótesis de improcedencia en que la autoridad pretende encausar al promovente, puesto que no existe violación al principio de definitividad como infundadamente lo sostiene la autoridad demandada; como consecuencia de lo anterior y al resultar infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento, se resuelve que no debe sobreseerse el presente juicio fiscal.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 236, 237, 238, fracción II y 239, fracción III del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La parte actora probó su acción, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, en los términos y para los efectos precisados en el considerando tercero de la presente resolución.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario, Licenciado Lázaro Figueroa Ruíz, que da fe.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DEDUCCIONES POR ADQUISICIONES DE MERCANCÍAS EN EL EXTRANJERO.- De conformidad con el artículo 22, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes pueden efectuar deducciones relativas a adquisiciones, por lo que si la autoridad fiscal rechaza una deducción, bajo el argumento de que no es deducible porque la mercancía fue importada en un año posterior al en que se dedujo, ello resulta ilegal, toda vez que de conformidad con lo que establece el artículo 24, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las adquisiciones en el extranjero, sólo pueden ser deducidas hasta el momento en que se enajenen o importen; por lo que si la fracción XII de este mismo dispositivo legal dispone, que la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúe la deducción y si en el caso el contribuyente presentó su declaración anual del ejercicio de 1996 el día 31 de marzo de 1997, y la factura de la mercancía adquirida en el extranjero corresponde al ejercicio declarado, además la importación se realizó dentro de los tres primeros meses del ejercicio en que se presentó la declaración, es perfectamente deducible, porque independientemente que la mercancía se haya importado en un año posterior, pero antes de la presentación de la declaración anual, ésta fue adquirida en el período que se deduce. (3)

Juicio No. 533/00-01-01-5.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de marzo del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Mauricio Fernández y Cuevas.- Secretaria: Lic. Guadalupe Quiñónez Armenta.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Los suscritos Magistrados que integran esta Sala Regional del Noroeste II, consideran el agravio en estudio fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, atendiendo al siguiente razonamiento.

La litis en el presente asunto se constriñe y limita a establecer si las deducciones realizadas por el actor por compras efectuadas en el extranjero por la cantidad de $614,963.98, y que fueron declaradas en el ejercicio fiscal de 1996, son válidas, toda vez que, según la autoridad, la importación de dichas mercancías se realizó hasta 1997, en mérito de lo cual la citada autoridad con fundamento en lo que establece el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, rechaza dichas deducciones.

Ahora bien, para deliberar al respecto, se hace preciso transcribir el contenido del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que básicamente establece: ***"Artículo 24.- Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: (...) XVI.- Que en el caso de adquisición de bienes de importación se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación definitiva (...).- El contribuyente sólo podrá deducir las adquisiciones de los bienes que mantenga fuera del país, hasta el momento en que se enajenen o se importen, salvo que dichos bienes se encuentren afectos a un establecimiento permanente que tenga en el extranjero.- (...) XXII.- Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Además, la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción*** **(...)"**

De lo anterior, esta Sala infiere que las deducciones deben reunir ciertos requisitos; que en cuanto a la adquisición de bienes de importación se deberán deducir cuando se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación definitiva y hasta que se importe; que además en la fracción XXII se señalan los plazos para cumplir con los requisitos para la deducción, estableciéndose que deberán realizarse las operaciones correspondientes a más tardar el día en que el contribuyente debe presentar su declaración, debiendo además coincidir la documentación comprobatoria de un gasto deducible con el ejercicio por el que se efectúa la deducción.

Relacionando el contenido del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el artículo 22, fracción II de este mismo Ordenamiento legal, en el que se establece que los contribuyentes pueden efectuar deducciones relativas a la adquisición de mercancías; en ese orden de ideas, al quedar establecido que el caso que nos ocupa se trata de una adquisición de mercancías en el extranjero, y por consiguiente es deducible de conformidad con el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo falta determinar cuándo deberá efectuarse la deducción.

De la interpretación armónica que esta Sala Juzgadora hace a los artículos 22 y 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtiene que la deducción debe efectuarse en la declaración de 1996, por ser esta fecha cuando se adquirió la mercancía, independientemente que la mercancía no hubiese sido importada hasta 1997, lo anterior en virtud de que de acuerdo al artículo 24, fracción XXII ya comentado, los plazos para cumplir con los requisitos para las deducciones deben de ser a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración y en el período que corresponda a la fecha de la documentación comprobatoria del gasto deducible, que en el caso es la factura de compra, que corresponda al ejercicio por el que se hace la deducción, y que la autoridad demandada relaciona en oficio de observaciones a foja 48 de autos, de lo que se desprende que casi todas las facturas fueron de 1996, con excepción de las facturas número 7975 de 03 de marzo de 1997, 7973 de 27 de febrero de 1997, 3698 de 08 de febrero de 1997 y 712 de 07 de marzo de 1997; por lo que si en el caso el accionante presentó su declaración el día 31 de marzo de 1997, ante la

Institución Bancaria autorizada Banamex, S.A., de acuerdo al oficio de observaciones, esto es, con posterioridad a la fecha de importación de las mercancías adquiridas en 1996 e **importadas** dentro de los tres primeros meses de 1997, tal como se aprecia en la relación contenida en el oficio de observaciones a hoja 3, documento que se encuentra visible en el expediente en estudio de las fojas 45 a la 49, todo ello hace arribar a esta Sala, que es fundado el agravio que se analiza y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que emita una nueva resolución en el que únicamente se considere como no deducibles las importaciones realizadas en el primer trimestre de 1997, y que fueron adquiridas en ese mismo año, toda vez que como anteriormente se dijo, las deducciones que el contribuyente realizó, de conformidad con el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la documentación comprobatoria (facturas) debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, fracción II y 239, fracción III y demás relativos y aplicables del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La demandante acreditó sus pretensiones, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, por los motivos y para los efectos precisados en el considerado cuarto de la presente resolución.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO AL ACTOR Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria, Licenciada **GUADALUPE QUIÑÓNEZ ARMENTA**, que da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL. NO ES NECESARIO FUNDARLA EN LA PARTE RELATIVA DE LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE PRECISA SU EMISIÓN EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA.- Quien suscribe una resolución administrativa actuando en suplencia del titular de la dependencia competente para emitirla, no está obligado a fundar, en la parte relativa que precisa los fundamentos y motivos que justifican la suplencia, la competencia material y territorial para emitirla, pues ello constituye un requisito previo de legalidad que en términos del artículo 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, debe contener invariablemente todo acto de autoridad, independientemente de que sea emitido por el titular de la dependencia o por un funcionario de inferior jerarquía actuando en suplencia de éste; luego entonces, si del contenido de una resolución administrativa se advierte que la autoridad facultada para emitirla, funda y motiva debidamente su competencia, tanto material como territorial, es innecesario que esa fundamentación y motivación se contenga también en la parte correspondiente de la misma, en la que se hace alusión a su emisión por suplencia del funcionario que debió emitirla. (4)

Juicio No. 1493/01-02-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de marzo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. Manuel Gustavo Anguiano Germán.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Esta Sala Juzgadora considera que los argumentos jurídicos que vierte la enjuiciante son infundados para declarar la nulidad del oficio controvertido, por los motivos que se precisan a continuación.

En primer lugar, devienen en infundados los alegatos de la actora en el sentido de que la autoridad demandada trata de hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal mediante un oficio sancionador del que se advierte que es un acto viciado, como lo es la fundamentación de firma por ausencia del Subadministrador que firma el oficio requisitorio, en virtud de que en éste no se cita debidamente la competencia territorial de la autoridad que la emitió.

Ello obedece al hecho de que si bien es cierto, del oficio que contiene el requerimiento de obligaciones omitidas, cuyo incumplimiento motivó la emisión de la resolución sancionatoria, se advierte que el C. LIC. DARVELIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Subadministrador de Control de Créditos, funcionario que lo emitió en Suplencia del Administrador Local de Recaudación de Hermosillo, Sonora, fundamentó su actuación en lo dispuesto por el artículo 10, penúltimo párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en la época de su emisión, esto es, el publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de marzo de 2001; esa circunstancia no se traduce en una falta de fundamentación de la competencia territorial de la autoridad que emitió el oficio de requerimiento de obligaciones fiscales.

En efecto, la disposición reglamentaria precisada con antelación (artículo 10, penúltimo párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria), en su parte conducente dispone textualmente lo siguiente:

> "(...) Los Administradores serán suplidos, indistintamente, por los Subadministradores que de ellos dependan. Los Subadministradores, Jefes de Departamento y Supervisores, serán suplidos por el servidor público inmediato inferior que de ellos dependa. Los Administradores de Aduanas serán suplidos, indistintamente, por los Subadministradores o por los Jefes de Departa-

mento que de ellos dependan, en las salas de atención a pasajeros por los Jefes de Sala y en las secciones aduaneras, por los Jefes de Sección.

"(...)"

Como se observa, el precepto transcrito sólo regula la facultad que tienen los funcionarios de inferior rango para suplir en sus funciones a sus superiores inmediatos, esto es, la facultad que tiene un Subadministrador para suplir la actuación del Administrador, o la que tiene un Jefe de Departamento para suplir al Subadministrador, y así sucesivamente; por lo tanto, es incorrecta la apreciación de la demandante en cuanto a que de dicha fundamentación deba inferirse la competencia territorial de la autoridad que emitió el acto administrativo.

En esa tesitura, si el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de marzo de 2001, en que fundó la suplencia con que actúa el Subadministrador de Control de Créditos, abrogó el diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 03 de diciembre de 1999, según se advierte de su artículo PRIMERO transitorio que establece: "**PRIMERO**. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se abroga el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre de 1999, así como todas las disposiciones reglamentarias o administrativas que se opongan al presente Ordenamiento"; deviene en infundado el argumento de agravio sostenido por la demandante en cuanto a que la autoridad demandada para fundar debidamente su competencia material y territorial debió señalar los artículos Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, Quinto Transitorio del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación **el 03 de diciembre de 1999, así como el artículo Primero**, apartado I, fracción I, punto 3, inciso e) del Acuerdo por el que se delegan facultades a los Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 09 de marzo de 1989, modificado mediante Acuerdos publicados en

el mismo Órgano oficial el 15 de marzo de 1993, 14 de febrero y 24 de octubre de 1994 y 18 de diciembre de 1996.

Ello es así, porque en principio de cuentas la autoridad demandada no tenía por qué fundar su competencia tanto material como territorial en lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 1999, que en su texto establecía:

> "**QUINTO.-** En tanto se expidan los acuerdos por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, continuarán siendo aplicables, en lo conducente, los acuerdos por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1996 y por el que se delegan facultades a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 09 de marzo de 1989, modificado mediante acuerdos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación, el 15 de marzo de 1993, 14 de febrero de 1994 y el 24 de octubre de 1994."

Debido a que en la fecha en que se emitió el oficio de requerimiento de obligaciones el citado precepto legal resultaba inaplicable en virtud de haber quedado sin efectos con motivo de la entrada en vigor del nuevo **Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001, que abrogó el diverso de fecha 03 de diciembre de 1999.

En ese orden de ideas, conviene señalar que no obstante la inaplicación de la disposición transitoria transcrita que quedó sin efectos al haberse abrogado el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del que formaba parte, y que regulaba la aplicación de los acuerdos por el que se señala el nombre, sede y circuns-

cripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el que se delegan facultades a los servidores públicos de la misma Secretaría, en tanto se publicaban los mismos acuerdos, pero orientados a regular la actuación del Servicio de Administración Tributaria; lo cierto es que contrariamente a lo aducido por la enjuiciante, la autoridad sí funda legalmente su competencia territorial en lo dispuesto por el artículo Segundo, párrafo segundo, punto número 9 del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de agosto de 2000, como se aprecia del propio oficio de requerimiento de obligaciones controvertido.

Por otra parte, se estima que la autoridad demandada tampoco estaba obligada, para fundar su competencia material, a precisar los preceptos que la actora señala en su expresión de agravios del Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 09 de marzo de 1989; lo anterior en virtud de que el Subadministrador de Control de Créditos no emitió el referido oficio de requerimiento de obligaciones con base en el Acuerdo delegatorio de facultades, sino que lo hizo actuando en suplencia de la Administración Local de Recaudación de Hermosillo, por lo que dicha fundamentación y motivación dados en el requerimiento de obligaciones fiscales, son suficientes para tener por satisfecha la exigencia prevista en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que entre otros requisitos dispone en sus fracciones III y IV, que los actos administrativos que se deban notificar deberán estar debidamente fundados y motivados y ostentar la firma del funcionario competente para emitirlos, y en consecuencia, también para tener por legalmente suplida la competencia del Administrador Local de Recaudación de Hermosillo, pues basta con que el funcionario que suplió la función del titular de la dependencia facultado para emitir el acto de autoridad, haya establecido que lo hacía en su carácter de Subadministrador, y que se haya fundamentado en el artículo 10, penúltimo párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, para considerar cumplidos los requisitos de fundamentación y motivación, por ser ellos (los subadministradores) únicamente, quienes indistintamente pueden suplir en sus fun-

ciones al titular de dicha Dependencia, sin que para ello sea necesario, como lo aduce la enjuiciante, la existencia de la fundamentación del Acuerdo delegatorio de facultades, por tratarse la delegación de facultades y la suplencia de dos figuras jurídicas distintas, pues en la primera el servidor público que adquiere las facultades con motivo del acto jurídico de la delegación, las ejerce de acuerdo a su criterio, y es responsable directo del acto y sus consecuencias, esto es, cuando una autoridad actúa en uso de facultades delegadas, lo hace en nombre propio con la atribución que le fue delegada por el titular en la disposición o acuerdo correspondiente, y no en sustitución de la autoridad que realizó la delegación; en tanto que la suplencia es una figura jurídica prevista en la ley, pero dejando al Reglamento Interior de cada Secretaría, determinar los casos en que operará, en la que el suplente actúa sustituyendo al titular de la dependencia como consecuencia de su ausencia, por lo que debe entenderse que no actúa en nombre propio, sino en el de la autoridad que sustituye, a fin de evitar la paralización de la marcha normal de la dependencia, y no necesita cumplir con la formalidad de la delegación (que esté prevista en ley, que no se trate de facultades exclusivas y la existencia de un acuerdo delegatorio que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación), sino que basta mencionar que con ese carácter se está actuando y, desde luego, funde legalmente su actuación a través del precepto que lo faculte.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, esta Sala;

R E S U E L V E :

I.- La parte actora no probó su acción en este juicio, en consecuencia;

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, la cual fue debidamente precisada en el resultando 1o. del presente fallo, ello en atención a los motivos y fundamentos expuestos en el mismo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante al C. Secretario, Licenciado **MANUEL GUSTAVO ANGUIANO GERMÁN**, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO RESOLVERSE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES.- El representante del Instituto Mexicano del Seguro Social considera que es improcedente el juicio, toda vez que desde su perspectiva no se configura la negativa ficta al no ser contemplada por la Ley de la materia, y además porque no puede aplicarse supletoriamente el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación; argumento que resulta infundado toda vez que si bien es cierto que la citada figura de la negativa ficta no se encuentra regulada directamente por la Ley del Seguro Social ni por el Reglamento del Recurso de Inconformidad, sin embargo este último en su ordinal 1, establece que en lo no previsto deben aplicarse las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, por lo cual si esta Legislación en su artículo 37 dispone que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deben ser resueltas en un plazo de tres meses, y que en los casos en que transcurra sin ser notificada la resolución debe considerarse que existe una respuesta negativa, como así aconteció en la especie en que transcurrió dicho lapso sin que exista constancia de que se haya resuelto el recurso de inconformidad por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, es evidente que se configura la negativa ficta, misma que es impugnable ante esta Sala de acuerdo con lo establecido por el artículo 11, penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (5)

Juicio No. 412/00-01-01-5.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Mauricio Fernández y Cuevas.- Secretaria: Lic. Guadalupe Quiñónez Armenta.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Los que integran esta Sala Regional del Noroeste II, consideran infundada la causal de improcedencia y motivo de sobreseimiento denunciada por la autoridad en virtud de lo siguiente:

Ciertamente el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, prevé las hipótesis para considerar cuándo un juicio es improcedente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así mismo el artículo 11 de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señala de los juicios en que deberá conocer este Tribunal, especificándose en el penúltimo párrafo que: "**También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo** (...)" de lo que se infiere que esta Sala puede conocer de la negativa ficta atribuida al H. Consejo Consultivo Delegacional del Estado de Sinaloa, por cuanto que según se advierte del escrito de recurso de inconformidad, el actor acudió ante esa autoridad, impugnando la liquidación de Gastos de Ejecución de fecha 28 de julio de 1999, que causan un perjuicio al actor de índole fiscal, prevista en la fracción I de la Ley Orgánica de este Tribunal, y si bien es cierto que la figura de la negativa ficta, no se encuentra regulada por la Ley del Seguro Social y por el Reglamento del Recurso de Inconformidad, también lo es que en el artículo 1 de ese Reglamento se establece la supletoriedad del recurso de inconformidad en lo no previsto a las del Código Fiscal de la Federación; por ello esta Sala Juzgadora, considera infundada la causal de improcedencia y motivo de sobreseimiento planteado por el Instituto demandado.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 236, 237, 238, a contrario sensu y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La demandante no acreditó sus pretensiones, en consecuencia:

II.- Se declara la validez de la resolución impugnada, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria Licenciada **GUADALUPE QUIÑÓNEZ ARMENTA**, que da fe.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

CAPITAL CONSTITUTIVO. CASO EN QUE ES PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN AUN Y CUANDO EL AVISO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR SE HAYA PRESENTADO EN TIEMPO.- De conformidad con el artículo 15, fracción I de la Ley del Seguro Social, los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de un plazo no mayor de cinco días; por lo cual, interpretando aisladamente dicha disposición se podría concluir en que no procede el fincamiento del capital constitutivo a la parte actora, toda vez que presentó el aviso correspondiente al trabajador accidentado, dos días después de la fecha en que declara ingresó a su servicio; sin embargo, al haber acontecido el siniestro cuando aún no se encontraba inscrito ante el Instituto, resulta aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 77 de la misma Legislación, que dispone entre otras cosas, que los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados entregados al Instituto después de ocurrido el siniestro, en ningún caso liberan al patrón de la obligación de pagar los capitales constitutivos; en consecuencia, si bien no existe infracción al artículo 15, fracción I de la Ley del Seguro Social al haberse dado de alta al trabajador dentro de los cinco días posteriores al inicio de la relación laboral, de conformidad con el diverso artículo 77 de la Ley de la materia, ello no es motivo suficiente para eximir al patrón de su obligación de pago cuando, como en el caso, se inscribió a su empleado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con posterioridad a ocurrido el accidente; por lo cual, de la debida interpretación de ambos preceptos legales, se concluye que la autoridad demandada válida y legalmente fincó a cargo de la hoy enjuiciante el capital constitutivo derivado de los servicios y prestaciones otorgados al trabajador. (6)

Juicio No. 985/01-02-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de abril de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Mauricio Fernández y Cuevas.- Secretario: Lic. Juan Carlos Encinas Valdez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Los Magistrados que integran este Órgano Jurisdiccional consideran infundados los argumentos de la enjuiciante en virtud de que tanto el capital constitutivo de fecha 19 de mayo de 2000 como la resolución impugnada que le confirma, cumplen con los requisitos de motivación y fundamentación previstos en los artículos 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, como así lo determinó la autoridad demandada al resolver el recurso de inconformidad el capital constitutivo cumple con la debida fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe de contener ya que a manera de motivación se establece en la hoja número 1 del mismo, que de las constancias que integran el expediente con número de registro patronal E63 16622 10, abierto a nombre de la hoy actora, se desprendía que incumplió con las obligaciones establecidas en la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social vigente, al haber omitido presentar el aviso de inscripción del trabajador, asimismo que se acreditaba la configuración de los supuestos previstos en los artículos 77 u 88 de la misma Legislación; que se procedió a otorgar al trabajador las prestaciones médicas y económicas correspondientes, porque el patrón no lo tenía registrado al momento del accidente que sucedió el 10 de noviembre de 1998, presentando el aviso al día siguiente con fecha de ingreso del día 9 de ese mismo mes y año; también en la hoja número 2 del capital constitutivo se establecen cada una de las prestaciones en especie otorgadas al trabajador, la cantidad de cada una de las mismas y su totalidad; en esa misma página se indica que las prestaciones se fundamentan en los artículos 77 y 79 de la Ley del Seguro Social vigente; en la primera página se establece también el salario base de pago para el subsidio, el importe del subsidio pagado por los días de incapacidad que se señalan, así como el procedimiento para su obtención y como fundamentos

los artículos 79 y 58-I de la citada Ley; por último, en la página número 3 se citan los fundamentos legales para fincar el capital constitutivo y los que le otorgan facultades al Instituto; en tales condiciones, la autoridad no es imprecisa de tal forma que el actor desconozca los motivos y fundamentos del acto y se le deje en estado de indefensión; consecuentemente no debió la demandante limitarse a sostener la falta de estos requisitos legales, sino que en su caso, debió acreditar que los elementos valorados por la autoridad eran incorrectos.

Es aplicable al caso concreto la Tesis de Jurisprudencia número 279 sustentada por la Sala Superior de este Tribunal Fiscal de la Federación cuyo tenor es el siguiente:

> "***MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.- PARA QUE SE DEN ESOS REQUISITOS, BASTA QUE QUEDE CLARO EL RAZONAMIENTO SUBSTANCIAL.-*** *El artículo 16 Constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos; dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al particular para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por la autoridad, podrá fundar la declaración de nulidad de la resolución impugnada por falta del requisito formal de motivación.*"

Considera el actor que no resultan aplicables al caso los artículos 77 y 79 de la Ley del Seguro Social, argumento que resulta inoperante e infundado, en virtud de que no precisa por qué la inaplicabilidad de dichos preceptos legales, la parte de la resolución que se altera con el evento que denuncia y cómo afecta sus intereses jurídicos; también infundado porque el artículo 77 en cuestión indica en la parte de

interés al caso, que es obligación de los patrones asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo y que de no dar cumplimiento deberá enterar al Instituto, en caso de siniestro, el capital constitutivo; por su parte el artículo 79 establece los rubros que integran este último, por tanto, contrario a las expresiones de la parte actora, los citados numerales tienen aplicación en los casos en que, como acontece en el que se analiza, el siniestro del trabajador haya sucedido cuando aún no se encontraba inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y por ende se procede a fincar el capital constitutivo a cargo del patrón omiso.

Por otra parte, si bien niega lisa y llanamente se hayan establecido las operaciones matemáticas utilizadas por la autoridad y que se le haya brindado la garantía de audiencia, esta Sala considera que dichas exigencias rebasan el contenido y alcance de los artículos 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es suficiente que al determinarse el cobro del capital constitutivo al respecto se hayan señalado con claridad los conceptos que le conforman así como el procedimiento y cantidades utilizadas, máxime que sí se advierte que al calcularse el subsidio se establecen las operaciones de que se valió la autoridad, de igual manera se establecieron cada uno de los elementos que conforman las prestaciones en la especie cuya suma resultó ser la cantidad de $82,188.00; por último, a dicha cantidad se le sumó el subsidio determinado en primer término y los gastos administrativos, sumando finalmente la cantidad de $103,419.96; por lo tanto, es equivocado que la autoridad no haya señalado el procedimiento y las operaciones utilizadas al determinar la obligación fiscal; por lo que respecta a que se violentó la garantía de audiencia por no dársele la oportunidad de impugnar la determinación de la autoridad recurrida, dicho alegato también resulta infundado toda vez que no existe legislación que obligue a la autoridad a darle vista al patrón para informarle sobre los fundamentos, motivos, cantidades, operaciones, etc., que se utilizarán para fincar el capital constitutivo, en virtud de que la citada garantía de audiencia se respeta al darle la misma ley la oportunidad de desvirtuar tales conceptos al momento de interponer el recurso de inconformidad o en su caso, el juicio de nulidad ante este Tribunal, y aunque la parte actora ejercitó ambos medios de defensa, no desvirtuó los datos asentados en la documental recurrida.

Por último, manifiesta que de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, el Consejo Consultivo Delegacional tiene la facultad de decretar diligencias para mejor proveer al considerar que los elementos probatorios aportados son insuficientes; alegato que también deviene infundado toda vez que según se desprende de autos, y específicamente de la resolución traída a juicio, la autoridad demandada no consideró insuficientes los elementos probatorios a su alcance para resolver el recurso de inconformidad, sino que por el contrario de acuerdo con los mismos llegó a la conclusión de que los argumentos del patrón eran infundados, por tal motivo no tenía por qué decretar otro tipo de diligencias, o por lo menos, el actor no precisa qué actuaciones quedaron pendientes de diligenciarse previo a la emisión de la resolución impugnada, por consiguiente también es incorrecta su apreciación al respecto.

Al resultar infundados los argumentos que expone el actor, no se puede considerar ni acredita que la resolución impugnada se haya emitido de manera improcedente y carente de justicia y equidad como lo aduce, ya que se acataron por la autoridad las disposiciones legales aplicables y vigentes, tanto al fincarse el capital constitutivo como al proceder la resolutora a confirmarlo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238 a contrario sensu y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La parte actora no acreditó sus pretensiones, en consecuencia;

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada en los términos precisados en los considerandos segundo y tercero del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario Licenciado **JUAN CARLOS ENCINAS VALDEZ**, que da fe.

LEY ADUANERA

ACTA DE IRREGULARIDADES LEVANTADA EN EL DESPACHO ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS.- DEBE FORMULARSE EN LA MISMA FECHA EN LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- Si bien es cierto que los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera sólo exigen, que con motivo de la revisión de los documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se tenga conocimiento de cualquier irregularidad, que dé lugar al pago de contribuciones, cuotas compensatorias o imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de la Ley de la materia, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, no menos cierto es que cuando las autoridades fiscales se inclinen por el camino del levantamiento de la acta de hechos, sin lugar a dudas, por una cuestión de orden fáctico, el acta correspondiente se debe levantar en el momento mismo de la verificación, ya que es en ese momento cuando se conoce y constata por el personal verificador la irregularidad que le consta, la aludida actuación, que a fin de respetar la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional, debe levantarse ante el interesado (en este caso con el agente aduanal que resulta el representante del importador o en su caso con el representante o apoderado legal de aquél) y ante la presencia de dos testigos de asistencia, ello derivado de que la irregularidad que se le imputa al importador no es una cuestión de orden documental, esto es que derive de los propios datos asentados en el pedimento, lo cual permitiría que con posterioridad al reconocimiento fuera levantada el acta o el escrito correspondiente continente de tales irregularidades, sino que trata de una confronta documental y física de las mercancías a través de la cual se conocen que las características de éstas no corresponden con las asentadas en el pedimento respectivo y que resultan el motivo de la irregularidad, lo cual hace un requisito de legalidad, el de que en la misma fecha en que se lleve a cabo el reconocimiento de las mercancías, se levante el acta de irregularidades correspondiente ante el legalmente interesado y ante la presencia de los testigos de asistencia, y no así en fecha posterior, ya que en esa

fecha nada le consta a los que ahí intervienen, pues la irregularidad se conoció en una fecha anterior que fue cuando se practicó el reconocimiento, habida cuenta que en la formulación de las actas es menester se asienten los hechos y omisiones que en el acto mismo de verificación se conozcan, en razón de que su levantamiento en fechas posteriores vician su contenido, ya que los hechos u omisiones que se conocieron quedan en la mente de los verificadores susceptibles de distorsionarse con el tiempo que trascurre desde la fecha misma de su conocimiento, hasta su cristalización a la vida jurídica, que surgen al momento de estamparse en el acta correspondiente. (7)

Juicio No. 1048/01-02-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de abril de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. Ricardo Moreno Millanes.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Los suscritos Magistrados que integran el presente cuerpo colegiado, estiman parcialmente fundados los conceptos de anulación que analizan, pero suficientes para declarar la nulidad de la resolución traída a juicio, por las siguientes consideraciones jurídicas.

En efecto, son infundados por cuanto a que el artículo 46 de la Ley Aduanera, vigente para el año de 2001, época en que se llevaron a cabo las facultades de comprobación, señala textualmente lo siguiente:

"**ARTÍCULO 46.-** Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del

reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda en los términos de los artículos 150 a 153 de esta Ley. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero."

Ahora bien, tomando en cuenta que la resolución impugnada tiene su origen en el segundo reconocimiento aduanero que realizó la autoridad demandada de los documentos y mercancías que ante ella presentó el demandante con fecha 23 de marzo de 2001, para el despacho de las mercancías amparadas en el pedimento de importación número 0457-1008424, de cuya revisión la autoridad arribó a la determinación de sancionar al demandante en virtud de lo siguiente: "En el número de orden 09, declaran en el pedimento la descripción de la mercancía como 'software para computadora' bajo la fracción arancelaria 8524.91.01 de exenta de ad valorem. En dicha fracción se encuentran comprendidos los 'discos flexibles grabados, acompañados de instructivos impresos o alguna otra documentación (software). Al efectuar la revisión física y documental, se encontró que se trata de discos compactos (compact disc) cuya lectura es a través de sistemas de rayo láser, por lo que le corresponde aplicar la fracción arancelaria 8524.31.01 de exenta de ad valorem"; luego entonces, es indiscutible como lo aduce el demandante, que en el caso concreto resulta aplicable el procedimiento establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera vigente en 2001, que dispone textualmente lo siguiente:

"**ARTÍCULO 152.-** En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la

imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta Ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta Ley.

"En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.

"Las autoridades aduaneras efectuarán la determinación en un plazo que no excederá de cuatro meses.

"En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera."

De la interpretación armónica de ambas disposiciones (artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera vigente en 2001) se sigue que la autoridad aduanera está obligada a dar a conocer al demandante, mediante "escrito o acta circunstanciada" los hechos u omisiones que impliquen la determinación de una sanción, y otorgarle en cualquiera de esos documentos el plazo de 10 días para efectos de ofrecer las pruebas y argumentar los alegatos que a su derecho convengan; obligación que cumplió la autoridad demandada mediante el levantamiento del acta de irregularidades de fecha 16 de abril de 2001, misma que ofreció y exhibió como prueba en su escrito de contestación de demanda, a la que esta Juzgadora le otorga valor probatorio pleno, por ser un documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación, y al que hizo alusión la autoridad demandada en el resultando 3° de la propia resolución sancionatoria.

Sin embargo, resulta fundado uno de los alegatos esgrimidos por la parte actora al momento de producir su demanda y ampliación de la misma, y al cual

únicamente habrá de avocarse esta Juzgadora por resultar suficiente para declarar la nulidad de la resolución que nos ocupa.

En efecto, la parte actora sostiene que el acta de irregularidades se llevó a cabo en una fecha posterior al acto mismo del segundo reconocimiento aduanero, lo cual a juicio de esta Juzgadora se cristaliza en una causal de ilegalidad que vicia el procedimiento fiscalizador. Lo anterior es así ya que si bien es cierto que los dispositivos legales antes analizados sólo exigen, que con motivo de la revisión de los documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se tenga conocimiento de cualquier irregularidad, que dé lugar al pago de contribuciones, cuotas compensatorias o imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de la Ley de la materia, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, no menos cierto es que cuando las autoridades fiscales se inclinen por el camino del levantamiento del acta de hechos, sin lugar a dudas, por una cuestión de orden fáctico, el acta correspondiente se debe levantar en el momento mismo de la verificación (en este caso el segundo reconocimiento) ya que es en ese momento cuando se conoce y constata por el personal verificador la irregularidad que le consta, aludida actuación, que a fin de respetar la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional, debe levantarse ante el interesado (en este caso con el agente aduanal que resulta el representante del importador o en su caso con el representante o apoderado legal de aquél) y ante la presencia de dos testigos de asistencia, ello derivado de que la irregularidad que se le imputa al importador no es una cuestión de orden documental, esto es que derive de los propios datos asentados en el pedimento, lo cual permitiría que con posterioridad al reconocimiento fuera levantada el acta o el escrito correspondiente continente de tales irregularidades, sino que trata de una confronta documental y física de las mercancías de la cual se conoció que no se trataba de discos flexibles grabados acompañados de instructivos impresos o alguna otra documentación (software) sino de discos compactos (compact disc), cuya lectura es a través de sistema de rayo laser, lo cual hace un requisito de legalidad, el de que en la misma fecha en que se llevó a cabo el segundo reconocimiento de las mercancías se levante el acta de irregularida-

des correspondiente ante el legalmente interesado y ante la presencia de los testigos de asistencia, y no así en fecha posterior -16 de abril de 2001-, ya que en esa fecha nada le consta a los que ahí intervienen, pues la irregularidad se conoció en un fecha anterior -23 de marzo de 2001, que fue cuando se practicó el segundo reconocimiento- habida cuenta que en la formulación de las actas es menester se asiente los hechos y omisiones que en el acto mismo de verificación se conozcan, en razón de que su levantamiento en fechas posteriores vician su contenido, ya que los hechos u omisiones que se conocieron quedan en la mente de los verificadores susceptibles de distorsionarse con el tiempo que transcurre desde la fecha misma de su conocimiento, hasta su cristalización a la vida jurídica, que surgen al momento de estamparse en el acta correspondiente.

No es óbice para resolver lo anterior la circunstancia de que el artículo 43 de la Ley Aduanera establezca que el reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, respecto de mercancías importadas o exportadas y si las autoridades omiten al momento del despacho objetar el valor de las mercancías o los documentos o información que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá que el valor declarado ha sido aceptado o que exista resolución favorable al particular, lo que únicamente está sujeto al término de caducidad previsto por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación; que si nos enfocamos propiamente a lo estatuido por la norma aplicable -puntualiza la demandada-, que el hecho de que la autoridad fiscal no haya levantado acta de hechos o irregularidades en materia aduanera, no puede considerarse que con ello se extinga la obligación para hacerlo, en tanto que el precepto legal que se cita como violentado no sanciona tal incumplimiento en esa forma tan drástica, de lo que se desprende que al acontecer la supuesta irregularidad por parte de la autoridad, este factor no puede conducir a que se decrete la nulidad del acto impugnado.- Se afirma que tales argumentos no son suficientes para desvirtuar la declaratoria de nulidad que esta Sala Regional del Noroeste determinó con antelación, puesto que, como ya se señaló, fundamentalmente establecen los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera, que cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de los documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero o del

segundo reconocimiento, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar en acta circunstanciada que para el efecto se levante, por lo que, no tiene razón la autoridad demandada al afirmar que tal circunstancia no se encuentra prevista por las disposiciones fiscales aplicables; de aquí que derive infundado el argumento de la autoridad.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 203, fracción XIV, 202, fracción II, aplicados a contrario sensu; 236, 237, 238, fracción III y 239, fracción II, todos del Código Fiscal de la Federación, esta Sala juzgadora;

R E S U E L V E:

I.- Es infundada la causal de improcedencia y motivo de sobreseimiento parcial del juicio, denunciados por la representación de las autoridades demandadas.

II.- No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio.

III.- La parte actora probó su acción en este juicio, en consecuencia;

IV.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada cuyas características quedaron debidamente precisadas en el resultando 1° del presente fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en su punto considerativo cuarto.

V.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario, Licenciado **RICARDO MORENO MILLANES**, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SANCIONES.- TRATÁNDOSE DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES O AVISOS Y SE OMITA HACERLO, SE APLICARÁ UNA MULTA POR CADA CONTRIBUCIÓN NO DECLARADA U OBLIGACIÓN NO CUMPLIDA, YA QUE ELLO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Del texto de Ley de la fracción V del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación se desprende que sin bien, el mismo hace alusión a una regla general en el sentido de que cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas, sólo habrá de aplicarse la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor, no menos cierto es también que de su segundo párrafo se conoce que en tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida. De ahí entonces que cuando las autoridades fiscales en tratándose de los supuestos antes indicados sancionan de manera múltiple las aludidas conductas omisivas no rompen con el principio de multa única prevista en la fracción V del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, ya que aquellas tienen su sustento en los supuestos de excepción que en su segundo párrafo se establecen. (8)

Juicio No. 157/00-01-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de abril de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. Ricardo Moreno Millanes.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Para esta Juzgadora el concepto de anulación resulta infundado, por cuanto que si bien es cierto que conforme al artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor, no menos cierto es también que en tratándose de presentación de declaraciones -como resulta el caso-, o avisos, cuando por diferentes contribuciones se debe presentar una forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación omitida.

En efecto, resulta infundado el alegato del actor, toda vez que en la resolución a debate, claramente se desprende que su conducta se encuadró perfectamente en lo establecido en el artículo 81, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, resultando aplicable en que se le sancione de acuerdo a lo establecido en el inciso b), fracción I y fracción III del Código en cita, resultando inaplicable en el presente caso lo dispuesto en la fracción V del artículo 75 del Código Fiscal en comento. Ahora bien, a este respecto, cabe precisar que el artículo 75, fracción V, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación que invoca en su favor el actor, no es aplicable en el caso concreto, toda vez que claramente señala en el segundo párrafo de la fracción en comento, que tratándose de la presentación de declaraciones, se aplicará una multa por cada obligación no cumplida, tal y como a continuación se transcribe.

Código Fiscal de la Federación

"**Artículo 75.-** Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las

leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

"(...)

"V.- Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

"**Tratándose de la presentación de declaraciones** o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, **se aplicará una multa por cada** contribución no declarada u **obligación no cumplida.**

"(...)"

En ese orden, se tiene que si bien es cierto que el precepto que cita el accionante señala que se aplicará la multa mayor cuando se cometan varias infracciones por un acto u omisión, también lo es que en el segundo párrafo de dicho precepto existe una exclusión a dicha disposición, la cual, en el presente caso acontece, como se advertirá a continuación. En efecto, la actora fue requerida dos veces para que presentara la declaración de información de sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal 1998, la primera el 21 de julio de 1999 y la segunda el 20 de agosto de 1999, haciendo caso omiso a dichos requerimientos, resultando obvio colegir que no cumplió dos obligaciones. En ese sentido, el accionante incurrió en la infracción contemplada en la fracción I del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que en ningún momento prestó atención a los dos requerimientos que le fueron realizados y que él mismo los ofrece como medio de prueba acompañados a su demanda, resultando aplicables las sanciones a debate. Ahora bien, el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, claramente señala:

"**Artículo 81.-** Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, **así como de presentación de declaraciones,** solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias:

"**I.- No presentar las declaraciones,** las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. **No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción,** o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

"(...)"

En ese sentido y al haber cometido dicha infracción el accionante, es lógico que se le sancione acorde a lo dispuesto en la fracción I inciso b) y fracción III del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que omitió la presentación de la declaración en comento, a pesar de que le fue requerida dos veces, resultando completamente aplicable en segundo lugar, la sanción que señala la fracción III del artículo 82 en cita. En ese orden, el artículo 82 claramente dispone:

Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexos 1, 2, 5, 7 y 15, publicada el 30 de junio.

"**Artículo 82.** A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81, se impondrán las siguientes multas:

"**I.** Para la señalada en la fracción I:

"(...)

"**b)** De $603.00 a $15,078.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento.

"(...)

"**III.** De $603.00 a $15,078.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por cada requerimiento.

"(...)"

En ese orden de ideas, a la accionante le fue requerida la declaración de sueldos y salarios en dos ocasiones, omitiendo dar contestación a dichos requerimientos, resultando también aplicable la sanción que establece la fracción III del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que se le requirió dos veces la declaración en cita, y como el segundo párrafo de la fracción V del artículo 75 del Código en cita establece que se aplicará una sanción por cada obligación omitida, resulta evidente colegir que las multas impuestas resultan acordes al dispositivo legal en el cual se sustenta.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, esta Sala;

R E S U E L V E :

I.- La parte actora no probó su acción en este juicio, en consecuencia.

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada cuyas características quedaron debidamente precisadas en el resultando 1° del presente fallo, ello en atención a los motivos y fundamentos expuestos en el mismo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario Licenciado **RICARDO MORENO MILLANES**, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- PROCEDE OTORGARLA EN JUICIO DE NULIDAD POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Cuando el promovente de la demanda de nulidad acredita haber presentado ante la autoridad recaudadora (*autoridad demandada*), un escrito en donde solicita la suspensión del procedimiento de ejecución, y en el cual anexa una póliza de fianza, con la que se garantiza el crédito fiscal que le fue determinado; por lo que con fundamento en el artículo 208 Bis, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, es procedente que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decrete la suspensión definitiva del acto materia de controversia, en tanto se resuelva el fondo del asunto en juicio de nulidad, por haberse actualizado lo previsto en el artículo 141, fracción III del Código Fiscal de la Federación. (9)

Juicio No. 1430/01-02-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de mayo del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Félix Delgadillo Vázquez.- Secretario: Lic. Jesús Ricardo López Corral.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Este Cuerpo Colegiado, que integra la Sala Regional del Noroeste II, considera fundada la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, en donde se le está determinando el crédito fiscal No. H-00224661, en cantidad total de $88,975.00 a la hoy demandante, siendo que dicha contribuyente anexó a su libelo de

demanda copia de un escrito de fecha 09 de octubre del 2001, el cual fue presentado ante la autoridad recaudadora el día 11 de octubre del 2001, a través del cual solicitó la suspensión del procedimiento ejecutivo, exhibiéndole para ello la póliza de fianza con número de folio HR 7330, y con número 6706-4001-005327 expedida el día 09 de octubre del 2001 por AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., (*los citados documentos se encuentran visibles a folios 25 al 27 del expediente fiscal que nos ocupa*), por tal consecuencia dicha accionante acredita haber garantizado el referido crédito fiscal, en los términos previstos en el artículo 141, fracción III del Código Fiscal de la Federación, por lo que en consecuencia es de decretarse la suspensión definitiva de dicho acto materia de controversia, en tanto se resuelve el fondo del juicio de nulidad que nos ocupa.

Lo anterior, es en virtud de que no se ocasiona perjuicios o daño a la contraparte (Fisco Federal) o a terceros, además que con la exhibición de la póliza de fianza de referencia, se garantiza el interés fiscal del crédito No. H-00224661.

Ahora bien, la parte actora al controvertir el acto en donde se determina el crédito fiscal H-00224661, cuya suspensión solicita, por considerar que resulta ser ilegal, mientras no se acredite la legalidad de las actuaciones de autoridad que le precedieron y que deben sustentarlo y, además, en el caso que la sentencia en el juicio de nulidad favoreciera los intereses del actor, la ejecución del acto reclamado podría ocasionar daños y perjuicios en la esfera jurídica del hoy demandante, circunstancias que generan convicción en esta Sala para declarar la suspensión definitiva que nos ocupa. La presente determinación encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial que en seguida se transcribe:

> "**IMPUESTOS, MULTAS Y PAGOS FISCALES.-** Si se ha trabado embargo en los bienes del quejoso, procede conceder la suspensión contra los impuestos, multas y pagos fiscales, sin fianza ni depósito, por encontrarse asegurado el interés fiscal.

"Instancia: Segunda Sala.
"Fuente: Apéndice de 1975.
"Parte:
"Tesis: 209.
"Página: 353.

"Precedentes Quinta Época:

"Tomo XXIX, pág. 349. Amparo en revisión 1649/29. Bentacourt Francisca. 21 de mayo de 1930. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Tomo XXIX, pág. 2144. Sandoval Clemente y coag. 21 de mayo de 1930. (Índice Alfabético).

"Tomo XXIX, pág. 2144. Tovar J. Leonardo. 12 de julio de 1930. (Índice Alfabético).

"Tomo XXIX, pág. 2144. Cía. Explotadora de Bienes Raíces, S.A. 12 de julio de 1930. (Índice Alfabético).

"Tomo XXIX, pág. 2144. Soto Enrique. 16 de agosto de 1930. (Índice Alfabético).

"Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo III, tesis 594, pág. 432."

Por lo que al arribar a tal determinación, es de tomarse en cuenta que las leyes económico coactivas siempre ordenan que el embargo se trabe en bienes bastantes a cubrir el adeudo, por lo que si de actuaciones no se advierte que la exactora hubiese manifestado que la garantía del crédito fiscal no es suficiente, debe entonces presumirse

en sentido afirmativo que se encuentran garantizados los intereses del Fisco Federal. En efecto, norman la presente determinación los siguientes criterios:

"**IMPUESTOS, MULTAS Y PAGOS FISCALES.-** Si bien, en tesis general, no podría decirse que siempre que la autoridad ha embargado bienes para hacer efectivo el cobro de un pago fiscal, se encuentra garantizado el interés del fisco y que, por tanto, debe exigirse el depósito que ordena el artículo 60 de la Ley de Amparo, también hay que tener en cuenta que las leyes economicoactivas siempre ordenan que el embargo se trabe en bienes bastantes a cubrir el adeudo, y si el causante no los tuviere, nada se remediaría con exigirle un depósito que estaría imposibilitado para constituir; y si la autoridad exactora no hace hincapié en que los bienes embargados no son bastantes, debe presumirse que el embargo garantiza los intereses del fisco, y en tal virtud, procede conceder la suspensión sin fianza ni depósito.

"Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte : XXXII. Tesis: Página: 1540.

"Amparo administrativo. Peralta de Gómez María. 28 de julio de 1931. mayoría de 3 votos. Tomo XXXII, segunda parte, Pág. 1540. Tomo XXX, p. 1926."

"**IMPUESTOS, MULTAS Y PAGOS FISCALES.-** La Ley de Amparo deja a la discreción del juzgador, conceder la suspensión definitiva, cuando se pida contra impuestos, multas u otros pagos fiscales, y aquél, para hacer uso justo y legal del arbitrio, debe tener en consideración todas las circunstancias especiales del caso, procurando que queden garantizados los intereses fiscales; mas cuando dichos intereses han quedado garantizados por los procedimientos mismos de las autoridades responsables, no debe aplicarse a la letra el artículo 60 de la Ley de Amparo, pues no es jurídico suponer que el legislador haya pretendido exigir nuevo aseguramiento de intereses que ya están garantizados conforme a la ley; por lo cual, si se ha trabado embargo en los bienes del quejoso, procede conceder la suspensión contra los impuestos, multas y

pagos fiscales, sin fianza ni depósito, toda vez estas garantías tiene por objeto reparar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercer perjudicado con la suspensión; y en el caso de cobros fiscales, no hay tercer perjudicado.

"Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte : XXIX. Tesis: Página: 349.

"TOMO XXIX, Pág. 349.- Betancourt Francisca.- 21 de mayo de 1930.- Unanimidad de cinco votos."

"**SUSPENSIÓN SIN FIANZA, CUANDO DEBE OTORGARSE.-** No ha sido la mente del legislador exigir nueva garantía del interés fiscal cuando éste se encuentra debidamente constituido, pues si se ha trabado embargo en bienes del deudor, es indudable que queda garantizado el aludido interés fiscal, y por consiguiente, no hay motivo para exigir el depósito de la cantidad que se cobra, en los términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, y la autoridad recurrente no puede decir que el interés fiscal no está garantizado en el caso, si al expresar agravios confiesa la existencia de esta circunstancia, al convenir en que practicó embargo en los bienes del deudor, y el hecho de que tales bienes se encuentren en poder de un depositario y no hayan sido extraídos de los almacenes del quejoso, no implica falta de garantía del interés fiscal, ya que con el embargo trabado se garantizó.

"Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte : LXXVII. Tesis: Página: 6010.

"TOMO LXXVII, Pág. 6010.- Amparo en Revisión 6196/43, Sec. 2ª.- Álvarez González José.- 6 de septiembre de 1943."

Por lo expuesto y fundado y con apoyo en lo ordenado por el artículo 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente la solicitud de suspensión definitiva interpuesta por la enjuiciante, en consecuencia;

II.- Se declara la suspensión definitiva de la ejecución del crédito fiscal H-00224661, en tanto se resuelve el fondo del juicio de nulidad que nos ocupa.

N O T I F Í Q U E S E.-

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado JESÚS RICARDO LÓPEZ CORRAL, que da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA. ES PROCEDENTE AUN CUANDO SE HAYA PROMOVIDO POR EL ABOGADO AUTORIZADO DEL DEMANDANTE.- El artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo prevé la posibilidad de que los particulares o sus representantes puedan autorizar a licenciados en derecho para que a su nombre reciban notificaciones, y asimismo, dispone que las personas así autorizadas tendrán facultades para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos o interponer recursos; por consiguiente, si bien es cierto lo alegado por la autoridad demandada en el sentido de que en el juicio de nulidad no procede la gestión de negocios, en el presente caso resulta procedente la queja al ser promovida por el abogado autorizado, mismo que de acuerdo con las anteriores consideraciones tiene facultades para promover recursos en representación de la demandante; por otra parte, el artículo 239-B de la misma legislación, prevé la posibilidad de que la parte afectada ocurra en queja ante la Sala por el incumplimiento de una sentencia firme, y al no establecerse que se deba interponer "directamente" por el interesado, como lo aduce la autoridad, es suficiente que lo haga el abogado autorizado en términos del último párrafo del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, en defensa de sus intereses. (10)

Juicio No. 852/00-01-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de mayo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Mauricio Fernández y Cuevas.- Secretario: Lic. Juan Carlos Encinas Valdez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO MATERIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AL SER DECLARADA LA NU-

LIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- Es fundada la queja interpuesta por la parte actora a través de su abogado autorizado, al exponer que la autoridad en cumplimiento del fallo definitivo dictado por esta Sala debió proceder a la devolución o pago del vehículo que dio origen al procedimiento administrativo en materia aduanera; ello en virtud de que efectivamente la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada en los términos del artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, atento a lo cual al encontrarse firme la sentencia de mérito, la autoridad fiscalizadora demandada no simplemente debió dejar sin efectos los créditos fiscales impuestos al hoy actor, sino además proceder a devolver el vehículo, ya que si bien no se especificó tal efecto, es evidente que para que las cosas volvieran al estado en que se encontraban hasta antes de ejercerse las facultades de comprobación, debió actuar en tal sentido en virtud de que ya no existe ningún acto que justifique tenerlo a su disposición. (11)

Juicio No. 852/00-01-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de mayo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Mauricio Fernández y Cuevas.- Secretario: Lic. Juan Carlos Encinas Valdez.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- (...)

Esta Juzgadora considera infundadas las pretensiones de la autoridad fiscalizadora, toda vez que la persona que promueve la presente instancia de queja, Licenciado José Antonio Félix Montenegro, se encuentra autorizado para intervenir en el presente juicio en los términos del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, como así quedó precisado en el acuerdo admisorio de la demanda de fecha 24 de abril de 2002; por lo tanto, si bien es cierto lo que expone la autoridad en el sentido de que de conformidad con el artículo 200, primer y segundo párrafos del

Código Fiscal de la Federación, no procede la gestión de negocios, no se debe pasar por alto lo dispuesto por el último párrafo del mismo numeral que dispone:

> "*Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos o interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.*"

En tal virtud, si el promovente de la queja se encuentra autorizado para intervenir en el juicio con las facultades otorgadas por dicha disposición, tales como hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, es evidente que puede promover válidamente la queja que se analiza; por último, de conformidad con el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, la queja, en efecto, debe promoverse por la parte afectada, pero no se condiciona a que sea "directamente" como lo adiciona la autoridad, por lo cual esta Juzgadora considera suficiente que se haya promovido la queja por el abogado autorizado en defensa de los intereses de la "afectada", para considerarla procedente, por lo cual se determina infundada la argumentación de la autoridad compareciente.

SEGUNDO.- Manifiesta el promovente al interponer la queja, que ha transcurrido el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, por lo que debe considerarse el incumplimiento con apego a lo dispuesto por el inciso b) de la fracción I del artículo 239-B del mismo Código; que aun cuando en la sentencia no se precisaron los efectos de la misma, esto no significa que se esté liberando a la autoridad de cumplir con la obligación de devolver la mercancía ilegalmente embargada, es decir, el vehículo materia del presente asunto, en este caso reintegrando el valor autorizado del mismo ya que un debido cumplimiento debe materializarse con la entrega del resarcimiento económico.

La autoridad liquidadora manifiesta que la sentencia definitiva ya fue cumplida en sus exactos términos en virtud de que el procedimiento de fiscalización se dejó sin

efecto legal alguno, sin que se deba perder de vista que en la sentencia no se ordena a esa autoridad deba regresar al actor mercancía alguna o en su caso su valor pecuniario, sino únicamente proceder a dejar sin efecto legal alguno el procedimiento de fiscalización, situación que en la especie ya se realizó, por lo tanto se debe arribar a la conclusión lógica jurídica que la sentencia ya fue cumplida en sus exactos términos; que al no contener la sentencia pronunciamiento alguno al respecto, hace procedente la aclaración de la misma de acuerdo al artículo 239-C del Código Fiscal de la Federación, por otra parte, si la parte actora considera que la sentencia que puso fin al juicio le causa algún agravio, puede hacer valer el juicio de amparo directo.

Los suscritos Magistrados que integran esta Sala Regional del Noroeste II, determinan fundada la queja que interpone el promovente Licenciado José Antonio Félix Montenegro, en su carácter de abogado autorizado en el presente juicio en los términos el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación.

Efectivamente, con fecha 11 de agosto de 2000 esta Juzgadora emitió la sentencia definitiva que pone fin al juicio, en la cual declaró la nulidad de la resolución impugnada al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, resolución que se confirmó en su oportunidad por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito; para dar cumplimiento a dicha resolución, la autoridad demandada emitió el oficio de fecha 25 de octubre de 2001, resolviendo dejar insubsistente la resolución reclamada contenida en el oficio número 324-SAT-D-a-20669 de fecha 15 de diciembre 1999; sin embargo, asiste la razón al promovente al manifestar que aun y cuando en el fallo emitido por esta Sala nada se dijo respecto de la devolución de las mercancías o resarcimiento económico, es evidente que para cumplimentarlo debidamente sí se debió actuar en tales términos, ya que en el caso el vehículo materia del procedimiento administrativo en materia aduanera, no puede válidamente encontrarse a disposición de la autoridad demandada cuando no existe ningún acto que lo justifique; es decir, que si la totalidad de las actuaciones de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Ciudad Obregón, Sonora, fueron declaradas nulas a través de sentencia firme de esta Sala Regional del Noroeste II, por consecuencia lógica, es procedente

que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de ejercerse las facultades de comprobación; motivos por los cuales la responsable debe proceder a cumplimentar el fallo dictado por la Sala y, además de dejar sin efectos el acto de fiscalización, como ya lo hizo, debe devolver la mercancía que en este caso consiste en un vehículo automotor, o en su caso, al resarcimiento económico.

Resultando importante precisar que contrario a lo indicado por la autoridad, no hubiera sido procedente la aclaración de sentencia que considera debió haber agotado la parte actora, toda vez que el fallo dictado por la Sala no se dictó en forma contradictoria, ambigua u obscura; de igual forma, tampoco sería procedente la interposición de la demanda de amparo directo ya que el fallo emitido por la Sala fue por completo favorable a los intereses de la parte demandante.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 239-B, fracciones I, inciso b), III y V del Código Fiscal de la Federación, se concede a la autoridad fiscalizadora demandada, un plazo de veinte días para que proceda a cumplimentar debidamente la sentencia de fecha 11 de agosto de 2000, en los términos que ya se han definido, quedando apercibido que de no hacerlo en el plazo de referencia se aplicarán en su contra las medidas de apremio que establece el propio numeral invocado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237 y 239-B, fracciones I, inciso b), III y V del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente y fundada la queja interpuesta por la parte actora.

II.- Se ordena al Titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal, de Ciudad Obregón, Sonora, culminar con la cumplimentación de la sentencia de fecha 11 de agosto de 2000.

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario, Licenciado **JUAN CARLOS ENCINAS VALDEZ**, que da fe.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.- AL INICIO DE LA VISITA EL VERIFICADOR DEBERÁ EXHIBIR SU CREDENCIAL ASÍ COMO LA ORDEN DE VERIFICACIÓN RESPECTIVA, DE LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR UNA COPIA A LA PERSONA CON LA CUAL SE ENTIENDA LA DILIGENCIA.- Tal determinación deriva de la exigencia prevista en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual, por disposición expresa de su artículo primero y artículo segundo transitorio, resulta aplicable al procedimiento de verificación efectuado por la PROFECO. No pasando desapercibido para esta Juzgadora el contenido del artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con el artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya que si bien, de su contenido se desprende que basta con que el personal actuante exhiba el oficio de comisión, éste se contrapone a la obligación de su entrega que prevé el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia, por disposición expresa del artículo 2 de dicha Ley; cuya contraposición hace aplicable el contenido del artículo segundo transitorio de la Ley que nos ocupa (que dice: se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley [...]); y por ende, produce su efecto derogatorio, debiéndose acatar el procedimiento previsto en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (12)

Juicio No. 1548/01-02-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de mayo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. Ricardo Moreno Millanes.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de este Tribunal el concepto de anulación en estudio resulta parcialmente fundado pero suficiente para declarar la nulidad de la resolución que se combate.

Resulta infundado, toda vez que la visita de verificación se practicó en el domicilio señalado en la orden número SVV-PNG-NOROESTE/01/024 de fecha 03 de abril de 2001. En efecto, en la orden en comento se precisó el nombre de la persona moral a quien va dirigida (HIDROGAS DE AGUA PRIETA, S.A.); y como domicilio el ubicado en "KM. 3 + 5000, CARR. A LA COLONIA HIDALGO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA", y si bien la visita se practicó en el Km 3+500 carretera a San Luis Río Colorado, Sonora, lugar en que se encontró circulando el vehículo de reparto número económico 12, marca Ford, Modelo 90, se debió a que en la propia acta de verificación se precisó que "podrá ser desahogada aun en días y horas inhábiles en lugares distintos al domicilio legal de la empresa, es decir, en la vía pública, toda vez que la comercialización del producto de referencia se realiza fuera del domicilio legal del proveedor, de acuerdo al artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria (...) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor". De ahí entonces, es evidente que la verificación en comento se desarrolló en los lugares precisados en la orden, sin que su actuación fuese violatoria de los artículos 38 del Código Fiscal de la Federación y 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues no hay que perder de vista que el último de los dispositivos legales en comento, y en que se apoyó la autoridad para emitir la orden de verificación, señala que la vigilancia y verificación que debe practicar la Procuraduría con el objeto de hacer cumplir las disposiciones de esa Ley, puede practicarla en los lugares en que se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en las

que se presten servicios, por ello, al haberse practicado en el lugar en que se encontró circulando el vehículo distribuidor de gas propiedad de la empresa actora, cumple cabalmente con el contenido de la orden en comento.

Resultando infundado también su alegato en el sentido de que el verificador no le comunicó el teléfono al cual podría comunicarse para comprobar la veracidad de la comisión, ya que analizando el acta que con motivo de la verificación se levantó en la fecha del 20 de abril de 2001, específicamente a fojas 2 de la misma se circunstancia el siguiente hecho:

> "ACTO SEGUIDO EL VERIFICADOR PROPORCIONÓ EL SIGUIENTE NÚMERO TELEFÓNICO AL VISITADO 52-56-52-94 A EFECTO DE QUE ÉSTE PUEDA COMPROBAR LA VERACIDAD DE LA COMISIÓN. ASÍ MISMO EL VERIFICADOR COMISIONADO MANIFIESTA AL ENTREVISTADO QUE DE ASÍ CONSIDERARLO CONVENIENTE PODRÁ COMUNICARSE A LA EMPRESA DE LA CUAL FUNGE COMO FACTOR O DEPENDIENTE A EFECTO DE SOLICITAR LA PRESENCIA DE ALGÚN EJECUTIVO DE LA MISMA, CIRCUNSTANCIA QUE DE NINGUNA MANERA CONDICIONA, IMPIDE O SUSPENDE LA EJECUCIÓN DE ESTA DILIGENCIA. PROCEDIENDO EL VISITADO EN CONSECUENCIA A PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA DISTRIBUCIÓN Y VENTA DEL PRODUCTO DENOMINADO GAS LICUADO DE PETRÓLEO, CONTENIDO EN RECIPIENTES METÁLICOS QUE TRANSPORTA EL VEHÍCULO DESCRITO CON ANTERIORIDAD."

Resultando por demás evidente que el personal actuante sí le hizo del conocimiento a la parte actora del derecho de certificar la autenticidad de la verificación.

Sin embargo resulta fundado, por cuanto que de las diligencias levantadas con motivo del acto de verificación ni mucho menos de los alegatos esgrimidos por la demandada, se desprenda que se haya entregado el original o al menos una copia del

oficio de comisión a la persona con la cual se entendió la diligencia, como lo establece la propia orden de visita específicamente en el renglón segundo y tercero de su hoja 2, cuyo contenido literal es del orden siguiente: "(...) y a entregar el original del presente oficio el cual tiene una vigencia de 30 días (...)", derivada de la exigencia prevista en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual, por disposición expresa de su artículo primero y artículo segundo transitorio, resulta aplicable al procedimiento de verificación que nos ocupa, dispositivos que dada su relevancia se trascriben:

> "**Artículo 1.-** Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración publica federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.
>
> "El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración publica federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.
>
> "Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.
>
> "Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."
>
> "**Artículo 65.-** Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la **orden expresa** a la que se refiere

el artículo 63 de la presente ley, **de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento.**"

"**Segundo transitorio.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley,** en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta ley, se resolverán conforme a la ley de la materia."

No pasando desapercibido para esta Juzgadora el contenido del artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que resulta de contenido siguiente:

"ARTÍCULO 96.- La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, actuando en oficio y en los términos que dispone esta ley y, en lo no previsto, por lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización."

En relación con el artículo 95 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que dispone:

"ARTÍCULO 95.- Las visitas de verificación que lleven a cabo la Secretaría y las dependencias competentes, se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado, previa identificación vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo. La autoridad podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, en cuyo caso el oficio de comisión expresará tal autorización."

Ya que si bien, de su contenido se desprende que basta con que el personal actuante exhiba el oficio de comisión, éste se contrapone a la obligación de su entre-

ga que prevé el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación a la materia, cuya contraposición hace aplicable el artículo tercero transitorio de la Ley que nos ocupa y por ende produce su efecto derogatorio, debiéndose acatar el procedimiento previsto en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Anterior determinación que tiene su sustento en las tesis que se indican a continuación:

"Segunda Época.
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año VIII. No. 87. Marzo 1987
"Tesis: II-TASS-9735
"Página: 723

"**ACTAS DE INSPECCIÓN.- DEBEN CONTENER MENCIÓN EXPRESA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR Y EXHIBICIÓN DEL OFICIO DE COMISIÓN RESPECTIVO.-** En los términos del artículo 80 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las visitas de inspección practicadas por personal autorizado por las autoridades competentes deben realizarse previa identificación de ese personal y exhibición del oficio de comisión correspondiente. Por lo tanto, en el acta que se levanta para hacer constar esa inspección es necesario que figure la mención expresa de que el inspector haya cumplido con ambos requisitos, es decir, que se haya identificado y que, además, haya exhibido el citado oficio, sin que baste el señalamiento que se haga en el acta en el sentido de que el inspector se identificó, ya que, como se ha visto, se trata de requisitos diferentes, por lo que debe ser consignado el cumplimiento de ambos en el acta respectiva. (52)

"Revisión No. 1226/85. - Resuelta en sesión de 13 de marzo de 1987, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Gonzalo Armienta Calderón.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.

"PRECEDENTES:

"Revisión No. 233/83.- Resuelta en sesión de 29 de mayo de 1984, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretaria: Lic. Diana Bernal Ladrón de Guevara.

"Revisión No. 1510/83.- Resuelta en sesión de 14 de febrero de 1985, por mayoría de 7 votos y 1 más con los resolutivos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario: Lic. Roberto Caletti Treviño."

"Segunda Época
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año VII. No. 67. Julio 1985
"Tesis: II-J-220
"Página: 8

"**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.- ACTAS DE INSPECCIÓN.- DEBEN MENCIONAR EXPRESAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR Y EXHIBICIÓN DEL OFICIO DE COMISIÓN RESPECTIVO.-** En los términos del artículo 80 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las visitas de inspección practicadas por personal comisionado por las autoridades competentes deben realizarse previa identificación de ese personal y exhibición del oficio de comisión correspondiente. Por lo tanto, en el acta que se levante para hacer constar esa inspección es necesario que figure la mención expresa de que el inspector haya cumplido con ambos requisitos, es decir, que se haya identificado y que, además, haya exhibido el citado oficio, sin que baste el señalamiento que se haga en el acta en el sentido de que

el inspector se identificó, ya que, como se ha visto, se trata de requisitos diferentes, por lo que debe ser consignado el cumplimiento de ambos en el acta respectiva.

"TESIS DE JURISPRUDENCIA No. 220 (Texto aprobado en sesión de 9 de julio de 1985).

"Revisión No. 233/83.- Resuelta en sesión de 29 de mayo de 1984, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretaria Lic. Diana Bernal Ladrón de Guevara.

"Revisión No. 2614/82.- Resuelta en sesión de 11 de enero de 1985, por unanimidad de 9 votos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario Lic. Roberto Caletti Treviño.

"Revisión No. 1510/83.- Resuelta en sesión de 14 de febrero de 1985, por mayoría de 7 votos y 1 más con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario Lic. Roberto Caletti Treviño."

Por lo que tal omisión procedimental (entrega de una copia del oficio de comisión), encuadra en la causal de ilegalidad prevista en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, no restando más a esta Juzgadora que declarar la nulidad de la resolución controvertida por encontrar su sustento en un procedimiento de revisión viciado el cual no resulta susceptible de generar efecto legal alguno en la esfera jurídica del particular, sin embargo, como la resolución traída a juicio es la diversa que recayó a una instancia administrativa, la nulidad que aquí se dicta es para los efectos de que la demandada, dejándola insubsistente, emita otra de nueva cuenta en la cual tome en consideración los razonamientos vertidos en el presente fallo.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, fracción III y 239, fracción III del Código Fiscal de la Federación, esta Sala;

R E S U E L V E :

I.- La parte actora probó su acción en este juicio, en consecuencia.

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada cuyas características quedaron debidamente precisadas en el resultando 1° del presente fallo, ello en atención a los motivos y para los efectos expuestos en su considerando tercero.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario, Licenciado **RICARDO MORENO MILLANES**, quien da fe.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INGRESOS DERIVADOS DE UN PLAN DE JUBILACIONES.- SE UBICA DENTRO DEL CONCEPTO DE PREVISIÓN SOCIAL Y, POR ENDE, EL INGRESO OBTENIDO SE ENCUENTRA EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON LA LIMITACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 77, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA.- Los ingresos derivados de un plan de jubilaciones se ubican en el concepto de Previsión Social, acorde a lo establecido por el artículo 24, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consecuentemente a dicho ingreso le es aplicable la exención prevista en el artículo 77, fracción VI de la Ley antes citada. No obstante lo anterior, tal exención tiene una limitante según se observa del ultimo párrafo del artículo en estudio, la cual consiste en que cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto, un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, limitación que en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Sin que la anterior conclusión se demerite por la circunstancia de que a la fecha de la obtención de los ingresos por motivo de la jubilación no se mantenga una relación de trabajo con el empleador y por ende no se perciban ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, motivo por el cual al no existir uno de los elementos -ingresos por la prestación de servicios personales subordinados- no podría llevarse a cabo la mecánica (suma de ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención) prevista en el dispositivo en análisis, ya que al prescindir de uno de ellos resulta prácticamente imposible la acción de sumar; ello en razón de que el dispositivo de cuenta no hace tal distinción sino que éste, de manera por demás genérica y abstracta, limita la exención prevista en la fracción VI del artículo 77 de la Ley del Impuesto

sobre la Renta, cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, de ahí pues que si en el periodo durante el cual obtuvo los ingresos por jubilación también obtuvo ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, sin lugar a dudas éstos habrán de sumarse a fin de determinar la limitante que nos ocupa, habida cuenta además que en las últimas líneas del último párrafo del artículo en cita, se señala lo siguiente: "Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención prevista en la fracción citada, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año". Lo cual pone por demás de manifiesto que por exclusión, la exención de referencia únicamente abarcará hasta un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, ya que por regla general la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención en ningún caso deberá dar como resultado un monto inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Resultando pues, irrelevante el que el importe de los ingresos por servicios personales subordinados sea cero o una cantidad distinta, ya que si la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención en ningún caso deberá dar como resultado un monto inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, por exclusión se concluye que la exención prevista en la fracción VI del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente abarcará hasta un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. (13)

Juicio No. 83/02-02-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de agosto de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. Ricardo Moreno Millanes.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Para este Órgano Colegiado los anteriores conceptos de anulación resultan parcialmente fundados pero insuficientes para declarar la existencia del derecho a la devolución del importe de $5,092,062.00, por concepto de impuesto sobre la renta retenido por el Banco Nacional de México, S.A., en carácter de fiduciario del Fideicomiso No. 3495-5, derivado del plan de pensiones por jubilación que obtuvo de la empresa PEDRO DOMECQ MÉXICO, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS VINÍCOLAS DOMECQ, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS VINÍCOLAS PEDRO DOMECQ, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS CORPORATIVOS DOMECQ, S.A. DE C.V. (GRUPO DOMECQ), la cual fue solicitada a la autoridad demandada mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2000; argumentos a su vez que resultan insuficientes para declarar la nulidad de la resolución por cuyo conducto se devuelve la documentación que para tales efectos había presentado.

Resulta fundado por cuanto que el motivo de la devolución de la documentación presentada para efectos de obtener la devolución del importe de $5,092,062.00, por concepto de impuesto sobre la renta retenido por el Banco Nacional de México, S.A., en carácter de fiduciario del Fideicomiso No. 3495-5, derivado de la pensión por jubilación que obtuvo, no encuentra su sustento en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, ya que si bien es cierto que conforme a la determinación adoptada por las demandadas en la resolución impugnada que resulta del siguiente orden:

> " 'A partir del año de 1959 y hasta el 31 de mayo del 2000 presté mis servicios a PEDRO DOMECQ MÉXICO, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS VINÍCOLAS DOMECQ, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS VINÍCOLAS PEDRO DOMECID, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS CORPORATIVOS DOMECQ, S.A. DE C.V.,

(GRUPO DOMECQ), siempre con el carácter de empleado de planta, por lo cual (...)'. De lo anterior el contribuyente reconoce su carácter de empleado por el cual recibió ingresos por concepto de salarios desde 1959 y hasta el 31 de Mayo del 2000.

"Además el contribuyente exhibió constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados expedida por Servicios Corporativos Domecq, S.A. de C.V., por el período de enero a mayo de 2000, en la cual manifestó entre otros datos, ingresos por salarios en cantidad de $ 1'217,998.00, y por otra parte exhibió constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados correspondiente a ingresos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro pagados en una sola exhibición en la cual se muestran entre otros los siguientes datos:

"Monto total del pago único	$16'889,859.00
"Ingreso Exento	$ 1'333,477.00
"Ingreso Gravable	$15'556,382.00

"Que de la revisión a ambos documentos, presentados por el propio contribuyente en su promoción, se concluyen dos aspectos relevantes:

"1.- El contribuyente dejó de prestar sus servicios como empleado en mayo del 2000, específicamente el 31 de mayo de 2000 conforme a lo manifestado en su propio escrito libre en su punto número 3.

"2.- El contribuyente obtuvo ingresos totales por concepto de salarios un importe de $ 1'297,998.00 y por jubilación $16'889,859.00, y ambos conceptos quedan comprendidos en el Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta el cual se denomina 'De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado' de conformidad con el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2000 contenido en el Capítulo de referencia, el cual se transcribe a continuación:

"Artículo 78 Ley del Impuesto sobre la Renta. 'Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes (...)'

"Derivado de los dos puntos anteriores, resulta que el contribuyente está obligado a presentar su declaración del ejercicio 2000 de impuesto sobre la renta, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, primer párrafo, fracción III, inciso C y E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio 2000, mismo que se transcribe a continuación: 'Artículo 82 primer párrafo. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. (...) Fracción III.- Presentar declaración anual en los siguientes casos: (...) Inciso C) Cuando dejen de prestar servicios a más tardar el 31 de diciembre del año de que se trate o cuando a dicha fecha se presten servicios a dos o más empleadores. (...) Inciso E). Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de $2'134,099.00 (...)', conforme al importe actualizado vigente para el ejercicio 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre del 2000.

"Es decir, se actualizan ambos supuestos, ya que el importe total de los ingresos del contribuyente señalados en el capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, ascienden a $18'187,857.00 resultado de sumar los $1'297,998.00 por salarios y los $16'889,859.99 por concepto de previsión social por jubilación y por lo tanto excede el importe establecido en el artículo 82, fracción III, inciso E de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

> "Por otro lado, al haber dejado de prestar sus servicios como empleado el 31 de mayo de 2000 se ubica en el supuesto del artículo 82, fracción III, inciso C de la misma Ley.
>
> "Por tales motivos el contribuyente está obligado a presentar declaración del ejercicio 2000 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y para ello deberá seguir la mecánica establecida en el artículo 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, calculará su impuesto anual sumando, después de efectuar las deducciones autorizadas por el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos sus ingresos salvo aquellos por los que no esté obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo, aplicándole al resultado la tarifa contenida en el artículo 141, así como el subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 141-A ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor en el ejercicio 2000 (...)"

El hoy enjuiciante tenía la obligación de presentar su declaración anual -determinación no controvertida por la parte actora-. La circunstancia que no la haya presentado en su solicitud de devolución no la convierte en un motivo para devolver la documentación que para tales efectos se presentó, en primer lugar, porque el dispositivo legal en consulta no contempla tal procedimiento y, en segundo orden, en razón de que el propio dispositivo en análisis prevé que las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Previendo a su vez que las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Luego entonces, si la demandada consideraba necesaria la exhibición de la declaración de referencia debió requerírsela a la hoy actora y no así, bajo el argumento de su no presentación, devolver la documentación que para efectos de obtener la devolución había sido presentada.

Sin embargo, tal ilegalidad no resulta suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada por cuanto que no demuestra su derecho a la devolución del importe de $5,092,062.00, por concepto de impuesto sobre la renta retenido por el Banco Nacional de México, S.A., en carácter de fiduciario del Fideicomiso No. 3495-5, derivado del plan de pensiones por jubilación que obtuvo de la empresa PEDRO DOMECQ MÉXICO, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS VINÍCOLAS DOMECQ, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS VINÍCOLAS PEDRO DOMECQ, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS CORPORATIVOS DOMECQ, S.A. DE C.V. (GRUPO DOMECQ), de ahí que resultaría ocioso y sin sentido alguno el declarar la nulidad de la resolución controvertida para los efectos de que previamente se le otorgue el plazo de 20 días, a fin de exhibir la declaración de referencia, por cuanto que en el fondo no procede la devolución que fue solicitada.

En efecto, tal y como es reconocido por la autoridad demandada, los ingresos obtenidos por el contribuyente, con motivo de su jubilación, operada conforme al plan de jubilación realizado por la empresa donde prestaba sus servicios, se colocan en los supuestos de la fracción VI del artículo 77 de la Ley citada, que establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de determinados ingresos percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Característica de previsión social que reviste la jubilación que obtuvo, ya que ésta tiene por finalidad gozar de una pensión adicional, que en el futuro le permita mantener su nivel y calidad de vida, para lo cual es necesario contar con los recursos económicos suficientes, los que fueron previstos oportunamente. Concluyendo pues, que el ingreso obtenido por el hoy actor, sin lugar a dudas se ubica en el concepto de previsión social, acorde a lo establecido por el artículo 24, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece: "Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y

otras de naturaleza análoga". Consecuentemente, a dicho ingreso le es aplicable la exención prevista en el artículo 77, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta el cual establece. "VI. Los percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo."

No obstante lo anterior, tal exención tiene una limitante según se observa del último párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que resulta del siguiente contenido.

> "La exención contenida en la fracción VI de este artículo se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de esta exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto por los conceptos mencionados en la fracción de referencia, un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención prevista en la fracción citada, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año."

La cual consiste en que cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto por los conceptos mencionados en la fracción de referencia, un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Limitación que en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los

ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención prevista en la fracción citada, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año.

Limitante en la cual se ubicó la parte actora, ya que a partir del año de 1959 y hasta el 31 de mayo del 2000 prestó sus servicios a "PEDRO DOMECQ MÉXICO, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS VINÍCOLAS DOMECQ, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS VINÍCOLAS PEDRO DOMECID, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS CORPORATIVOS DOMECQ, S.A. DE C.V., (GRUPO DOMECQ), siempre con el carácter de empleado de planta, por lo cual (...)". De lo cual el contribuyente reconoce su carácter de empleado por el cual recibió ingresos por concepto de salarios desde 1959 y hasta el 31 de mayo del 2000. Además de que en la constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados expedida por Servicios Corporativos Domecq, S.A. de C.V., por el período de enero a mayo de 2000, manifestó, entre otros datos, ingresos por salarios en cantidad de $ 1'217,998.00, y por otra parte, de la constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados correspondiente a ingresos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro pagados en una sola exhibición se muestran entre otros los siguientes datos: monto total del pago único $16,889.859.00, ingreso exento $ 1'333,477.00, ingreso gravable $15'556,382.00, cuya suma excede a una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, por ende, solamente se consideró como ingreso no sujeto al pago del impuesto por los conceptos antes mencionados un monto de hasta un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año y no así la totalidad de los ingresos obtenidos con motivo de la jubilación, como infundadamente lo sostiene la parte actora.

Sin que la anterior conclusión se demerite por los alegatos de la parte actora en el sentido de que a la fecha de la obtención de los ingresos por motivo de la jubilación no mantenía una relación de trabajo con su empleador y por ende no recibía ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, motivo por el cual al no existir uno de los elementos -ingresos por la prestación de servicios personales subordinados- no podía llevarse a cabo la mecánica (suma de ingresos por la presta-

ción de servicios personales subordinados y el monto de la exención) prevista en el dispositivo de cuenta, ya que el prescindir de uno de ellos resulta prácticamente imposible la acción de sumar; ya que el dispositivo de cuenta no hace tal distinción sino que éste de manera por demás genérica y abstracta, limita la exención prevista en la fracción VI del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, de ahí, pues, que si en el periodo durante el cual obtuvo los ingresos por jubilación también obtuvo ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, sin lugar a dudas éstos habrían de sumarse a fin determinar la limitante que nos ocupa, habida cuenta además que en las últimas líneas del último párrafo del artículo que nos ocupa, se señala lo siguiente: "Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención prevista en la fracción citada, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año." Lo cual pone por demás de manifiesto que por exclusión, la exención de referencia únicamente abarcará hasta un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, ya que por regla general la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención en ningún caso deberá dar como resultado un monto inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año.

Resultando, pues, irrelevante el que el importe de los ingresos por servicios personales subordinados sea cero o una cantidad distinta ya que si la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención en ningún caso deberá dar como resultado un monto inferior a siete veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, por exclusión se concluye que la exención prevista en la fracción VI del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente abarcará hasta un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 202, fracciones II y IV, 203, fracción II, aplicados a contrario sensu, 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, esta Sala;

R E S U E L V E :

I.- Han resultado improcedentes e infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento que delata la autoridad demandada, en consecuencia;

II.- NO ES DE SOBRESEERSE, NI SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO.

III.- La parte actora no probó su acción en este juicio, en consecuencia.

IV.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada cuyas características quedaron debidamente precisadas en el resultando 1° del presente fallo, ello en atención a los motivos y fundamentos expuestos en el mismo.

V.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario Licenciado **RICARDO MORENO MILLANES**, quien da fe.

PRIMERA SALA REGIONAL NORTE CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ILEGALIDAD DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO DEMANDADO, NO CAUSA LA NULIDAD DEL ACTO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, YA QUE SÓLO ATIENDE SOBRE LA TEMPORALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La única consecuencia que puede derivar de la irregularidad de la notificación en el juicio de nulidad, es que conforme al artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación, se tenga a la demandante como sabedora de la resolución que impugna en la fecha en que manifestó conocerla, pero de ninguna manera ello acarrea la nulidad de la resolución impugnada, pues la ilegalidad de la notificación sólo se atenderá para verificar, si la demanda fue presentada dentro del término de cuarenta y cinco días que para ese efecto establece el numeral 207 del mismo Ordenamiento legal, determinándose la oportunidad de dicha presentación, y en ese sentido, resolver sobre la causa de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, la cual debe ser examinada de oficio por la Sala conforme lo ordena el último párrafo de este precepto legal. (14)

Juicio No. 2675/2000-02-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de abril del 2001, por unanimidad votos.- Magistrado Ponente: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. Marco Antonio Esquivel Molina.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Por otra parte, a juicio de este Cuerpo Colegiado resulta fundado pero insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada el tercero de los argumentos contenidos en el concepto de impugnación en estudio, en el sentido de que la resolución impugnada no se notificó al contribuyente dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de su firma, como lo señala el diverso artículo 28 del Reglamento del Recurso de Inconformidad.

Ciertamente, le asiste la razón a la parte actora cuando señala que la notificación de la resolución que impugna se hizo fuera del plazo citado, en tanto que efectivamente tal notificación debió realizarse, de acuerdo al numeral 28 del Reglamento del Recurso de Inconformidad que estima violado, dentro de los cinco días posteriores a la fecha de su firma, esto es, dentro de los cinco días siguientes al 11 de octubre de 1999, fecha ésta en que se firmó el Acuerdo No. 831/99 en que se aprobó tal resolución, y no hasta el 18 de agosto del 2000, fecha en que se le dio a conocer, y en ese sentido la notificación de que se trata, tal y como lo sostiene la parte actora, se hizo fuera del plazo que marca el artículo 28 en estudio.

Sin embargo, la irregularidad que se apunta no trae consigo la nulidad de la resolución impugnada, porque aun cuando es cierto que existe una inobservancia al procedimiento del que emana, es decir, al procedimiento contemplado en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, también lo es que esa irregularidad de procedimiento no afectó las defensas de la demandante, ni trascendió al sentido de la resolución a debate, por lo que en el caso no se configura ninguna de las causas de anulación previstas por el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto por la fracción III de dicho dispositivo, se declarará que la resolución impugnada es ilegal cuando existan vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan a su sentido.

Se considera que por la circunstancia de no haberse notificado a la hoy actora la resolución que impugna, dentro del plazo que para ello prevé el referido artículo 28 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, no se vieron afectadas las defensas de la parte actora, en tanto que en este juicio de nulidad argumenta en contra de la

legalidad de esa resolución, así como del procedimiento del que deviene, y también se dice que esa inobservancia no trascendió al sentido de dicha resolución, porque aun y cuando se hubiera observado lo dispuesto por el citado artículo 28, es decir, se hubiera notificado la resolución dentro del plazo en él dispuesto, el sentido de tal resolución no habría cambiado, esto es, de todas maneras se hubieran confirmado las resoluciones materia del recurso de inconformidad, habida cuenta de que ya había sido aprobada y emitida con ese sentido.

Es necesario tener presente que el procedimiento para el trámite, substanciación y resolución del recurso de inconformidad, conforme al Reglamento en que se contempla, se compone de diversos actos que se encuentran concatenados entre sí y unos son antecedentes de otros, pero esas fases o etapas de trámite, substanciación y resolución, se agotan, de acuerdo al numeral 26 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, con la aprobación del proyecto de resolución, el que por esas circunstancias tendrá el carácter de resolución, y su consecuente emisión como tal.

Existe una segunda fase o etapa, la que se refiere a la eficacia de la resolución, que no es otra que la notificación al particular de la que ponga fin al recurso, la cual, conforme al artículo 28 del referido Reglamento, deberá efectuarse dentro de los cinco días posteriores a su firma.

Ahora bien, la irregularidad en esta última fase, esto es, en la de eficacia o notificación de la resolución, jurídicamente no provoca la de las fases que le anteceden, es decir, las de trámite, substanciación y resolución, ni mucho menos afecta la presunción de legalidad que le asiste a los actos que fueron objeto del recurso de inconformidad.

En otras palabras, el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, en cuanto a la notificación de la resolución que pone fin al recurso, no acarrea la ilegalidad de ésta, ya que su legal validez no se encuentra condicionada o supeditada a la validez de su notificación.

Resulta aplicable en lo conducente la tesis II-TASS-6725, sustentada por el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación, visible en la Revista del propio Tribunal, Segunda Época, Año VI, No. 57, de Septiembre 1984, página: 204, y que literalmente expresa:

"**ACTOS ADMINISTRATIVOS, SU VALIDEZ FORMAL AL MOMENTO DE SU EXPEDICIÓN NO QUEDA CONDICIONADA A SU NOTIFICACIÓN.-** En la fase administrativa es necesario distinguir dos momentos, a saber: a) la emisión de un acto administrativo, y b) la notificación del mismo, toda vez que los requisitos, condiciones y efectos son distintos en cada caso. Por lo que se refiere al primero, el artículo 16 constitucional establece que para emitir cualquier acto de molestia al particular, es indispensable que sea por mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo que se refiere al segundo momento, esto es, el de la notificación, en materia fiscal el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 134, 135, 136 y 137, establece las distintas formas por las cuales se pueden notificar los actos administrativos, así como los requisitos que deben cumplirse para tal efecto. En este orden de ideas, resulta evidente que **los requisitos que deben reunir un acto administrativo y la notificación misma, son diferentes,** por todo ello, si un acto, al momento de su emisión, es formulado por la autoridad competente, no puede considerarse que dicho acto es ilegal cuando al momento de su notificación han variado los fundamentos legales en los cuales se basó la autoridad para emitirlo, **toda vez que la validez de una resolución en sí no está condicionada a la validez de su notificación, dado que esta última actuación deberá reunir ciertos requisitos pero todos ellos encaminados a garantizar el principio de certeza jurídica consistente en que a la persona a quien va dirigido tenga conocimiento cierto del acto que se le notifica.** (190)

"Revisión No. 1305/83.- Resuelta en sesión de 28 de septiembre de 1984, por mayoría de 6 votos y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. Miguel Toledo J."

(El remarcado es de esta Juzgadora)

La única consecuencia que puede derivar de la irregularidad de la notificación en este juicio de nulidad, es que conforme al artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación, se tenga a la demandante como sabedora de la resolución que impugna en la fecha en que manifestó conocerla, que en el caso es el día 18 de agosto del 2000, pero de ninguna manera ello acarrea la nulidad de la resolución impugnada; ahora bien, como su demanda fue presentada el día 20 del mismo mes y mismo año, esto es, dentro del término de cuarenta y cinco días que para ese efecto establece el numeral 207 del mismo Ordenamiento legal, dicha presentación debe considerarse oportuna, y en ese sentido, en el presente caso no se surtió la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, la cual debe ser examinada de oficio por esta Sala conforme lo ordena el último párrafo de este precepto legal.

(...)

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, vigente a la fecha del presente fallo, es de resolverse y se:

R E S U E L V E :

I.- La parte actora **ANTONIO MURRA KRIZ**, en el juicio de nulidad No. 2675/2000-02-01-7, **NO PROBÓ SU PRETENSIÓN**; en consecuencia:

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA, precisada en el resultando 1o. del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL ACTOR Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

Licenciadas **ALMA ORQUÍDEA REYES RUIZ**, Presidenta de la misma, **JOSÉ MANUEL BRAVO HERNÁNDEZ**, Instructor en el presente juicio y **SANJUANA FLORES SAAVEDRA**, ante el C. Secretario Licenciado **MARCO ANTONIO ESQUIVEL MOLINA**, quien da fe.-

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REMOCIÓN DE DEPOSITARIO.- NO ES UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA NI AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL DEPOSITARIO REMOVIDO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN.- El acto en que se ordena la remoción de depositario, tiene como único objeto el de remover al depositario designado de los bienes otorgados en garantía vía embargo administrativo, ahora bien atendiendo a la naturaleza y objeto de dicho acto se podrá advertir no tiene el carácter de resolución definitiva, pues por ello se entiende en el ámbito administrativo, como el acto administrativo que da certeza a una situación legal o administrativa, decidiendo o solucionando un problema, conflicto, petición o litigio o bien concluyendo un procedimiento administrativo, situación que no se da en tal acto administrativo, pues en él no se le determinan en forma alguna obligaciones fiscales ni derechos al depositario, sino que en el acto que nos ocupa, tiene como único objeto el de hacer la remoción de depositario, por lo que se está, ante un acto que forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, por proveerse en las disposiciones que lo regulan del artículo 145 al 196-B del Código Fiscal de la Federación, pues dicho acto forma parte de todos aquellos actos que integran el procedimiento coactivo, seguido para hacer efectivo un crédito fiscal, por lo tanto dicho acto sólo es un instrumento o medio para el cumplimiento del referido fin, esto es un acto de tal procedimiento. Sentado lo anterior, podemos concluir que al no ser el acto recurrido una resolución definitiva, no se genera el supuesto de procedencia del recurso de revocación previsto en la fracción I del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, pues los casos a que se refiere en dicha fracción, atienden a resoluciones definitivas. Por otra parte, también es de advertirse que si bien es un acto de procedimiento, éste tiene como único objeto remover al depositario del bien, sin exigirse crédito alguno por dirigirse al depositario a quien se le comunica su remoción, por lo que tampoco se genera el supuesto de la fracción II, inciso a) del artículo 117 antes citado, y si bien como acto de procedimiento puede ubicarse en el supuesto previsto en el inciso b) de la misma fracción, es de advertirse que el mismo no le afecta su interés jurídico, lo que hace improcedente el recurso en

términos del artículo 124, fracción I del Código de la materia, pues el acto que se recurre, como ya se señaló se dirige al actor en su carácter de depositario y tiene como único objeto removerlo de dicho cargo, que no le confiere atribución alguna sino obligaciones, por lo que no le produce afectación en su esfera jurídica al recurrente, pues con el cargo de depositario no se adquiere ningún derecho, sino que es un mero auxiliar de la autoridad en la custodia de los bienes y su remoción es una facultad discrecional de la autoridad como así se dispone en el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, por lo que en esa virtud, tal y como lo señaló la enjuiciada el acto recurrido no le afecta su interés jurídico, de ahí lo infundado de lo argumentado por el actor, pues se insiste en el acto no se le determina adeudo a su cargo ni obligaciones referentes al crédito ni como tercero, ni como responsable solidario, que pudieran como falsamente lo aduce crearle afectación jurídica y ubicarlo en el supuesto del inciso c) de la fracción II del artículo 117 del Código de la materia. (15)

Juicio No. 530/2000-02-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de abril del 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. Marco Antonio Esquivel Molina.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Lo infundado del agravio en estudio, radica en que como lo reconoce el actor, el acto que precisó como acto recurrido, lo fue el contenido en oficio DEFAPV/407/99 de 4 de octubre de 1999, que obra en autos a folios 16 y 17, el cual tiene como ***único objeto*** la remoción de depositario de los bienes otorgados en garantía vía embargo administrativo, sobre los cuales tiene el ***carácter de depositario*** el actor

BERNARDINO CRUZ MARINES, documento al cual se le anexa el acta de embargo en que se le designó para tal cargo, ahora bien atendiendo a la naturaleza y objeto de dicho acto se podrá advertir que contrariamente a lo señalado por el actor, ***no tiene el carácter de resolución definitiva, pues por ello se entiende en el ámbito administrativo, como el acto administrativo que da certeza a una situación legal o administrativa, decidiendo solucionando (sic) un problema, conflicto, petición o litigio o bien concluyendo un procedimiento administrativo***, situación que no se da en la especie, pues en primer lugar al hoy actor no se le determinan en forma alguna obligaciones fiscales ni derechos como indebidamente aduce, sino que en el acto que nos ocupa, tiene como ***único objeto el de hacer la remoción de depositario***, esto es, se está ante un acto que como bien lo dice el actor un acto que forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, por proveerse en las disposiciones que lo regulan del artículo 145 al 196-B del Código Fiscal de la Federación, pues dicho acto forma parte de todos aquellos actos que integran el procedimiento coactivo, seguido para hacer efectivo un crédito fiscal, por lo tanto dicho acto sólo es un instrumento o medio para el cumplimiento del referido fin, esto es un acto de tal procedimiento.

Sentado lo anterior, podemos concluir que al no ser el acto recurrido una resolución definitiva, como bien lo señaló la enjuiciada no se genera el supuesto de procedencia del recurso de revocación previsto en la fracción I del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, pues los casos a que se refiere en dicha fracción, atienden a resoluciones definitivas, de ahí lo infundado de lo manifestado por el actor. Por otra parte, también es de advertirse que si bien es un acto de procedimiento, éste tiene como único objeto remover al depositario del bien, sin exigirse en él, crédito alguno al actor, por ser a éste a quien se dirige en su carácter de depositario, por lo que tampoco se genera el supuesto de la fracción II, inciso a) del artículo 117 antes citado, y si bien como acto de procedimiento puede ubicarse en el supuesto previsto en el inciso b) de la misma fracción, es de advertirse que el mismo no le afecta su interés jurídico como bien lo menciona la autoridad, lo que hace improcedente el recurso en términos del artículo 124, fracción I del Código de la materia, pues el acto que se recurre, como ya se señaló se dirige al hoy actor en su carácter de

depositario y tiene como único objeto removerlo de dicho cargo, que no le confiere atribución alguna sino obligaciones, por lo que no le produce afectación en su esfera jurídica al recurrente, pues con el cargo de depositario no se adquiere ningún derecho, sino que es un mero auxiliar de la autoridad en la custodia de los bienes y su remoción es una facultad discrecional de la autoridad como así se dispone en el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, por lo que en esa virtud, tal y como lo señaló la enjuiciada el acto recurrido no le afecta su interés jurídico, de ahí lo infundado de lo argumentado por el actor, pues se insiste en el acto no se le determina adeudo a su cargo ni obligaciones referentes al crédito ni como tercero, ni como responsable solidario, que pudieran como falsamente lo aduce crearle afectación jurídica y ubicarlo en el supuesto del inciso c) del artículo 117 del Código de la materia, por lo que en la especie no se desvirtúa la legalidad del desechamiento del recurso de trato que se impugna, del que procede reconocer su validez.

Al respecto resulta aplicable por analogía la Jurisprudencia sostenida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

> "**DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCIÓN DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).-** El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la

Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

"Amparo en revisión 347/88. Pedro Dick. 24 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Mario Octavio Vázquez Padilla.

"Amparo en revisión 259/92. Arturo Fuentes Montijo. 13 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.

"Amparo en revisión 15/94. Raúl Ballesteros Jerez. (Recurrente: Fernando Ulises Orozco Cortez). 19 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Rosenda Tapia García.

"Amparo en revisión 256/95. Arturo Romero Reyes. 28 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Ángeles Peregrino Uriarte, en funciones de Magistrada por ministerio de ley. Secretaria: María Elva Lugo Pesqueira.

"Amparo en revisión 127/96. Fábrica de Barro San Antonio, S.A. de C.V. (Recurrente: Antonio Pujol Corbalá). 27 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Ángeles Peregrino Uriarte, en funciones de Magistrada por ministerio de ley. Secretario: Sergio Medina Zavala.

"Novena Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Agosto de 1996, Tesis: V.2o. J/24, Página: 414."

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 236, 237, 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora **BERNARDINO CRUZ MARINES**, en el juicio No. **530/2000-02-01-7**, **NO PROBÓ SU PRETENSIÓN**, en consecuencia.

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ, de la resolución impugnada precisada en el resultando 1º del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **ALMA ORQUÍDEA REYES RUIZ**, Presidenta de la misma, **JOSÉ MANUEL BRAVO HERNÁNDEZ**, ponente en el presente juicio, y **SANJUANA FLORES SAAVEDRA**, ante el C. Secretario Licenciado **MARCO ANTONIO ESQUIVEL MOLINA**, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VISITA DOMICILIARIA.- CONCLUYE CON EL ACTA FINAL DE VISITA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, establece que el plazo para la conclusión de la visita es de 6 meses, y que podría ampliarse por dos periodos iguales, también dicho dispositivo establece cuándo se inicia dicho plazo, y cuándo se tendrá por concluida la visita, pues textualmente dispone que el plazo es a partir de que se notifique el inicio de las facultades de comprobación, asimismo menciona que sólo cuando no se levante acta final de visita, se entenderá concluida en la fecha en que venció el plazo, quedando sin efecto la orden y todo lo actuado que de ella derivó, por lo que es claro que será el acta final la que se establece como parámetro para considerar concluida la visita, pues sólo cuando no se levante ésta, en el plazo mencionado la conclusión se dará automáticamente conforme a la disposición en estudio, y no así cuando se emita la liquidación que corresponda. (16)

Juicio No. 914/2000-02-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de mayo del 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. Marco Antonio Esquivel Molina.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VISITA DOMICILIARIA.- LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES, NO IMPLICA QUE SE ACREDITE SU NOMBRAMIENTO O SU RELACIÓN LABORAL CON LA AUTORIDAD FISCAL.- El artículo 44, fracción III del Código Fiscal de la Federación, sólo obliga a que el personal actuante se identifique, mas no a que se haga entrega de la constancia de identificación, ni tampoco se acredite la relación laboral entre los visitadores y la autoridad fiscal, lo que inclusive

no es materia de ilegalidad de la visita y de la liquidación recurrida, ya que la relación laboral que deriva de los nombramientos que se expiden, no es materia de competencia de este Tribunal, ni se establece como causa de nulidad, en el artículo 238 del Código Tributario, además no debe perderse de vista que a través de la orden de visita emitida por autoridad competente *se legitima al visitador para actuar en la visita en nombre de dicha autoridad*, carácter que se obtiene por la función que realizará en la visita y no así el nombramiento que se le otorgue en dicha dependencia, ya que dicho personal no funge como autoridad por sí mismo, sino que funge como auxiliar de la autoridad competente, por lo que el personal actuante no tiene por qué acreditar su existencia como autoridad en la visita, sino únicamente identificarse, pues no se debe perder de vista que el requisito de identificación tiene como única finalidad la de que el contribuyente se percate que el personal actuante que se identifica, es el mismo que se designa en orden emitida por autoridad competente satisfaciéndose el requisito de competencia y de legalidad que establece el artículo 16 Constitucional, mas la identificación de dicho empleado no le otorga legitimación para actuar en la visita, pues como ya se señaló es la orden de visita la que le otorga dicha facultad, es decir, es el acto de molestia original de autoridad competente que le autoriza para la visita y en la cual se precisa que es personal autorizado por la autoridad competente, en quien recae precisamente la ejecución material de la facultad otorgada a la autoridad y su actuación se traduce en una extensión y auxilio de ésta. (17)

Juicio No. 914/2000-02-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de mayo del 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. Marco Antonio Esquivel Molina.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Lo infundado del agravio en estudio radica en que si bien el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 1996 y 1997, años en que se practicó la visita domiciliaria a la hoy actora, establece que el plazo para la conclusión de la visita sería de 6 meses, y que podría ampliarse por dos periodos iguales, también dicho dispositivo establece cuándo se inicia dicho plazo, y cuándo se tendrá por concluida la visita, pues textualmente dispone que el plazo es a partir de que se notifique el inicio de las facultades de comprobación, asimismo menciona, que sólo cuando no se levante acta final de visita, se entenderá concluida en la fecha en que venció el plazo, quedando sin efecto la orden y todo lo actuado que de ella derivó, por lo que es claro que será el acta final la que se establece como parámetro para considerar concluida la visita, pues sólo cuando no se levante ésta, en el plazo mencionado la conclusión se dará automáticamente conforme a la disposición en estudio, y no así cuando se emita la liquidación que corresponda, como indebidamente pretende la actora, por lo tanto, si del acta parcial de inicio que obra en autos a folios 52 al 58, se advierte que el inicio de las facultades de comprobación fue el 17 de octubre de 1996 y como así lo reconoce el actor el plazo de 9 meses fue ampliado por un período igual, esto es, que en el caso a estudio la revisión debía concluir en un período de 18 meses, contado a partir de la fecha de inicio antes indicada, feneciendo el plazo referido el 17 de abril de 1998, y si en el caso el acta final de visita se levantó el 30 de julio de 1997, es claro que la misma concluyó antes de que venciera el plazo ampliado para la conclusión de la visita que nos ocupa conforme al dispositivo en comento, de ahí lo infundado del agravio en estudio.

(...)

Lo infundado del agravio en estudio deriva en que tal y como lo reconoce la actora, el artículo 44, fracción III del Código Fiscal de la Federación, sólo obliga a que el personal actuante se identifique, mas no a que se haga entrega de la constancia de identificación, por lo que tal exigencia de la actora en ese sentido resulta infundada. Por otra parte, si bien la demandada en el recurso, indebidamente le rechaza la prueba de solicitud de informes a la autoridad, respecto a que si el personal actuante de la visita, se considera trabajador conforme a la Ley Federal del Trabajo Burocráti-

co, pues conforme al artículo 130 del Código antes citado, en el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, a excepción la testimonial y la confesión de la autoridad mediante absolución de posiciones, por lo tanto dicha prueba sí era admisible y para el desahogo de las mismas el procedimiento contencioso, en el que en el artículo 233 del Ordenamiento legal en cita establece la posibilidad de requerir a la autoridad de la información necesaria, para resolver la instancia del recurso, no obstante ello si bien es fundado el agravio, el mismo resulta inoperante, ya que no afecta sus defensas ni trasciende en el sentido del fallo, pues es de advertirse que dicha probanza se encuentra encaminada a demostrar la relación laboral entre los visitadores y la autoridad fiscal, lo que no es materia de ilegalidad de la visita y de la liquidación recurrida, ya que la relación laboral que deriva de los nombramientos que se expiden, no es materia de competencia de este Tribunal, ni se establece como causa de nulidad, en el artículo 238 del Código Tributario, además no debe perderse de vista que a través de la orden de visita emitida por autoridad competente *se legitima al visitador para actuar en la visita en nombre de dicha autoridad*, carácter que se obtiene por la función que realizará en la visita y no así el nombramiento que se le otorgue en dicha dependencia, ya que dicho personal no funge como autoridad por sí mismo, sino que funge como auxiliar de la autoridad competente, por lo que el personal actuante no tenía por qué acreditar su existencia como autoridad en la visita, sino únicamente identificarse, como lo reconoce la parte actora que se hizo con identificación emitida por autoridad competente para ello, pues no se debe perder de vista que el requisito de identificación tiene como única finalidad la de que el contribuyente se percate que el personal actuante que se identifica, es el mismo que se designa en orden emitida por autoridad competente satisfaciéndose el requisito de competencia y de legalidad que establece el artículo 16 Constitucional, mas la identificación de dicho empleado no le otorga legitimación para actuar en la visita, pues como ya se señaló es la orden de visita la que le otorga dicha facultad, es decir, es el acto de molestia original de autoridad competente que le autoriza para la visita y en la cual se precisa que es personal adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Zacatecas, ya que es a través del personal autorizado por la autoridad competente, en quien recae precisamente la ejecución material de la facultad otorgada a la autoridad y

su actuación se traduce en una extensión y auxilio de esta, de ahí lo infundado del agravio que se analiza.

(...)

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 236, 237, 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora **CAMBIOS LA BUFA, S.A. DE C.V.**, en el juicio No. **914/2000-02-01-7**, **NO PROBÓ SU PRETENSIÓN**, en consecuencia.

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución impugnada precisada en el resultando 1° del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **ALMA ORQUÍDEA REYES RUIZ**, Presidenta de la misma, **JOSÉ MANUEL BRAVO HERNÁNDEZ**, ponente en el presente juicio, y **SANJUANA FLORES SAAVEDRA**, ante el C. Secretario Licenciado **MARCO ANTONIO ESQUIVEL MOLINA**, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

EL CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PUEDE HACERSE AUN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR SER UNA EXCEPCIÓN A DICHO PLAZO QUE SE ESTABLECE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133 DEL MISMO CÓDIGO.- Conforme al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, el lapso para la conclusión de la visita deberá concluirse en un plazo de 6 meses, que puede ampliarse hasta por dos ocasiones, y que de no concluirse en dicho plazo deberá dejarse sin efectos la orden y todo lo actuado, sin embargo a dicha regla general se exceptúa el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece que cuando en una resolución recaída en un recurso de revocación, se ordene reponer un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que quede firme la resolución del recurso, aun cuando no hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos 46-A y 67 del Código de la materia, siendo este supuesto de excepción que se genera cuando se resuelve el recurso de revocación, ordenándose la reposición del procedimiento de fiscalización, lo que así se permite conforme al artículo 133, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación. (18)

Juicio No. 321/2002-05-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de mayo del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. Marco Antonio Esquivel Molina.

CÓDIGO FISCAL DELA FEDERACIÓN

RECURSO DE REVOCACIÓN.- LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA A REALIZAR UN ACTO O INICIAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE CUMPLIRSE EN EL PLAZO DE CUATRO MESES, COMPUTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO QUEDE FIRME Y NO A PARTIR DE QUE SE NOTIFIQUE.- Si bien es cierto, conforme al artículo 133, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando en una resolución del recurso se ordene emitir una nueva o reponer el procedimiento, la autoridad deberá hacerlo en el plazo de cuatro meses, cierto es también que dicho plazo iniciará su cómputo a partir de que la resolución del recurso quede firme y no a partir de que se notifique, confirmándose y sólo quede firme cuando ésta se impugnó en una instancia superior confirmándose su validez o bien haya transcurrido el plazo para su impugnación y no se controvierta la resolución de recurso, por tanto, si la resolución del recurso de revocación, deja sin efectos la liquidación recurrida y ordena reponer el procedimiento de revisión a partir del acta final de visita, transcurrido el plazo de 45 días hábiles para su impugnación en juicio de nulidad que se prevé en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, sin que el contribuyente la hubiera combatido, será al día hábil siguiente, en que quedó firme la resolución del recurso de trato, y a partir de cuando se inicia el plazo para cumplimentar el recurso por parte de la autoridad fiscal, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 133 del Código de la materia vigente desde 1998 a la fecha. (19)

Juicio No. 321/2002-05-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de mayo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. Marco Antonio Esquivel Molina.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

A criterio de esta Juzgadora, el argumento que hace valer la actora anteriormente transcrito, resulta infundado en atención si bien es cierto conforme al artículo 133, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando en una resolución del recurso se ordene emitir una nueva o reponer el procedimiento, la autoridad deberá hacerlo en el plazo de 4 meses, cierto es también que dicho plazo iniciará su cómputo a partir de que la resolución del recurso quede firme y no a partir de que se notifique como indebidamente aduce la actora, ***y sólo queda firme cuando ésta se impugnó en una instancia superior confirmándose su validez o bien haya transcurrido el plazo para su impugnación y no se controvierta la resolución de recurso***, por tanto, si la resolución del recurso de revocación No. 103/2000, contenida en oficio 920, que obra en autos a folios 82 al 85, deja sin efectos la liquidación recurrida contenida en oficio 13627 y ordena reponer el procedimiento de revisión a partir del acta final de visita, notificándose el ***12 de julio del 2000***, el plazo de 45 días hábiles para su impugnación en juicio de nulidad que se prevé en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, descontando los sábados y domingos y el primer período vacacional de este Tribunal, según el acuerdo G/3/2000 emitido por la Sala Superior, venció el **29 de septiembre del 2000**, sin que el contribuyente la hubiera combatido, por lo que es al día hábil siguiente esto es el **2 de octubre del 2000**, en que quedó firme la resolución del recurso de trato, y a partir de cuando se inicia el plazo para cumplimentar el recurso por parte de la autoridad fiscal, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 133 del Código de la materia vigente desde 1998 a la fecha, y si en el caso el propio actor ofrece como prueba el acta parcial de inicio de cumplimentación de fecha **15 de enero del 2001**, que obra en autos a folios 361 al 365, mediante el cual la autoridad fiscal inicia la reposición del procedimiento que se ordena en la resolución del recurso de trato, es de concluirse que de la fecha de **2 de octubre del 2000**, en que quedó firme la resolución al recurso, a la fecha **15 de**

enero del 2001, en que se inició la reposición del procedimiento, no había transcurrido el plazo de 4 meses que exige el último párrafo del artículo133 en comento, por lo que no existe violación a dicho dispositivo, de ahí lo infundado del agravio en estudio.

C).- En el tercer concepto de violación, la parte actora manifiesta violación a lo dispuesto en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, porque una vez levantada el acta final del 23 de septiembre de 1999, no se puede efectuar un nuevo acto de autoridad en su contra, sino sólo con una nueva orden de visita.

Lo infundado del agravio en estudio radica en que el acta final de 23 de septiembre de 1999, al igual que la liquidación que sustentaba en el oficio 13267, fue dejada sin efectos al resolverse el recurso de revocación 130/2000, en oficio 920 de 23 de junio del 2000, que obra a folios 82 al 85, por considerar que dicha actuación se encontraba viciada, por lo que dicha acta fue apartada de la vida jurídica, por lo que se ordenó su reposición, lo que así se permite conforme al artículo 133, fracción III del Código Fiscal de la Federación, por lo tanto si posterior al acta final 24 de julio del 2001, que obra a folios 98 al 117, que es la que legalmente existe y que se emitió en cumplimiento a lo ordenado en el recurso, no se acredita se hubieran levantado actas complementarias después de dicha acta, por tanto no existe violación a lo dispuesto en el artículo 46, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, de ahí lo infundado del agravio en estudio.

D).- En el **cuarto agravio** la parte actora en esencia sostiene que se viola en su perjuicio el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, ya que si la orden de visita se notificó el 19 de octubre de 1998 y el acta de 14 de abril de 1999, se levantó el acta parcial de ampliación de plazo, la misma debió haber concluido el 19 de octubre de 1999, con el levantamiento del acta final, ya que a esa fecha había transcurrido el plazo de 6 meses que se amplió para la conclusión de la visita conforme al dispositivo en comento, lo que no ocurre en el caso, pues el acta final se levantó hasta el 24 de julio del 2001, sin que existiera ningún supuesto de suspensión de dicho plazo, además de que también se violenta en su perjuicio lo dispuesto en el

artículo 50 del Código Tributario, puesto que si la última acta se levantó el 23 de septiembre de 1999, la notificación debió haberse notificado dentro de los 6 meses siguientes, esto es a más tardar el 24 de marzo del 2000, por lo que si se notificó el 19 de noviembre del 2000, produce que se deje sin efectos la orden y las actuaciones que derivaron de la misma, conforme lo establece el referido precepto.

Lo infundado del agravio en estudio, radica en que si bien conforme el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, se establece que el plazo para la conclusión de la visita deberá concluirse en un plazo de 6 meses, que puede ampliarse hasta por dos ocasiones, y que de no concluirse en dicho plazo deberá dejarse sin efectos la orden y todo lo actuado, cierto es también que dicha regla general se exceptúa, conforme al supuesto previsto en el último párrafo del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece que cuando en una resolución recaída en un recurso de revocación, se ordene reponer un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de 4 meses contados a partir de que quede firme la resolución del recurso, aun cuando no hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos 46-A y 67 del Código de la materia, siendo este supuesto de excepción que se genera en el caso que nos ocupa, pues como ya se indicó el acta final de 23 de septiembre de 1999, al igual que la liquidación que sustentaba en el oficio 13267, fue dejada sin efectos al resolverse en oficio 920 de 23 de junio del 2000, el recurso de revocación 130/2000 interpuesto por el hoy actor, que obra a folios 82 al 85, por considerar que dicha actuación se encontraba viciada, por lo que dicha acta fue apartada de la vida jurídica, por lo que se ordenó su reposición, lo que así se permite conforme al artículo 133, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo tanto el acta final de 24 de julio del 2001, es la existente jurídicamente, y emitida conforme al dispositivo de trato, que autoriza hacerlo en reposición del procedimiento de fiscalización, aun cuando haya transcurrido el plazo de conclusión que exige el artículo 46-A del Código Tributario, supuesto de excepción plenamente acreditado en autos, de igual manera, tampoco existe violación al artículo 50 del citado Código, pues si bien dicho dispositivo obliga a que se emita la liquidación en un plazo de 6 meses a partir del levantamiento del acta final, y si en el caso ésta se instruyó reponiendo el procedimiento el 24 de julio del 2001, y como lo reconoce el actor la notificación de la

liquidación que se impugna fue el 19 de noviembre del 2001, es claro que el mismo se emitió y notificó dentro del plazo previsto en el artículo en comento, de ahí lo infundado del agravio en estudio.

E).- En el **quinto agravio** la parte actora, esencialmente sostiene que en la especie se infringe en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, pues dicho dispositivo establece que las autoridades podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, cuando no se presente la documentación comprobatoria de más del 3% de algunos de los conceptos de declaraciones y si como lo reconoce la autoridad se rechazaron todas las compras de cerveza, es por demás que se excede ese 3%, por lo que le debió aplicar el procedimiento establecido en los artículos 57 y 59 del Código Fiscal de la Federación en vigor, puesto que es imposible que haya tenido un 100% de margen de ganancia, por lo que la liquidación de la autoridad es irreal.

Es infundado lo manifestado por la parte actora, respecto a que en el caso le es aplicable el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, que en las fracciones II y III, inciso a) de dicho precepto, se determinan entre otros casos, como supuestos para la procedencia de la determinación presuntiva de la utilidad fiscal, no presentar libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionar los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, así también la omisión de registro de operaciones, ingresos o compras, y alteración del costo por más del 3% de lo declarado en el ejercicio, por lo tanto es de concluirse que en las fracciones en estudio y en las demás de dicho precepto, no se establece como causa de determinación presuntiva el rechazo de compras por más del 3%, sino la no presentación de registros, la omisión de registro o la alteración de costo por dicho porciento, pero no el rechazo en deducciones por el concepto de compras, como indebidamente pretende el actor, supuesto que tampoco se contempla como presunción de ingresos o determinación presuntiva de contribuciones a que se refieren los artículos 59 y 57 del Código Fiscal de la Federación, por lo que resultan inaplicables los preceptos que cita la actora, de ahí lo infundado de su agravio.

F).- Manifiesta la parte actora en su **sexto agravio** que la liquidación carece de fundamentación y motivación, en razón de que la autoridad cita la fracción IX, del artículo 136 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero en forma incompleta y además no determinó si la operación corresponde a una compra o a un gasto, sin hacer ningún razonamiento lógico-jurídico, pues se trata de dos conceptos diferentes, pues uno trata sobre las mercancías o productos de los que obtiene sus ingresos, y los gastos que son las erogaciones indispensables para su actividad, si deben reunir los requisitos de las deducciones, por lo que indebidamente se le aplica el dispositivo referido.

Resulta infundado el agravio de estudio, en razón de que en primer término es de señalar que la autoridad liquidadora, en el considerando único, punto I, inciso b), en el rubro de deducciones de la resolución que se impugna, específicamente en las hojas 2 a la 7, en ningún momento rechaza deducciones con apoyo en la fracción IX, del artículo 136 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por lo que el argumento de la parte actora resulta notoriamente inoperante, pues atiende a dispositivos no aplicados en la resolución combatida, además de ser insuficiente por no indicar a qué partida se refiere.

No obstante es de advertir, que la autoridad le rechaza deducciones por los rubros de compras y otras deducciones (gastos) en forma precisa, en cantidades de $4’072,728.00 y $19,052.00 respectivamente, por lo que corresponde al concepto de compras se rechazan por dos causas por no reunir los requisitos fiscales por la cantidad de $3’830,066.93, como son entre otros el que no fueron impresos por establecimiento autorizado, sin cédula de identificación fiscal, etc., requisitos que se exigen para su deducción conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así también por la cantidad de $111,829.07, por no contar con documentación comprobatoria, lo que se circunstancia en el acta final de visita, por lo cual considera se incumple con lo dispuesto en el artículo 136, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que exige que las deducciones en general tanto compras como gastos, se comprueben con documentación comprobatoria y que además cumpla con los requisitos fiscales, lo que no se cumple en el caso, ni el actor se ocupa de demostrar la

procedencia de las deducciones que declaró, de igual forma, conforme a dicho dispositivo, también se rechaza por concepto de gastos la cantidad de $15, 590.00 por no acreditarse con documentación comprobatoria y $3,362.00 por no ser gastos indispensables para su actividad, como eran colegiaturas y maestrías, etc., apoyándose el rechazo por este rubro, con lo dispuesto en el artículo 136, fracción I del la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tanto, es claro que la autoridad sí le motiva y fundamenta los rechazos en deducciones, sin que la parte actora se ocupe de desvirtuar lo determinado por la autoridad, ni mucho menos demuestra la procedencia de sus deducciones que declaró y que le rechaza la autoridad, de ahí lo insuficiente e infundado del agravio en estudio.

(...)

Por lo antes expuesto y fundado en derecho con apoyo además de los artículos 236, 237, 239, fracción I y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora **MANUEL DE JESÚS ÁVILA GALINDO**, en este juicio **321/2002-05-01-7**, **NO PROBÓ SU PRETENSIÓN**, en consecuencia.

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, precisada en el resultando 1o. del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **SANJUANA FLORES SAAVEDRA**, Presidenta de la misma, **JOSÉ MANUEL BRAVO HERNÁNDEZ**, ponente en el presente juicio, y **ALMA ORQUÍDEA REYES RUIZ**, ante el C. Secretario Licenciado **MARCO ANTONIO ESQUIVEL MOLINA**, quien da fe.

SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CIRCULARES, INICIO Y VIGENCIA DE LAS MISMAS.- En atención a lo dispuesto por el artículo 7° del Código Fiscal de la Federación, para que una circular adquiera fuerza obligatoria debe ser puesta en vigor mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues no debe perderse de vista que las disposiciones administrativas de carácter general que imponen obligaciones generales e impersonales, tienen el carácter de verdaderas normas reglamentarias, y las leyes y reglamentos sólo pueden obligar cuando son debidamente expedidas, publicadas y promulgadas, ya que a través de dichos actos se atestigua su existencia, ordenándose su cumplimiento y realizándose su notificación, a partir de la cual se considerará para el inicio de su vigencia produciendo sus efectos, por lo que si la circular S-10.9 del 27 de mayo de 1998, no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces no puede tener eficacia y consecuentemente su incumplimiento no puede sustentar infracción alguna, como indebidamente lo pretenden las enjuiciadas. (20)

Juicio No. 2787/00-02-03-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de marzo del 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Luis Moisés García Hernández.- Secretario: Lic. Rodolfo Herrera Sandoval.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de los Magistrados que integran este Cuerpo Colegiado, el concepto de impugnación que se analiza resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución combatida.

En efecto, primeramente conviene puntualizar que de un atento y detenido estudio realizado a la resolución impositora de la sanción, misma que obra en autos a folio No. 000023 del expediente en que se actúa por haberla ofrecido como prueba la parte actora, se puede constatar que la multa recurrida fue impuesta a la parte actora en virtud de que **debió presentar la información de las Reservas Técnicas Específicas de junio de 1998 a más tardar el 20 de julio de 1998**, sin que la hubiese presentado en el plazo señalado infringiendo con ello el artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la circular S-10.9 del 27 de mayo de 1998, aplicándose en consecuencia la sanción establecida en el artículo 139, fracción XVIII de la citada Ley.

Ahora bien, el artículo 139, fracción XVIII de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, establece lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 139.- Las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en esta Ley, así como a las disposiciones que de ella emanen, serán impuestas administrativamente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de acuerdo a lo siguiente:**
>
> "**(...)**
>
> "**XVIII.- Multa de 200 a 2000 días de salario, a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros por la falta de presentación o presentación extemporánea de los informes y documentación a que se refiere el artículo 107 de esta Ley.**
>
> "(...)"

Por su parte el artículo 107 de la mencionada Ley, textualmente dispone:

"**ARTÍCULO 107.- Las instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros y demás personas que en los términos de esta Ley, estén sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, deberán rendir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la propia Comisión, en la forma y términos que al efecto establezcan, los informes y pruebas que sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas les corresponda ejercer.**"

De los mencionados preceptos legales se desprende que en ninguno de ellos se establece la fecha, término o plazo en el que las sociedades mutualistas de seguros obligatoriamente deben presentar la información referente a las Reservas Técnicas Específicas, por lo que en tal virtud y como lo reconoce la propia autoridad en su oficio de contestación al señalar que: *"(…)* ***la Circular S-10.9 del 27 de Mayo del 1998, (...) establece el plazo y la forma de entrega de la información solicitada por esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas*** *(...)"*, es que se concluye que la obligación que se consideró incumplida y que motivó la multa combatida se consigna no en el artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, sino en la circular **S-10.9 del 27 de mayo de 1998.**

Ahora bien, una vez que ha quedado debidamente precisado que la obligación cuyo incumplimiento dio origen a la sanción determinada a la hoy actora se encuentra contenida en la circular S-10.9 del 27 de mayo de 1998, la cual no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, circunstancia que se confirma en virtud de que la autoridad demandada en ningún momento desvirtúa tales afirmaciones de la actora, sino por el contrario se limita a señalar que resulta inoperante su manifestación en el sentido de que para que las circulares surtan plenos efectos deban ser publicadas en

el Diario Oficial de la Federación; este Tribunal llega a la conclusión de que la sanción combatida resulta ilegal.

Lo anterior es así, toda vez que como bien lo señala la enjuiciante, para que una circular adquiera fuerza obligatoria debe ser puesta en vigor mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues no debe perderse de vista que las disposiciones administrativas de carácter general que imponen obligaciones generales e impersonales como las que se contienen en la circular S-10.9 del 27 de mayo de 1998 en que se sustenta la sanción combatida, tienen el carácter de verdaderas normas reglamentarias, y las leyes y reglamentos sólo pueden obligar cuando son debidamente expedidas, publicadas y promulgadas, ya que a través de dichos actos se atestigua su existencia, ordenándose su cumplimiento y realizándose su notificación, a partir de la cual se considerará para el inicio de su vigencia produciendo sus efectos, por lo que si la circular S-10.9 del 27 de mayo de 1998, no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces no puede tener eficacia y consecuentemente su incumplimiento no puede sustentar infracción alguna, como indebidamente lo pretenden las enjuiciadas, circunstancia por la cual se concluye lo fundado del agravio en estudio, por lo que procede se declare la nulidad de la resolución combatida, así como de la sanción que confirma de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que fueron emitidas en contravención a las disposiciones legales aplicables, y los hechos en que se sustenta la infracción no se realizaron.

No es óbice para concluir lo anterior lo señalado por las enjuiciadas en su escrito de contestación en el sentido de que los requisitos establecidos en los artículos 7 y 35 del Código Fiscal de la Federación, no le resultan aplicables porque dicha normatividad no es supletoria de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; pues no debe perderse de vista que aun cuando la mencionada Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros no establezca la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación, cierto es también que los actos de publicación son actos necesarios e indispensables para que las circulares tengan plena eficacia, debiendo mencionarse además que en este sentido sí le resulta

aplicable el artículo 7° del Código Fiscal de la Federación, respecto a cuándo se deben considerar vigentes las disposiciones administrativas, pues dicho Ordenamiento legal no sólo se aplica supletoriamente, sino también en forma complementaria en el ámbito administrativo, como sucede en el caso en que la ley especial, no prevé cuándo iniciarán su vigencia las circulares a que se refiere el artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, habida cuenta que el mencionado artículo 7° del Código Fiscal de la Federación alude a todas **las disposiciones administrativas de carácter general y no sólo a disposiciones de carácter fiscal especial**, de ahí lo infundado de las argumentaciones vertidas por las demandadas.

(...)

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 236, 237, 238, fracciones II y IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora **TORREÓN, SOCIEDAD MUTUALISTA DE SEGUROS**, en este juicio **2787/00-02-03-2, PROBÓ SU ACCIÓN**, en consecuencia:

II.- SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, PRECISADA EN EL RESULTANDO PRIMERO DE ESTE FALLO.

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **JOSÉ MAURICIO FERNÁNDEZ Y CUEVAS** Ponente en el presente juicio y Presidente de la Sala, **FRANCISCO MANUEL OROZCO**

GONZÁLEZ Y M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL, ante el C. Secretario Licenciado **Rodolfo Herrera Sandoval**, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

DIFERENCIAS ENTRE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.- Cuando la parte actora argumente en juicio contencioso administrativo, que un acuse de recibo no reúne los requisitos de una legal constancia de notificación personal, debe de considerarse inoperante el agravio en mención, dado que la notificación por correo certificado con acuse de recibo, es diferente en cuanto a sus formalidades, a una notificación personal, primera de ellas que encuentra su justificación en lo dispuesto por el artículo 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación, que prevé que se pueden realizar notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, situación que es diferente a una personal en la cual se debe de observar lo dispuesto por el numeral 137 del invocado Código Fiscal, en cuanto al levantamiento de un citatorio previo. (21)

Juicio No. 351/01-02-03-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de junio de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Mario Rodríguez Junco.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

LEGALIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.- Es legal la notificación ajustada a Derecho practicada por correo certificado con acuse de recibo, ya que está autorizada por el Legislador con las formalidades, regulación, y justificación previstas en la Ley del Servicio Postal Mexicano, artículo 42, primer párrafo, dentro del Capítulo XIII, Título *"Acuses de recibo de piezas registradas y con derechos por cobrar"*, que señala: *"El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinata-*

rio o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente, como constancia." De ello se advierte que en el desahogo de las diligencias de las notificaciones realizadas por correo certificado con acuse de recibo, se le exige al Servidor de la Oficina de Correos, que en los registrados se asiente la firma de recepción del destinatario, además de la obligación de entregarle a la autoridad remitente la constancia de notificación; por ende, debe considerarse legal la diligencia de notificación en la cual se asienta en el acuse de recibo respectivo, la firma y el nombre del destinatario; máxime si la notificación se entendió con el mismo y no con un tercero. (22)

Juicio No. 351/01-02-03-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de junio de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Mario Rodríguez Junco.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Como se desprende de lo anterior y de la prueba que obra a folios 31 del expediente en que se actúa, esta Juzgadora considera que los agravios hechos valer por la parte actora en el escrito de contestación a la vista que se le dio por esta Sala, en auto de 26 de abril del año en curso, resultan ineficaces por infundados para declarar la nulidad de la resolución impugnada, toda vez que las autoridades demandadas probaron que la citada resolución, No. 16190010816359, le fue notificada de manera legal el día 09 de octubre del 2000, conforme lo dispuesto por el artículo 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación, que señala:

"***ARTÍCULO 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:***

"***I.- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.***

"***(…)***"

(El subrayado es de esta Juzgadora)

Lo anterior se concluye así, toda vez que la autoridad en su oficio de contestación a la demanda instaurada en su contra, anexa el acuse de recibo de la notificación a que hace referencia el artículo transcrito (folio 31), del documento identificado con número de control 16190010816359 y del cual, se aprecia lo siguiente:

"***DESTINATARIO: MÁRQUEZ AVITIA JORGE ALBERTO***
"***PUENTE NUEVO No. 550 23***
"***COL. RIN LA MERCED C.P. 27276***
"***ENTRE PATRIARCA Y FUNDIDORES***
"***TORREÓN, COAH.***"

Y se aprecia que fue recibido:

"***Fecha de recibido 09/10/2000***"

"***Nombre y firma de quien recibe: 'Jorge Márquez Avitia' (firma)***"

Así como el documento que se notificó:

"**No.** ***16190010816359***"

Lo que prueba en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia fiscal, que la notificación de la multa materia de la *litis*, fue realizada conforme a lo dispuesto por el

artículo 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación, ya que la diligencia se realizó **personalmente por correo certificado con acuse de recibo** con el destinatario de la misma *C. Jorge Márquez Avitia* y se hizo de su conocimiento un acto autoritario consistente en una multa, que constituye un acto recurrible; además existe evidencia suficiente para concluir que la notificación fue recibida personalmente por el propio *C. Jorge Márquez Avitia*, parte actora en el presente juicio, como esta Juzgadora a simple vista puede apreciar al comparar la firma que consta en el acuse de recibo en estudio, y la impuesta en la demanda inicial, por lo que en las relacionadas condiciones y al haber la autoridad probado la legalidad de la notificación y al no haber sido desvirtuada la notificación en comento por el accionante en el escrito de contestación a la vista ordenada por diverso proveído de fecha 26 de abril del año en curso, dicho documento público hace prueba plena de su legal existencia y desahogo en términos de lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, y por ende se demuestra la legalidad de la notificación de la multa que se impugna, con fecha **09 de octubre de 2000**, surtiéndose así la causal de improcedencia aducida por las demandadas, prevista en la fracción IV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, dando esto ocasión al sobreseimiento del juicio en que se actúa, conforme a lo previsto en la fracción II del numeral 203, en relación con el 207, todos del Código citado, al haberse consentido la multa recurrida en esta vía.

Tenemos que si la resolución impugnada le fue ***notificada por correo certificado con acuse de recibo personalmente*** al actor el día **09 de octubre del 2000**, como lo indica el acuse de recibo de la notificación que obra en el expediente a folios 31 de autos, la misma surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto es, **10 del mismo mes y año**, para empezar a computar el término de Ley a partir del día **11 de octubre del 2000 y *concluir*** el día **04 de enero del presente año**, sin tomar en consideración los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; así como los días 2, 3, 9 y 10 de diciembre del 2000, por corresponder a sábados y domingos; de igual manera los días 1, 2, 3 y 20 de noviembre, del 15 al 31 de diciembre del 2000 y primero de enero del 2001, por haberse declarado inhábiles por este Tribunal en Acuerdos *G/3/2000 y G/1/2001,* respectivamente, los cuales señalan los días de suspensión de labores; entonces si la presentación de la demanda

no fue sino hasta el día 01 de febrero del presente año, la misma ***resulta extemporánea***, pues el plazo de Ley venció el día 04 de enero del 2001, resultando claro que había transcurrido en exceso el término legal aludido previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, contrario a lo que argumenta la parte actora respecto a que no hay constancia expresa de notificación.

En cuanto a lo manifestado por la parte actora, referente a que no recibió el acuse de recibo de la notificación del acto que impugna en este juicio, y a su negativa lisa y llana en cuanto a que no asentó la firma plasmada en el citado documento exhibido al efecto por la demandada; esta Juzgadora concluye que el accionante no desvirtúa la presunción de legalidad del acto de autoridad con su simple negativa, ya que ésta implica la afirmación de que la firma que ostenta el documento aludido, no fue estampada de su puño y letra, y esto debió probarlo mediante la prueba pericial grafoscópica, pudiendo haberla ofrecido en su escrito de desahogo a la vista que se le dio por auto de fecha 26 de abril del año en curso y no lo hizo, persistiendo así la presunción de legalidad del documento en cita, y la conclusión de que el actor no probó su dicho en términos del citado artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal; se puede apreciar la similitud existente entre la firma plasmada en la última foja de su escrito inicial de demanda, que obra a folios 09 de autos, y la que obra en el acuse de recibo de 09 de octubre próximo pasado, a folios 31 del expediente en que se actúa.

Respecto a lo argüido por la accionante en cuanto a que el acuse de recibo que comprueba que la notificación realizada no reúne los requisitos de una legal **constancia de notificación**, esta Juzgadora considera inoperante el agravio en mención, toda vez que la citada notificación entendida con el hoy actor *C. Jorge Alberto Márquez Avitia,* fue realizada en términos de lo dispuesto por el numeral 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación, anteriormente transcrito en esta sentencia, que en la parte conducente regula que la notificación de los actos administrativos se harán de diversas maneras, entre las cuales encontramos la referente a "***por correo certificado con acuse de recibo***", situación que en la especie aconteció, motivo por el cual se concluye que es inoperante el agravio en mención, dado que es diferente una notifica-

ción personal realizada observando lo dispuesto al efecto por el artículo 137 del Ordenamiento legal citado, siguiendo las formalidades previstas por la Ley, los criterios y tesis Jurisprudenciales, y aquellas realizadas por medio de **correo certificado con acuse de recibo**, autorizados de igual forma por el legislador, a las autoridades, cuyas formalidades encuentra su regulación y justificación de su existencia en la Ley del Servicio Postal Mexicano, dentro del Capítulo XIII, Título *"Acuses de recibo de piezas registradas y con derechos por cobrar"*, artículo 42 que señala:

> "***ARTÍCULO 42.- El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente, como constancia.***
>
> "***En caso de que, por causas ajenas al organismo no pueda recabarse la firma del documento, se procederá conforme a las disposiciones reglamentarias.***"

Del numeral transcrito, se advierte que en el desahogo de las diligencias de las notificaciones realizadas por correo certificado con acuse de recibo, sólo se le exige al Servidor de la oficina de Correos, que en los registrados se asiente la firma de recepción del destinatario, y/o el representante legal de éste, situación que en la especie aconteció, al recabarse la firma del destinatario, *C. Jorge Alberto Márquez Avitia;* y entregarle a la autoridad remitente, la constancia de legal notificación, misma que la demandada anexa como prueba en su oficio de contestación, visible a folios 31 de autos, y de donde se advierte claramente, que se satisfizo el requisito aludido, relativo a entender la diligencia con el destinatario del documento a notificar, por ende tal constancia se ajustó estrictamente a Derecho y resulta suficiente para probar el legal proceder de la autoridad y la fecha de la notificación del documento respectivo; debido a esto, resultan inoperantes las manifestaciones del accionante, en cuanto a que la autoridad debió cumplir con los requisitos adicionales que la propia Ley determina, como lo pretende al sostener que se debió constar: ***La hora en que se practicó la notificación, nombre del "ejecutor" (sic) y su firma para que se tenga la***

certeza de que el personal es competente, así como asentar los fundamentos legales que dieran competencia material y territorial a la autoridad que practique la diligencia citada.

Es claro para esta Juzgadora, que el accionante confundió los requisitos legales que se deben satisfacer para considerar legal una diligencia de notificación **personal,** con los que se deben observar en una diligencia de **notificación por correo certificado con acuse de recibo**; por ende sus argumentos al respecto se consideran inoperantes.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236 y 237 en relación con el 202, fracción IV, 203, fracción II y 207 del Código Fiscal de la Federación se resuelve;

I.- ES DE SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 351/01-02-03-9;

II.- NOTIFÍQUESE.-

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL**, como Instructora en el presente juicio; **HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ y JOSÉ MAURICIO FERNÁNDEZ Y CUEVAS**, éste como Presidente de la Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado **MARIO RODRÍGUEZ JUNCO**, quien autoriza con su firma.- Doy Fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMPENSACIÓN PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- ES APLICABLE A PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- De la redacción del artículo 6º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, al señalar éste que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios, debe entenderse en el sentido que, al resultar de los pagos provisionales del impuesto al valor agregado una obligación a cargo del contribuyente, éste puede optar por compensarla en los meses siguientes del ejercicio hasta agotarla, pues no existe razón ni disposición legal alguna para limitar el derecho a la compensación, ni tampoco que ésta se deba efectuar hasta la declaración final del ejercicio, pues por el hecho de que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado no se contemple esta figura de la compensación, no implica que no pueda realizarse dicha forma de extinción de las obligaciones, ya que no puede pasarse por alto que el impuesto al valor agregado se va generando durante el transcurso del ejercicio, al realizarse operación tras operación y que dé lugar a su causación, aun cuando sea hasta el cierre del ejercicio cuando el contribuyente pueda establecer el monto del impuesto a cargo en relación con los pagos provisionales que efectuó, máxime si se parte de que con esto no se coartan las facultades de la autoridad de fincar diferencias de impuestos a los contribuyentes si el saldo a favor compensado resultare improcedente, ni se impide que el contribuyente realice las operaciones correspondientes al final del ejercicio en el impuesto en que dicha compensación se haya llevado a cabo. (23)

Juicio No. 36/01-02-03-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de agosto del 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Ernesto Alfonso Rosales Arcaute.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAS DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES NO CONTEMPLADAS EN LAS LEYES FISCALES ESPECIALES.- SON APLICABLES LAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Una correcta interpretación de lo establecido por los artículos 1º y 5º del Código Fiscal de la Federación, permite concluir que la relación que existe entre éste y las leyes fiscales especiales, como lo es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no es ni puede considerarse como una simple supletoriedad del Código Tributario Federal respecto de éstas, dado el orden e interés público de aquél, como sucede en el derecho común, sino que es de una verdadera complementariedad, puesto que la supletoriedad en un sentido estricto, se entiende como la aplicación de un ordenamiento o una disposición en forma tal, que venga a suplir o complementar a otro ordenamiento respecto de una figura que este último prevé pero que no regula adecuadamente, siempre que en este último así se disponga; sin embargo en materia fiscal, no puede sostenerse el sentido estricto de la aplicación supletoria de un ordenamiento a otro, sino que se debe entender en un sentido amplio, dada la naturaleza y objeto de las disposiciones fiscales, por lo que no necesariamente la ley especial se debe permitir la supletoriedad de otro ordenamiento respecto de las figuras jurídicas que regula, ya que con ello se infringiría lo que el legislador consagró en el primer artículo del Código Fiscal de la Federación, en la parte que señala que *"Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto (...)"*. Por tanto, si en una ley especial se encuentra prevista una figura jurídica que se va a aplicar, y es omisa o insuficiente en su regulación, como sucede en el caso de la Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto de las formas para extinguir obligaciones fiscales, se debe aplicar lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, en atención a los numerales anteriormente invocados. (24)

Juicio No. 36/01-02-03-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de agosto del 2001, por

unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Ernesto Alfonso Rosales Arcaute.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Los Magistrados que integran este Órgano Colegiado consideran que el anterior argumento resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a los siguientes razonamientos:

Primeramente, se estima adecuado examinar lo relativo a la figura jurídica de la compensación. Al respecto resulta muy ilustrativo transcribir lo que el Pleno del Máximo Tribunal del país refirió al resolver el amparo en revisión 870/99, donde de manera esencial explicó lo siguiente:

"*Ahora bien, la compensación es una institución emanada del derecho común, que en nuestro derecho positivo se encuentra regulada como una de las formas en que se pueden extinguir las obligaciones.*

"*Dice Planiol (en Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla, México 1997, número 562) que: 'Cuando dos personas se deben mutuamente objetos semejantes, no es necesario que cada una de ellas pague a la otra lo que le debe; es más sencillo considerarlas como liberadas ambas hasta la concurrencia de la menor de las dos deudas, de manera que el excedente de la mayor quede sólo para ser objeto de una ejecución efectiva.'*

"*Así, la compensación opera cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocos de deudas ciertas, líquidas, exigibles y en las que se debe dinero o bienes fungibles de la misma calidad y especie.*

"*La institución tiene su fundamento en la buena fe, pues ningún acreedor debe pretender cobrar un crédito sin pagar, al mismo tiempo, la deuda que tiene para con su deudor. A la vez, se justifica como una garantía, pues permite a ambos deudores-acreedores precaverse contra la posible insolvencia del otro al no pagar su propia deuda sin hacer a la vez efectivo su crédito.*

"*En Roma, dice el maestro Manuel Bejarano (en Obligaciones Civiles, Col. Textos Jurídicos Universitarios, cuarta edición, Harla, México, 1997, página 436) 'la compensación surgió primeramente como un convenio y posteriormente, en la época de Marco Aurelio, se introdujo en las acciones de derecho estricto -strictu iuris- a través de la excepcio doli. Más adelante Justiniano la decretó ipso iure a manera de que el Juez debiera pronunciarla forzosamente en los casos en que coexistieran dos deudas recíprocas. Así llegó la compensación legal hasta nuestros días, a través del derecho intermedio.'*

"*Cabe decir, asimismo, que la utilidad de la compensación es considerable, pues simplifica las operaciones económicas y evita desplazamientos inútiles de dinero en las relaciones recíprocas.*

"*Por último, debe mencionarse que el principal efecto de la compensación legal consiste en extinguir las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor, con lo cual se extinguen, de pleno derecho, todas las obligaciones correlativas para ambas partes.*

"*Queda así de manifiesto que la compensación, de acuerdo con la teoría general del derecho, incorporado por el legislador en el ámbito del derecho civil, no es otra cosa que una forma de extinción de las obligaciones.*"

De lo hasta aquí expuesto por el alto Tribunal de la nación y por la doctrina, puede concluirse que la compensación es un modo de extinción de obligaciones

recíprocas, que produce su efecto en la medida de que el importe de una se encuentra comprendido en el de la otra. De acuerdo con lo anterior también se puede decir, que la compensación, como forma extintiva de la obligación fiscal, tiene lugar cuando fisco y contribuyente son acreedores y deudores recíprocos.

Ahora bien, del estudio de la resolución impugnada se advierte que la autoridad demandada no autoriza el trámite de compensación solicitado debido a que la Ley del Impuesto al Valor Agregado no prevé en su artículo 6 dicha forma de extinción de las obligaciones, por lo que según el señalamiento de la actora, tiene el derecho de ejercer la posibilidad de compensar su saldo a favor con el saldo a cargo del mismo impuesto al valor agregado que le resultaron en el mismo ejercicio, en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

De esta forma, este Órgano Colegiado considera que la litis a dilucidar es la consistente en si la autoridad se ajustó a derecho al negar la compensación solicitada por las razones señaladas, o si es posible que dicha compensación se efectué en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación como lo intentó la actora.

Es importante observar lo dispuesto por los artículos 1 y 5 del Código Fiscal de la Federación:

> "**Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto** y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. Sólo mediante Ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.
>
> "(...)"
>
> "**Artículo 5o.-** Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las

infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

"Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. **A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.**"

(El resaltado es de esta Juzgadora)

Es de señalarse que el Código Fiscal de la Federación constituye un ordenamiento que establece principios generales aplicables a todo el sistema tributario federal, circunstancia que desde luego se avala por lo dispuesto en los artículos recién transcritos, es más, la interpretación armónica de estos preceptos permite concluir que el sistema de normas fiscales es una unidad que se rige por los mismos principios y, entre éstos, tenemos uno de vital importancia que se contiene en los propios artículos 1 y 5, que dicen: "*Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos* ***conforme a las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto*** *(...)*" y "*A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común.*"

En el caso que nos ocupa encontramos que la autoridad demandada niega la solicitud de compensación de la actora, señalando que al respecto el artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no contempla dicha figura y que únicamente podía optar por proceder al acreditamiento o a la devolución del saldo a favor que le resultó.

Sin embargo, del estudio de las disposiciones aplicables esta Sala llega a la conclusión de que la relación que existe entre el Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales especiales, como lo es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no es

sólo de una simple "supletoriedad" como sucede con el derecho común, sino que incluso es de una verdadera "complementariedad". La supletoriedad en sentido estricto se ha entendido como la aplicación de un ordenamiento o una disposición en forma tal que venga a suplir o a completar a otro, respecto de una figura que este último prevé, pero que no regula adecuadamente, o que simplemente no contempla. De este modo se aplica el Código Fiscal de la Federación en sus disposiciones relativas a las formas de extinción de las obligaciones fiscales, pues si bien la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece determinadas figuras por las que puede optar el particular, no establece todas las formas de extinción de las obligaciones tributarias de los particulares, que es en lo que viene a suplirlo el primero de los ordenamientos invocados. Cabe añadir que la supletoriedad se da cuando el ordenamiento que se va a suplir contempla una figura o una institución pero sin agotarla y es necesario recurrir a otro ordenamiento que sí regule en forma más amplia la figura prevista en el primero. En el mismo sentido no se ha admitido la supletoriedad cuando el ordenamiento que se va a suplir no contempla la figura que se le pretendiera aplicar supletoriamente.

Pero por lo que se refiere al Código Fiscal de la Federación, si bien, siempre se ha admitido que es supletoriamente aplicable respecto de las leyes fiscales especiales, resulta pertinente destacar que en muchos casos su aplicación respecto de éstas es verdaderamente "complementaria" y no sólo "supletoria", pues se aplican disposiciones del Código Fiscal en las leyes especiales **sin necesidad de que en éstas se encuentre prevista la figura que se va a aplicar del primero.** Por ejemplo, la actualización de las contribuciones, aprovechamientos y las devoluciones a cargo del Fisco Federal previstas en el artículo 17-A del Código Fiscal, no se encuentran previstas en las leyes impositivas especiales y sin embargo se les aplican. Del mismo modo se puede hablar sobre las disposiciones relativas a procedimiento administrativo, a notificaciones, a la posibilidad de hacer consultas, las devoluciones, las formas de extinción de las obligaciones, o que se configure la negativa ficta, etc., figuras que aun sin estar previstas en la ley especial pueden ser aplicadas del Código Fiscal.

Lo anterior se corrobora con el hecho de que el artículo 1º del Código Fiscal al hablar sobre la jerarquía de las normas en materia fiscal señala que se aplican primero las leyes especiales y "en efecto este Código", de donde se debe inferir que el propio legislador ha autorizado la complementariedad del Código Tributario, en ausencia de norma aplicable en la ley especial.

Una vez establecido el tipo de relación que existe entre el Código Fiscal y las leyes especiales, debe señalarse que esta Juzgadora estima fundado el concepto de nulidad que hace valer el actor, pues no es cierto que no pueda optarse por ejercer la compensación de un saldo a favor que resultó de un pago provisional efectuado en el mes de abril de 1999, contra un saldo a cargo del mes de diciembre del mismo año de 1999.

Así, el Código Fiscal de la Federación se aplicará en defecto de las leyes fiscales (especiales) respectivas, y sólo la ausencia de norma fiscal expresa posibilita la aplicación supletoria del derecho federal común, por lo que si el sistema de normas fiscales federales es un todo, lo que se avala de lo dispuesto en los artículos 1 y 5 del Código Fiscal de la Federación y éste, a su vez, señala que se aplicará en defecto de las leyes fiscales respectivas, y a falta de norma fiscal expresa se aplicará el derecho federal común, se tiene que si la Ley del Impuesto al Valor Agregado es omisa en señalar el procedimiento a seguir en tratándose de las formas de extinguir la obligación contributiva de los particulares, entonces se debe estar a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación en ese sentido, específicamente en la forma de extinción de obligaciones por la que la actora optó y que se contemple en el artículo 23 de dicho Código Tributario, a saber, la compensación.

Ahora bien, el primer párrafo, del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, dispone:

> "**Artículo 23.-** Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros,

siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios, con la salvedad a que se refiere el párrafo siguiente. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la compensación se realice, presentando para ello el aviso de compensación correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que la misma se haya efectuado.

"(...)"

De la redacción del primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, al señalar que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios, es en el sentido de que la compensación puede realizarse durante el ejercicio cuando se realicen pagos provisionales, es decir, no existe razón para limitar el derecho a la compensación, por el hecho de que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado no se contemple esta figura de la compensación.

Es aplicable al caso la tesis II-TASS-9563, emitida por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, y que es localizable en la Revista del propio Tribunal, Segunda Época, Año VIII, No. 85, Enero 1987, página: 566, y que a la letra establece:

"**CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- SU APLICACIÓN CON RESPECTO A LAS LEYES ESPECIALES NO SÓLO ES SUPLETORIA SINO TAMBIÉN COMPLEMENTARIA.-** El artículo 1º del Código Fiscal de la Federación señala que 'los impuestos, derechos y aprovechamientos se regularán por las leyes fiscales respectivas, en su defecto por este Código y supletoriamente por el Derecho Común', de donde debe inferirse que dadas las distintas expresiones que usa el precepto al referirse al

Derecho Común y a 'este Código', el último puede aplicarse no sólo supletoriamente, entendiéndose por esto la aplicación de una disposición o un ordenamiento en otro, para completar o suplir la regulación de una figura o institución prevista en el primero, pero mal regulada, sino que puede ser incluso 'complementariamente', entendiéndose por esto la aplicación de las disposiciones del Código aun en ausencia de disposición de la Ley especial que prevea la figura, lo que se comprueba, por ejemplo, de la aplicación que hace de las figuras previstas en los artículos 32 y 88 del Código Fiscal (prescripción y caducidad) en otros ordenamientos fiscales que no las establecen, como la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. De lo anterior debe inferirse que si la autoridad aplica a un causante en materia de ingresos mercantiles un procedimiento de determinación de ingresos previsto en el Código Fiscal, lo anterior es correcto, pues no obstante que la ley especial tiene un procedimiento de determinación estimativa, los procedimientos aplicados son distintos y no se contraponen, ya que mientras el previsto en la ley que rige el impuesto establece un mecanismo para determinar estimativamente los ingresos, el señalado en el Código Fiscal se refiere a una determinación con base en la comprobación de los ingresos que efectivamente percibió el causante.(90)

"Revisión No. 469/84.- Resuelta en sesión de 27 de enero de 1987, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Gonzalo Armienta Calderón.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.

"PRECEDENTE:
"Revisión No. 1314/78.- Resuelta en sesión de 4 de noviembre de 1980, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: Lic. Oscar Roberto Enríquez Enríquez."

(...)

Sobre la base de los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracciones II y IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se:

R E S U E L V E :

I.- La parte actora **SOLERAS MEXICANAS, S. A. DE C. V**., en este juicio **No. 36/01-02-03-7 PROBÓ SU PRETENSIÓN**, en consecuencia;

II.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA PRECISADA EN EL RESULTANDO PRIMERO DE ESTA SENTENCIA, emitida por la Administración Local de Recaudación de Saltillo, para los efectos precisados en el considerando TERCERO del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman los C. C. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ**, como Instructor en el presente juicio; **M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL y JOSÉ MAURICIO FERNÁNDEZ Y CUEVAS**, éste como Presidente de la Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado **ERNESTO ALFONSO ROSALES ARCAUTE**, quien autoriza con su firma.- Doy Fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ILEGALIDAD DE LAS DETERMINACIONES ADUANERAS, SI SE BASAN EN ACTUACIONES FIRMADAS POR LOS JEFES DE OPERACIÓN ADUANERA, VIRTUD A QUE EL FUNCIONARIO EN CUESTIÓN, NO ESTÁ CONTEMPLADO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NI EN LEY FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVA.- Si un gobernado manifiesta que una determinación aduanera es ilegal, virtud a que encontró su fundamentación y motivación en una orden de verificación de mercancías, y/o acto jurídico signado por el Jefe de Operación Aduanera, debe de tenerse como fundado dicho argumento, dado que el funcionario en cuestión, no está contemplado en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ni en ley formal y materialmente legislativa; no siendo suficiente que el servidor público pretenda justificar su actuación en suplencia del Administrador de la Aduana correspondiente, conforme lo disponen los numerales 22, inciso c) y 24 del citado Reglamento Interior, toda vez que de la lectura de ellos no se puede desprender la existencia de dicho Jefe de Operación Aduanera; motivo por el cual es de concluirse que se violó directamente en perjuicio de un gobernado el principio de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe contener, conforme lo disponen los artículos 14 y 16 Constitucional y 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, virtud a que los actos de aquél no pueden surtir sus efectos a terceras personas; por ello se actualiza la hipótesis normativa prevista por la fracción IV del artículo 238 del invocado Código Fiscal. (25)

Juicio No. 1001/01-05-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de septiembre de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Mario Rodríguez Junco.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Esta Juzgadora considera fundado el concepto de impugnación en estudio, para declarar la nulidad de la resolución impugnada, toda vez que del análisis realizado a la resolución impugnada, y a la orden de verificación en la cual se fundamentó la misma, se conoce que esta última en comento, no reúne el requisito de debida fundamentación ordenado por el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, al no haber sido firmada por funcionario que demostrara su existencia para ello, numeral del Código Fiscal que señala:

"***ARTÍCULO 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:***

"**(...)**

"***IV.- Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a quien vaya dirigido (...)***"

Es suficiente consultar la resolución impugnada para darnos cuenta que al momento de su emisión, la autoridad tenía conocimiento de dicha anomalía, pretendiendo justificar el aspecto en mención, indicando lo siguiente:

"**E).- Que la orden de verificación resulta ilegal ya que la misma es emitida por el C. Luis Ramón Bretón González, Jefe de Operación Aduanera, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en suplencia del Administrador de la Aduana de Piedras Negras, el C. José Luis Goicochea y Chavarri, toda vez que dicho artículo establece que los Administradores de las**

Aduanas serán suplidos indistintamente por los Subadministradores o por los Jefes de Departamento que de ellos dependan es decir, de la citada disposición no se desprende que al Jefe de Operación Aduanera se autorice para suplir al Administrador de la Aduana, por no contemplarlo dicha disposición.

"**Ahora bien por lo que respecta a su argumento en el sentido de que del artículo 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no contempla al Jefe de Operación Aduanera para suplir al Administrador de la Aduana, esta autoridad considera dicho argumento, toda vez, que si bien es cierto en dicho fundamento legal no se menciona al Jefe de Operación Aduanera, también lo es, que conforme a lo establecido en el artículo 22, inciso C. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de diciembre de 1999, las Aduanas estarán a cargo de un Administrador del cual dependen los Subadministradores, Jefes de Sala, Jefes de Departamento, Jefes de Sección, Verificadores, Notificadores, el personal al servicio de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, asimismo se señala que contarán con el personal que las necesidades del servicio requiera, de lo cual se desprende que en ausencia del L.A.E. José Luis Goicochea y Chavarri, titular de la Aduana de Piedras Negras, Coah., el Lic. Luis Ramón Bretón González, Jefe de Operación Aduanera, se encuentra autorizado para suplirlo, toda vez que dicho cargo recae dentro del personal que las necesidades del servicio requiera.**"

De la anterior transcripción, se advierte que la autoridad demandada debió de revocar lisa y llanamente el acto administrativo en la fase oficiosa del procedimiento, virtud a que derivaba de un acto viciado desde su origen, como lo es la citada orden de verificación que dio origen a la sanción impuesta, limitándose a señalar que era legal su actuación con fundamento en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, concretamente en los numerales 24 del cual manifiesta expresa-

mente a folios 07 de su resolución, 24 de autos, que "*dicho fundamento legal no se menciona el Jefe de Operación Aduanera*" sin embargo hace alusión al artículo 22, inciso "c)" del citado Reglamento Interior, toda vez que en él se cita textualmente: "*Cada Aduana estará a cargo de un Administrador del que dependerán los Subadministradores, Jefes de Sala, Jefes de Departamento, Jefes de Sección, Verificadores, Notificadores, el personal al servicio de la unidad de apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera y el personal que las necesidades del servicio requiera*", del que tampoco se desprende la existencia de dicho **Jefe de Operación Aduanera**; motivo por el cual este Órgano Colegiado concluye que se violó directamente en su perjuicio el principio de legalidad que todo acto de autoridad debe contener, conforme lo dispuesto por los artículos 16 Constitucional y 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, virtud a que de la verificación en comento, no se demuestra de los artículos citados del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que el funcionario que firma se encuentre a cargo del Administrador de la Aduana y que por ello pueda suplirlo en las actividades que le son propias, y por lo tanto esta Juzgadora procede a declarar la nulidad de la resolución impugnada, en virtud a los motivos en que fue dictada, y por provenir de un acto de autoridad viciado desde su origen.

Al no estar acreditada la existencia de dicho Jefe de Operación Aduanera, tampoco se acredita que pueda suplir al Administrador de la Aduana correspondiente, y por ello se surte la hipótesis prevista por el artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, por lo cual es de declararse la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al provenir de un acto viciado y no para efectos, dado que con ello equivaldría a sostener prácticas de autoridad viciadas desde su origen, y atendiendo a que al resolver el mencionado recurso de revocación, promovido en su contra, se debió de considerar fundado el concepto de impugnación consistente en la falta de legitimación del funcionario suplente, dado que en la misma no se dio el alcance legal procedente, al no tomarse en cuenta los planteamientos hechos valer en la citada inconformidad interpuesta sobre el acto ilegal, por lo que es de concluirse que la demandada debió decretar su revocación lisa y llana, siendo su función primordial la de valorar adecuadamente el alcance de los agravios hechos valer en su

contra y no pretender justificar la dependencia legal de funcionarios dentro de preceptos legales de los cuales no se desprende su existencia, es decir, debió hacer un pronunciamiento en donde examinara los planteamientos formulados y no justificara una actuación que fue indebida y que pretende vincular con diversos numerales de los cuales no se desprende lo que refuta, entendiéndose la orden de verificación como un acto autoritario proveniente de ilegalidad, esto lógicamente no impide que la autoridad que determinó el crédito esté en aptitud de emitir una nueva orden comprobando el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales, en la cual ostente el acreditamiento del funcionario competente, sobre la base de que esté en tiempo y tenga fundamentos y motivos para hacerlo.

Cabe señalar que el artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, establece que todo acto administrativo debe contener firma autógrafa del funcionario **competente** emisor y/o en su caso, el que pueda signar en ausencia dicho acto, siendo congruente con las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues toda actuación que afecte el interés jurídico de los particulares, debe demostrar claramente la identidad del suscriptor para estar en aptitud de conocer el alcance de su responsabilidad, ya que sólo mediante dicho requisito, es como se autentifica el acto y se salvaguarda las citadas garantías jurídicas, establecidas en los mencionados artículos.

Al respecto resulta aplicable el criterio sustentado por este H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que señala:

"Tercera Época
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año IV. No. 40. Abril 1991
"Tesis: III-TASS-2106
"Página: 57

"**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES.- DEBE ESTAR EXPRESAMENTE SEÑALADA EN UNA DISPOSICIÓN LEGAL.-** Del artícu-

lo 16 de la Constitución se sigue que la competencia de las autoridades debe estar expresamente señalada en una disposición legal y no inferirse a base de presunciones o de interpretaciones de las partes o del propio órgano jurisdiccional, por lo que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permita de manera expresa.(21)

"Revisión No. 244/85.- Resuelta en sesión de 26 de abril de 1991, por unanimidad de 8 votos.- Magistrada Ponente: Ma. Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Avelino C. Toscano Toscano."

(...)

Por lo que, con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación se resuelve:

I.- La parte actora, **ALEJANDRO MOLINA MIRANDA**, en este juicio contencioso administrativo, No. 1001/01-05-02-9, **ACREDITÓ SU PRETENSIÓN**; en consecuencia:

II.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, misma que ha quedado precisada en el resultando 1° del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL, como instructora en el presente juicio, Licenciado JOSÉ MAURICIO FERNÁNDEZ Y CUEVAS, éste como Presidente de la Sala, y HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ**, ante el C. Secretario de Acuerdos, **Licenciado MARIO RODRÍGUEZ JUNCO**, quien autoriza con su firma.- Doy Fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

NOTIFICACIÓN POR CORREO CERTIFICADO EN MATERIA FISCAL.- LA PRACTICADA DENTRO DEL PERÍODO VACACIONAL DEL TRIBUNAL, SURTE EFECTOS AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.- Si bien es cierto que acorde a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el personal del Tribunal tendrá cada año dos períodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación y que se suspenderán las labores y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno del Tribunal, también lo es que la expresión relativa a que *no correrán los plazos,* se entiende referida a que los días que se llegasen a declarar inhábiles por el Pleno de este Tribunal, no se computarán dentro de los plazos, esto es que tales días no se contarán dentro de los términos que corren en los diversos asuntos que deban presentarse ante este Órgano Colegiado, pero esa circunstancia no implica un impedimento para que una notificación por correo certificado se pueda realizar en un día inhábil, ni tampoco significa que la notificación efectuada en esos términos, esto es, en un día inhábil, deba entenderse realizada hasta el siguiente día hábil, toda vez que el artículo 255 del Código Fiscal de la Federación, es muy claro al establecer que las notificaciones "*surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas"*, es decir, independientemente de que el día en que se hubiesen realizado, fuese hábil o inhábil. (26)

Juicio No. 556/01-05-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de diciembre del 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Luis Moisés García Hernández.- Secretario: Lic. Rodolfo Herrera Sandoval.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

A juicio de los Magistrados que integran este Cuerpo Colegiado, debe confirmarse el acuerdo recurrido, en virtud de que resulta infundado el único agravio planteado por el recurrente, según se expresa a continuación.

Efectivamente, del análisis a las constancias que obran en autos se observa que el Magistrado Instructor se apegó a derecho al tener por no presentada la contestación de la demanda, dado que su presentación resultó extemporánea.

En efecto, dispone el artículo 212 del Código Fiscal de la Federación que admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo **para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento.**

Ahora bien, a efecto de determinar cuándo surte efectos la notificación o emplazamiento, conviene analizar lo dispuesto por el artículo 255 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 255.-** Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas. En los casos de notificaciones por lista se tendrá como fecha de notificación la del día en que se hubiese fijado."

El precepto transcrito muy claramente precisa el día en que surtirán efectos las notificaciones realizadas dentro del procedimiento contencioso administrativo, siendo éste, **el día hábil siguiente a aquél en que fueron hechas.**

En este sentido, si la notificación del acuerdo de admisión de demanda les fue notificado tanto al Jefe del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional XXII en el Estado de Durango del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como al Director General de ese Instituto los días 30 de abril del 2001 y 19 del abril del 2001 respectivamente según se desprende de los acuses de recibo de los oficios Nos. 05-2-2-5616/01 y 05-2-2-5615/01 que obran en autos a folios Nos. 000071 y 000067, es claro que dichas notificaciones surtieron sus efectos los días hábiles siguientes al día en que fueron hechas, esto es los días 02 de mayo y 23 de abril del 2001 respectivamente, por lo que descontando los sábados y los domingos, así como el día 01 de mayo para el primero de los mencionados y los días 30 de abril y 01 de mayo del 2001 para el segundo de los funcionarios señalados, se tiene que los plazos para contestar la demanda les fenecieron los días 04 de julio del 2001 y 26 de junio del mismo año respectivamente, y si el único escrito de contestación de demanda fue depositado en el Servicio Postal Mexicano el día 05 de julio del 2001, según se desprende del sello inserto en el sobre correspondiente, resulta obvio que su presentación resulta extemporánea.

No es obstáculo para concluir lo anterior, lo expresado por el recurrente en su escrito de reclamación en el sentido de que el artículo 44 de la Ley Orgánica de este Tribunal es claro al establecer que no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno de este Tribunal, por lo que si el día 30 de abril del 2001 lo declaró el Pleno del Tribunal como inhábil, por consiguiente se suspenden las labores y no corren los plazos, por lo que no se puede tener como fecha de notificación ni el 30 de abril, ni el día 1° de mayo ya que son inhábiles.

Lo anterior es así, toda vez que esta Juzgadora advierte que el recurrente realiza una indebida interpretación del artículo 44 de la Ley Orgánica de este Tribunal, pues si bien es cierto que acorde con dicho precepto legal, el personal del Tribunal tendrá cada año dos períodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación y que se suspenderán las labores y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno del Tribunal, también lo es que la expresión relativa a que ***no correrán los plazos***, se entiende referida a que los días que se llegasen a

declarar inhábiles por el Pleno de este Tribunal, no se computarán dentro de los plazos, esto es que tales días no se contarán dentro de los términos que corren en los diversos asuntos que deban presentarse ante este Órgano Colegiado, pero esa circunstancia no implica un impedimento para que una notificación por correo certificado se pueda realizar en un día inhábil, ni tampoco significa que la notificación efectuada en esos términos, esto es, en un día inhábil, deba entenderse realizada hasta el siguiente día hábil, toda vez que el artículo 255 del Código Fiscal de la Federación, es muy claro al establecer que las notificaciones "***surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas***", es decir, independientemente del día en que se hubiesen realizado, fuese hábil o inhábil.

El criterio anterior se encuentra plenamente definido, mediante la Tesis de **Jurisprudencia No. 880**, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte TCC. Pág. 676, que a la letra establece:

> "**NOTIFICACIONES POR CORREO EN MATERIA FISCAL, RECIBIDAS EN DÍA INHÁBIL.-** Cuando dentro del juicio fiscal la notificación del acto reclamado se haga por correo certificado, y la pieza postal sea entregada en día inhábil, dicha notificación surtirá efectos el primer día hábil siguiente, en vista de lo dispuesto por el artículo 179 del Código Fiscal de la Federación, cuya redacción no permite entender que la notificación surta efectos en día inhábil, lo que, además, reduciría los términos al interesado.
>
> "PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
>
> "Séptima Época:
>
> "Amparo directo 445/70. Afianzadora Insurgentes, S. A. 5 de abril de 1971. Unanimidad de votos.

"Amparo en revisión 165/71. Rodolfo Tamez Bernal. 29 de junio de 1971. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 141/71. Harinera de Atotonilco El Alto, S. A. 28 de febrero de 1972. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 339/69. Halliburton de México, S. A. de C. V. 12 de febrero de 1973. Unanimidad de votos.

"Amparo en revisión 24/73. Turística Mundaca, S. A. de C. V. 7 de mayo de 1973. Unanimidad de votos."

Consecuentemente si en el caso a estudio la notificación del acuerdo de admisión de demanda, se realizó a una de las enjuiciadas en un día inhábil, esto es el 30 de abril del 2001, y si para ello se consideró que dicha notificación surtió sus efectos hasta el día 02 de mayo del 2001, por ser el día hábil siguiente a aquél en que se realizó, entonces se tiene que el término de 45 días para contestar la demanda se inició el día 03 de mayo del 2001 y feneció el 04 de julio del mismo año, por lo que si el escrito de contestación de demanda se presentó en la Oficina del Servicio Postal Mexicano hasta el día 05 de julio del 2001, según se desprende del sello inserto en el sobre que obra en autos a folio No. 000115 del expediente en que se actúa, es claro que la presentación resultó extemporánea y en esa virtud es claro también que el Magistrado Instructor se apegó a derecho al tenerla por no presentada.

En razón de lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 242, 243 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se:

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Ha resultado procedente el Recurso de Reclamación hecho valer por la parte demandada, pero infundados los argumentos que expuso, en consecuencia:

SEGUNDO.- SE CONFIRMA EL AUTO RECLAMADO, mismo que se describió debidamente en el resultando 3º de la presente resolución.

TERCERO.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la H. Tercera Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **Licenciados JOSÉ MAURICIO FERNÁNDEZ Y CUEVAS** Instructor en el presente juicio y Presidente de la Sala, **M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL Y HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ**, ante el C. Secretario Licenciado **Rodolfo Herrera Sandoval**, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

DEPOSITARIO.- NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL, LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE LE REMUEVE DEL CARGO.- Del artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que si la función de los depositarios consiste sustancialmente en la guarda de los bienes embargados, esto es custodiarlos hasta que sean restituidos, entonces resulta evidente que no afecta el interés jurídico del demandante la resolución por la cual se le remueve del cargo de depositario, pues dicho acto no produce una afectación a la posesión del bien custodiado por él, en detrimento de las funciones que desempeña que son las de guardián o administrador de los bienes, ni mucho menos se le priva ilegalmente de esa posesión, dado que es su obligación restituir los bienes cuando le sean solicitados, por lo que si mediante la resolución impugnada en el recurso de revocación únicamente se acuerda la remoción del cargo de depositario y restitución de los bienes embargados, es claro que ese acto no afecta su interés jurídico y por lo tanto se considera ajustado a derecho el desechamiento del recurso de revocación al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 124, fracción I del Código Fiscal de la Federación. (27)

Juicio No. 1772/01-05-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de enero del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Mauricio Fernández y Cuevas.- Secretario: Lic. Rodolfo Herrera Sandoval.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de los Magistrados que integran este Órgano Colegiado, resulta infundado el único agravio que hace valer el demandante para desvirtuar la validez de la resolución impugnada.

En efecto, del análisis de los argumentos y pruebas rendidas por las partes, se concluye que la Administración Local Jurídica de Durango se ajustó a derecho al desechar por improcedente el recurso de revocación intentado en contra de la resolución contenida en el oficio No. 322-SAT-R2-L16-1521, de fecha 14 de marzo del 2001, a través de la cual se remueve al C. Alberto Pérez Arellano del cargo de depositario de los bienes embargados a la empresa Pavimentos Modernos de Durango, S.A. de C.V., pues es cierto que el referido acto no afecta el interés jurídico del recurrente.

Lo anterior es así, toda vez que como acertadamente lo señalan las enjuiciadas en su escrito de contestación, al tener el entonces recurrente y hoy demandante el cargo de depositario de los bienes embargados a la empresa Pavimentos Modernos de Durango, S.A. de C.V., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, es claro que sus atribuciones consisten únicamente en custodiar o administrar los bienes conferidos para su guarda, y en esa virtud no le afecta su interés jurídico la resolución por la cual se le remueve de dicho cargo, dado que con la misma no se invade su esfera jurídica, ni mucho menos se le priva de algún derecho, pues su función de depositario se reduce únicamente a la guardia y custodia de los bienes embargados, y en ese sentido resulta evidente que la resolución recurrida por la cual se le remueve de dicho cargo de ninguna manera interfiere en el desarrollo de esas atribuciones.

Efectivamente, dispone el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación lo siguiente:

"**153.-** Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras

bajo su responsabilidad nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales.

"(...)

"La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales.

"(...)"

Del artículo anteriormente transcrito se desprende que si la función de los depositarios consiste sustancialmente en la guarda de los bienes embargados, esto es custodiarlos hasta que sean restituidos, entonces resulta evidente que no afecta el interés jurídico del demandante la resolución por la cual se le remueve del cargo de depositario, pues dicho acto no produce una afectación a la posesión del bien custodiado por él, en detrimento de las funciones que desempeña que son las de guardián o administrador de los bienes, ni mucho menos se le priva ilegalmente de esa posesión, dado que es su obligación restituir los bienes cuando le sean solicitados, por lo que si mediante la resolución impugnada en el recurso de revocación únicamente se acuerda la remoción del cargo de depositario y restitución de los bienes embargados, es claro que ese acto no afecta su interés jurídico y por lo tanto se considera ajustado a derecho el desechamiento del recurso de revocación al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 124, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto resulta ilustrativa la Tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 21 Primera Parte, Página: 35, que a la letra establece:

"**DEPOSITARIO, REMOCIÓN DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).-** El artículo 559 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila, que prevé la remoción del depositario de un bien secuestrado, así como el acuerdo que con base en dicho precepto declara la remo-

ción y no se impugna por vicios propios, no afectan los intereses jurídicos del depositario, toda vez que éste es un mero auxiliar en la administración de justicia que únicamente tiene la obligación de custodiar los bienes en relación a los que, fuera del depósito, generalmente, no tiene ningún otro derecho. En tal situación, el juicio de amparo promovido por el depositario es improcedente y debe sobreseerse con base en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

"Amparo en revisión 5714/59. Ramón Martínez. 24 de septiembre de 1970. Unanimidad de 19 votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete."

Asimismo, es ilustrativa a nuestro caso la Tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 6 Cuarta Parte, Página: 55, que expresamente establece:

"**DEPOSITARIO INTERVENTOR, ATRIBUCIONES DEL.-** El depositario interventor designado con cargo a la caja en una finca rústica o en una negociación mercantil o industrial, carece de atribuciones administrativas, pues las que le competen son únicamente de vigilancia, como lo estatuye el artículo 555 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, en el que aparecen detalladas sus atribuciones.

"Amparo directo 9764/68. Banco Continental, S. A. 18 de junio de 1969. Mayoría de 4 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas."

Así como también la Tesis de la Tercera Sala, Quinta Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CII, Página: 264, que establece:

"DEPOSITARIO, INTERÉS JURÍDICO DEL, TRATÁNDOSE DE DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS.- Si el demandado fue absuelto, y en cumplimiento de la sentencia, se ordenó al quejoso, como

depositario de los bienes embargados, que entregara esos bienes a sus (sic) dueño, es evidente que dicho quejoso no puede alegar perjuicio alguno al cumplir con la orden reclamada de entrega de los bienes que tuvo en su poder, y, por tanto, no encontrándose la suspensión en las circunstancias que fija la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, no hay motivo para concederla.

"Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 6046/49. Zavala Alfonso. 8 de octubre de 1949. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis G. Corona. La publicación no menciona el nombre del ponente."

No es óbice para concluir lo anterior, lo expresado por el enjuiciante en sus escritos de demanda y alegatos en el sentido de que ocurrió en recurso de revocación para tener la certeza de conocer si la autoridad que emitía la orden de remoción y entrega de los bienes era la competente; toda vez que el enjuiciante no acredita que la autoridad que le confirió el cargo de depositario sea una autoridad diversa a la que emitió la resolución recurrida en el recurso de revocación, y así estar en condiciones de sostener que se le pretende coartar su derecho de posesión de los bienes embargados por una autoridad que no es competente, por lo que en esa virtud, se desestima el argumento hecho valer por infundado.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- La parte actora **ALBERTO PÉREZ ARELLANO**, en este juicio **1772/01-05-02-2, NO PROBÓ SU ACCIÓN**, en consecuencia:

SEGUNDO.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, descrita en el resultando 1° del presente fallo.

TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **JOSÉ MAURICIO FERNÁNDEZ Y CUEVAS** Ponente en el presente juicio, **M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL** Presidenta de la Sala y **HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ**, ante el C. Secretario Licenciado **Rodolfo Herrera Sandoval**, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

PLAZO PARA CONCLUIR LA REVISIÓN EFECTUADA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La facultad de la autoridad de requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionan los datos, otros documentos o informes que se les requieran, prevista en el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, no la exime de cumplir con lo dispuesto por el artículo 46-A, del Código en cita; es decir, de concluir la revisión que de la contabilidad y demás documentos de los contribuyentes efectúe en sus propias oficinas, **dentro de un plazo máximo de seis meses**, contados a partir de que se notifique al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación, hasta que se notifique el oficio de observaciones que prevé el artículo 48, fracción VI del Código Tributario Federal; y de no ser así, debe anularse su actuación y quedar sin efecto el oficio de requerimiento y todas las actuaciones que del mismo se derivaron durante la revisión; lo anterior acorde a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 46-A del Código de la materia. (28)

Juicio No. 1860/01-05-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de febrero del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Francisca Espinoza Jaramillo.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Este Órgano Colegiado una vez analizadas todas las constancias que integran el expediente en que se actúa, y atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación procede al examen del agravio de trato, virtud a que se concluye que el mismo es fundado y suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, virtud a que se advierte que la resolución combatida no cumple con lo dispuesto por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, dado que como bien lo menciona la demandante, la liquidación combatida es ilegal, toda vez que la autoridad liquidadora no cumple con lo dispuesto por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 1999, año en el cual la autoridad dio inició el ejercicio de sus facultades de comprobación, el cual en lo que interesa disponía lo siguiente:

"***46-A.-*** *Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. (...)*

"*El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse por períodos iguales hasta por dos ocasiones, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido en la primera ocasión por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o revisión. (...)*

"*Cuando las autoridades (...) no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos (...) durante dicha visita o revisión.*"

(El subrayado es de esta Sala)

Se considera le asiste la razón a la enjuiciante, virtud a que si bien como lo dice la autoridad en su contestación, en el caso no se trata de una visita domiciliaria, sino del ejercicio de la facultad que el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación confiere a la autoridad; sin embargo el ejercicio de tal facultad no la exime de cumplir con lo dispuesto por el artículo 46-A transcrito; es decir, concluir la revisión de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades **dentro de un plazo máximo de seis meses**, contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, lo que en el caso no se cumplió, pues se advierte que la demandada según se desprende de los resultandos 2 y 4, de la propia resolución en controversia, dio inicio a sus facultades de revisión a través del oficio No. 73/99 de fecha 23 de julio de 1999, el cual fue notificado a la hoy accionante el día 15 de septiembre de 1999, y que fue a través del oficio No. 696/2000, de fecha 25 de mayo del 2000, **notificado el 14 de junio del 2000**, que se le comunicó los resultados de tal revisión, en el que además se le solicitó expresara sus razones y presentara pruebas tendientes a desvirtuar los hechos que en el mismo se le imputaban; oficio que según menciona se emitió con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación, lo que quiere decir que dicho oficio constituyó el de observaciones que dentro del procedimiento de revisión prevé el numeral antes mencionado.

Por lo anterior, es claro que si la autoridad dio inicio al ejercicio de sus facultades **el día 15 de septiembre de 1999**, fecha en que notificó el oficio de requerimiento No.73/99, a la fecha en que emitió el oficio de observaciones, esto es, **el día 25 de mayo del 2000**, es por demás obvio que transcurrió en exceso el plazo de seis meses que tenía la autoridad para concluir la visita, establecido en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, **pues dicho plazo feneció el 15 de marzo del 2000**; por lo que es dable concluir que ante tal hipótesis, **queda sin efecto el oficio de requerimiento y las actuaciones que del mismo se derivaron durante dicha revisión, acorde a lo dispuesto por el último párrafo del artículo que ha quedado transcrito con antelación**, careciendo la demandada de facultades para emitir el acto impugnado pues dicho procedimiento de revisión dejó de tener vigencia, por

disposición del precepto referido; situación que tiene como consecuencia que quede sin efectos el oficio de requerimiento 73/99 de fecha 23 de julio de 1999, así como las actuaciones que del mismo se derivaron durante dicha revisión, **entre los que obviamente se encuentra la resolución impugnada en el presente juicio.**

No pasa desapercibido para esta Juzgadora, el que en dicho numeral también se prevé la ampliación del plazo antes mencionado hasta por dos ocasiones; sin embargo, en el caso la autoridad en ningún momento demuestra haber hecho uso de tales períodos de ampliación, de ahí que resulte válida la conclusión precisada con antelación, en el sentido de que el plazo que tenía la autoridad para concluir la revisión de mérito, acorde a lo dispuesto por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, feneció el 15 de marzo del 2000; conclusión que no efectuó dentro de dicho término, ya que el oficio de observaciones fue emitido hasta el 25 de mayo del 2000, esto es, fuera del término antes mencionado, por lo que con tal actitud resulta obvio que la autoridad dejó de observar lo dispuesto por el numeral antes indicado, quedando por consecuencia sin efecto el oficio de requerimiento y las actuaciones que de él se derivaron durante dicha revisión, acorde a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 46-A ya mencionado, careciendo la demandada de facultades para emitir el acto impugnado pues dicho procedimiento de revisión como ya se mencionó, dejó de tener vigencia por disposición del precepto referido, quedando sin efectos además del oficio referido, todas las actuaciones que de él se derivaron durante dicha revisión, **entre los que se encuentra la resolución en controversia en esta instancia.**

Por lo que ante tal orden de ideas, este Cuerpo Colegiado concluye, que en la especie se impone declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado con apoyo en los artículos 236, 237, 238, fracción II, 239, fracción III, y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora **INDUSTRIA PANTALONERA MEXICANA, S. A. DE C. V.,** en el presente juicio **1860/01-05-02-6, PROBÓ SU ACCIÓN,** en consecuencia.

II.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, precisada en el resultando 1° del presente fallo,

III.- NOTIFÍQUESE.-

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los CC. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa***, M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL***, Instructora en el presente juicio, y Presidenta de la Sala; ***HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ*** y *el* ***C. LIC. RODOLFO HERRERA SANDOVAL***, firmando este último por suplencia en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5° de la Ley Orgánica de este Tribunal, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada ***FRANCISCA ESPINOZA JARAMILLO***, quien autoriza con su firma.- Doy Fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGO.- CUANDO ES IMPUGNABLE EN JUICIO DE NULIDAD.- En el juicio contencioso administrativo que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son impugnables las resoluciones definitivas comprendidas en el artículo 11 de su Ley Orgánica, y entre ellas, se encuentran las que emite la autoridad hacendaria determinando créditos fiscales, ya sea por omisión de impuestos, por su entero incorrecto, por determinación de diferencias en compensaciones o acreditamientos efectuados, por rechazo de deducciones, por imposición de multas, o por cualquier otra causa prevista en las leyes fiscales, las que deben constar en un documento que reúna los requisitos previstos por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación; atendiendo a lo anterior, en la generalidad de los casos los formularios múltiples de pago no constituyen resoluciones definitivas respecto de los cuales proceda el juicio de nulidad, pues el crédito fiscal se encuentra determinado en una resolución diversa, y el formulario múltiple de pago se emite para facilitar el pago de dicho crédito. Sin embargo, cuando el particular demanda la nulidad del crédito fiscal argumentando que sólo tuvo conocimiento porque se le entregó un formulario múltiple de pago, del que desprende la existencia del referido crédito, así como su monto, sin que la demandada al producir su contestación demuestre la existencia de una resolución distinta al formulario múltiple de pago exhibido por la demandante, en que se hubiese determinado el crédito impugnado, ni su notificación anterior a la entrega de dicho formulario, debe concluirse que éste, al ser el único documento en el que consta el crédito fiscal, asume la calidad de resolución determinante del crédito fiscal que en él se menciona, adquiriendo por tanto la característica de resolución definitiva, por tratarse de aquellas resoluciones a que se refiere el artículo 11, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resultando impugnable a través del juicio de nulidad, del cual es competente para conocer este Tribunal, conforme al citado dispositivo orgánico. (29)

Juicio No. 1745/01-05-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de abril del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Jesús Lazalde Martínez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGO ILEGAL.- Si el demandante impugna un crédito fiscal, del cual sólo tuvo conocimiento porque se le entregó un formulario múltiple de pago del cual desprende su existencia, así como su concepto y monto, y la autoridad en el juicio no demuestra la existencia de la resolución determinante del crédito fiscal que alude el formulario distinta a éste, debe entenderse que tal formulario asume la calidad de resolución determinante del crédito fiscal y por ello adquiere el carácter de resolución definitiva, por tanto, debe considerarse que dicho formulario debe reunir los requisitos previstos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, si se observa que el formulario múltiple de pago incumple con lo dispuesto por la fracción IV del primero de los dispositivos en cita, pues no contiene el nombre ni la firma de quien lo emite, es de concluirse que el mismo resulta ilegal, en tanto que esa omisión implica la falta de un requisito esencial del acto de autoridad, como lo es el que sea emitida por autoridad competente, elevado a rango de garantía constitucional en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la consecuencia del incumplimiento de dicho requisito es la manifiesta ilegalidad de la resolución impugnada, al carecer de toda fundamentación y motivación legal, razón más que suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en términos de la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, ya que es evidente que se actualiza el supuesto de anulación previsto en la fracción IV del diverso artículo 238 del mismo Ordenamiento legal, pues en la emisión de esa resolución se dejó de aplicar la disposición debida. (30)

Juicio No. 1745/01-05-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de abril del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Jesús Lazalde Martínez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Esta Juzgadora una vez analizada todas las constancias que integran el expediente en que se actúa, concluye es infundada la causal de improcedencia que expresa la autoridad, conforme a lo siguiente:

Es cierto que en el juicio contencioso administrativo que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son impugnables las resoluciones definitivas comprendidas en el artículo 11 de su Ley Orgánica, y entre ellas, se encuentran las que emite la autoridad hacendaria determinando créditos fiscales, ya sea por omisión de impuestos, por su entero incorrecto, por determinación de diferencias en compensaciones o acreditamientos efectuados, por rechazo de deducciones, por imposición de multas, o por cualquier otra causa prevista en las leyes fiscales, las que deben constar en un documento que reúna los requisitos previstos por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación; atendiendo a lo anterior, en la generalidad de los casos los formularios múltiples de pago no constituyen resoluciones definitivas respecto de los cuales proceda el juicio de nulidad, pues el crédito fiscal se encuentra determinado en una resolución diversa, y el formulario múltiple de pago se emite para facilitar el pago de dicho crédito.

Sin embargo, cuando el particular demanda la nulidad del crédito fiscal del cual sólo tuvo conocimiento porque se le entregó un formulario múltiple de pago, del

que desprende la existencia del referido crédito, así como su monto, y la autoridad hacendaria no demuestra en juicio la existencia de la resolución determinante del crédito fiscal a que alude el formulario, distinta a éste, como en el caso acontece, pues la actora argumenta en su demanda que el formulario múltiple de pago que impugna es el único documento por el que la autoridad hacedaria le da a conocer la existencia a su cargo del crédito fiscal en cantidad de $5,114.00 por concepto de gastos de ejecución, sin que la demandada al producir su contestación demuestre la existencia de la resolución determinante de ese crédito, ni su notificación anterior a la entrega del formulario múltiple de pago exhibido por la demandante, por lo que debe concluirse que éste, al ser el único documento en el que consta el crédito fiscal, asume la calidad de resolución determinante del crédito fiscal que en él se menciona, adquiriendo por tanto la característica de resolución definitiva, y en ese sentido, resulta impugnable a través del juicio de nulidad.

Apoya las anteriores consideraciones el criterio que se contiene en la Tesis N°. IV-TASR-XXVIII-343 de la Segunda Sala Regional de Occidente (Guadalajara), consultable en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Cuarta Época, Año II. No. 24. Julio 2000, página 262, que a la letra dice:

> "**FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGO.- CUANDO RESULTA SER UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-** En el juicio contencioso administrativo que se promueve ante el Tribunal Fiscal de la Federación, son impugnables las resoluciones definitivas comprendidas en el artículo 11 de su Ley Orgánica, y entre ellas, se encuentran las que emite la autoridad hacendaria determinando créditos fiscales, ya sea por omisión de impuestos, por su entero incorrecto, por determinación de diferencias en compensaciones o acreditamientos efectuados, por rechazo de deducciones, por imposición de multas, o por cualquier otra causa prevista en las leyes fiscales, las que deben constar en un documento que reúna los requisitos previstos por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación; atendiendo lo anterior, los formularios múltiples de pago, no constituyen resoluciones definitivas respecto de los cua-

les proceda el juicio de nulidad, pues en este caso, el crédito fiscal se encuentra determinado en una resolución, y el formulario múltiple de pago se emite para que, si el contribuyente no tiene objeciones o desea consentirlo, cubra su importe. Situación diversa acontece cuando la actora demanda, con apoyo en el artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación, la nulidad de un crédito fiscal del que sólo tiene conocimiento por el formulario múltiple de pago que se le entregó; en este supuesto, si la autoridad al producir contestación, no demuestra la existencia de la resolución determinante del crédito fiscal, debe concluirse que el formulario múltiple de pago exhibido, adquiere la característica de resolución definitiva, al ser el único documento en el que consta el crédito fiscal, por lo que resulta impugnable a través del juicio de nulidad. (16)

"Juicio No. 2824/98-04-02-9.- Sentencia de 24 de enero del 2000, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrada Ponente: Georgina Ponce Orozco.- Secretario: Lic. Víctor Manuel López García."

Resulta exactamente aplicable a nuestras consideraciones el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, contenido en la Tesis N°. III.2o.A.63 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: X, Diciembre de 1999, página 721, que es del tenor siguiente:

"**FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGO EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. SUPUESTO EN EL QUE ASUME LA CALIDAD DE RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.-** Por regla general, los formularios múltiples de pago elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyen formatos que la autoridad hacendaria expide a los particulares como una facilidad administrativa para que efectúen el pago de las contribuciones federales que previamente les han sido determinadas. Sin embargo, cuando un particular demanda la nulidad de diversos créditos fiscales de los que sólo tuvo conocimiento porque se le entregaron diversos formularios múltiples de pago de los

que se desprende la existencia de los referidos créditos, así como su monto y la autoridad hacendaria no demuestra en el juicio fiscal la existencia de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales a que aluden los formularios distintas a éstos, debe entenderse que tales formularios como únicos documentos que demuestran la existencia de los créditos fiscales, asumen la calidad de resoluciones determinantes de dichos créditos.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

"Revisión fiscal 9/99. Administradora Local Jurídica de Ingresos de Guadalajara. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretaria: Ma. Gabriela Rolón Montaño."

Conforme a lo anterior, en la especie el formulario múltiple de pago No. MP6893497, que es el impugnado en el presente juicio, al ser el único documento en que consta el crédito fiscal a cargo de la actora en cantidad de $5,114.00 por concepto de gastos de ejecución, dicho documento asume la calidad de resolución determinante de tal crédito y, por tanto, adquiere el carácter de resolución definitiva, por lo que contrario a la postura de la demandada, sí es impugnable en juicio de nulidad por tratarse de aquellas resoluciones a que se refiere el artículo 11, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resultando competente esta Sala para conocer de dicha impugnación, conforme a ese mismo dispositivo, razones por las cuales no es de sobreseerse ni se sobresee el juicio en que se actúa.

CUARTO.- (...)

A juicio de esta Juzgadora, el concepto de impugnación en estudio resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, por lo siguiente:

A folios 8 de los autos corre agregado el formulario múltiple de pago No. MP6893497 de fecha 9 de agosto del 2001, que constituye la resolución impugnada en el presente juicio; ahora bien, de la simple observación de tal documento, esta Juzgadora se percata que en el mismo no se exponen las razones, motivos y circunstancias de la determinación del crédito fiscal, en cantidad de $5,114.00, a cargo de la contribuyente por concepto de gastos de ejecución, ni tampoco se hace referencia de los dispositivos legales que se hubiesen aplicado para esa determinación, por tanto es de concluir que la determinación de que se trata se encuentra completamente ausente de fundamentación y motivación, violando por ello lo dispuesto por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional.

Igualmente, del formulario múltiple de pago de que se trata, este Cuerpo Colegiado observa que el mismo no contiene el nombre ni la firma de quien lo emite, violando en consecuencia lo dispuesto por la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, implicando tal ausencia de firma y nombre la falta de un requisito esencial de esa resolución, como lo es el que sea emitida por autoridad competente, elevado a rango de garantía constitucional en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la consecuencia del incumplimiento de ese requisito es la manifiesta ilegalidad de la resolución de que se trata, pues como la misma no contiene el nombre ni la firma de quien la emite, carece de toda fundamentación y motivación legal, resultando violatoria de la citada norma Constitucional.

Lo anterior es razón más que suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en términos de la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, ya que por las razones expuestas es evidente que se actualiza el supuesto de anulación previsto en la fracción IV del diverso artículo 238 del mismo Ordenamiento legal en cita, pues en la emisión de esa resolución se dejó de aplicar la disposición debida.

A las anteriores consideraciones resulta enteramente aplicable la Tesis No. III-TASS-1171 del Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación, que aparece publicada en la Revista de ese mismo Tribunal, Tercera Época, Año II. No. 21, Septiembre 1989, página 11, que a la letra dice:

> "**AUSENCIA DE LA FIRMA DE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO IMPUGNADO PRODUCE LA NULIDAD DEL MISMO.-** El artículo 16 Constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; por tanto, si la resolución administrativa impugnada carece de la firma de la autoridad emisora, esta ausencia implica la falta de una parte esencial de esa resolución, como lo impone el precepto constitucional al referirse a mandamiento escrito de autoridad competente, y la consecuencia es su nulidad manifiesta.(II)
>
> "Revisión No. 12374/88.- Resuelta el 31 de agosto de 1989, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretaria: Lic. Rosa H. Círigo Barrón."

Igualmente resulta aplicable la Tesis No. IV-TASR-XVIII-210 de la Séptima Sala Regional Metropolitana, visible en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Cuarta Época, Año II. No. 16. Noviembre 1999, página 251, que a continuación se transcribe:

> "**FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGO.- ACTO DE AUTORIDAD ILEGAL.-** Considerando que el documento menciona el concepto, la cantidad líquida determinada, la forma de pago, y se requiere éste a través del procedimiento administrativo de ejecución, con apercibimiento, es decir, que contiene un crédito fiscal, debe reunir los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como el mismo no contiene el nombre ni la firma de quien lo emite, carece de toda

fundamentación y motivación legal, y resulta violatorio de la citada norma constitucional, razón suficiente para declarar su nulidad lisa y llana. (4)

"Juicio No. 1557/98.- Sentencia de 15 de junio de 1998, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Isabel Gómez Muñoz.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista."

Asimismo, esta Juzgadora estima relevante precisar que omite el análisis de los demás conceptos de anulación hechos valer por el demandante, en razón de que en términos del artículo 237, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación en vigor, se analizarán primeramente los agravios que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, situación que acontece en la especie.

(...)

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve;

PRIMERO.- En virtud de que ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada, **NO ES DE SOBRESEERSE NI SE SOBRESEE** el presente juicio N°. 1745/01-05-02-4.

SEGUNDO.- La parte actora INDUSTRIAL ARIAN, S.A. DE C.V., **PROBÓ SU PRETENSIÓN**, en consecuencia;

TERCERO.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, precisada en el primer resultando de este fallo.

CUARTO.- ***NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.***

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los C.C. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ***Licenciados HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ,*** Magistrado Instructor en el presente juicio, ***LUIS MOISÉS GARCÍA HERNÁNDEZ,*** y ***M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL,*** Presidenta de la Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado ***JESÚS LAZALDE MARTÍNEZ***, quien da fe.

SEGURO SOCIAL

RECURSO DE REVOCACIÓN.- EN ÉL PUEDE IMPUGNARSE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS REALIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN POR AUTORIDADES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- Del análisis armónico y relacionado de lo dispuesto por los artículos 291, segundo párrafo, 294 y 295 de la Ley del Seguro Social en su texto vigente hasta el día 20 de diciembre de 2001, así como lo señalado por los artículos 291, primer párrafo, 294 y 295 de dicha Ley en su texto reformado y en vigor a partir del 21 de diciembre de 2001, en relación con lo establecido por los artículos 117, fracción II y 120 del Código Fiscal de la Federación, se determinan los diversos supuestos contra los que procede tanto el recurso de inconformidad como el de revocación. De manera que, si una autoridad fiscal ejecutora del Instituto Mexicano del Seguro Social exige el pago de un crédito, a través del mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo, el contribuyente puede interponer el recurso de revocación, argumentando que el crédito fiscal se ha extinguido o que su monto real es inferior al exigido, o bien, alegar que el procedimiento administrativo de ejecución no se ha ajustado a la ley, como así lo señalan los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, con relación a lo que dispone el artículo 291, segundo párrafo de la Ley del Seguro Social, en su texto antes de la reforma en cita, así como en su primer párrafo en vigor actualmente, pues no obstante que este último numeral en su texto actual literalmente no hace alusión a la interposición de los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, sí señala que el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de créditos, se aplicará por el Instituto, con sujeción a las normas de dicho Código y demás disposiciones aplicables, luego, es claro que dentro de tales disposiciones aplicables del Código Fiscal de la Federación, con respecto a la ejecución o cobro del crédito fiscal queda comprendido el artículo 117, fracción II, incisos a) y b) del propio cuerpo normativo, que regula la interposición del recurso de revocación contra actos de autoridades fiscales federales dictados con motivo del procedi-

miento administrativo de ejecución, de lo que se sigue que el contribuyente válidamente puede interponer el recurso de revocación, en contra del cobro de un crédito fiscal determinado por una autoridad de dicho Instituto, con base en cualesquiera de los supuestos que prevé tal artículo 117, fracción II, incisos a) y b) del Código en mención, sin que resulte procedente que haga valer argumentos tendientes a impugnar la validez del acto administrativo por el que se determine el crédito fiscal cuyo cobro se pretende, puesto que, de conformidad con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, los patrones en contra de los actos definitivos del propio Instituto, pueden impugnar su legalidad, mediante la interposición del recurso de inconformidad, mismo que debía ser agotado en forma obligatoria hasta el día 20 de diciembre de 2001, pues con motivo de la reforma a dichos numerales, los interesados pueden optar por agotar ese medio ordinario de defensa o acudir directamente ante este Tribunal. (31)

Juicio No. 21/02-05-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de abril de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Adolfo Rosales Puga.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Del análisis que esta Juzgadora llevó a cabo al texto tanto del escrito a través del cual el contribuyente hoy actor interpuso ante la autoridad demandada el recurso de revocación en mención, así como al contenido de la resolución impugnada en el presente juicio, se advierte, que el criterio sustentado por dicha autoridad al emitir la resolución combatida y desestimar por inoperantes los agravios que en ese recurso hizo valer el particular, se ajusta a lo jurídico.

En efecto, si bien es cierto que el hoy actor en el recurso de revocación que promovió ante la autoridad, señaló que dicho medio de defensa lo interponía en términos de lo dispuesto por los artículos 291 de la Ley del Seguro Social y 117, fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, bajo el supuesto de que el procedimiento administrativo de ejecución no se ha ajustado a la ley; sin embargo, los argumentos que a manera de agravios hizo valer en el recurso de revocación que interpuso ante la autoridad fiscal, mismos que se describieron previamente, los dirigió no a cuestionar la legalidad del procedimiento administrativo de ejecución por vicios cometidos por la autoridad fiscal ejecutora al ordenar o llevar a cabo el cobro del crédito fiscal de que se trata, es decir, por vicios que la autoridad fiscal ejecutora hubiese cometido al instaurar en su contra el procedimiento administrativo para lograr hacer efectivo el crédito fiscal de trato, sino que, dichos agravios que hizo valer en su recurso de revocación los enderezó a controvertir la legalidad del crédito fiscal que dio origen a la instauración del procedimiento administrativo de ejecución.

Lo anterior es así, ya que de los argumentos que como agravios formuló el hoy actor en el recurso de revocación, mismos que se describen con antelación, se desprende, que en ese medio ordinario de defensa sostuvo que el procedimiento de ejecución, no se ha ajustado a la ley, ya que la multa que le fue impuesta, es improcedente, por el hecho de que según dice, la autoridad se encontraba impedida legalmente para imponerle la multa por prohibirlo el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, porque dice, cumplió en forma extemporánea pero espontánea con dar de alta a su trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; además, que la autoridad al imponerle la multa por $7,268.95, viola el artículo 22 Constitucional, porque en la especie la autoridad le impone una multa excesiva, equivalente a 211 salarios mínimos, no obstante que no fue grave la infracción, no ser reincidente y haber cumplido en forma espontánea con el alta del trabajador, que por ello la multa era nula por lo que debía cancelarse el crédito número 999009655, por no ajustarse al procedimiento administrativo de ejecución a lo establecido en la ley.

En tal virtud, al haber quedado demostrado que el hoy actor interpuso recurso de revocación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 291 de la Ley del Seguro Social y artículo 117, fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, alegando que el procedimiento administrativo de ejecución no se ha ajustado a la ley; pero es el caso, que los argumentos que expuso a manera de agravios en ese medio ordinario de defensa, a los cuales se hace mención en el párrafo que precede, no están dirigidos a cuestionar la legalidad del procedimiento administrativo de ejecución por no ajustarse a la ley en sí mismo, sino que dichos agravios el contribuyente los enderezó a cuestionar la legalidad de la determinación por parte de la autoridad del crédito fiscal cuyo cobro se pretende, puesto que, argumenta que es improcedente la aplicación de la multa que le fue impuesta porque en forma espontánea cumplió con la obligación de dar de alta a su trabajador, así como que la multa que se le aplicó resulta ilegal por ser excesiva, entonces, es claro que esos argumentos que en el recurso de revocación hizo valer a manera de agravios el hoy actor, como con acierto lo señala la autoridad en la resolución impugnada en el presente juicio, resultan inoperantes para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que impugnó a través del recurso de revocación, toda vez que los mismos no están dirigidos a controvertir la legalidad en sus propios motivos y fundamentos del procedimiento administrativo de ejecución que la autoridad fiscal ejecutora instauró en su contra para hacer efectivo el crédito fiscal número 9990099655, sino que los enderezó a controvertir la legalidad de la determinación de dicho crédito fiscal que dio ocasión a su cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución recurrido, lo que acredita lo inoperante de los agravios que en el recurso de revocación expresó el particular, de ahí que se ajuste a derecho el proceder de la autoridad demandada al ocuparse de su estudio en la resolución combatida y determinar desestimarlos por inoperantes.

Para mayor claridad de lo anterior, conviene tener presente lo dispuesto por los artículos 291, segundo párrafo, 294 y 295 de la Ley del Seguro Social en su texto vigente hasta el día 20 de diciembre de 2001, así como lo señalado por los artículos 291, primer párrafo, 294 y 295 de dicha Ley en su texto reformado y en vigor a partir del 21 de diciembre de 2001, en relación con lo establecido por los artículos 117, fracción II y 120 del Código Fiscal de la Federación, de cuya interpretación armónica y congruente, se determinan, los diversos supuestos contra los que procede tanto el

recurso de inconformidad como el de revocación. De manera que, si una autoridad fiscal ejecutora del Instituto Mexicano del Seguro Social exige el pago de un crédito, a través del mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo, el contribuyente puede interponer el recurso de revocación, argumentando que el crédito fiscal se ha extinguido o que su monto real es inferior al exigido, o bien, alegar que el procedimiento administrativo de ejecución no se ha ajustado a la ley, como así lo señalan los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, con relación a lo que dispone el artículo 291, segundo párrafo de la Ley del Seguro Social, en su texto antes de la reforma en cita, así como su primer párrafo en vigor actualmente, pues no obstante que este último numeral en su texto actual literalmente no hace alusión a la interposición de los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, sí señala que el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de créditos, se aplicará por el Instituto, con sujeción a las normas de dicho Código y demás disposiciones aplicables, luego, es claro que dentro de tales disposiciones aplicables del Código Fiscal de la Federación, con respecto a la ejecución o cobro del crédito fiscal queda comprendido el artículo 117, fracción II, incisos a) y b) del propio cuerpo normativo, que regula la interposición del recurso de revocación contra actos de autoridades fiscales federales dictados con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, de lo que se sigue que el contribuyente al interponer el recurso de revocación, como en la especie, en contra de un cobro de un crédito fiscal determinado por una autoridad de dicho Instituto, con base en cualesquiera de los supuestos que prevé tal artículo 117, fracción II, incisos a) y b) del Código en mención, no resulta procedente que haga valer argumentos tendientes a impugnar la validez del acto administrativo por el que se determine el crédito fiscal cuyo cobro se pretende, puesto que, de conformidad con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, los patrones en contra de los actos definitivos del propio Instituto, como sin duda alguna lo es la resolución por la que se aplica una sanción por infracción a las disposiciones legales, podían impugnar su legalidad, o sea, formular argumentos para cuestionar la validez del crédito determinado, mediante la interposición del recurso de inconformidad, mismo que debía ser agotado en forma obligatoria hasta el día 20 de diciembre de 2001, pues con motivo de la reforma a dichos nume-

rales, vigente a partir del día 21 de ese mes y año, los interesados pueden optar por agotar ese medio ordinario de defensa o acudir directamente ante este Tribunal.

Por lo tanto, si un particular pretende como en el presente caso, interponer el recurso de revocación oponiéndose al cobro de un crédito fiscal, bajo el supuesto de que el procedimiento administrativo de ejecución no se ha ajustado a la ley, pero haciendo valer como agravios argumentos que combaten la validez del acto que determinó el crédito fiscal y no el procedimiento administrativo de ejecución en sí mismo, como en la especie acontece, por tratarse de hipótesis de procedencia totalmente diferentes, dichos argumentos deben ser desestimados por la autoridad fiscal al resolver el recurso de revocación por resultar inoperantes, ya que dentro del recurso de revocación no pueden ser materia de estudio la cuestión de fondo propuesta en ellos, por tratarse de una materia que debió plantearse vía recurso de inconformidad antes de la reforma y actualmente mediante la interposición de ese recurso o directamente en juicio de nulidad ante este Tribunal.

Al respecto, resulta aplicable en forma analógica el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación que dice:

"Octava Época
"Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 85, Enero de 1995
"Tesis: XIX.2o. J/5
"Página: 95

"**AGRAVIOS INOPERANTES. EN EL RECURSO DE REVISIÓN.-** Son inoperantes los agravios cuando en éstos no se formula objeción alguna contra los lineamientos que rigen el fallo recurrido, o bien, cuando son varias las consideraciones en que se sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, resultando ineficaces para conducir a

su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito sobre los que descansa el sentido del fallo."

De igual manera, es aplicable el criterio sustentado por la Sala Superior de este Tribunal, que dice:

"Tercera Época.
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año VIII. No. 93. Septiembre 1995.
"Tesis: III-PSS-492
"Página: 23

"**AGRAVIOS INOPERANTES.- TIENEN ESTA NATURALEZA LOS EXPRESADOS POR LA ACTORA SI NO SE REFIEREN A LOS RAZONAMIENTOS FUNDAMENTALES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.**- Los conceptos de anulación hechos valer por la parte actora, en su escrito de demanda, resultan inoperantes, si no están orientados a controvertir los razonamientos esenciales que dan la motivación y fundamentación de la resolución impugnada, teniendo como consecuencia el reconocimiento de la validez de la resolución."

Por lo expuesto, los argumentos que el actor hace valer en su pliego de demanda resultan infundados, ya que contrario a su dicho, como ha quedado demostrado, la autoridad demandada se ajustó a derecho al emitir la resolución impugnada en la cual en su considerando tercero al realizar el análisis de los agravios que el promovente planteó en su recurso de revocación, determinó que los mismos eran inoperantes para desvirtuar la legalidad del acto combatido en ese medio ordinario de defensa, en razón de que dichos agravios no estaban dirigidos a controvertir la legalidad del procedimiento de cobro del crédito fiscal, sino que se dirigían a controvertir la legalidad del crédito fiscal que originó el cobro de ese crédito, lo cual es improcedente, toda vez que al haber interpuesto el recurso de revocación en contra de las diligencias

de requerimiento de pago y embargo mediante las cuales la autoridad ejecutora le exigió el pago del crédito fiscal número 999009655, alegando que el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustaba a la ley, los agravios planteados en dicho recurso administrativo los debió enderezar a controvertir la legalidad del procedimiento administrativo de ejecución en sí mismo, lo que en la especie no ocurrió, dado que los argumentos que hizo valer en tal recurso los enfocó a cuestionar la legalidad de los motivos y fundamentos de la multa que le fue aplicada.

Esto es, en el recurso de revocación el promovente en sus agravios impugnó realmente la validez del crédito fiscal determinado a su cargo, lo que en la especie, por los motivos y fundamentos expuestos no era procedente, dado que, el crédito fiscal no era el acto señalado como impugnado en ese medio ordinario de defensa, de ahí lo inoperante de los agravios que en el recurso de revocación formuló el hoy actor.

Por lo tanto, en el caso sometido a estudio, el actor no acredita los hechos constitutivos de su acción, pues no prueba que la autoridad demandada al emitir la resolución combatida en el presente juicio hubiese incurrido en violación en su perjuicio de lo dispuesto por los preceptos legales que en los dos conceptos de anulación menciona como violados, virtud de que como ha quedado demostrado, es falso que la autoridad demandada al dictar la resolución impugnada en este asunto, es decir, la que resolvió el recurso de revocación, hubiese apreciado equivocadamente los hechos, sin que tampoco se presente la falta de motivación y fundamentación, dado que como ha quedado precisado, en tal resolución la demandada expresa con claridad las consideraciones de hecho y razones particulares por las que consideró que resultaban inoperantes los agravios que en el recurso de revocación planteó el recurrente y, por lo que hace al cumplimiento del requisito de fundamentación, éste se colma con la cita de los preceptos legales que la autoridad invoca en el considerando primero y párrafo anterior al punto resolutivo primero de la propia resolución combatida.

Sin que en la especie, tampoco se presente la falta de estudio de los agravios planteados en el recurso de revocación de que se duele el demandante, pues basta

leer el considerando tercero de dicha resolución impugnada, para advertir que la demandada allí se ocupó en conjunto del estudio de los agravios que en ese medio de defensa se hicieron valer por el promovente, dado que fue con base en el análisis que realizó de ellos que pudo llegar a concluir que devenían inoperantes para desvirtuar la legalidad del acto combatido en ese recurso, por no estar dirigidos a combatir la legalidad del procedimiento de cobro, sino que los mismos se dirigían a controvertir la legalidad del crédito fiscal que originó el referido cobro, de ahí que no se de la violación por falta de estudio de que se duele el demandante.

Por todo lo expuesto, con fundamento en los artículos 68, 236, 237 y 239 fracción I del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- La parte actora CIPRIANO GARCÍA RENTERÍA, **en este juicio** No. 21/02-05-02-1, **no probó su acción, en consecuencia**;

SEGUNDO.- SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, **misma que quedó precisada en el resultando primero del presente fallo**;

TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.-

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ***Licenciados HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ***, Instructor en el presente juicio, ***M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL***, Presidenta de esta Sala y **LUIS MOISÉS GARCÍA HERNÁNDEZ**, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado **ADOLFO ROSALES PUGA**, quien con su firma autoriza.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VISITA DOMICILIARIA, LAS FACULTADES DE LOS VERIFICADORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES, COMPRENDE EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN CITADO EN LA ORDEN RESPECTIVA.- Si en la orden de verificación respectiva se indica el *periodo a revisar*, es con el fin de autorizar a los visitadores para que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones en relación con la expedición de comprobantes fiscales que se hayan expedido durante dicho periodo y no solamente los que se expidan a partir de la notificación de la orden, o bien, del inicio de la verificación; pues la orden de visita domiciliaria es precisa al determinar su objeto "***con el fin de que verifiquen la expedición de comprobantes fiscales o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales***", con esto, se autoriza a los visitadores a que verifiquen el cumplimiento de obligaciones en relación con la expedición de comprobantes fiscales, tanto de los que se expidan al momento en que se encuentren realizando la visita, como los que se llegaran a expedir durante el periodo sujeto a revisión; esto es, que si la revisión se lleva a cabo sobre comprobantes expedidos con anterioridad a la visita, pero dentro del periodo señalado en la orden respectiva, debe considerarse que los visitadores actuaron conforme a derecho, pues tales comprobantes fueron expedidos dentro del periodo a revisar y pueden legalmente ser sujetos de revisión y observación. (32)

Juicio No. 2607/01-05-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de abril de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Isabel Patricia Herrero Rodríguez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Esta Sala considera infundado el concepto de impugnación que nos ocupa, puesto que contrario a lo sostenido por la parte actora, se advierte que la autoridad actuó en forma legal, al llevar a cabo la verificación de expedición de comprobantes fiscales, lo anterior es así, ya que atendiendo a la orden de verificación respectiva contenida en el oficio 4464 de fecha 03 de agosto del 2001, en la misma se indica que **el periodo a revisión lo es del 3 de julio de 2001 al 3 de agosto del 2001**, con el fin de verificar los visitadores la expedición de comprobantes fiscales o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales; por lo que en este sentido, los visitadores están autorizados para revisar los comprobantes fiscales que se hayan expedido durante dicho periodo y no solamente los que se expidan a partir de la notificación de la orden, o bien, del inicio de la verificación, como infundadamente lo pretende la parte actora, puesto que no señala precepto legal alguno en que apoye su afirmación y que por lo tanto la autoridad haya actuado en forma ilegal.

En este orden de ideas, cabe resaltar que en la propia orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, se indica, "*con el fin de que verifiquen la expedición de comprobantes fiscales* ***o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales***"; la orden de visita que nos ocupa, es muy precisa en determinar su objeto, puesto que con claridad autoriza a los visitadores para que verifiquen la expedición de comprobantes fiscales, tanto de los que se expidan al momento en que se encuentren realizando la visita, como los que se llegaran a expedir durante el periodo sujeto a revisión, esto es, que si la visita se realizó el 03 de agosto del 2001, último día del periodo autorizado y dicho periodo comprende del 03 de julio al 03 de agosto del 2001, entonces si la revisión se llevó a cabo sobre comprobantes (notas de venta) expedidos con fecha 01 de agosto del 2001, de ahí que deba considerarse que la autoridad procedió en términos de la propia orden de visita, pues tales com-

probantes fueron expedidos dentro del periodo a revisar; en razón de lo anterior, como se dijo, lo expuesto por la parte actora en este concepto de impugnación, resulta del todo infundado, por ello se desestima.

(...)

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora **FARMACIA GUADALUPANA DE VICENTE GUERRERO, S.A. DE C.V.**, en este **juicio No. 2607/01-05-02-3, NO PROBÓ SU ACCIÓN**, en consecuencia;

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, precisada en el resultando 1° del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman, los C.C. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **NORA ELIZABETH URBY GENEL**, **M.D.F.**, Presidenta de la Sala e Instructora en el presente juicio, Licenciados **LUIS MOISÉS GARCÍA HERNÁNDEZ** y **HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ**, ante la C. Secretaria Licenciada **ISABEL PATRICIA HERRERO RODRÍGUEZ**, quien autoriza con su firma.- Doy Fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMPROBANTES FISCALES.- ENTREGA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA LA VERIFICACIÓN DE SU EXPEDICIÓN.- De acuerdo al artículo 49, fracción II del Código Fiscal de la Federación, tratándose de la práctica de visitas domiciliarias para la verificación de la expedición de comprobantes fiscales, la entrega de la orden de verificación respectiva se hará a cualquiera de las personas que en la misma norma se mencionan, esto es, indistintamente, debiéndose hacer constar también la entrega de la orden a la persona que atendió el requerimiento. Conforme a lo anterior, no le asiste la razón a la parte actora cuando señala que para tener por debidamente circunstanciada la entrega de la orden de visita domiciliaria, se debió señalar que se requirió la presencia de las personas a que se refiere la fracción II del referido artículo 49, en el orden que la misma fracción los establece, esto es, que en primera instancia fue requerida la presencia del contribuyente y asentar que éste no se encontraba en ese momento en el lugar; que en segundo término fue requerida la presencia del representante legal y señalar que éste tampoco se encontraba en esos momentos; que acto seguido se requirió la presencia del encargado o de la persona que se encontraba al frente del lugar y que con esta persona se entendió la visita de inspección, pues la fracción II del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, no establece que para la entrega de la orden de visita domiciliaria se requiera la presencia en el orden sucesivo de las personas que en esa fracción se mencionan, sino que la norma es categórica al señalar que la entrega de la orden se hará indistintamente a tales personas. Luego entonces, si en el acta de visita domiciliaria se asentó que para la entrega de la orden de visita se requirió la presencia del destinatario de la misma, o su representante legal, o del encargado o de quien se encuentre al frente de la negociación, apersonándose una persona que se ostentó como el encargado del lugar, así como que fue a esta persona a quien los visitadores entregaron el oficio en que se contiene la referida orden, dicha entrega se encuentra debidamente circunstanciada, pues los hechos asentados en el acta a ese respecto se

encuentran apegados a lo dispuesto por la fracción II del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. (33)

Juicio No. 2447/01-05-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de mayo del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Jesús Lazalde Martínez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de este Cuerpo Colegiado, el concepto de impugnación que nos ocupa resulta infundado, conforme a lo siguiente:

El artículo 49, fracción II del Código Fiscal de la Federación, que es en el que la actora apoya su pretensión, regula la entrega de las órdenes de visitas domiciliarias para la verificación de la expedición de comprobantes fiscales, cuya práctica se contempla como facultad de las autoridades fiscales en la fracción V del artículo 42 de ese mismo Ordenamiento Legal, señalándose en el precepto y fracción citados en primer término, lo siguiente:

> "**Artículo 49.-** Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:
>
> "(...)

"**II.-** Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección.

"(...)"

De acuerdo al dispositivo transcrito, tratándose de la práctica de visitas domiciliarias para la verificación de la expedición de comprobantes fiscales, para circunstanciar la entrega de la orden respectiva, basta que en el acta relativa se asiente que fue requerida la presencia del destinatario de la orden, o su representante legal, o del encargado o de quien se encuentre al frente del lugar visitado (establecimiento o negociación), así como quién de estas personas atiende el llamado de los visitadores, pues el dispositivo en comento es claro al establecer que los visitadores entregarán la orden de verificación a cualquiera de las personas que en la misma norma se mencionan, esto es, indistintamente, debiéndose hacer constar también la entrega de la orden a la persona que atendió el requerimiento.

Conforme a lo anterior, no le asiste la razón a la parte actora cuando señala que para tener por debidamente circunstanciada la entrega de la orden de visita domiciliaria, se debió señalar que se requirió la presencia de las personas a que se refiere la fracción II del comentado artículo 49, en el orden que la misma fracción los establece, esto es, que en primera instancia fue requerida la presencia del contribuyente y asentar que éste no se encontraba en ese momento en el lugar; que en segundo término fue requerida la presencia del representante legal y señalar que éste tampoco se encontraba en esos momentos; que acto seguido se requirió la presencia del encargado o de la persona que se encontraba al frente del lugar y que con esta persona se entendió la visita de inspección, pues como se vio con anterioridad, la fracción II del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, no establece que para la entrega de la orden de visita domiciliaria se requiera la presencia en el orden sucesivo de las personas que en esa fracción se mencionan, sino que la norma es categórica al señalar que la entrega de la orden se hará indistintamente a tales personas.

Luego entonces, si a folios No. VVE5100348/01/001 del acta de visita domiciliaria de fecha 14 de mayo del 2001, que corre agregada en autos del presente expediente a fojas de la 23 a la 27, se asentó que para la entrega de la orden de visita se requirió la presencia del destinatario de la misma, o su representante legal, o del encargado o de quien se encuentre al frente de la negociación, apersonándose el C. Jair Alejandro Figueroa Hernández en su carácter de encargado, así como que fue a esta persona a quien los visitadores entregaron el oficio en que se contiene la referida orden, dicha entrega se encuentra debidamente circunstanciada pues los hechos asentados en el acta a ese respecto son apegados a lo dispuesto por la fracción II del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación.

Por otro lado, el argumento que esgrime la parte actora de que la credencial para votar con folio 114719883 expedida por el Instituto Federal Electoral, con la que se identifica el C. Jair Alejandro Figueroa Hernández, no es un documento determinante para probar que esta persona era el encargado del establecimiento, también resulta infundado, pues además de que la identificación de quienes atienden la visita no está contemplada en ninguna de las fracciones del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, que establece los lineamientos a los que se debe sujetar la práctica de visitas domiciliarias para comprobar la expedición de comprobantes fiscales, debe decirse que la identificación de la persona que atiende la visita, no tiene otro objeto más que el de comprobar que tal persona es quien dice ser, por lo que en ese sentido, es enteramente válido que en la especie ante los visitadores el C. Jair Alejandro Figueroa Hernández se hubiese identificado con la credencial para votar con folio 114719883 expedida por el Instituto Federal Electoral, pues con este documento demuestra que es él quien dice ser, sin que dicha identificación tuviera como fin, se insiste, el acreditar que era el encargado del establecimiento.

(...)

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve;

PRIMERO.- La parte actora **CELEXCEL, S.A. DE C.V.,** en este juicio No. 2447/01-05-02-4, **no probó su acción**, en consecuencia:

SEGUNDO.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA precisada en el resultando primero de esta sentencia.

TERCERO.- ***NOTIFÍQUESE EN FORMA PERSONAL A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.***

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los C.C. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ***Licenciados HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ,*** Magistrado Instructor en el presente juicio, ***LUIS MOISÉS GARCÍA HERNÁNDEZ,*** y ***M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL,*** Presidenta de la Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado ***JESÚS LAZALDE MARTÍNEZ***, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 22, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO INICIA, TRATÁNDOSE DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE MEDIANTE DECLARACIONES PROVISIONALES MENSUALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- De conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la obligación del Fisco Federal de devolver las cantidades pagadas indebidamente prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, y de acuerdo al artículo 146 de ese mismo Ordenamiento Legal, el cómputo del término de cinco años, para que prescriban los créditos fiscales, se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido por la autoridad fiscal, esta aseveración del legislador explica necesariamente que el Fisco Federal tenga conocimiento de la existencia de su derecho en contra del particular deudor, así, cuando el crédito fiscal sea fijado por la autoridad fiscal, bastará con que se cumpla el plazo señalado en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación para que el deudor lo pague o garantice, para que comience a correr la prescripción a favor del particular, pero cuando la determinación del crédito fiscal deba ser realizada por el propio contribuyente, será éste quien deba presentar la declaración de la existencia del hecho generador y del nacimiento del crédito fiscal, para que comience a correr el término de cinco años para la prescripción del mismo, por tanto, en el supuesto de que el contribuyente presente declaración de pago provisional mensual del impuesto al valor agregado con una cierta cantidad, reflejada posteriormente como saldo a favor en una declaración complementaria de ese pago provisional, el término para que opere la prescripción de la obligación del Fisco Federal por el transcurso del tiempo de devolver ese saldo a favor, comenzará a correr no a partir de la presentación de la declaración complementaria, sino a partir de la fecha en que se presentó la declaración normal de pago provisional. Lo anterior, porque respecto a la determinación de contribuciones, el artículo 6° del Código Fiscal de la Federación en su párrafo tercero, establece que ésta corresponde al contribuyente, salvo disposición expresa en contrario, y ese

mismo dispositivo en la primera parte de su párrafo cuarto, señala que las contribuciones, obviamente las determinadas por el contribuyente, se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, por su parte, en el segundo párrafo del artículo 5° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se prevé que por este impuesto los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mediante declaración por los mismos períodos y en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta, y la Ley de este impuesto en su artículo 12, primer párrafo, establece que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, por tanto, si conforme a los dispositivos antes mencionados se establece en qué momento el contribuyente debe realizar mediante declaración el pago provisional mensual del impuesto al valor agregado por él determinado, pago que obviamente puede implicar el de una cantidad indebida, transcurrido el momento de la presentación de la declaración de pago provisional mensual, la cantidad declarada se hace exigible por parte de la autoridad y, por consecuencia también se hace exigible por parte del contribuyente la devolución de la cantidad pagada indebidamente mediante esa declaración. (34)

Juicio No. 137/02-05-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de junio del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Jesús Lazalde Martínez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RESOLUCIONES FAVORABLES EN CONSULTAS FORMULADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO NO OPERA EL LÍMITE TEMPORAL ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 36 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL RESPECTO DE SUS EFECTOS.- La autoridad para fundar y motivar su negativa a

devolver el impuesto al valor agregado solicitado, razona esencialmente que la resolución favorable dictada a la consulta realizada en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, no puede surtir efectos legales para generar derechos por el período solicitado en devolución, porque la solicitud de devolución corresponde a un ejercicio anterior al en que se otorgó la resolución favorable, por así prevenirlo el artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación, pues éste establece que las resoluciones favorables a particulares surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiere solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo. Tal forma de resolver de la autoridad es ilegal, pues del referido artículo 36-Bis se desprende que los supuestos para el surtimiento de los efectos de las resoluciones de las autoridades administrativas dictadas en materia de impuestos, aplica a las que otorguen una autorización o que siendo favorables a particulares, determinen un régimen fiscal, y en el caso, de la resolución recaída a la consulta se observa que aun cuando se dicta en materia de impuestos, no se otorgó autorización alguna ni tampoco, siendo favorable, se determinó régimen fiscal alguno, en tanto que la autoridad que la emitió, se limitó a resolver favorablemente los planteamientos reales y concretos formulados en forma de consulta, esto es, en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, que a la actividad de enajenación del contribuyente le aplica lo dispuesto en el artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3 de su Reglamento y que por consecuencia le corresponde la tasa del 0% de ese impuesto. En ese sentido, no es aplicable el artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación para determinar la vigencia de la resolución que favoreció al contribuyente en su consulta y con ello, negarle la devolución de impuestos que solicita. (35)

Juicio No. 137/02-05-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de junio del 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Jesús Lazalde Martínez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

A juicio de este Cuerpo Colegiado, los argumentos de ilegalidad de la parte actora resultan infundados, conforme a las siguientes consideraciones:

La demandante en la segunda parte de su concepto de impugnación, básicamente argumenta que de acuerdo con el artículo 22, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, relacionado con el artículo 146 del mismo Ordenamiento legal, para que inicie el plazo de prescripción del derecho a la devolución debe existir una cantidad líquida previamente determinada, de ahí que el plazo para que se compute la prescripción del derecho a la devolución comienza desde el momento en que se solicitó la devolución, esto es, el 17 de julio del 2001, pues en esa etapa se estaría determinando por la actora en su calidad de acreedor del fisco, una cantidad líquida y exigible a cargo del Estado, pues la solicitud de devolución haría las veces de resolución determinante de crédito, notificada por un contribuyente al fisco, a fin de que éste devuelva las cantidades determinadas a su cargo.

Ahora bien, para la mejor comprensión de la litis planteada por la demandante mediante sus argumentos de ilegalidad anteriormente detallados, analizaremos la figura de la prescripción y, con base en ello, determinaremos si en el caso a estudio el cómputo de la prescripción de la obligación del Fisco Federal a devolverle el saldo a su favor por el período de enero de 1996, inició como lo asevera el 17 de julio del 2001, fecha en que presentó su solicitud de devolución.

La palabra prescripción deriva del término latino prescribiere que significa adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley (Diccionario de la Lengua Española, página 1660), tiene su origen en el derecho civil. Siguiendo lo dispues-

to en los artículos 1135 y 1136 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se puede definir como el medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.

La adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva y la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa.

En materia fiscal también existe esta figura jurídica (artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación), pero sólo en su modalidad negativa o liberatoria, es decir, como un medio para que el deudor (llámese fisco o contribuyente) se libere de obligaciones.

Esta figura jurídica se encuentra contemplada en los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, el primer numeral prevé la extinción de la obligación del Estado por el transcurso del tiempo, de devolver las cantidades pagadas de más, cuando los contribuyentes son negligentes en exigir el reembolso de las cantidades pagadas de más o indebidamente por conceptos tributarios, estableciendo que ésta opera en los mismos términos que tratándose de créditos fiscales, el segundo precepto, instituye la prescripción de los créditos fiscales en el término de cinco años.

Atendiendo al artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, entendemos por créditos fiscales todas aquellas percepciones a que tenga derecho el Estado, provenientes de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquéllos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena, a su vez, el artículo 2o. de ese Ordenamiento indica que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

Ahora bien, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la obligación del Fisco Federal de devolver las cantidades pagadas indebidamente prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, y de acuerdo al artículo 146 de ese mismo Ordenamiento legal, el cómputo del término de cinco años, para que prescriban los créditos fiscales, se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido por la autoridad fiscal, **esta aseveración del legislador explica necesariamente que el acreedor fiscal *(Fisco Federal)* tenga conocimiento de la existencia de su derecho en contra del particular deudor**, así, cuando el crédito fiscal sea fijado por el Estado, bastará con que se cumpla el plazo señalado en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación para que el deudor lo pague o garantice, para que comience a correr la prescripción a favor del particular, ***pero cuando la determinación del crédito fiscal deba ser realizada por el propio contribuyente*, será éste quien deba presentar la declaración de la existencia del hecho generador y del nacimiento del crédito fiscal, para que comience a correr el término de cinco años para la prescripción del mismo**, por tanto, en el supuesto de que el contribuyente presente declaración del pago provisional, como en el caso la relativa al período de enero de 1996 presentada el 19 de febrero de 1996 en cantidad de $29,043.00, reflejada como saldo a favor en la declaración complementaria de pago provisional presentada el 12 de julio del 2001, el término para que opere la prescripción de la obligación del Fisco Federal por el transcurso del tiempo de devolver ese saldo a favor, comenzará a correr a partir de la fecha en que se presentó la declaración "normal" de pago provisional, esto es, a partir del 19 de febrero de 1996.

Luego entonces, es correcto que la Administración Local de Recaudación de Durango en la resolución impugnada hubiese estimado que en el caso, al haber presentado la solicitante su pago provisional normal el 19 de febrero de 1996 y posteriormente el complementario el 12 de julio de 2001 en el que se refleja el saldo a favor, se desprende que transcurrió con exceso el término de cinco años que establece el artículo 146 antes mencionado, toda vez que dicho pago provisional debió haberlo presentado a más tardar el 17 de febrero del 2001 y no el 12 de julio del 2001.

Lo anterior, porque respecto a la determinación de contribuciones, el artículo 6° del Código Fiscal de la Federación en su párrafo tercero, establece que ésta corresponde al contribuyente, salvo disposición expresa en contrario, y ese mismo dispositivo en la primera parte de su párrafo cuarto, señala que las contribuciones, obviamente las determinadas por el contribuyente, se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, por su parte, en el segundo párrafo del artículo 5° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé que por este impuesto los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mediante declaración por los mismos períodos y en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta, y la Ley de este impuesto en su artículo 12, primer párrafo, establece que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, por tanto, si conforme a los dispositivos antes tratados se establece en qué momento el contribuyente debe realizar mediante declaración el pago provisional mensual del impuesto al valor agregado por él determinado, esto es, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, pago que obviamente puede implicar, como en el presente caso, el de una cantidad indebida, por tanto, transcurrido dicho momento, la cantidad declarada se hace exigible por parte de la autoridad y, por consecuencia también se hace exigible por parte del contribuyente la devolución de la cantidad pagada indebidamente mediante declaración.

En conclusión, una vez que transcurrió el momento en que el contribuyente realizó indebidamente el pago de una cantidad, en la especie el 19 de febrero de 1996, ésta se hace exigible, y siendo ya exigible, comienza a correr el término de cinco años para la prescripción a favor del Fisco Federal de devolver esa cantidad.

Por lo anterior, los argumentos de ilegalidad que nos ocupan resultan infundados.

Bajo los razonamientos vertidos anteriormente respecto al momento en que inicia el plazo para el cómputo de la prescripción de la obligación del Fisco Federal para devolver cantidades pagadas indebidamente, también resultan infundados los

argumentos de la enjuiciante que hace consistir básicamente en que no tenía límite temporal para la presentación de la declaración complementaria de pagos provisionales presentada el 12 de julio del 2001 en que manifestó el saldo a favor cuya devolución solicita, pues el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación le posibilita para que pueda modificar las declaraciones normales hasta en tres ocasiones, siempre que no se hayan iniciado las facultades de comprobación, lo que en el caso no ha ocurrido, por lo que esa presentación se realizó en tiempo y forma por no existir limitación temporal con base en el aludido artículo 32, de ahí que la posibilidad de manifestar ese saldo a favor no se había extinguido por el transcurso del tiempo.

Lo anterior, porque además de que ya se definió con antelación que el momento a partir del cual inicia el cómputo de la prescripción a favor del Fisco Federal lo fue el 19 de febrero de 1996, el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación en nada apoya la pretensión de la actora de que no tenía limitación temporal para la presentación del pago provisional complementario en que manifestó el saldo a favor por el período de enero de 1996 y con base en ello solicitar su devolución.

En efecto, si bien es cierto que el ejercicio del derecho de los contribuyentes a modificar hasta en tres ocasiones sus declaraciones de impuestos, previsto por el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, no se encuentra sujeto a ninguna limitante de tiempo, también lo es que cuando las declaraciones complementarias tengan por objeto manifestar y solicitar la devolución de saldos a favor del contribuyente, como en el caso, debe considerarse que el ejercicio de dicha facultad, como acertadamente lo señala la demandada en la resolución impugnada, se encuentra sujeto al plazo de prescripción previsto por los artículos 22, párrafo antepenúltimo y 146 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, deben formularse dentro del término de cinco años, contados a partir de la fecha en que se presentó la declaración normal, pues si el derecho a modificar las declaraciones de impuestos, no estuviera sujeto a un término, como lo pretende la demandante, implicaría que podrían modificarse en todo tiempo y, como consecuencia, también solicitarse con base en ellas la devolución de saldos a favor, en detrimento del principio de seguridad jurídica.

Resulta aplicable a la totalidad de los razonamientos vertidos en el presente considerando, la Tesis No. IV.2o.A.2 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XIII, Mayo de 2001, Página: 1121, que es del tenor siguiente:

"**DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA. CUANDO EN BASE EN ELLA SE MANIFIESTEN SALDOS A FAVOR, CUYA DEVOLUCIÓN SOLICITA EL CONTRIBUYENTE, ESTÁ SUJETA AL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 22, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-** El ejercicio del derecho de los contribuyentes a modificar hasta en tres ocasiones sus declaraciones de impuestos respecto de ejercicios concluidos, previsto por el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, si bien no se encuentra sujeto a ninguna limitante de tiempo, sin embargo, cuando las declaraciones complementarias tengan por objeto manifestar y solicitar la devolución de saldos a favor del contribuyente, derivados de contribuciones que se enteran por ejercicios, debe considerarse que en este caso, el ejercicio de dicha facultad se encuentra sujeto al plazo de prescripción previsto por los artículos 22, párrafo antepenúltimo y 146 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, deben formularse dentro del término de cinco años, contados a partir de la fecha en que se presentó la declaración del ejercicio o de aquélla en que venció el plazo para su presentación, pues si el derecho a modificar las declaraciones de impuestos, no estuviera sujeto a un término, implicaría que podrían modificarse en todo tiempo y, como consecuencia, también solicitarse con base en ellas la devolución de saldos a favor, en detrimento del principio de seguridad jurídica.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

"Amparo directo 43/2001. Alfredo Arteaga Lira. 22 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Martín Ubaldo Mariscal Rojas.

"Revisión fiscal 143/2001. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 28 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Martín Ubaldo Mariscal Rojas."

No pasa desapercibido que la actora en el concepto de impugnación en análisis, como apoyo a su pretensión, invoca la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 15/2000 de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "**PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIBLE**", sin embargo, este Cuerpo Colegiado estima que la enunciada Jurisprudencia no es aplicable en la especie, pues en ella se define que para que inicie el término de cinco años para que opere la prescripción a que se refiere el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que pueda estimarse actualizada dicha figura a favor del contribuyente, es necesario que exista previamente la determinación de un crédito, debidamente notificado a dicho contribuyente y que éste no realice el pago correspondiente o garantice su monto dentro del plazo de cuarenta y cinco días que le confiere el artículo 65 del mismo Ordenamiento legal, razón por la que no puede sostenerse válidamente que cuando el contribuyente no presenta su declaración estando obligado a ello, el término para la prescripción empieza a correr al día siguiente en que concluyó el plazo para presentarla, pretendiendo que desde ese momento resulta exigible por la autoridad el crédito fiscal, ya que en tal supuesto lo que opera es la caducidad de las facultades que tiene el fisco para determinar el crédito; cuestiones éstas diversas a las ventiladas en el presente asunto, en tanto que en este juicio no se discute la actualización de la prescripción a favor del contribuyente de su obligación de pago de un crédito fiscal previamente determinado y notificado por la autoridad, sino todo lo contrario, la actualización de la prescripción de la obligación del Fisco Federal a devolver una cantidad determinada e indebi-

damente pagada por el contribuyente, mucho menos se discute si existió o no declaración, pues tanto la actora como la demandada coinciden en la presentación de una declaración de pago provisional en la que la contribuyente declaró aquella cantidad que la actora dice pagó indebidamente.

Por otra parte, resulta infundado que la demandada en su resolución pretenda asimilar la figura de la prescripción a su solicitud de devolución, pues del texto de dicha resolución no se desprende elemento alguno que lleve a esa conclusión, ni la demandante en todo caso lo señala, debiéndose hacer notar que la demandada, en todo momento, los razonamientos que vierte en el punto I del apartado de "CONSIDERACIONES", los dirige a determinar la existencia de la prescripción.

Por último, conforme a los razonamientos por los que se desestiman las argumentaciones de la actora respecto a que, en términos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, no existe limitante de tiempo para la presentación de la declaración complementaria en que manifieste el saldo a favor, resulta inconducente la prueba de rendición de informes que ofreció en su demanda para acreditar que respecto del saldo a favor determinado y cuya devolución solicita no se ha iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, esto, no obstante que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, autoridad a la que esta Sala solicitó el informe ofrecido por la actora, mediante oficio 324-SAT-10-5-882, de fecha 22 de febrero del 2002, mismo que obra a folios 61 de los autos, manifestara que dicha Administración mediante oficio No. 324-SAT-R2-L16-I-1840, con número de orden RDD5500001/01 de fecha 5 de abril de 2001, ordenó la práctica de la revisión del período 01 de enero al 31 de diciembre de 1999.

Por las razones que han quedado expuestas, este Órgano Colegiado considera que sí se consumó la prescripción a favor del Fisco Federal de la obligación de devolver a la demandante el saldo a favor en el pago provisional normal de enero de 1996. Pues dicho saldo a favor se hizo exigible por la contribuyente a partir del 19 de febrero de 1996, fecha en que comenzó a correr la prescripción de que se trata, y se consumó el día 19 de febrero de 2001, siendo evidente que para el 12 de julio de

2001, fecha en que se presentó la declaración de pago provisional complementario por el mismo período, en que se refleja dicho saldo a favor, ya habían transcurrido los cinco años previstos por la ley, para la mencionada prescripción.

QUINTO.- (...)

Respecto de estos agravios las enjuiciadas manifiestan medularmente, que es infundado que la resolución impugnada viole el artículo 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, pues al emitirla la autoridad recaudadora actuó conforme a derecho, ya que el artículo 22 del mismo Ordenamiento legal en la primera parte de su primer párrafo establece que las autoridades fiscales están obligadas a devolver, además de las cantidades pagadas indebidamente, **las que procedan de conformidad con las leyes fiscales**, imponiéndose así una limitante en el actuar de la autoridad, esto es, ese dispositivo limita la facultad de la autoridad a estudiar la procedencia legal de la solicitud de devolución de impuestos, por lo que si en el caso decidió que con fundamento en el artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación, que en su primer párrafo establece que las resoluciones favorables a los particulares surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo, no era procedente la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado de la contribuyente ahora actora, relativo al período octubre del 2000, porque se basa en la resolución favorable a su consulta, contenida en el oficio 325-SAT-10-0726 de fecha 29 de junio del 2001 emitida por la Administración Local Jurídica de Durango, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la resolución favorable a su consulta se emitió el 29 de junio del 2001 y su solicitud de devolución es respecto del período octubre del 2000, esto es, la solicitud de devolución corresponde a un ejercicio anterior al en que se otorgó la resolución favorable; que el argumento de que a la contribuyente en la resolución a su consulta no se le está otorgando ninguna autorización, ni se le está determinando un régimen fiscal, deberá desestimarse, porque esa es precisamente la intención que señala la ley respecto de las consultas que realizan los particulares a las autoridades fiscales; que resulta falso el argumento de que la solici-

tud de devolución de impuestos no tiene como base legal el oficio 325-SAT-10-0726 de fecha 29 de junio del 2001, lo que se desprende de la simple lectura del escrito libre presentado el 17 de julio del 2001, en donde se aprecia que se redactan cronológicamente los hechos de la consulta inicial a la autoridad fiscal, la interposición de la demanda de nulidad, la emisión de la sentencia, la interposición del recurso de revisión fiscal y la confirmación a la sentencia, además de que se anexó a dicho escrito como documentación comprobatoria precisamente el oficio 325-SAT-10-0726 de fecha 29 de junio del 2001, que es el resultado de la confirmación a la ejecutoria emitida en revisión fiscal por parte del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, quedando así establecido que lo pretendido por la contribuyente era que se tomara como base la citada resolución emitida en cumplimiento a ejecutoria, misma a la que no se le puede dar efectos retroactivos respecto del ejercicio de 2000 conforme a lo dispuesto por el artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación, ya que éste establece que las resoluciones favorables a los particulares surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiere solicitado la resolución, y ésta se otorgue dentro de los tres meses siguientes al cierre del mismo.

En el caso resulta procedente que esta Sala declare fundados los agravios de la parte actora antes señalados, por lo siguiente:

Primeramente, del punto 2 del apartado de CONSIDERACIONES de la resolución impugnada, misma que corre agregada en los autos del presente juicio a folios del 19 al 21, se observa que la autoridad demandada para fundar y motivar su negativa a devolver el impuesto al valor agregado del período enero del 2000 solicitado, razona esencialmente que la resolución favorable a la ahora actora, contenida en el oficio 325-SAT-10-0726, dictada a la consulta que ésta realizó en términos del artículo 34 del mismo Código Tributario Federal, se emitió el 29 de junio del 2001, por lo que dicha resolución favorable no puede surtir efectos legales para generar derechos a la contribuyente por el período solicitado en devolución, esto es, por el mes de enero del 2000, por así prevenirlo el artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación.

Por su parte, la enjuiciante en sus agravios alega básicamente que el artículo 36-Bis a que alude la autoridad se refiere específicamente a las resoluciones favorables, dictadas en materias de impuestos que otorguen una autorización o que siendo favorables a particulares determinen un régimen fiscal, en tanto que en la resolución recaída a su consulta no se está otorgando una autorización, ni se está determinando un régimen fiscal, sino únicamente se resolvió que a su actividad le aplica lo dispuesto en el artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3 de su Reglamento y que por consecuencia le corresponde la tasa del 0%, por lo que a tal resolución favorable no le es aplicable el referido artículo 36 Bis para determinar su vigencia.

Ahora bien, el artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo, establece:

> "**ARTÍCULO 36 Bis.- Las resoluciones** administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, **dictadas en materias de impuestos *que otorguen una autorización o que siendo favorables a particulares, determinen un régimen fiscal,*** surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo.
>
> "(...)"
>
> (Lo subrayado y resaltado es de esta Juzgadora)

De la anterior transcripción se desprende que los **supuestos para el surtimiento de los efectos**, establecidos por el dispositivo antes transcrito, de las resoluciones **de las autoridades administrativas dictadas en materia de impuestos**, aplica a las:

a) Que otorguen una autorización.

b) Que siendo favorables a particulares, determinen un régimen fiscal.

En el caso, de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-10-0726 de fecha 29 de junio del 2001, que corre agregada a los autos del presente juicio a folios del 40 al 43, esta Sala observa que en ella, aun cuando se dicta en materia de impuestos, no se otorgó autorización alguna a la contribuyente ahora actora, ni tampoco, siendo favorable, se le determinó régimen fiscal alguno, en tanto que la autoridad que la emitió, Administración Local Jurídica de Durango, en cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 14 de diciembre del 2000 dictada por la Primera Sala Regional Norte Centro de este Tribunal, se limitó a resolver favorablemente los planteamientos de la ahora actora formulados en forma de consulta, esto es, en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, siendo el sentido de dicha resolución básicamente el que a su actividad de enajenación tablas o tablones, aserrín y astillas le aplica lo dispuesto en el artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3 de su Reglamento y que por consecuencia le corresponde la tasa del 0%.

Bajo las anteriores consideraciones, le asiste la razón a la actora cuando argumenta que la negativa de la devolución del impuesto al valor agregado por el período enero de 1996, no se encuentra ajustada a derecho, ya que se sustenta en el artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación, el cual no es aplicable, pues éste se refiere a la resolución favorable recaída a una consulta respecto a autorizaciones o que determinen un régimen fiscal, lo que no sucede en el caso, ya que la resolución recaída a su consulta contenida en oficio número 0726, únicamente se resolvió que a su actividad le aplica lo dispuesto en los artículos 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3 de su Reglamento y que por consecuencia le aplica la tasa del 0%, por lo que no le es aplicable el artículo 36 Bis en comento, para determinarle la vigencia de la resolución que le favoreció en su consulta y con ello negarle la devolución de impuestos solicitada.

Así las cosas, *queda desvirtuado el* ***segundo de los motivos y fundamentos****,* esto es, el contenido el punto 2 de CONSIDERACIONES de la resolución impugna-

da, conforme al punto II de los resolutivos de la misma resolución, *en que la autoridad demandada apoya su negativa de devolución, ya que como se vio con anterioridad, en el caso no es aplicable el artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación para limitar la vigencia de la resolución a la consulta de la ahora actora.*

No es óbice para la determinación de esta Juzgadora, el que la demandada en su contestación argumente que el referido artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación, sí aplica a la consulta de la parte actora, por así disponerlo el primer párrafo del artículo 22 de ese mismo Ordenamiento legal, cuando dispone que: "Las autoridades fiscales están obligadas, a devolver las cantidades pagadas indebidamente y **las que procedan de conformidad con las leyes fiscales** (...)"; pues contrario a lo sostenido por tales autoridades, esta disposición no se refiere a que la autoridad tenga la "facultad de estudiar la procedencia legal de la solicitud", y con ello pretender que es legal la aplicación del artículo 36-Bis del Ordenamiento legal en cita, sino se refiere a los conceptos por los que procede la devolución.

En efecto, la primera parte del párrafo primero del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que es en donde las demandadas apoyan su argumento de defensa, hace dos distinciones tratándose de las cantidades a devolver:

a) Las cantidades pagadas indebidamente y;

b) Las que procedan de conformidad con las leyes fiscales.

En el primer supuesto, esto es, las cantidades pagadas indebidamente, el precepto en comento se está refiriendo a las cantidades de dinero que le fueron enteradas a la autoridad fiscal por el sujeto pasivo de la relación tributaria o por un tercero, sin haber estado legalmente obligado a ello, como ejemplo tendríamos:

- El caso de que por un error aritmético, se haya pagado una cantidad mayor a la que realmente correspondía pagar, o bien,

- Por una indebida interpretación y aplicación de la ley hubiese pagado mayor impuesto.

Con relación al segundo supuesto, es decir, la devolución de las cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales, es una adición que se incorporó en el año de 1982, pues anteriormente no se encontraba dentro del precepto de devolución y sólo se podía concluir en esta posibilidad, de la interpretación del anterior texto del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, relativo a la "prescripción de la obligación del fisco para devolver las cantidades que procedieran conforme a las leyes fiscales".

Esta incorporación al actual artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se entiende vinculada directamente a la entrada en vigor a partir de 1980 y 1981 de los impuestos al valor agregado y el especial sobre producción y servicios, pues conforme a la mecánica de estos impuestos, pueden existir cantidades que sin haber sido enteradas por el contribuyente directamente al fisco, ni constituir propiamente un pago de lo indebido, de cualquier manera aquél tiene derecho a que se las reintegre la autoridad fiscal, lo que es así porque por regla general en estos impuestos el contribuyente traslada al adquirente una cantidad equivalente al importe del impuesto que se haya causado con motivo de la operación realizada, y a su vez tiene derecho a acreditar (disminuir) de la cantidad cobrada un monto igual al del impuesto que a él se le hubiere trasladado. En tales circunstancias, por los efectos de la traslación y el acreditamiento, puede ocurrir que al contribuyente le resulte finalmente una cantidad a su favor, que se origina cuando el importe del impuesto que a él se le trasladó, es mayor a la cantidad que él trasladó posteriormente, por lo que en este caso no estamos ante un pago de lo indebido, en primera porque el contribuyente no enteró el impuesto directamente y, en segundo lugar, porque el entero no fue indebido sino de acuerdo con la ley, en tanto que las leyes impositivas obligan al contribuyente a aceptar la traslación que se le haga del impuesto, **por tanto el saldo a favor resulta de la aplicación de las leyes fiscales, *siendo este concepto de saldo a favor al que se refiere el artículo 22* en la primera parte de su primer párrafo, *cuando***

señala **que las autoridades fiscales están obligadas, a devolver** ***las cantidades que procedan de conformidad con las leyes fiscales***.

De lo anterior se sigue que carece de consistencia jurídica el argumento de la demandada de que en el caso es aplicable el artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación, porque la disposición que se ha comentado al establecer que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades que procedan de conformidad con las leyes fiscales, faculta a aquellas autoridades a "estudiar la procedencia legal de la solicitud".

A las anteriores consideraciones es aplicable el precedente No. IV-P-2aS-213 de la Segunda Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, que aparece publicado en la Revista de ese Tribunal, Cuarta Época, Año II. No. 20. Marzo 2000, Página 108, que a continuación se transcribe:

> "**DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR EN LOS IMPUESTOS TRASLADADOS.- LOS CONTRIBUYENTES TIENEN DERECHO A LA MISMA.-** La expresión que contiene el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que las autoridades fiscales están obligadas a devolver, no únicamente las cantidades pagadas indebidamente, sino además, 'las que procedan de conformidad con las leyes fiscales', cuya causa es diferente de la del pago de lo indebido, se incorporó al Código Fiscal con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y tiene como propósito señalar una segunda causa para las devoluciones, distinta de la tradicional del pago de lo indebido y es la que normalmente corresponde a los impuestos trasladados. En el caso de los impuestos indirectos, los contribuyentes tienen derecho a la devolución, no únicamente por las cantidades que hipotéticamente pudieran pagar indebidamente en exceso, sino, fundamentalmente, por aquéllas que determina expresamente la Ley y que no implican pago de lo indebido sino devolución de saldos a favor. Lo anterior es así, pues la relación jurídico tributaria se establece entre el Estado y el enajenante y no con la persona que adquiere los bienes gravados con el impuesto. Es por ello

que la ley tiene el cuidado de distinguir entre el impuesto y la carga económica que se traslada. Al efecto, la ley expresamente señala que lo que se traslada no es el impuesto mismo, sino una cantidad equivalente. De lo anterior, resulta que lo que el contribuyente traslada al consumidor es un sobreprecio autorizado por el Estado y no el impuesto mismo. (14)

"Juicio No. 100(14)13/95/695/94.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 14 de octubre de 1999, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Isabel Urrutia Cárdenas.
"(Tesis aprobada en sesión privada de 14 de octubre de 1999)

"PRECEDENTE:

"IV-P-2aS-130
"Recurso de Apelación No. 100(A)-II-1297/96/148/95.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 9 de marzo de 1999, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Isabel Urrutia Cárdenas."

Por lo tanto, *es de concluirse que* ***queda desvirtuado el segundo de los motivos****, esto es, el contenido en el punto 2 del apartado de CONSIDERACIONES de la resolución impugnada,* ***en que la autoridad demandada apoya su negativa de devolución****, ya que como se ha acreditado con anterioridad, en el caso no es aplicable el artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación para limitar la vigencia de la resolución a su consulta.*

Por otro lado, es irrelevante que la contribuyente en escrito libre presentado ante la demandada hubiese manifestado que: "(...) la solicitud de devolución tenga como base legal el oficio No. 325-SAT-10-0726 (...)", pues lo cierto es que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, que establece que las disposiciones fiscales que se refieran al sujeto, objeto, base, **tasa** o

tarifa, son de aplicación estricta, y en el presente caso *efectivamente en el período de solicitud de la devolución, enero de 1996, le es aplicable a la actividad de la actora la* ***tasa*** *0% de conformidad con el artículo 2-A, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que inclusive fue materia de la sentencia emitida en el juicio No. 2351/2000-02-01-7 que obra en los archivos de esta Juzgadora, y que reviste el carácter de cosa juzgada al ser confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en la Revisión Fiscal No. 210/ 2001*.

Por todo lo anterior, al resultar fundados los argumentos de ilegalidad estudiados en este considerando, respecto de la segunda determinación de la demandada para negar a la contribuyente la devolución de impuestos que solicitó, esto es, la contenida en el punto II resolutivo de la resolución impugnada, se actualiza la causa de nulidad prevista en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, pues son ilegales los motivos y fundamentos que expresó en el punto 2 del apartado de "CONSIDERACIONES" de su resolución; sin embargo, la anterior circunstancia es insuficiente para declarar la nulidad de la resolución controvertida, toda vez que, tal y como ya se resolvió por esta Juzgadora en el considerando que antecede, la demandante con sus argumentos de ilegalidad que vierte en el primero de sus conceptos de impugnación, no logra desvirtuar la legalidad de los motivos y fundamentos expresados en el punto 1 del mencionado apartado de "CONSIDERACIONES", que llevaron a la autoridad a determinar en el punto I de sus resolutivos a negar la devolución solicitada porque prescribió el derecho de la contribuyente a solicitar el saldo a favor correspondiente al período de enero de 1996, esto es, que prescribió la obligación del Fisco Federal a efectuar esa devolución, por lo que es procedente que esta Juzgadora reconozca la validez de la resolución impugnada, pues los motivos y fundamentos que sustentan esta última determinación son independientes de los que se han considerado ilegales.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción II y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve;

PRIMERO.- La parte actora **INDUSTRIAL FORESTAL EL YAQUI, S.A. DE C.V.**, en el presente juicio No. 137/02-05-02-4, **NO PROBÓ SU PRETENSIÓN**.

SEGUNDO.- SE RECONOCE LA VALIDEZ del acto combatido, mismo que ha quedado precisado en el resultando 1° de este fallo.

TERCERO.- ***NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.***

Así lo resolvieron y firman por unanimidad los C.C. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ***Licenciados HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ***, Magistrado Instructor en el presente juicio, ***LUIS MOISÉS GARCÍA HERNÁNDEZ,*** **y** ***M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL***, Presidenta de la Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado ***JESÚS LAZALDE MARTÍNEZ***, quien con su firma autoriza. Doy Fe.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

FONDO DE AHORRO.- NO DEBE CONSIDERARSE PARA LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, AUN CUANDO SU APORTACIÓN POR LOS PATRONES Y TRABAJADORES SE EFECTÚE NO DE MANERA SEMANARIA O MENSUAL, SINO QUINCENAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, inciso b) de la Ley Federal del Trabajo, el ahorro, no se tomará en cuenta para efectos del salario base de cotización, cuando se integre por un depósito o cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; por lo que, de una correcta interpretación de ese dispositivo legal se debe entender que cuando alude a la aportación "semanaria o mensual", el legislador está haciendo una enunciación ejemplificativa pero no limitativa del periodo de pago, mismo que puede ser semanal, mensual o quincenal, pues atendiendo al texto de ese numeral, lo importante es que el ahorro se conforme por la aportación a partes iguales del porcentaje que deben depositar tanto el patrón como los trabajadores, así como que la aportación respectiva se efectúe en cada periodo de pago salarial, mismo que, válidamente puede ser semanal, quincenal o mensual, pues es claro que la naturaleza del ahorro es la misma, es decir, no cambia por el hecho de que se efectúe en forma quincenal y no de manera semanal o mensual, pues lo importante acorde a lo dispuesto por el numeral mencionado, es que la aportación tanto por el patrón y trabajador sea por una cantidad igual y que coincida con el periodo de pago del salario por parte de la empresa a favor de sus trabajadores. (36)

Juicio No. 1372/01-05-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Norte del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de junio de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Adolfo Rosales Puga.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de esta Sala Regional lo argumentado por la parte actora resulta parcialmente fundado para obtener la anulación de la resolución impugnada.

En primer lugar, a las constancias que obran en autos a folios 28 y 29 corre agregado en copia certificada el oficio número OF/XXII/02/I/B/04/1222/2000, de fecha 29 de septiembre de 2000, emitido por el Representante de la Dirección General en la Delegación Durango del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual tal autoridad dio a conocer a la hoy actora, que de la revisión que llevó a cabo a la documentación que remitió en respuesta al oficio número XXII/01/AVC/I/09/222/97 de fecha 24 de noviembre de 1997, detectó que existe una diferencia en la base para el cálculo de las aportaciones del 5% por un total de $2'000,099.80, misma que entre otros se integra por los conceptos siguientes: "Otras Remuneraciones" $3'113,677.00, "Vacaciones" $196,040.00 y "Subsidio por Enfermedad General" $43,661.00.

Ahora bien, sostiene la demandante que la resolución impugnada es ilegal, en razón de que la autoridad dentro del concepto "Otras Percepciones" para determinar la omisión en las aportaciones por el 5%, considera dos importes a saber: el correspondiente a "Premios" en cantidad de $1'355,038.00, que sí es un concepto gravable para el cálculo de las aportaciones y el relativo al "Fondo de Ahorro" en cantidad de $1'758,639.00, el cual dice, cumple con los requisitos establecidos por el artículo 143, inciso b) de la Ley Federal del Trabajo para considerarse como un concepto exento o no gravable para efectos del cálculo de las aportaciones, exhibiendo para probar su dicho copia certificada del Anexo III del dictamen que presentó para efectos del Seguro Social, el 30 de diciembre de 1994, mismo que se formuló por conta-

dor público independiente, el cual se refiere a la certificación de percepciones de trabajadores declarados para efectos del impuesto sobre la renta.

Es el caso, que al llevar a cabo el análisis de dicho Anexo III del dictamen que para efectos del Seguro Social fue presentado sobre los estados financieros de la empresa hoy actora, mismo que obra visible a folios 40 al 42 de los autos, se advierte, que efectivamente corresponde a la "Conciliación de percepciones de trabajadores contra registros contables y lo declarado para efectos del impuesto sobre la renta", en la cual aparecen los conceptos "Premios" en cantidad de $1'355,039.00 y "Fondo de Ahorro" por importe de $1'758,641.00, mismas que suman un total de $3'113,677.00, importe este último que la autoridad fiscal en el oficio número OF/XXII/02/I/B/04/1222/2000, de fecha 29 de septiembre de 2000, lo identifica bajo el concepto de "Otras Remuneraciones", de ahí que sea cierto lo que señala la demandante en el sentido de que la autoridad fiscal dentro de este concepto, para efectos del cálculo del 5% de las aportaciones que determina como omitidas, esté considerando la cantidad de $1'758,641.00, que corresponde al concepto "Fondo de Ahorro", el cual no forma parte del salario, para efectos de la cotización del 5% de las aportaciones que deben ser enteradas por los patrones ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Lo anterior es así, pues el artículo 29, fracción II de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece como obligación a cargo de los patrones la relativa a determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar su pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto; además, ese numeral en la fracción que se comenta, primer párrafo parte final, establece que en lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.

Por lo anterior, a efecto de conocer qué conceptos integran el salario base de cotización y cuáles se deben excluir, se debe atender a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 136 y 143, mismos que a la letra señalan:

"**Artículo 136.-** Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio."

"**Artículo 143.-** Para los efectos de este Capítulo el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

"a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares;

"b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales;

"c) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas;

"d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas;

"e) Los premios por asistencia;

"f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo;

"g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las empresas."

Del análisis de lo establecido por los artículos 136 y 143, inciso b) de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 29, fracción II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se desprende que para efectos del salario base de cotización ante dicho Instituto, no se debe tomar en cuenta el ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa, requisitos que a juicio de esta Juzgadora se considera satisface el concepto denominado "Fondo de Ahorro", que la autoridad demandada tomó en cuenta para efectos del salario base de cotización de las aportaciones del cinco por ciento que determinó como omitidas en la resolución impugnada.

Lo anterior es así, pues a folios 52, 53 a la 66 de los autos, corren agregadas en copia certificada, el Plan de Ahorros para el personal de Corporativo Orvin, S. A. de C. V., así como recibos de salario a nombre de diversos empleados de la empresa hoy actora, correspondientes a diversos periodos quincenales del año de 1993.

De la primera de dichas documentales, se advierte, que contiene el Plan de Ahorros para el personal de Corporativo Orvin, S. A. de C. V., que fue celebrado por la empresa hoy actora y sus trabajadores desde el 01 de marzo de 1989, el cual se constituyó en beneficio de los trabajadores, mismo que se encuentra conformado por la aportación a partes iguales del porcentaje que otorga tanto el patrón como los trabadores en proporción al 13% de su "ingreso quincenal ordinario", por otro lado, de los recibos de pago salarial mencionados, se desprende que el periodo de pago de salario que la empresa actora realiza a favor de sus trabajadores es quincenal, así como que en ellos aparece, que tanto la empresa hoy actora como cada trabajador en forma quincenal efectúan como aportación en partes iguales una cantidad similar bajo el concepto de aportación al "Fondo de Ahorro".

En esa virtud, las documentales referidas acreditan que en el caso que nos ocupa, se satisface el requisito de la igualdad en el depósito o cantidad aportada por

el patrón y trabajador exigido por el artículo 143, inciso b) de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, si bien es cierto que dicho numeral señala que el ahorro, no se tomará en cuenta para efectos del salario base de cotización, cuando se integre por un depósito o cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa, de la correcta interpretación de ese dispositivo legal se debe entender que cuando alude a la aportación "semanaria o mensual", el legislador está haciendo una enunciación ejemplificativa pero no limitativa del periodo de pago, mismo que puede ser semanal, mensual o quincenal como en la especie, pues atendiendo al texto de ese numeral, lo importante es que el ahorro se conforme por la aportación a partes iguales del porcentaje que deben depositar tanto el patrón como los trabajadores, así como que la aportación respectiva se efectúe en cada periodo de pago salarial, mismo que se insiste, válidamente puede ser semanal, quincenal o mensual, pues es claro que la naturaleza del ahorro es la misma, es decir, no cambia si se efectúa en forma quincenal; que si se hace de manera semanal o mensual, pues lo importante acorde a lo dispuesto por el artículo 143, inciso b) de la Ley invocada, es que la aportación tanto por el patrón y trabajador sea por una cantidad igual y que coincida con el periodo de pago del salario por parte de la empresa a favor de sus trabajadores.

Consecuentemente, como en la especie, el concepto denominado "Fondo de Ahorro" a que se alude, cumple con los requisitos que refiere el artículo 143, inciso b) de la Ley Federal del Trabajo, por ese motivo no resulta procedente que ese concepto se integre al salario base de cotización para efectos de las aportaciones ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que, resulta ilegal el proceder de la autoridad al tomar como base ese concepto para el cálculo de las aportaciones del cinco por ciento que determina como omitidas a cargo de la empresa actora.

Al respecto resultan aplicables los criterios sustentados por este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dicen:

"Tercera Época.
"Instancia: Segunda Sección

"R.T.F.F.: Año X. No. 116. Agosto 1997
"Tesis: III-PS-II-82
"Página: 19

"**FONDO DE AHORRO.- NO DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN.-** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, inciso b) de la Ley del Seguro Social vigente hasta 1993, el concepto de fondo de ahorro no debe considerarse como integrante del salario base de cotización, pues en primer lugar éste constituye un beneficio para los trabajadores, y en segundo término, se encuentra conformado por la aportación a partes iguales del porcentaje que otorgan tanto el patrón como los trabajadores. Por otra parte, el numeral en cuestión no establece limitación alguna en cuanto al destino que se le dé al mencionado fondo de ahorro. Por ello, es ilegal que la autoridad lo integre al salario base de cotización argumentando que de él se otorgan préstamos continuos a los trabajadores. (2)

"Recurso de Apelación No. 100(A)-II-341/96/13936/95.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 18 de marzo de 1997, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Ma. Guadalupe Aguirre Soria.- Secretaria: Lic. Ma. Eugenia Rodríguez Pavón.
"(Tesis aprobada en sesión de 15 de abril de 1997)"

"Tercera Época.
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año IV. No. 46. Octubre 1991.
"Tesis: III-TASS-2188
"Página: 21

"**INTEGRACIÓN DEL SALARIO PARA EFECTOS DE COTIZACIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- FONDO DE**

AHORRO.- No puede considerarse que forman parte integral del salario para efectos de cotización, las partidas que destina el patrón para formar un fondo de ahorro a favor de los trabajadores o sindicatos, por así determinarlo en forma expresa el artículo 32 de la Ley del Seguro Social en su inciso b), vigente en los años de 1982 y 1983, no siendo óbice para concluir lo anterior el destino de esos fondos por parte de los sindicatos, ya que la ley no hace referencia al respecto y los mismos, indudablemente constituyen una reserva que cumple un fin social en beneficio de los trabajadores para hacer frente a sus necesidades económicas. (20)

"Revisión No. 1707/87.- Resuelta en sesión de 17 de octubre de 1991, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Carlos Franco Santibáñez.- Secretario: Lic. Germán Canseco de la Fuente."

En lo que se refiere al concepto "Vacaciones" en cantidad de $196,040.00, misma que la autoridad la consideró como base de cotización para efectos del cinco por ciento de las aportaciones a cargo de la empresa actora ante el Instituto demandado, la parte actora sostiene, que éste se genera por el pago de vacaciones al personal que se retira de la empresa, por lo que se trata de una indemnización vía liquidación de los días pendientes de disfrutar a través de su liquidación, en la que se liquidan los saldos y partes proporcionales pendientes de disfrute, que por ese hecho el importe generado por ese concepto no debe considerarse como gravable para la base de las aportaciones.

Realizado el estudio de las constancias que obran en autos, se advierte, que la parte actora con su escrito de demanda exhibió copia certificada de once "Liquidaciones Definitivas" con motivo de la terminación de la relación laboral durante el año de 1993 con once de sus trabajadores, mismas que obran visibles a folios 67 al 77 de los autos del expediente en que se actúa, documentales de las cuales se desprende que con motivo del finiquito o liquidación a que cada uno de tales documentos se refiere, la empresa actora cubrió a los trabajadores liquidados de nombres: ZÚÑIGA MORENO JOSÉ OSCAR, SALAS GALLEGOS MOISÉS, RODRÍGUEZ

CASTAÑEDA SONIA LETICIA, REYES SÁNCHEZ MARÍA GUADALUPE, PESINA FUENTES PEDRO ALBERTO, MEZA MIJARES GRISELDA, MELERO OLAGUEZ MARICELA, MARTÍNEZ GARCÍA MAXIMINO, ESPINO MACHADO ALFREDO, ESPADA MARTÍNEZ GLORIA y AGUIRRE ONTIVEROS DANIEL, por concepto de indemnización importes por concepto de "vacaciones" no disfrutadas, concepto que como bien lo señala la parte actora, no deben ser considerados para efectos de la base gravable para determinar el cinco por ciento de la aportaciones que deben enterarse ante el Instituto demandado, toda vez que dicho concepto de vacaciones pagadas y no disfrutadas, como consecuencia de la terminación de la relación laboral, no tienen el carácter de ingresos regulares y periódicos, que provengan de una situación regular, sino que se trata de una situación extraordinaria, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 136 del mismo Ordenamiento legal, no forman parte del salario para los efectos del pago de las aportaciones ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por tal motivo es procedente que la autoridad fiscal demandada excluya de la base del cálculo de las aportaciones determinadas como omitidas los pagos que a dichos trabajadores realizó con motivo de la liquidación definitiva de la relación laboral, por concepto de vacaciones pagadas y no disfrutadas.

Sirven de apoyo a estas ideas, los criterios sustentados por este Tribunal Federal, que señalan:

"Segunda Época.
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año IV. Nos. 16 y 17. Tomo II. Enero - Mayo 1981.
"Tesis: II-TASS-2539
"Página: 610

"**VACACIONES PAGADAS Y NO DISFRUTADAS.- LOS INGRESOS PROVENIENTES DE ELLAS NO FORMAN PARTE DEL SALARIO PARA LOS EFECTOS DEL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRO-**

NALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- Los ingresos provenientes de vacaciones pagadas y no disfrutadas, desde el momento en que constituyen indemnizaciones, no forman parte del salario para los efectos del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que no tienen el carácter de ingresos regulares y periódicos que provengan de una situación laboral regular, sino que más bien se trata de situaciones extraordinarias, pues las vacaciones son un derecho irrenunciable establecido en la Ley Federal del Trabajo en favor precisamente de los trabajadores. Además, ni el artículo 18 de la Ley del Seguro anterior, ni el 32 de la vigente, así como tampoco los diversos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo, incluyen los ingresos provenientes del concepto antes mencionado, como integrantes del salario.

"Revisión No. 601/79.- Resuelta en sesión de 2 de febrero de 1981, por mayoría de 6 votos y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Margarita Lomelí Cerezo.- Secretario: Lic. Raúl A. Pallares Valdés."

"Segunda Época.
"Instancia: Pleno
"R.T.F.F.: Año III. No. 18. Junio 1981
"Tesis: II-TASS-2598
"Página: 33

"**VACACIONES PAGADAS Y NO DISFRUTADAS.- GRATIFICACIONES ESPECIALES.- LOS INGRESOS PROVENIENTES DE ELLAS NO FORMAN PARTE DEL SALARIO PARA EFECTOS DE COTIZACIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.-** Los ingresos provenientes de vacaciones pagadas y no disfrutadas, así como los de las gratificaciones especiales, por el hecho de constituir indemnizaciones o incentivos para el incremento de la producción, no forman parte del salario para los efectos del pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que no tienen el carácter de ingresos regulares y periódi-

cos que provengan de una situación laboral regular, sino que se trata de circunstancias extraordinarias. Además el artículo 32 de la Ley del Seguro Social vigente y 84 de la Ley Federal del Trabajo no incluyen los ingresos procedentes de los conceptos mencionados como integrantes del salario.

"Revisión No. 577/79.- Resuelta en sesión de 10 de junio de 1981, por mayoría de 5 votos y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Edmundo Plascencia Gutiérrez.- Secretario: Lic. Rafael Ibarra Gil."

Por lo que hace al concepto Subsidio por Enfermedad General en cantidad $43,661.00, la demandante señala, que éste cumple con el requisito establecido por el artículo 143 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere a la previsión social, puesto que va enfocado a elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, que por lo anterior, no debe considerarse como integrable a la base para el pago de las aportaciones.

Lo argumentado por la parte actora en tales términos con respecto al concepto Subsidio por Enfermedad, a juicio de esta Juzgadora no es suficiente para excluirla de la base gravable del salario base de cotización del cinco por ciento de las aportaciones que los patrones deben efectuar ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, acorde a lo dispuesto por el artículo 29, fracción II de la Ley de la materia, toda vez que contrario al dicho de la demandante, el hecho de que ese concepto reúna el requisito de previsión social de elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, como así lo sostiene, esa circunstancia conforme a lo establecido por el artículo 143 de la Ley Federal del Trabajo, no determina que su importe no se tome en cuenta como integrante de la base gravable para el pago de las aportaciones mencionadas, en razón de que dicho numeral no establece que para efectos de la integración del salario a que el mismo se refiere, no deban tomarse en cuenta los "conceptos" que reúnan requisitos necesarios para ser considerados bajo el concepto "previsión social" en términos de los artículos 24, fracción XII y 77, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de ahí que la pretensión de la enjuiciante carezca de eficacia en lo que se refiere a tal concepto de Subsidio de

Enfermedad General, pues con sus argumentos no logra desvirtuar la presunción de legalidad de que goza la resolución combatida acorde a lo señalado por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación.

No es óbice para llegar a concluir lo hasta aquí señalado, lo manifestado por la autoridad en su contestación en el sentido de que por el hecho de que la empresa actora no hizo aclaraciones ni exhibió pruebas ante la propia autoridad demandada, que desvirtuaran las omisiones que se le dieron a conocer a través del oficio de observaciones número XXII/02/I/B/04/1222/2000 de fecha 29 de septiembre del 2000, ya que en el plazo de veinte días siguientes a la notificación de tal oficio, que para ese efecto se otorgó a la contribuyente en términos del artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación, no hizo aclaraciones ni ofreció prueba alguna, por lo que sostiene que no deben ser valoradas las pruebas que ante este Tribunal ofreció la parte actora en apoyó de sus razonamientos.

En efecto, carece de eficacia jurídica lo argumentado por la autoridad en su contestación de demanda en esos términos, pues acorde a lo establecido por el artículo 48, fracción VI, segundo párrafo del Código Tributario Federal, el hecho de que el contribuyente revisado dentro del plazo legal de veinte días a que alude ese numeral en su fracción VI, no formule aclaraciones ni presente en la fase oficiosa pruebas que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, la consecuencia legal únicamente es la de tener por consentidos los hechos u omisiones respectivos, como así lo señala el segundo párrafo de la fracción y precepto en cita; lo que no impide que una vez emitida la resolución por la que la autoridad en ejercicio de sus facultades determine la situación fiscal del contribuyente, éste la impugne en juicio contencioso administrativo, y en su caso, ofrezca y rinda pruebas con el fin de desvirtuar la legalidad del acto de autoridad, toda vez que la presunción de legalidad atribuible a ese acto administrativo en términos del artículo 68 del Código de la materia, admite prueba en contrario, por lo cual el demandante en ejercicio del derecho otorgado a su favor por el artículo 209, fracción VII del Código en mención, en su escrito de demanda válidamente ofreció las pruebas de su intención, mismas que esta Juzgadora está obligada a valorar en cumplimiento de lo seña-

lado por los artículos 234 y 237 del Ordenamiento legal en cita, de ahí lo inatendible de la pretensión de la demandada.

En las relacionadas consideraciones, al haber resultado ilegal el proceder de la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada al tomar en cuenta indebidamente para efectos de la base gravable de cotización del cinco por ciento de las aportaciones ante el Instituto demandado, el concepto "Fondo de Ahorro", mismo que por las consideraciones expuestas debe ser excluido; además, al considerar para los mismos efectos dentro del concepto "Vacaciones" en cantidad de $ 196,040.00, el importe correspondiente a vacaciones pagadas y no disfrutadas que por concepto de indemnización la empresa actora cubrió a los once trabajadores mencionados, que fueron liquidados durante el transcurso del año de 1993, como así quedó demostrado en autos, entonces, lo procedente es que se declare la nulidad de la resolución impugnada por no satisfacer los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, lo que actualiza la causal de ilegalidad regulada por el artículo 238, fracción II del propio Ordenamiento legal, para el efecto de que si la autoridad lo estima conveniente y se encuentre en posibilidad legal de hacerlo emita un nuevo acto administrativo que cumpla con los requisitos de la debida fundamentación y motivación.

(...)

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 236, 237, 238, fracción II y 239, fracción III del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve;

PRIMERO.- La parte actora **CORPORATIVO ORVIN, S.A. DE C.V.**, en este juicio No. 1372/01-05-02-1, **probó parcialmente su acción**, en consecuencia;

SEGUNDO.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL PRESENTE JUICIO, precisada en el resultando 1º de

este fallo, **para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero y cuarto que anteceden;**

TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman, los C.C. Magistrados que integran la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ***Licenciado HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ***, Instructor en el presente juicio, ***M.D.F. NORA ELIZABETH URBY GENEL***, Presidenta de esta Sala y **LUIS MOISÉS GARCÍA HERNÁNDEZ**, ante el C. Secretario de Acuerdos **Licenciado ADOLFO ROSALES PUGA**, quién con su firma autoriza.

TERCERA PARTE

ACUERDOS GENERALES

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/1/2003

ADSCRIPCIÓN DEL MAGISTRADO LUIS MALPICA DE LAMADRID

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 15 y 16, fracción IX y 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y toda vez que el Presidente de la República tuvo a bien ratificar el nombramiento de Magistrado de Sala Superior en favor del Doctor Luis Malpica de Lamadrid, nombramiento que fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en sesión de fecha doce de diciembre de dos mil dos, se acuerda que a partir de esta fecha quede adscrito en la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día seis de enero de dos mil tres.- Firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Lic. Ma. del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior, quien, con fundamento en el artículo 37, fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/2/2003

ADSCRIPCIÓN DEL MAGISTRADO LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIÉRREZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 15 y 16, fracción IX y 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en cumplimiento al acuerdo de fecha doce de diciembre de dos mil dos, dictado por el Séptimo Juzgado de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo número 1627/2002, a través del cual se otorgó la suspensión provisional de los actos del ejecutivo federal tendientes a no ratificar el nombramiento de Magistrado de Sala Superior del Doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, se acuerda que continúe adscrito en la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día seis de enero de dos mil tres.- Firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Lic. Ma. del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior, quien, con fundamento en el artículo 37, fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/3/2003

CALENDARIO DE SUSPENSIÓN DE LABORES PARA EL AÑO 2003

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se declaran inhábiles los días que se indican a continuación:

ENERO	Miércoles 1°
FEBRERO	Miércoles 5
MARZO	Viernes 21
ABRIL	Miércoles 16, Jueves 17 y Viernes 18
MAYO	Jueves 1°, Viernes 2 y Lunes 5
JULIO	Del Miércoles 16 al Jueves 31 (Primer período vacacional)
AGOSTO	Viernes 1° y Miércoles 27 (Día del empleado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa)
SEPTIEMBRE	Lunes 15 y Martes 16
NOVIEMBRE	Jueves 20 y Viernes 21
DICIEMBRE	Lunes 15 al Miércoles 31 (Segundo período vacacional)

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día seis de enero de dos mil tres, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Lic. Ma. del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior, quien, con fundamento en el artículo 37, fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/4/2003

DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS VISITADORES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 16, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se designa a los Magistrados visitadores de las Salas Regionales, como se indican a continuación:

M E T R O P O L I T A N A S

PRIMERA SALA	MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA
SEGUNDA SALA	MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES
TERCERA SALA	MAG. GUILLERMO DOMÍNGUEZ BELLOC
CUARTA SALA	MAG. MARÍA DEL CONSUELO VILLALOBOS ORTÍZ
QUINTA SALA	MAG. MANUEL LUCIANO HALLIVIS PELAYO
SEXTA SALA	MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
SÉPTIMA SALA	MAG. SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA
OCTAVA SALA	MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOVENA SALA	MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DÉCIMA SALA	MAG. LUIS MALPICA DE LAMADRID
DÉCIMO PRIMERA SALA	MAG. LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIÉRREZ

F O R Á N E A S

SALA REGIONAL DEL NOROESTE I	MAG. LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIÉRREZ
SALA REGIONAL DEL NOROESTE II	MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
SALA REGIONAL DEL NOROESTE III	MAG. GUILLERMO DOMÍNGUEZ BELLOC
SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO I	MAG. MANUEL LUCIANO HALLIVIS PELAYO
PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II	MAG. MARÍA DEL CONSUELO VILLALOBOS ORTÍZ
SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II	MAG. MARÍA DEL CONSUELO VILLALOBOS ORTÍZ
PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE	MAG. ALMA PERALTA DI GREGORIO
SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORESTE	MAG. ALMA PERALTA DI GREGORIO
PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE	MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES
SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE	MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

SALA REGIONAL DEL CENTRO I	MAG. SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA
SALA REGIONAL DEL CENTRO II	MAG. LUIS MALPICA DE LAMADRID
SALA REGIONAL DEL CENTRO III	MAG. SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA
PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO	MAG. MARÍA GUADALUPE AGUIRRE SORIA
SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO	MAG. MARÍA GUADALUPE AGUIRRE SORIA
TERCERA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO	MAG. MARÍA GUADALUPE AGUIRRE SORIA
PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE	MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA
SEGUNDA SALA REGIONAL DE ORIENTE	MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA
SALA REGIONAL DEL GOLFO	MAG. GUILLERMO DOMÍNGUEZ BELLOC
SALA REGIONAL DEL PACÍFICO	MAG. LUIS MALPICA DE LAMADRID
SALA REGIONAL DEL SURESTE	MAG. MANUEL LUCIANO HALLIVIS PELAYO

SALA REGIONAL PENINSULAR	MAG. LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIÉRREZ
SALA REGIONAL DEL GOLFO NORTE	MAG. ALMA PERALTA DI GREGORIO

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día seis de enero de dos mil tres.-Firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Lic. Ma. del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior, quien, con fundamento en el artículo 37, fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/5/2003

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 16, fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se forman e integran las comisiones que a continuación se señalan:

1. COMISIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD, integrada por los Magistrados Luis Carballo Balvanera y Jorge Alberto García Cáceres.

2. COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y CARRERA JURISDICCIONAL, integrada por las Magistradas María del Consuelo Villalobos Ortíz y Silvia Eugenia Díaz Vega.

3. COMISIÓN DE ESTUDIOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL, integrada por los Magistrados Alma Peralta Di Gregorio y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.

4. COMISIÓN DE SUPERVISIÓN Y ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, integrada por los Magistrados María Guadalupe Aguirre Soria y Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

5. COMISIÓN DE ASUNTOS EDITORIALES Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, integrada por los Magistrados Luis Malpica de Lamadrid y Guillermo Domínguez Belloc.

6. COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, integrada por los Magistrados María del Consuelo Villalobos Ortíz y Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

7. COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados Alma Peralta Di Gregorio, Luis Carballo Balvanera y María Guadalupe Aguirre Soria.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día seis de enero de dos mil tres.- Firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Lic. Ma. del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior, quien, con fundamento en el artículo 37, fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/6/2003

ADSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 15, 16, fracción IX y 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y toda vez que el Presidente de la República tuvo a bien ratificar el nombramiento de catorce Magistrados de Sala Regional, los cuales fueron aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en sesión de fecha doce de diciembre de dos mil dos, se acordó su adscripción en la forma que a continuación se indica, sin que ello obste para que se les pueda cambiar al iniciar actividades las Salas Regionales de Chiapas-Tabasco y del Caribe.

Primera Sala Regional Metropolitana	Mag. María Beatriz Alicia Zentella Mayer
Segunda Sala Regional Metropolitana	Mag. Armando Flores Hernández
Segunda Sala Regional Metropolitana	Mag. Lucila Padilla López
Cuarta Sala Regional Metropolitana	Mag. Martha Gladys Calderón Martínez
Quinta Sala Regional Metropolitana	Mag. Julián Casarrubias Pérez
Segunda Sala Regional Hidalgo México	Mag. Avelino C. Toscano Toscano
Tercera Sala Regional Hidalgo México	Mag. Rosa María Corripio Moreno

Sala Regional del Centro II	Mag. Rita Amparo Velasco de León
Sala Regional del Pacífico	Mag. María Guadalupe Herrera Calderón
Primera Sala Regional del Noreste	Mag. Jorge A. Castañeda González
Primera Sala Regional del Noreste	Mag. Adriana Cabezut Uribe
Segunda Sala Regional del Norte Centro II	Mag. Nora Elizabeth Urby Genel
Sala Regional Peninsular	Mag. Faustino Gerardo Hidalgo Esquerra
Sala Regional del Sureste	Mag. Analicia Vega León

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día seis de enero de dos mil tres.- Firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Lic. Ma. del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior, quien, con fundamento en el artículo 37, fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, da fe.

SALA SUPERIOR
PRIMERA SECCIÓN
ACUERDO G/S1-1/2003

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA PRIMERA SECCIÓN PARA EL PERIODO DE 2003

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 19 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Primera Sección de la Sala Superior designó como Presidenta de la misma a la Magistrada MARÍA DEL CONSUELO VILLALOBOS ORTÍZ, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil tres.

Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada celebrada el día siete de enero de dos mil tres.- Firman, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 37, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta de la Primera Sección, y la Licenciada María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/1/2003

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SECCIÓN PARA EL PERIODO DE 2003

En la sesión privada celebrada el día siete de enero de dos mil tres, los Magistrados integrantes de la Segunda Sección, de la Sala Superior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 19 y 21 primer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acordaron designar como Presidente de la misma al Magistrado Luis Carballo Balvanera, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil tres.

Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

CUARTA PARTE

JURISPRUDENCIA Y TESIS
DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

JURISPRUDENCIAS

PRIMERA SALA

ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. (1a./J. 42/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 5

IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA

INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO.- Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, y acorde con el criterio firme sustentado por este Alto Tribunal, el acto reclamado debe apreciarse tal y como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, en los juicios de garantías en la vía directa o en revisión no pueden ser admitidas ni valoradas pruebas que no se hayan aportado ante esa autoridad, puesto que las situaciones concretas que le fueron planteadas como acto reclamado podrían ser modificadas o cambiadas, también lo es que esta restricción únicamente debe tener aplicación cuando se trata de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues no puede ni debe hacerse extensiva a aquellos medios de convicción tendientes a acreditar la actualización de alguna causal de improcedencia del juicio, toda vez que su estudio, además de ser de oficio, según lo prevé el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, impide que al actualizarse se examine el fondo del asunto, lo que ocasiona que no se vierta pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En este sentido, se concluye que en esas vías judiciales (amparo directo o en revisión), es factible que se admitan y valoren pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello signifique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, ya que, al no sufrir variación alguna la materia del acto reclamado, existe impedimento técnico jurídico para poder emitir pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, salvo en los casos en que la causal de que se trate haya sido motivo de pronunciamiento en la resolución de primera instancia del juicio de garantías y no se hubiere combatido ese aspecto en la revisión. (1a./J. 40/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 126

SEGUNDA SALA

ORDEN DE VISITA. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER, TRATÁNDOSE DE UNA DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE

NATURALEZA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL Y 18 DEL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todo acto de molestia que se dirija al gobernado debe cumplir con los requisitos que al efecto establece dicho numeral, así como con los que consignan las leyes respectivas, en el supuesto examinado, los que prevé el artículo 18 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal; por ende, la orden de verificación administrativa de naturaleza extraordinaria, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) que conste por escrito; b) que sea emitida por autoridad competente, debiendo expresar el cargo y nombre y contener la firma autógrafa de quien la expida; c) que se funde y motive la causa legal del procedimiento; d) que exprese el lugar o lugares en donde deba efectuarse la visita; e) que precise el nombre, denominación o razón social de la persona o personas a las cuales se dirige; f) que se sujete a lo dispuesto por las leyes respectivas; g) que señale el nombre de la persona o personas que deban efectuarla y el número de su credencial; h) que indique el lugar y fecha de expedición de la orden; i) que cite el número del expediente que le corresponda; j) que establezca el objeto y alcance de la misma; k) que precise el número telefónico del sistema a que se refiere el artículo 9o. del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal y, por último, m) que señale la autoridad a la cual se puede dirigir el visitado para formular quejas sobre la visita de verificación, especificando el domicilio de ella. Por tanto, si en una orden de visita de verificación extraordinaria se omite señalar alguno de esos datos resulta violatoria de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República, toda vez que el cumplimiento de esos requisitos no es discrecional. Sin embargo, debe inferirse que esa regla general tiene como supuesto que se trate de negociaciones que funcionan regularmente, es decir, que cuentan con licencia y hubieren presentado su declaración de apertura, pues de lo contrario sería imposible para la autoridad contar con los datos relativos al nombre del propietario de la negociación que se pretenda visitar o del representante legal, si es una persona moral, lo que justifica que, en esos casos, sí pueda dirigirse la orden al propietario, poseedor, representante legal

y/o encargado del inmueble visitado, ya que de estimar lo contrario, se haría nugatoria la facultad de la autoridad para revisar este tipo de lugares. (2a./J. 103/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2a. Sala, septiembre 2002, p. 269

VISITA DOMICILIARIA. SI LA AUTORIDAD OMITE ESPECIFICAR QUE EL CITATORIO ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DICHA OMISIÓN SE SUBSANA SI LA DILIGENCIA RESPECTIVA SE LLEVA A CABO, CON EL VISITADO O SU REPRESENTANTE LEGAL.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 92/2000, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 326, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.", que en los casos de visita en el domicilio fiscal, es requisito de legalidad del citatorio que en él se especifique que es para recibir la orden respectiva, toda vez que la intención del legislador fue la de que el contribuyente visitado tenga conocimiento cierto de que se realizará una visita en su domicilio fiscal, finalidad que se logra mediante la especificación en el citatorio del tipo de diligencia administrativa para la cual se le cita y, si lo estima conveniente, esté presente para su práctica, pues la visita implica una intromisión al domicilio del particular que sólo puede realizarse mediante el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional. En congruencia con el criterio antes expuesto y de conformidad con el artículo 44, fracción II, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, se concluye que como el citatorio tiene por objeto que el visitado o su representante legal esperen a los visitadores a hora fija del día hábil siguiente para entender con ellos la diligencia respectiva y que se les entregue la orden de visita, la omisión en que incurre la autoridad al no asentar en dicho citatorio el objeto de la cita, se subsana

si la diligencia se entiende con el visitado o su representante legal pues al llevarse a cabo ésta en su presencia, no se les causa perjuicio jurídico alguno ni se les deja en estado de indefensión. En cambio cuando la diligencia no se entiende en la forma indicada, la omisión no puede ser subsanada ni convalidada y produce la ilegalidad del citatorio y del procedimiento que de él derive. (2a./J. 100/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2a. Sala, septiembre 2002, p. 307

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EL SUBPROCURADOR DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.- De la lectura de los artículos 104, fracción I-B, constitucional y 248 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el legislador, con el fin de restringir la procedencia del recurso, la limitó en contra de las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, las cuales podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, siempre que se encuentren dentro de los supuestos que prevé el último precepto citado y que en los casos que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del órgano encargado de su defensa; por tanto, si quien lo interpone es el subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, éste no está legitimado para tal efecto, ya que tan solo es el encargado de la defensa jurídica del Distrito Federal, por lo que resulta improcedente el recurso de revisión que interponga en asuntos de la Federación. (I.6o.A. J/8)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 6o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1295

TESIS

PRIMERA SALA

AMPARO DIRECTO. CUANDO EN UNA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN UN JUICIO ANTERIOR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA, ES VÁLIDO QUE EN UNO POSTERIOR LA PARTE QUEJOSA ESTÉ EN APTITUD DE PLANTEAR, RESPECTO DEL MISMO PRECEPTO, DICHA INCONSTITUCIONALIDAD.- Cuando en la ejecutoria que se dicte en un juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito omite el estudio de la inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto legal, por considerar que en la sentencia reclamada debió valorarse una prueba que resulta determinante para ubicar a la parte quejosa en el supuesto de la norma y concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable llevara a cabo dicha valoración, es válido que en un posterior juicio de amparo uniinstancial la parte quejosa esté en aptitud de plantear la inconstitucionalidad de la misma hipótesis normativa, de haberle sido aplicada en la nueva resolución, por lo que el Tribunal Colegiado deberá pronunciarse al respecto, sin importar que en contra de la primera ejecutoria no se haya interpuesto recurso de revisión, pues con ello no hubiera podido alcanzar mayor beneficio, toda vez que la concesión otorgada incidiría en un medio probatorio cuya valoración determinaría si el precepto legal era o no aplicable al gobernado. (1a. LXX/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 251

COMERCIO EXTERIOR. LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LEGISLAR OTORGADAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, INCLUYEN NO SÓLO LAS RELATIVAS A LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR, DISMINUIR O SUPRIMIR LAS CUOTAS DE LAS TARIFAS

DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, Y DE CREAR OTRAS, SINO TAMBIÉN LA FACULTAD PARA DEROGARLAS.- Cuando la Ley Fundamental otorga ciertas facultades al presidente de la República para alcanzar una finalidad determinada, esas facultades incluyen el uso de medios adecuados para alcanzar ese fin, siempre y cuando éstos no estén legalmente prohibidos, sino que se adapten al espíritu de la propia Constitución y de las leyes. En congruencia con lo anterior, es indudable que el hecho de que el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señale que el Congreso de la Unión podrá facultar al Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, pero no incluya el término "derogar", ello no significa que el Ejecutivo Federal no lo pueda hacer, toda vez que del contenido de los antecedentes legislativos que dieron origen a su reforma, se advierte que la intención del legislador federal al otorgar esa facultad al presidente de la República fue para que, con la adición propuesta al texto constitucional, el sistema fiscal diera plena realización a los principios de elasticidad y suficiencia en la imposición, de manera que el Estado estuviera en la posibilidad, tanto material como jurídica, de adecuar o alterar los aranceles en atención a las necesidades económicas imperantes en el país en un momento determinado; esto es, se le facultó a fin de regular el comercio exterior, la economía, la estabilidad de la producción nacional, así como cumplir cualquier otro propósito en beneficio del país. Además, como entre las acepciones del término modificar están la de alterar, variar y derogar, es evidente que al otorgarse la facultad al presidente de la República para legislar en materia de comercio exterior y, por ende, de poder modificar o alterar las tarifas y cuotas correspondientes, dicha alteración o modificación conlleva a que también se puedan derogar las disposiciones contenidas en la ley expedida por el Congreso de la Unión, pues éstas no tienen una fuerza obligatoria ineludible para el legislador, quien en otra ley o decreto, puede apartarse de aquélla, ya sea al derogarla tácita o expresamente, o bien, al establecer excepciones. (1a. LXVII/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 251

FUSIÓN DE SOCIEDADES. EL ARTÍCULO 55, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A DISMINUIR PÉRDIDAS FISCALES ES PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE Y NO PUEDE SER TRANSMITIDO NI COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- En virtud de que la fusión de sociedades consiste en la celebración de un contrato mercantil en donde la sociedad fusionada pierde su personalidad y la sociedad fusionante subsiste con un solo patrimonio, lo que la convierte en el sujeto pasivo de la obligación tributaria, para los efectos del impuesto sobre la renta, al constituir este único patrimonio la base imponible frente a la ley, y toda vez que de conformidad con el artículo 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el derecho a disminuir pérdidas es personal del contribuyente y no puede ser transmitido ni como consecuencia de la fusión, ya que no se pueden separar las pérdidas o ganancias, pues al final del ejercicio fiscal la empresa fusionante, en su declaración fiscal del impuesto sobre la renta que presenta, determina el impuesto que le corresponde pagar conforme a las deducciones permitidas por la ley, pero respecto de un mismo patrimonio, se concluye que el hecho de que a través de la fusión renuncien las sociedades fusionadas al derecho individual de deducir pérdidas no viola el principio de proporcionalidad tributaria, consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la empresa fusionante, como persona moral independiente, también podrá hacer las deducciones que le permita la ley de manera personal, la cual deberá pagar el mismo impuesto que le corresponda de manera proporcional. (1a. LVIII/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 256

FUSIÓN DE SOCIEDADES. EL ARTÍCULO 55, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL

PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A DISMINUIR PÉRDIDAS FISCALES ES PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE Y NO PUEDE SER TRANSMITIDO NI COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- De lo dispuesto en el artículo 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende una no deducción para el sujeto pasivo de la contribución tratándose de la fusión de sociedades, lo que implica que las personas morales que hayan optado por la celebración de este contrato mercantil renuncian al derecho individual de deducir pérdidas personales, pues al constituir un solo ente jurídico en la empresa fusionante, ésta será quien podrá hacer las referidas deducciones. Acorde con lo anterior, es indudable que la hipótesis normativa de referencia no viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que, por un lado, los órganos legislativos no están obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES." y, por otro, porque el propio Código Fiscal de la Federación contempla recursos administrativos y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales pueden hacerse valer en contra de las determinaciones emitidas por las autoridades hacendarias; además de que el aludido último párrafo del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no puede prever de forma aislada la citada garantía constitucional, para evitar un acto de privación por parte de la autoridad administrativa, pues se trata de una norma de carácter sustantivo y no procesal. (1a. LIX/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 256

LEYES EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. SU REFORMA POR EL PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA, EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, NO ESTÁ PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 72, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Si se toma en consideración que de lo dispuesto en el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende exigencia alguna en el sentido de que la reforma, adición, modificación o derogación de una ley provenga del mismo órgano que la creó, ni que para ello deban observarse los mismos trámites que en el caso particular se hayan observado para su expedición, sino que aquéllas se realicen conforme al procedimiento que establece el propio ordenamiento fundamental para la creación de normas legales por parte de los órganos autorizados, según se actualicen los supuestos que aquélla prevé, se llega a la conclusión de que el mencionado precepto constitucional tampoco prohíbe que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión puedan ser reformadas por el presidente de la República en uso de sus facultades extraordinarias, a través del procedimiento ordinario previsto en dicho numeral, siempre que se esté en los supuestos y mediante la observancia de las formalidades contenidas en los artículos 49 y 131 de la propia Constitución, en materia de comercio exterior. (1a. LXVI/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 259

RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, AL PREVER QUE PARA QUE SEAN DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS ORIGINADAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR, SE REQUIERE QUE ESA OPERACIÓN SE HAYA EFECTUADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, CONSTITUYE UNA NORMA DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 55/97, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y

HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", sostuvo el criterio de que cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Atento lo anterior, el párrafo primero de la fracción XVIII del numeral citado que establece que no serán deducibles las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o.-A de esa ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, constituye una norma de naturaleza heteroaplicativa, en tanto que para su impugnación se requiere de un acto concreto de aplicación, consistente en que el contribuyente solicite a la autoridad fiscal la autorización correspondiente para deducir las pérdidas originadas por la enajenación de acciones y otros títulos valor. (1a. LXII/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 264

RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, AL PREVER QUE PARA QUE SEAN DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS ORIGINADAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR, SE REQUIERE QUE ESA OPERACIÓN SE HAYA EFECTUADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el respeto a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que la carga

impositiva esté prevista en una ley para evitar la arbitrariedad de las autoridades exactoras en la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad a cada caso concreto, por lo que es facultad exclusiva del legislador y no de otro órgano, precisar tales elementos. En ese sentido se concluye que al establecer el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que para que sean deducibles las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 7o.-A del ordenamiento citado, se requiere que su adquisición y enajenación se haya efectuado conforme a los lineamientos previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, transgrede la citada garantía constitucional de legalidad tributaria, en virtud de que delega en dicha secretaría la facultad de establecer los supuestos en los cuales opera la mencionada deducción de las pérdidas fiscales, elemento esencial de la base gravable del impuesto sobre la renta, el cual únicamente puede ser fijado por un acto formal y materialmente legislativo. (1a. LVI/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1a. Sala, septiembre 2002, p. 265

SEGUNDA SALA

INGRESOS. EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PERMITE SU DETERMINACIÓN PRESUNTIVA NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos o valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Por tanto, si el particular no prueba en contra de dicha presunción se entiende que esos depósitos representan un ingreso o el valor de los actos o actividades por los cuales se deben pagar contribuciones conforme a las disposiciones rela-

tivas, lo que pone de manifiesto que en esos supuestos derivados de la determinación presuntiva que realiza la autoridad, se atiende a la capacidad contributiva del sujeto pasivo y que, por ende, el citado precepto no viola la garantía de proporcionalidad establecida en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2a. CXIV/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2a. Sala, septiembre 2002, p. 347

NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SE PRESUMEN VÁLIDAS POR LO QUE PARA DESTRUIR TAL PRESUNCIÓN DEBE PROMOVERSE INCIDENTE DE NULIDAD.- Cuando en autos obra constancia de notificación a la autoridad responsable en un domicilio oficial e, incluso, el sello de acuse que prueba la recepción del oficio notificatorio, se actualiza la presunción fundada de que aquélla fue realizada conforme a derecho, siempre y cuando no haya sido controvertida mediante incidente de nulidad de notificaciones y anulada por la autoridad judicial federal en términos del artículo 32 de la Ley de Amparo, pues la constancia actuarial de notificación es un documento público de eficacia plena, en razón de que las diligencias realizadas por los actuarios gozan de fe pública y tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, a menos que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario, en el incidente correspondiente. (2a. CIX/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2a. Sala, septiembre 2002, p. 348

RENTA. EL PAGO DEFINITIVO DEL TRIBUTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SOBRE EL MONTO DE LO QUE EL PATRÓN DISPONE DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.- La creación o incremento de re-

servas para fondos de pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad constituye uno de los conceptos que, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, autorizan al contribuyente a deducir esta prestación por constituir un gasto de previsión social que, como tal, debe destinarse al fin para el cual se constituyó; excepcionalmente, la disposición mencionada contempla la posibilidad de que el patrón disponga del fondo o de sus rendimientos para un fin diverso al creado, pero en tal caso debe pagar sobre ese monto el tributo correspondiente que por la remisión al artículo 10 de la ley debe ser a la tasa del 35%. Esta disposición no viola el principio de proporcionalidad tributaria, si se toma en consideración que el sistema previsto en la ley exige que los bienes que formen el fondo así como los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversión, deben afectarse en fideicomiso irrevocable o ser manejados por instituciones, por sociedades mutualistas de seguros o por casas de bolsa, de conformidad con las reglas generales que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que implica que el numerario afecto al fondo constituido por las reservas o los rendimientos, queda excluido del patrimonio del contribuyente en beneficio de sus trabajadores para el otorgamiento de las prestaciones de previsión social ya enumeradas, condiciones bajo las cuales se permite al contribuyente deducir en la declaración anual correspondiente la cantidad que destinó para constituir el fondo, por todo lo cual está plenamente justificado el pago definitivo del impuesto cuando dicho fondo o sus rendimientos son utilizados para un fin diverso de su destino, ya que ese ingreso no proviene de la actividad preponderante de la persona moral, dado que la posibilidad de acumulación contemplada en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta debe entenderse referida a los ingresos provenientes de dicha actividad. En consecuencia, sería contrario al principio de proporcionalidad que el tributo que debe pagar por la disposición excepcional que haga de tales recursos se considerara como pago provisional, pues no hay justificación legal que autorice la obtención de un doble beneficio fiscal: el primero derivado de la deducción autorizada por la ley al crearse la reserva del fondo para luego, considerar el ingreso derivado del retiro de ese fondo como un ingreso susceptible de acumular en la declaración anual y compensarlo al determinar el resultado fiscal. (2a. CXII/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2a. Sala, septiembre 2002, p. 349

RENTA. LOS ARTÍCULOS 31 Y CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL LIMITAR ÚNICAMENTE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO, LA OPCIÓN DE DEDUCIR LAS EROGACIONES ESTIMADAS RELATIVAS A LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Los numerales citados establecen que los contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de tiempo compartido, podrán deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de esas obras o de la prestación del servicio, en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de ellas, señalando el procedimiento que debe seguirse para determinar tales erogaciones; y que esa opción sólo podrá ejercerse por las obras o por la prestación del servicio turístico de tiempo compartido que se inicien a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete, así como que los contribuyentes que hubieren optado por la aplicación del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, podrán continuar ejerciendo dicha opción hasta el ejercicio en que terminen de acumular los ingresos derivados de las obras o de la prestación de los servicios por las que hubieran ejercido la opción citada; al establecer lo anterior, dichos preceptos violan el principio de equidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, tratándose de la prestación de servicios, limitan el ejercicio de la opción de deducir las erogaciones relativas a los costos directos e indirectos causados por dicha prestación, únicamente a los prestadores de servicios turísticos del sistema de tiempo compartido, excluyendo a los contribuyentes que prestan otro tipo de servicios a futuro, sin que exista una justificación válida para ello; es decir, discriminan arbitrariamente entre situaciones jurídicas objetivamente iguales. (2a. CXV/2002)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2a. Sala, septiembre 2002, p. 350

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA DEL ACTO DE REQUERIMIENTO PREVIO A SU CALIFICACIÓN.- De lo dispuesto en los artículos 144 y 145 del Código Fiscal de la Federación es posible distinguir el procedimiento administrativo de ejecución de las actuaciones relativas a la suspensión de dicho procedimiento, en atención a que mientras el primero se integra por el conjunto de actos que se realizan en el tiempo y por medio de los cuales se pretende la obtención, en la vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor, el procedimiento de suspensión se inicia con la solicitud del contribuyente, continúa, en su caso, con el requerimiento que la autoridad formule para encontrarse en posibilidad de resolver a ese respecto y culmina con la resolución que conceda o niegue la suspensión solicitada, según se haya satisfecho o no la garantía del interés fiscal. Por ende, el acto de requerimiento previo a la calificación de la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución no forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que no constituye una de las etapas del cobro coactivo realizado por la autoridad recaudadora, sino una actuación autónoma y desligada de la finalidad de dicho procedimiento, lo cual genera que no se encuentre comprendida dentro del inciso b) de la fracción II del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, que prevé las hipótesis de procedencia del recurso de revocación. (I.1o.A.69 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1er. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1458

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN IV, PÁRRA-

FO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El artículo 67, fracción IV, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación establece que el plazo para la extinción de las facultades de las autoridades fiscales queda suspendido, entre otros supuestos "cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio". Asimismo, el diverso 239, fracción IV, párrafo segundo, del citado ordenamiento jurídico señala que cuando la sentencia fiscal obligue a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento, debe emitir la resolución definitiva en el plazo de cuatro meses, aun cuando hubiera transcurrido el plazo para que operara la caducidad. De la interpretación de esta última disposición se advierte que la intención del legislador consiste en dar oportunidad a la autoridad de emitir la nueva resolución, aunque hubieran transcurrido los cinco años previstos en el citado artículo 67, siempre y cuando el nuevo acto se pronuncie dentro de los cuatro meses a que se refiere el aludido numeral 239; de lo contrario, transcurridos los cuatro meses sin haberse pronunciado la nueva resolución, se da por concluido el periodo de suspensión del plazo para que operara la caducidad, lo cual significa continuar con el cómputo que había iniciado con anterioridad a la interposición del recurso administrativo o juicio. (I.2o.A.30 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1339

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PRESUPUESTOS O CONDICIONES PARA DECLARARLA DE OFICIO, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Conforme al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte o de oficio, en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución. Así, la institución de la caducidad del procedimiento administrativo que regula el citado

precepto legal requiere de los siguientes presupuestos esenciales: a) Se trate de un procedimiento que de oficio inició la autoridad administrativa; y, b) Haya transcurrido el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del término del que gozaba la autoridad para dictar la resolución correspondiente; esto es, existen dos periodos o momentos diferentes que deben consumarse para que opere la caducidad, como son, un primer momento, que se refiere al término de gracia que la ley federal correspondiente otorga a las autoridades administrativas federales para dictar su resolución (término que no es conceptuable para efectos de caducidad del procedimiento como inactividad); y, una vez fenecido este término, eventualmente puede actualizarse un segundo lapso, éste sí considerado como inactividad procesal, pues carece de justificación, por lo que de extenderse este término a treinta días o más, trae como consecuencia que se configure la caducidad del procedimiento. De lo antes expuesto, se advierte que de actualizarse los citados presupuestos, es que las autoridades administrativas se encuentran obligadas a declarar de oficio la caducidad, sin que sea necesario que las partes lo soliciten, toda vez que, por un lado, el precepto en estudio es claro al establecer que los procedimientos caducarán de oficio y, además, la razón de ser de la caducidad es dar certeza jurídica y puntualizar la eficacia de un procedimiento en cuanto al tiempo para no dejar abierta la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino, por el contrario, observen y atiendan puntualmente las reglas que establecen cuando nace y cuando concluye una facultad, para no generar incertidumbre y arbitrariedad. (I.4o.A.369 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 4o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1340

FIANZAS. EXCEPCIONES QUE PUEDEN OPONER LAS INSTITUCIONES AFIANZADORAS CUANDO SE TRATA DE HACERLAS EFECTIVAS.- Conforme a los artículos 94, fracción VIII, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 2812 del Código Civil Federal, las instituciones afianzadoras pueden oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal garantizada, salvo las personales. Esto implica que todo lo concerniente a la exigibilidad de la fianza, que es un contrato accesorio de la obligación principal, puede ser controver-

tido por las afianzadoras, pero no que éstas puedan hacer valer cuestiones relacionadas con la obligación principal, pues de admitirse que pueden hacerlo, se les estaría legitimando indebidamente porque su conducta no se encuentra regida por el contrato entre las partes (cuyo cumplimiento garantiza la fianza) y menos sometida a las consecuencias que *per se* genere el incumplimiento, cuando sólo pueden perjudicar a las partes, por encontrarse directamente vinculadas a su observancia y, por tanto, éstas serán las únicas que podrán alegar, probar y excepcionarse sobre la obligación principal, pues de otra manera se alteraría la naturaleza accesoria de la fianza al permitirse litigar a una parte ajena a la obligación principal, de suerte que sustituya o coexista con el deudor principal, lo cual rompe con toda la regulación jurídica de la fianza. La vinculación que genera el contrato que da origen a la fianza en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes implica que en caso de incumplimiento se pueda acudir ante las instancias administrativas o judiciales a exigir su cumplimiento forzoso, teniendo las partes la potestad de hacer valer las excepciones y defensas relativas al cumplimiento o incumplimiento, pero no así las afianzadoras que, al expedir las pólizas de fianzas, sólo intervienen de manera accesoria a la obligación principal, de suerte que, en caso de litigio en el que se les exija la obligación garantizada, deben limitarse, dada la naturaleza accesoria del contrato de fianza, a hacer valer las excepciones y defensas en torno al acto que suscribieron, por ser parte del mismo, pues los efectos vinculatorios del consentimiento de las partes para hacer, permitir o tolerar, sólo genera derechos, obligaciones y consecuencias para los que en éste intervinieron. (I.4o.A.367 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 4o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1371

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. REQUISITOS PARA SER DESIGNADOS. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE UN MAGISTRADO DE UNA SALA REGIONAL ASPIRANTE A LA SALA SUPERIOR PORQUE SE TRATA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES CUYA TITULARIDAD ES DE LOS JUSTICIABLES.- La Constitución ha desarrollado una categoría que se conoce

como garantías jurisdiccionales, basadas en el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución y tienen como objetivo garantizar y preservar la calidad y efectividad de la impartición de justicia a favor de los justiciables; están relacionadas con la selección, ascensos y promociones, estabilidad, inamovilidad e inmunidad, independencia y seguridad económica de los juzgadores, entre otras cuestiones. Tales prerrogativas y seguridades conferidas a los titulares de altos cargos jurisdiccionales tienen el carácter de instrumentales y no pueden conceptuarse como canonjías otorgadas en su favor, sino en razón del cargo pero siempre en beneficio y a favor de los justiciables. Luego entonces, un Magistrado de una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aspirante a Magistrado de la Sala Superior, carece de interés jurídico para cuestionar que los artículos 3o. y 4o. de la ley orgánica de dicho tribunal sean omisos en señalar los requisitos para la designación de los Magistrados de tal tribunal, pues se trata de una de las garantías jurisdiccionales que se establecen y son de la exclusiva titularidad de los justiciables. (I.4o.A.348 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 4o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1397

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA COMO ÓRGANO DE PLENA JURISDICCIÓN. REGLAS Y PRELACIÓN DE LOS TEMAS A CONSIDERAR EN ELLAS (PRECISIONES AL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).- Para que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puedan proceder a estudiar en primer término los conceptos de impugnación que ven al "fondo del asunto" de la resolución impugnada, es necesario que se den los siguientes presupuestos: a) Que el procedimiento previo a la resolución esté totalmente concluido; b) Se haya fijado adecuadamente la litis o contenido del acto, así como desahogados y reunidos los elementos para la toma de la decisión; y, c) Se hayan analizado integralmente los elementos litigiosos. En tal contexto, la falta del primer presupuesto originará una violación procedimental y la falta de los dos últimos dará pauta a una violación de carácter formal (relacionada con la aplicación de las reglas de juzgamiento, especialmente cuando se falte a la congruencia, exhaustividad y mo-

tivación al emitir la resolución), eventos que no permiten concluir que se hayan seguido por la autoridad administrativa todos los pasos, evaluaciones y consideraciones previas para estar en posibilidad, desde el punto de vista procesal y formal, de arribar o llegar a una decisión regular y susceptible de definir y resolver el fondo del conflicto. Por tanto, no es óbice que el artículo 237, segundo párrafo, del código tributario ordene que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procederán a analizar preferentemente las violaciones de fondo o por incompetencia -conducentes a declarar una nulidad lisa y llana- en relación con las violaciones formales o procedimentales -conducentes a declarar una nulidad para efectos-, principio que será aplicable siempre y cuando el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo contenga necesariamente un pronunciamiento válido y regular, precisamente respecto del fondo del asunto. Y es en este orden de ideas que resulta pertinente aclarar, especialmente en los casos del contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción, que solamente cuando estén dadas todas las condiciones y, además, la autoridad administrativa emita un pronunciamiento formalmente regular y adecuado en cuanto a todos los aspectos que se refieren al mérito y objeto del acto administrativo, será válido concluir que aplica la regla prevista en el artículo 237, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. (I.4o.A.373 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 4o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1450

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia fiscal-, la congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o *petitio*; atento lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede ir más allá ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina. (I.4o.A.371 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 4o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1451

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO.- El Código Fiscal de la Federación actualmente adopta un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, a saber: a) Objetivo o de mera anulación; y, b) Subjetivo o de plena jurisdicción. El primero tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, esto es, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad. En el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, teniendo la sentencia el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos, es decir, en estos casos será materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado. (I.4o.A.372 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 4o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1466

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

MULTAS. SON FISCALES CUANDO SU ORIGEN ES UNA RESOLUCIÓN DE NATURALEZA FISCAL.- De conformidad con el artículo 2o., en relación con el diverso 1o., ambos del Código Fiscal de la Federación, debe estimarse que las multas que se imponen a un particular con motivo del incumplimiento de una obligación fiscal, necesariamente participan de la naturaleza de la resolución que le dio origen y al referirse a una cuestión de carácter fiscal, también tiene ese carácter la multa, pues por crédito fiscal debe entenderse todo lo que pueda percibir el Estado que provenga de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios, razón por la cual la multa impuesta al quejoso, al derivar del incumplimiento de una obligación, sólo puede atenderse como un accesorio de naturaleza fiscal y, por ende, como un crédito de tal carácter. (I.6o.A.35 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 6o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1399

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

AGENTE ADUANAL AUTORIZADO. ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS ASENTADOS EN UN PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.- El agente aduanal autorizado es responsable de la veracidad y exactitud de los datos, información, determinación aduanera y clasificación arancelaria de las mercancías, así como de los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones no arancelarias respecto de una importación que realice la parte quejosa, en términos del párrafo primero del artículo 54 de la Ley Aduanera, cuando por su conducto se efectúa ese acto. (I.7o.A.189 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1322

DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.- Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno. (I.7o.A.183 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1351

DEMANDA DE NULIDAD. PARA SU ADMISIÓN ES NECESARIO QUE EL ACTOR SEÑALE EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TERCEROS INTERESADOS, CUANDO LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA SEA LA MODIFICACIÓN AL INGRESO GLOBAL GRAVABLE PARA EFECTOS DE REPARTO DE UTILIDADES.- El proceso es esencialmente un conjunto de actos desarrollados por el órgano jurisdiccional, las partes interesadas y los terceros ajenos a la relación sustancial, cuya finalidad consiste en aplicar una ley o disposición general al caso concreto controvertido para darle la solución correspondiente. Ahora bien, existe un tipo de terceros que no son ajenos a dicha relación, ya que su esfera jurídica puede afectarse en la resolución que se dicte en el proceso, de tal suerte que en esta hipótesis su llamamiento a juicio resulta esencial para configurar correctamente la relación litigiosa, en la medida en que ello permite la debida sustanciación del proceso y su conclusión. Así, cuando en un acta levantada con motivo de una visita domiciliaria se señale que el visitado, como retenedor, está afecto al impuesto relativo a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado y, en consecuencia, tiene obligación de realizar el reparto de utilidades a sus trabajadores, y se ve afectado en la resolución administrativa por la modificación que en ella se realiza respecto al ingreso global gravable, es correcto que el Magistrado instructor, con fundamento en el artículo 208, fracción VII y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, requiera a la actora para que manifieste el nombre y domicilio del sindicato de trabajadores de la empresa o de quien los represente. (I.7o.A.182 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1355

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO SE PRESENTA EL ESCRITO DE AGRAVIOS ANTE UNA AUTORIDAD DIVERSA AL JUEZ QUE DICTÓ EL AUTO EN EL QUE SE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, NO SE INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN.- Conforme a la fracción IV del artículo 97 de la ley mencionada, el

recurso de que se trata debe interponerse dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en la que surta efectos la notificación al ocursante del proveído recurrido. Por su parte, el artículo 99, último párrafo, del ordenamiento legal consultado, establece que el escrito en el que se haga valer el medio de defensa debe presentarse ante el Juez de Distrito, quien tiene la obligación de remitirlo inmediatamente al Tribunal Colegiado con las constancias pertinentes. Así, en caso de que el recurso se interponga ante una autoridad diferente al Juez, no se interrumpe el término en cita, en la medida en que esa circunstancia impide que el órgano que debe conocer del medio de impugnación tenga en su poder los elementos necesarios para resolver respecto a los planteamientos que se le formulan dentro del término que para ese efecto dispone la parte final del último párrafo del artículo 99 de la Ley de Amparo, lo que a su vez va en contra del principio de celeridad que rige todo lo concerniente a la suspensión del acto reclamado. (I.7o.A.46 K)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1425

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA QUE SURTA EFECTOS LA QUE SE CONCEDE CONTRA EL COBRO DE MULTAS, NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO FIJE COMO CONDICIÓN GARANTÍA ALGUNA.- De la clasificación de contribuciones que hace el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, particularmente de la definición de cada una de ellas, se advierte que las multas no se encuentran incluidas, es decir, que no son contribuciones; por tanto, si el artículo 135 de la Ley de Amparo establece como requisito para que surta efectos la suspensión cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, es de concluirse que tal requisito no debe satisfacerse cuando entre los actos reclamados se señala como tal la determinación de una sanción consistente en multa, puesto que ésta es de naturaleza distinta de las contribuciones, en términos del citado artículo 2o. del código tributario federal. Luego, es correcta la determinación que se dicte en el sentido de conceder la suspen-

sión definitiva al quejoso para el efecto de que no se haga efectiva la sanción económica que se le impuso, sin que se fije alguna garantía. (I.7o.A.188 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 7o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1456

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CONTRIBUCIONES. EL LAPSO PARA CALCULAR SU ACTUALIZACIÓN NO PUEDE SER MENOR A UN MES (INTERPRETACIÓN DE LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).- La disposición contenida en la parte final del primer párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación que se lee como: "Las contribuciones ... no se actualizarán por fracciones de mes", debe ser interpretada en sentido literal y no en el sentido de que el monto mínimo de la actualización deba ser la cantidad correspondiente a un mes, puesto que dicha disposición establece tal indicación atendiendo a la imposibilidad material para realizar el cálculo del factor de actualización por fracciones de mes. Esto es, si por ejemplo la fecha para el cumplimiento de la obligación tributaria fuera el día diecisiete de mayo y el obligado realizara el pago de la contribución el día veintinueve del mismo mes, mediando entre ambas fechas doce días, consecuentemente, la disposición en comento no ofrece la posibilidad de realizar el cálculo del factor de actualización en atención a que de conformidad con el párrafo primero del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, coincidiría el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al más reciente, con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más antiguo, que en todo caso sería el mes de abril; consecuentemente, ello llevaría a que se realizara una división que daría como resultado la unidad, y conllevaría a que para algunos casos se pudiera aplicar la actualización y para otros no, como el del ejemplo. Consecuentemente, no puede arribarse a la conclusión de que la intención del legislador federal haya sido la de establecer un caso de aplicación desigual para aquellas personas que incumplieran con el entero en las fechas señala-

das por las disposiciones legales respectivas, sino que, muy por el contrario, de una sana interpretación de dicha disposición se advierte que el legislador federal tuvo como intención la aplicación constante y sin excepción de la disposición legal en estudio, postulando que para todos aquellos casos en los cuales el retraso en el entero de las contribuciones fuese menor a un mes calendario, no debe operar la actualización. Luego entonces, el cálculo del factor de actualización sólo será posible a partir del primer mes completo que se cumpla después de la fecha del incumplimiento del entero de la obligación tributaria. (I.9o.A.60 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 9o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1344

MULTAS. HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El contribuyente al no enterar al fisco las contribuciones omitidas actualizadas antes de que la autoridad lleve a cabo la notificación de la resolución que determinó el monto de la contribución omitida y, por ende, no hacer un pago espontáneo de dichas contribuciones, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, la autoridad hacendaria, al emitir la resolución, debe tomar en cuenta los pagos provisionales efectuados por el contribuyente y determinar así la multa sobre las contribuciones omitidas. (I.9o.A.62 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 9o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1399

PENSIONES MILITARES. NO COMPRENDEN EL SOBREHABER. ARTÍCULOS 21 Y 29 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.- El haber es la cantidad neta diaria que corresponde a un militar como contraprestación por los servicios prestados al instituto armado; en cambio, el sobrehaber es la cantidad que adicional y excepcionalmente se establece en favor del militar que presta sus servicios en zona militar ubicada en lugar de vida cara o por estar comisionado en lugar de zona insalubre y por

el peligro a que eventualmente se ve expuesto por los servicios que presta en el activo, por lo que es evidente que tal prestación sólo se establece en favor de los militares que se encuentran en activo. Así, el artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establece, de manera específica, las prestaciones a que tiene derecho el personal militar en situación de retiro, al señalar como tales el haber del grado con el que vaya a ser retirado el militar, el haber por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, las asignaciones de técnico de vuelo o las asignaciones especiales de los paracaidistas, que se sumarán al primero y que será la base para el cálculo de los haberes de retiro, prestaciones todas ellas contenidas en el presupuesto de egresos de la Federación. Por tanto, las cantidades por concepto de sobrehaberes no se encuentran incluidas en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. (I.9o.A.50 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 9o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1410

PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA AL DICTAR SENTENCIA, LAS OFRECIDAS Y EXHIBIDAS CON EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, SI ÉSTE FUE EXTEMPORÁNEO.- Resulta jurídicamente improcedente tomar en cuenta, al dictar sentencia, las pruebas ofrecidas y exhibidas con la contestación de la demanda si ésta resulta extemporánea, ya que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 214 del Código Fiscal de la Federación, dichos medios convictivos deben ofrecerse anexos a la contestación; en tal caso, si la contestación es extemporánea precluye el derecho adjetivo de las demandadas para ofrecer pruebas, ya que éstas deben correr igual suerte que la contestación, puesto que es en este momento procesal donde la demandada adjuntará las pruebas documentales que ofrezca; en esa virtud, cuando la Sala Fiscal estima que la contestación fue extemporánea, se insiste, precluye el derecho de las demandadas para ofrecerlas si se tuvo por no contestada la demanda en tiempo. (I.9o.A.57 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 9o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1421

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD PARA QUE SURTA EFECTOS DICHA MEDIDA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XI, constitucional, corresponde a la autoridad responsable decidir en relación con la suspensión del acto reclamado; para tal efecto, la autoridad deberá proveer lo conducente, cuando se satisfagan los requisitos que para tal fin establecen los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo señalado por los artículos 170 y 173 del referido ordenamiento legal. Así, uno de los requisitos que debe satisfacerse es el de efectividad, integrado por todas aquellas condiciones que el quejoso debe llenar para que surta sus efectos la suspensión (una vez que se haya concedido), esto es, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias. Luego, el requisito de efectividad implica determinadas exigencias legales, una de ellas posterior a la concesión de la suspensión cuyo incumplimiento únicamente ocasiona el que deje de surtir efectos dicha medida cautelar; por ello, la autoridad responsable no debe negar la medida cautelar apoyándose en el hecho de que la quejosa no cumplió con la exigencia de la garantía establecida por el texto de la ley, pues para otorgar la medida cautelar basta con observar si se cumple con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que lo solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionen al gobernado. Por tanto, es al momento en que se resuelve sobre el otorgamiento de la suspensión cuando, de llegar a concederse, la autoridad debe fijar los requisitos de efectividad para que surta efectos dicha medida. (I.9o.A.7 K)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 9o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1457

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA SU OTORGAMIENTO DEBE DEMOSTRARSE, CUANDO MENOS EN FORMA INDICIARIA, QUE EL QUEJOSO ES TITULAR DEL DERECHO QUE ESTIMA VIOLADO.- Cuando se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión es agraviado; que no se sigue

perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; y que la ejecución de los actos reclamados le causaría daños y perjuicios de difícil reparación a la impetrante de garantías, debe concluirse que se surten los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin embargo, para su otorgamiento, se requiere que el quejoso demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular del derecho que estima violado. (I.9o.A.8 K)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 9o. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1461

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CONTRIBUCIONES FEDERALES Y SUS ACCESORIOS. AUTORIDAD FACULTADA PARA DETERMINARLAS TRATÁNDOSE DE EMPRESAS QUE OPERAN EN EL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL.- De conformidad con los artículos 31, fracción XIII y 41, apartado D, fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en vigor en el año de mil novecientos noventa y ocho, corresponde a la Administración Especial de Auditoría Fiscal determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal, respecto de las sociedades mercantiles que operen en el régimen de consolidación, en términos del capítulo IV, título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, de la interpretación relacionada de estos preceptos con el artículo 30 (reformado y adicionado mediante decreto publicado el diez de junio de mil novecientos noventa y ocho en el Diario Oficial de la Federación) del citado reglamento, se concluye que esa facultad, que originalmente corresponde a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la puede ejercer la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional, que al sustituir a la Dirección General Adjunta de Auditoría Internacional, es la que debe concluir los procedimientos iniciados por ésta. (I.13o.A.49 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 13er. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1345

CUOTA COMPENSATORIA, RESOLUCIÓN PROVISIONAL QUE IMPONE UNA. SI SE DICTÓ LA DEFINITIVA QUE LA MODIFICA, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN LA PROVISIONAL QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- Del análisis de los artículos 49 al 60 de la Ley de Comercio Exterior, se aprecia que el procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, también conocido como *antidumping*, se encuentra dividido en dos fases o etapas. La primera inicia de oficio o con la solicitud de la parte interesada con lo que se integra un expediente administrativo, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el aviso de inicio correspondiente, y comprende la obtención de todos los elementos de prueba que se estimen necesarios para concluir con la emisión de la resolución preliminar que se publica en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual la Secretaría de Economía (antes de Comercio y Fomento Industrial) podrá: determinar cuota compensatoria provisional, previo el cumplimiento de las formalidades del procedimiento y siempre que hayan transcurrido por lo menos cuarenta y cinco días después de la publicación de la resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la Federación; no imponer cuota compensatoria provisional y continuar con la investigación administrativa, o dar por concluida la investigación administrativa cuando no existan pruebas suficientes de la discriminación de precios o subvención, del daño o amenaza de daño alegados o de la relación causal entre uno y otro. La segunda fase del procedimiento se refiere a que una vez terminada la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, la Secretaría de Comercio somete a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior el proyecto de resolución final, la cual deberá notificarse a las partes interesadas y publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro del plazo de doscientos sesenta días a partir del día siguiente de la publicación en el mismo medio de la resolución de inicio de la investigación, en la que la ahora Secretaría de Economía podrá: imponer cuota compensatoria definitiva; revocar la cuota compensatoria provisional, o declarar concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria. Por tanto, si la parte quejosa reclamó la resolución preliminar de la investigación *antidumping*, que pertenece a la primera fase del procedimiento relativo, en la que se impuso una cuota compensatoria provisional, al advertir preliminarmente la autori-

dad, con base en las pruebas recabadas hasta ese momento, que existen hechos constitutivos de una práctica desleal de comercio, las violaciones que pudieran haber existido en ese periodo se han consumado de modo irreparable, al haberse emitido la resolución final en dicha investigación, que forma parte de la segunda fase del procedimiento, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que no es posible analizar la legalidad de esa primera resolución sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso regida por la resolución final de la investigación *antidumping*, la cual puede apoyarse en diversas pruebas y consideraciones a las que fundamentan la resolución preliminar, aunado a que en el supuesto de declarar inconstitucional la resolución preliminar, necesariamente se afectaría la resolución final, ya que la consecuencia sería determinar la nulidad de la primera etapa del procedimiento con todas sus consecuencias, sin atender a que la situación jurídica de la parte quejosa ya no se rige por la resolución preliminar de la investigación *antidumping*, sino por la resolución final de la investigación. (I.13o.A.63 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 13er. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1347

CUOTAS COMPENSATORIAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS. SU GARANTÍA O PAGO CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE LAS IMPONE Y DE LAS NORMAS QUE REGULAN SU EMISIÓN.- En términos del artículo 89 de la Ley de Comercio Exterior, las cuotas compensatorias provisionales y definitivas se aplicarán a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; de ahí que desde esa fecha los importadores o sus consignatarios estarán obligados a calcular en el pedimento de importación correspondiente, los montos de dichas cuotas, y a pagarlas junto con los impuestos al comercio exterior, sin perjuicio de que las cuotas compensatorias provisionales sean garantizadas conforme al numeral 65 de la misma legislación y las cuotas compensatorias definitivas de acuerdo a la fracción III del diverso precepto 98, esto es, en términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que la forma de garantía correspondiente sea aceptada por la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público. Por tanto, cuando la parte quejosa importa la mercancía a que se refiere la resolución preliminar o definitiva de la investigación *antidumping* y realiza o garantiza el pago de la cuota compensatoria respectiva, es claro que dicho acto es el primero que constituye una aplicación en su perjuicio de dicha resolución, así como de las normas que regulan su emisión, ya que tal proceder lo ubica en el supuesto de dichas disposiciones, afectando su esfera jurídica de manera inmediata, pues sólo al haberlas acatado fue como se le permitió realizar la correspondiente importación, ya que de no hacerlo se ve impedida a importar la mercancía, aunado a que frente a los referidos actos del promovente del amparo, existe el correlativo acto de autoridad al recibir el pago o la garantía aludida para permitir esa importación. (I.13o.A.62 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 13er. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1349

NEGATIVA FICTA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000).- Del análisis relacionado del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, con los artículos 37, 210 y 215 de dicho ordenamiento, debe considerarse que la obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de resolver sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda en relación con la resolución impugnada, debe interpretarse, en el caso de resoluciones negativas fictas, en el sentido de que la pretensión del actor va a ser deducida no sólo de la demanda de nulidad sino también de la ampliación de ésta, en relación con la contestación a dicha demanda, por ser en la contestación en donde se van a dar a conocer los fundamentos y motivos de la resolución negativa ficta impugnada. (I.13o.A.53 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 13er. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1401

TERCERO PERJUDICADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PARA TENER TAL CARÁCTER, ES NECESARIO SER TITULAR DE UN DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, CUYA EXISTENCIA DEPENDA DE LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- De los antecedentes legislativos del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, así como de las tesis que ha sustentado al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que no basta para ser considerado como tercero perjudicado, el tener un interés simple derivado de la especial situación frente al acto reclamado, sino que es necesario acreditar un interés público subjetivo en el interés jurídico; esto es, la titularidad de un derecho o la afectación a él cuya existencia dependa de que el acto reclamado subsista. (I.13o.A.61 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 13er. T.C. del 1er. C., septiembre 2002, p. 1463

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CUANDO CON ELLA SE VULNERA EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.- Es improcedente conceder la suspensión para que no se aplique una ley tributaria, porque ello implicaría que se permitiera actuar en desacato de la misma, lo que se traduciría en vulnerar el interés social, en virtud de que la sociedad está interesada en que la ley sea acatada, cuando en la misma se contienen disposiciones que permiten al Estado obtener ingresos para beneficio de la colectividad. (III.1o.A.96 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1er. T.C. del 3er. C., septiembre 2002, p. 1459

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

VISITAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES. INAPLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 134 Y 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULA LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo a lo previsto por los artículos 42, fracción V y 49, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, tratándose del cumplimiento de verificaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales, para que la visita sea eficaz y satisfaga su objetivo, la diligencia puede entenderse con quien se encuentre al frente de la negociación; luego, es evidente que la ley no dispone que deba existir citatorio previo en el caso de verificación de la obligación de expedir comprobantes fiscales, pues ello haría ociosa e inútil la visita, cuya finalidad es la de detectar la verdadera situación del visitado, circunstancia que no pugna con la garantía de seguridad jurídica, en tanto que las consecuencias de la visita, tratándose de obligaciones fiscales, se puede combatir por medio del recurso de revocación previsto por el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación o por el juicio de nulidad correspondiente. Bajo los supuestos apuntados, cuando para la realización de la mencionada verificación se emite un oficio habilitando días y horas hábiles para la práctica de la visita, es evidente que ese oficio y el en que se contiene la orden de visita se complementan entre sí; por tanto, dadas las características especiales de este tipo de verificaciones, lo correcto es notificarlos uno inmediatamente después del otro, con la persona que se encuentre al frente del establecimiento, conforme lo dispone el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, sin que sean aplicables los artículos 134 y 137 del citado ordenamiento legal, que regulan las notificaciones de los actos administrativos, pues en tratándose de una verificación de expedición de comprobantes fiscales, en la cual no se requiere que exista citatorio previo y puede entenderse la diligencia con quien se encuentre al frente del establecimiento, sería ilógico que para la realización de esta comprobación, al efectuarse en días inhábiles, debiera notificarse previamente y con las formalidades que establecen los preceptos legales indicados anteriormente. (III.2o.A.86 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2o. T.C. del 3er. C., septiembre 2002, p. 1472

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LAS REGLAS 3.1.15. Y 3.3.2. DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN QUE MODIFICA A LA DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE ABRIL DE ESE AÑO, NO CONSTRIÑEN LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO A QUE LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS SE PRESENTEN CON OPORTUNIDAD.- Las referidas reglas establecen que los contribuyentes, para obtener la devolución de las cantidades enteradas en forma indebida, deben cumplir con el requisito de haber presentado las declaraciones de pago provisional. Tales reglas no establecen que el pago extemporáneo de los enteros trimestrales tenga como consecuencia la pérdida del derecho de obtener la devolución de las cantidades pagadas en forma indebida. En rigor, no hay diferencia alguna por cuanto al derecho de conservar lo que le corresponda a cada quien, entre el impropio pago que se hace a tiempo y el que se hace fuera de él; lo cierto es que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales se encuentran obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, sin que se imponga como requisito para la procedencia de tal devolución que el contribuyente haya realizado el entero de las obligaciones fiscales en forma oportuna, si el gobernado cumplió con la obligación de presentar su declaración, no obstante que ésta no se hubiere hecho en forma oportuna y si, además, pagó en exceso, es claro que tiene derecho a esa devolución. (III.3o.A.7 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 3er. T.C. del 3er. C., septiembre 2002, p. 1360

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE POR CONTRAVENIR EL INTERÉS SOCIAL CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.- Es improcedente la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que la quejosa continúe o, en su caso, concluya una construcción de obra pública cuyo procedimiento de licitación de origen se estimó ilegal en la resolución reclamada, por contravenir, entre otros, el artículo 134 de la Constitución Federal que establece que la contratación de obra que realice el Gobierno Federal, el del Distrito Federal y sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en virtud de que afecta al interés social en la medida en que se encuentra en alto riesgo el que el destino de los recursos económicos federales no sea administrado con eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, en contravención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Sin ser obstáculo para lo anterior, el argumento en el sentido de que el negar la medida cautelar solicitada podría causar un perjuicio a la parte quejosa, en la medida que probablemente le ocasionaría un detrimento en su patrimonio al dejar de percibir un ingreso por la obra que venía realizando, pues el interés de la sociedad tiene mayor jerarquía y debe prevalecer ante el interés particular o de un grupo minoritario, sopesándose el perjuicio que la negativa de la medida cautelar podría depararle al quejoso frente al perjuicio que se ocasionaría a la sociedad de concederse. (VI.1o.A.121 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1er. T.C. del 6o. C., septiembre 2002, p. 1455

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

ALEGATOS. CUANDO EN ELLOS SE PLANTEA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN ATENDERSE EN EL JUICIO FISCAL.- Por alegato debe entenderse el derecho que asiste a cada parte en juicio para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surjan de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio. Ahora bien, el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación establece: "El Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia. ...". Lo anterior evidencia que los alegatos formulados por las partes en el juicio de nulidad deberán ser considerados al dictar sentencia, debiendo entenderse que el citado artículo 235 se refiere, por un lado, a los alegatos de bien probado, cuya omisión de análisis puede trascender en el sentido del fallo y dejar en estado de indefensión a la parte alegante, pero también a aquellos en los que se hace valer una causal de improcedencia y se solicita el sobreseimiento del juicio de nulidad, por ser esto cuestión de orden público e interés social y, por ende, de estudio obligado y preferente. (VI.3o.A.97 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 3er. T.C. del 6o. C., septiembre 2002, p. 1323

APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES.- Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la senten-

cia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tiene razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento. (VI.3o.A.12 K)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 3er. T.C. del 6o. C., septiembre 2002, p. 1329

EMBARGO COACTIVO. ES JURÍDICAMENTE APTO PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL SI COLMA LOS EXTREMOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Es cierto que el embargo, por excelencia, es un medio de aseguramiento del interés fiscal que tienen a su disposición las autoridades y puede realizarse de manera coactiva. Así, la esencia de las diligencias de embargo se reduce, en principio, a asegurar los adeudos, tanto principales como accesorios, que los particulares tuvieran respecto del fisco, resultando una forma de garantía, inclusive forzosa, ya que es factible que la autoridad la practique aun en contra de la voluntad del destinatario. Luego, a través del embargo el deudor puede garantizar el interés fiscal a fin de cumplir con uno de los requisitos que exige el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, esto es, para la consecución de la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y, a la vez, satisfacer la necesidad jurídica de que el fisco tenga asegurado el cumplimiento cabal del crédito fiscal; empero, si bien el embargo coactivo puede asimilarse en sus efectos al embargo administrativo y conducir, por ende, a la paralización de la etapa de ejecución, dada su naturaleza jurídica, no debe perderse de vista que para tal fin ha de reunir los requisitos exigidos por el artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, como son, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y que se cubran, previo a la realización de la diligencia respectiva o a que surta los efectos que se pretenden, los gastos de ejecución, pues sólo de esta manera es legalmente posible asemejar el embargo coactivo al administrativo, para efectos de alcanzar la suspensión del procedimiento. (VI.3o.A.98 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 3er. T.C. del 6o. C., septiembre 2002, p. 1364

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 294 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS PATRONES LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTES DE ACUDIR AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A DEMANDAR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO, NO TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL UNO).- Conforme a las consideraciones que informan la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia P./J. 113/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.", para determinar si es o no violatoria del artículo 17 constitucional la obligación de agotar una instancia administrativa (recurso de inconformidad) antes de acudir al órgano jurisdiccional, debe tomarse en cuenta, destacadamente, la naturaleza de la relación jurídica dentro de la cual surge el derecho que se pretende hacer valer, con el fin de verificar si existe algún motivo que justifique el establecimiento de tal obligación y si la regulación del recurso de agotamiento obligatorio respeta la índole de la prestación correspondiente o, por el contrario, para su resolución fija al gobernado mayores requisitos de los que deben cumplirse ante el respectivo tribunal, lo que motiva un presupuesto desproporcionado que le impide ejercer cabalmente su derecho fundamental de acceso a la justicia. Ahora bien, el artículo 294 de la Ley del Seguro Social no contraviene el numeral 17 constitucional, porque la interposición, tramitación y resolución de un recurso administrativo ante una autoridad del ramo, por sí mismo no transgrede la garantía de acceso efectivo a la justicia, ya que en su interpretación se acepta que el legislador

ordinario condicione el derecho a obtener una resolución jurisdiccional al agotamiento previo de un recurso, lo que se da, generalmente, cuando en la relación jurídica participa una autoridad administrativa. Finalmente, cabe agregar que la tramitación del recurso de inconformidad, mientras no se trate de prestaciones de índole netamente laborales, no desconoce que la naturaleza de la relación jurídica existente entre el patrón y el Instituto Mexicano del Seguro Social es ciento por ciento administrativa, al tiempo que tampoco se advierte que la tramitación de ese medio de defensa exija al promovente mayores requisitos que los que tiene que cubrir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cosa distinta sucede cuando a quien se obliga a agotar el recurso es al asegurado o a sus beneficiarios para alcanzar sus derechos laborales, pues en ese caso sí se condiciona en forma injustificada el derecho de acceso efectivo a la justicia, en tanto que no existe motivo alguno que lo justifique antes de solicitar el reconocimiento de tales derechos ante un tribunal, además de que la regulación del referido recurso administrativo desconoce los requisitos y prerrogativas que para hacer valer la acción laboral prevé la Ley Federal del Trabajo. (VI.3o.A.90 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 3er. T.C. del 6o. C., septiembre 2002, p. 1445

SERVIDORES PÚBLICOS. LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA NOMBRARLOS EN SUS CARGOS TIENEN FACULTADES PARA EXPEDIR LAS CREDENCIALES, OFICIOS O DOCUMENTOS QUE LOS IDENTIFIQUEN.- Las autoridades que conforme a las disposiciones legales o reglamentarias tienen facultades para nombrar a sus servidores subalternos, implícitamente la tienen para emitir las credenciales, oficios o documentación de identificación respectivos, en tanto ello no implica el ejercicio de una atribución diversa, sino la culminación eficaz del propio nombramiento para, así, acreditar al funcionario en el ejercicio de su cargo frente a los gobernados, a fin de que éstos conozcan que quien se identifica efectivamente es la persona a la que se le nombró en tal o cual cargo; de manera, entonces, que con base en ese principio puede concluirse que la facultad de

expedir la identificación respectiva queda subsumida en la de designación, sin necesidad de precepto específico que así lo contemple. (VI.3o.A.89 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 3er. T.C. del 6o. C., septiembre 2002, p. 1451

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO

ADUANAS. ES PROCEDENTE QUE EL ADMINISTRADOR SE AUXILIE DE PERSONAL SUBALTERNO PARA EL RECONOCIMIENTO O VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA.- De la interpretación armónica de los artículos 3o. y 144, fracción VI, de la Ley Aduanera que establecen, el primero de ellos, que los empleados públicos federales y locales deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando así lo soliciten y, el segundo, que el administrador de la aduana tendrá las facultades que dicho dispositivo legal enumera, entre otras, las de practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación, cuando se satisfagan los requisitos previstos para ese efecto en su reglamento, así como verificar y supervisar el citado reconocimiento, aunado a lo estipulado en el artículo 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que indica que las aduanas estarán a cargo de un administrador, del que dependerán los subadministradores, jefes de sala, jefes de departamento, jefes de sección, verificadores, notificadores, el personal del servicio de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, y el personal que las necesidades del servicio requiera, se concluye que el administrador de la aduana puede ser asistido por el vista o alguna otra persona adscrita a la dependencia para llevar a cabo la citada diligencia -cuando las necesidades del servicio lo ameriten- como en el caso del reconocimiento de mercancías, en el cual sea menester el auxilio de quien tenga los conocimientos técnicos para ello, aun cuando el acta que al efecto se instrumente, por estar a cargo del administrador de la aduana, como único responsable de dicha actuación, necesariamente deba ser firmada por él. (VII.3o.C.10 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 3er. T.C. del 7o. C., septiembre 2002, p. 1321

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO

NOTIFICACIONES POR LISTA EN EL AMPARO. SON LEGALES SI NO SE HA SEÑALADO DOMICILIO PARA RECIBIRLAS EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL.- Los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en términos del artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establecen que es requisito previo e indispensable que para poder efectuar notificaciones personales, los interesados en su primera comparecencia señalen domicilio en el lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, y si el diverso numeral 116, fracción I, de la Ley de Amparo exige como requisito el que al formularse la demanda de amparo por escrito se exprese el nombre y domicilio del quejoso o de quien promueva en su nombre, es legal que cuando no se cumplan esas disposiciones, las notificaciones personales se realicen por lista, por así señalarlo el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo. (XI.2o.33 K)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2o. T.C. del 11er. C., septiembre 2002, p. 1401

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA REGLA 2.1.1. DE LA RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EL EJERCICIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, Y EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO EXIGEN QUE LA ACTIVIDAD GANADERA SEA REALIZADA POR EL PROPIETARIO DEL GANADO PARA GOZAR DE LA EXENCIÓN DE DICHO IMPUESTO.- El artículo 16, fracción IV, del Código Fiscal de la Federa-

ción y la regla 2.1.1. de la citada resolución establecen que la actividad ganadera es aquella que se refiere a la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial, de donde se sigue que las disposiciones en comento no exigen que dicha actividad deba ser necesariamente realizada por el propietario del ganado para gozar de la exención en el pago del impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de tal actividad, a la que se contrae la citada regla. Por tanto, atento el principio general de derecho de que donde la ley no distingue no cabe distinguir, si el legislador no distinguió la autoridad hacendaria no debe hacerlo, puesto que al no preverse en la norma que la actividad deba ser realizada por el propietario para gozar del referido beneficio, no debe exigirse dicha condición. (XIV.2o.66 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 2o. T.C. del 14o. C., septiembre 2002, p. 1377

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO

DEDUCCIÓN DE GASTOS FISCALES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL CONTRIBUYENTE SÓLO ESTÁ OBLIGADO A CERCIORARSE QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE AQUÉLLOS REÚNA LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- De conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realizan, éstos deberán reunir los requisitos señalados por el artículo 29-A del mismo ordenamiento legal, y señala que quienes adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo y cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en ellos es el correcto, a fin de lograr la deducción o acreditar fiscalmente con base en esos comprobantes; a su vez, la fracción III del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala los requisitos que deberán reunir las deducciones autorizadas,

como son, que se comprueben con documentación que reúna los requisitos "... que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expida ...". En estas condiciones, el contribuyente que pretenda hacer deducible un gasto para fines del impuesto al valor agregado sólo está obligado a verificar que la documentación que ampare dicho gasto reúna los requisitos ya señalados, entre los que no se encuentra la obligación de cerciorarse o verificar que la clave y registro federal de contribuyentes contenidos en los comprobantes de pago efectivamente se encuentren registrados ante el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, que estando registrado el contribuyente emisor de los comprobantes de pago no sea localizable, o no se encuentre en suspensión de actividades. (XV.1o.30 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1er. T.C. del 15o. C., septiembre 2002, p. 1351

RENTA. REQUISITOS PARA DEDUCIR, PARA EFECTOS DE ESE IMPUESTO, EL MONTO ORIGINAL PAGADO POR TERRENOS ADQUIRIDOS QUE SE DESTINAN A DESARROLLOS INMOBILIARIOS (INTERPRETACIÓN DE LA REGLA 3.6.2. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA DOS MIL).- De conformidad con la regla general 3.6.2. de la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal de dos mil, para que proceda el beneficio de deducibilidad del precio original de terrenos adquiridos en el ejercicio en que se compraron, para ser destinados a desarrollos inmobiliarios, entre otros requisitos, es necesario demostrar que los ingresos acumulables correspondientes al ejercicio inmediato anterior, cuando menos en un noventa por ciento, provienen de la realización de esa actividad, lo que no es posible demostrar si la empresa que pretende la deducción se constituyó precisamente el mismo año en que adquirió los bienes, por lo que tampoco le es posible proporcionar la información requerida en la fracción B de la regla en comento; sin embargo, las deducciones se podrán obtener en el ejercicio fiscal siguiente, porque no es suficiente la adquisición de terrenos con la sola "intención" de dedicarlos a la ya citada actividad para efectuar la deducción de su costo, sin haberlos utilizado efectivamente para ese fin y haber obtenido en consecuencia un ingreso y así encontrarse en igualdad de circunstancias con las empresas

que ya invirtieron en un desarrollo inmobiliario, deducción que, por otra parte, comprende no sólo el monto del precio de los terrenos, sino también una serie de gastos propios de esa actividad. (XV.1o.31 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1er. T.C. del 15o. C., septiembre 2002, p. 1437

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO

AGRAVIOS. CASO EN QUE TÉCNICAMENTE NO EXISTEN.- Si lo que en el escrito de revisión se expresa a título de agravios constituye, en esencia, únicamente una reproducción de los conceptos de violación hechos en la demanda de garantías, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el tribunal que actuó como órgano de control constitucional en la primera instancia, y la parte recurrente omite expresar argumentación alguna para impugnar la sentencia de dicho tribunal, debe considerarse que técnicamente no existen agravios, dado que los argumentos contenidos en el referido escrito de revisión son anteriores a la sentencia recurrida, por lo que lógicamente no son aptos para demostrar que esa sentencia de primera instancia haya sido dictada en contravención a la Ley de Amparo y, en esas condiciones, dicha sentencia, que negó la protección de la Justicia Federal solicitada, debe confirmarse si, además, no existe deficiencia en la queja que deba suplirse. (XVII.1o.10 K)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1er. T.C. del 17o. C., septiembre 2002, p. 1323

QUEJA, RECURSO DE. NO PUEDEN SER MATERIA DEL MISMO LOS AGRAVIOS DIRIGIDOS A COMBATIR LA VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA O DE OTRAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES.- El recurso de queja tiene por objeto el análisis de la legalidad en que se sustentan las consideraciones de la resolución recurrida, por lo

que si el inconforme no esgrime argumentos contra las mismas, sino que expone razonamientos tendientes a combatir la notificación de esa resolución o de otras, como la de la sentencia de amparo, los mismos resultan inoperantes, al no guardar correspondencia con la sustancia del recurso, pues no lo es tal la validez de las notificaciones que señalen como practicadas de manera irregular, sino que ello en todo caso sería materia de diverso procedimiento. (XVII.1o.11 K)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 1er. T.C. del 17o. C., septiembre 2002, p. 1427

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ELLA, SÓLO SON INIMPUGNABLES CUANDO FAVORECEN AL PARTICULAR.- Una recta interpretación de lo previsto en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación permite establecer que las resoluciones pronunciadas en la reconsideración administrativa son inimpugnables, única y exclusivamente cuando a través de las mismas las autoridades fiscales, en uso de facultades discrecionales, modifican o revocan en beneficio del contribuyente una resolución administrativa que le hubiere sido adversa, lo que se estima de obvia comprensión, puesto que no sería jurídico que se inconformara con una resolución favorable a su interés, emitida sin petición o gestión alguna de su parte. En cambio, si el particular instó la reconsideración como un medio de obtener la revocación o modificación de una resolución administrativa, y la autoridad fiscal declara improcedente sus pretensiones, entonces la legalidad de la resolución relativa puede cuestionarse mediante la promoción del juicio de nulidad, habida cuenta que el precepto de mérito solamente establece dicha falta de impugnación respecto de resoluciones pronunciadas en beneficio de los contribuyentes, pero no en su perjuicio. (XVII.3o.10 A)

S.J.F. IX Época. T. XVI. 3er. T.C. del 17o. C., septiembre 2002, p. 1432

QUINTA PARTE

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL LIC. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO EN LA CEREMONIA DEL INFORME DE LABORES 2002 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Palabras pronunciadas por el Lic. Juan de Dios Castro Lozano, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en representación del Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Señor Magistrado Alejandro Sánchez Hernández,
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

Señoras y Señores Magistrados de la Sala Superior
y de las Salas Regionales del propio Tribunal;

Distinguidos invitados especiales;

Señoras y Señores:

Asisto a esta solemne sesión con la honrosa representación del ciudadano Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, que por mi conducto les envía su reconocimiento y solidaridad republicana en la importante y delicada tarea que todos ustedes realizan cotidianamente en beneficio del Estado mexicano y fundamentalmente, en beneficio de la sociedad nacional.

El informe que ha rendido este día el señor Presidente del Tribunal refleja cabalmente, no sólo su preocupación y diligencia por cumplir el mandato que le confirieron sus pares, es también, y sobre todo, la crónica detallada del denuedo, tesón y entrega de un gran equipo conformado por las señoras y señores Magistrados, pero también por los secretarios, actuarios, archivistas, mecanógrafas y auxiliares de esta noble Institución.

A todos sin excepción, una sincera felicitación por los logros obtenidos en el año transcurrido, porque la fuerza y poderío de una avalancha sólo se explica en función de lo que cada copo de nieve le aporta a la energía total desarrollada.

La estadística y el volumen de los asuntos jurisdiccionales desahogados en el lapso del informe muestran el desempeño de una organización profesional especializada, altamente responsable y con un evidente y genuino orgullo de pertenencia, que le garantiza a México una impartición de justicia administrativa sólida, imparcial, ágil y siempre a la altura de los retos que le impone la constante evolución de la Administración Pública Federal.

Han transcurrido ya 66 años desde que el Presidente Lázaro Cárdenas, actuando en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso General, expidiera y promulgara la Ley de Justicia Fiscal como un primer paso, se decía entonces, para crear en México tribunales administrativos dotados de la autoridad que es indispensable para que puedan desempeñar con eficacia funciones de control de la administración activa en defensa y garantía del interés público y de los derechos e intereses legítimos de los particulares.

Qué lejanos parecen ahora los días iniciales de aquel Tribunal Fiscal de la Federación que dictaba sus fallos en representación del Ejecutivo de la Unión -es decir, por delegación de facultades otorgadas por la ley- y que se componía de 15 Magistrados funcionando en Pleno y en salas de 3 Magistrados cada una.

Si bien la propia Ley de Justicia Fiscal estableció que el Tribunal sería independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquiera otra autoridad administrativa, es preciso recordar que los Magistrados nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado eran originalmente propuestos por dicha Secretaría, lo que da una idea del esfuerzo que debió realizar el Tribunal Fiscal de la Federación para ir construyendo con decisión y fundamentos la plena e incuestionable autonomía de que actualmente está dotado.

En este devenir de 66 años de la Institución han debido enfrentarse etapas críticas y situaciones difíciles, pero en todos esos procesos ha quedado de manifiesto la mística que anima y distingue a sus integrantes y la indeclinable voluntad de poner por delante a México y los mexicanos.

Así se superaron, entre otros, los cuestionamientos iniciales sobre la constitucionalidad del Tribunal, aspectos que quedaron definitivamente resueltos con las reformas constitucionales de 1968 y con las sucesivas reformas legales posteriores, que han permitido la configuración del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con una cada vez más amplia cobertura del territorio nacional y de las materias contenciosas que se suscitan entre la Administración Pública Federal y los particulares.

Al suprimir el Jurado de Infracciones Fiscales y la Junta Revisora del impuesto sobre la renta para crear el Tribunal Fiscal de la Federación, la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal señalaba en una de sus partes "Para terminar, quiere el Ejecutivo exponer de manera precisa que su intento al promulgar esta Ley es el de que tome nacimiento y se desenvuelva un órgano que prestigie en México una Institución como la de la justicia administrativa a la que tanto deben otros países en punto a la creación del derecho que regula los servicios públicos".

Hoy, escuchando el informe de actividades rendido por el Magistrado Presidente Alejandro Sánchez Hernández, podemos afirmar con satisfacción y beneplácito que en este Tribunal tenemos los mexicanos a una Institución robusta y vigorosa, profesional y respetable, que prestigia a la justicia administrativa y garantiza su impartición imparcial, expedita y suficiente.

Que así continúe la historia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por el bien de sus integrantes, por el bien de los justiciables y por el bien de México.

Muchas gracias.

SEXTA PARTE

ÍNDICES GENERALES

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

AVISO para dictaminar los estados financieros.- Su presentación extemporánea no obliga a concluir anticipadamente la visita domiciliaria. V-P-2aS-184 (8) . 50

BIENES originarios y bienes procedentes.- Su diferencia para efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. V-P-2aS-190 (14) 96

CERTIFICADO de origen en idioma inglés. Falta de presentación de su traducción. V-P-2aS-198 (22) 148

CONTRADICCIÓN de sentencias. Procede aun cuando las sentencias contradictorias sean de órganos de diferente jerarquía. V-P-SS-198 (3) 33

CONTRADICCIÓN de sentencias.- Queda sin materia si uno de los fallos señalados como contradictorios quedó insubsistente. V-P-SS-199 (4) 33

CRÉDITOS en materia aduanera.- Caso en que la autoridad debe determinarlos en el plazo de cuatro meses. V-P-2aS-183 (7) 48

EMPRESAS aseguradas por la Procuraduría General de la República, dentro de una causa penal seguida en contra de su representante legal y/o propietario.- Continúan sujetas al cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuentran afectas. V-P-SS-195 (1) 7

EQUIPAJE de pasajeros en viajes internacionales para efectos de la exención de los impuestos al comercio exterior. V-P-2aS-191 (15) 96

INCIDENTES frívolos. Procede imponer sanciones económicas. Por su interposición. V-P-SS-197 (2) 29

MERCANCÍAS de procedencia extranjera para uso personal del tenedor.- Carga de la prueba. V-P-2aS-192 (16) 97

MEMBRESÍAS de tiempos compartidos.- No tienen la calidad de acciones. V-P-2aS-185 (9) 51

MEMBRESÍAS de tiempos compartidos.- No tienen la calidad de títulos de crédito. V-P-2aS-186 (10) 52

MEMBRESÍAS de tiempos compartidos.- No tienen la calidad de un certificado de participación. V-P-2aS-187 (11) 53

MEMBRESÍAS, están gravadas con el impuesto al valor agregado. V-P-2aS-188 (12) 54

RESOLUCIONES administrativas favorables. Sólo benefician al particular que las gestionó. V-P-2aS-189 (13) 55

SANCIONES impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.- Es competente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de su impugnación. V-P-SS-200 (5) 45

SANCIONES impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.- Improcedencia del recurso de reconsideración previsto por su Ley. V-P-SS-201 (6) 46

TERCERO interesado.- No lo es el importador de los bienes al no tener un derecho incompatible con el del exportador. V-P-2aS-197 (21) 141

TRATO arancelario preferencial.- Elementos para obtenerlo conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. V-P-2aS-193 (17) 98

VALOR en aduana, de la mercancía importada. Elementos para su determinación. V-P-2aS-194 (18) 99

VALOR en aduana de las mercancías importadas por vista aduanal.- Fundamentación y motivación de la resolución que lo determina. V-P-2aS-195 (19) 100

VISTA aduanal.- No tiene obligación de identificarse en el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando no fue la autoridad que practicó la diligencia. V-P-2aS-196 (20) 100

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR

IMPROCEDENCIA del recurso de revocación.- Supuesto en el que no se surte. (2) 176

NOTIFICACIÓN de la orden de visita domiciliaria. Es legal si la actora fue omisa en controvertir la constancia respectiva al momento de formular su ampliación a la demanda. (4) 195

PLAZO para cumplir la resolución de un recurso.- El incumplimiento al artículo 133, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, no se configura como causal de nulidad. (3) 177

TERCERO interesado. En el juicio contencioso administrativo interpuesto en contra de resoluciones en materia de propiedad industrial. La omisión en su emplazamiento constituye una violación substancial en el procedimiento. (1)... 153

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES

ACTA de irregularidades levantada en el despacho aduanero de las mercancías.- Debe formularse en la misma fecha en la cual se llevó a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación. (7) 252

CAPITAL constitutivo. Caso en que es procedente su imposición aun y cuando el aviso de inscripción del trabajador se haya presentado en tiempo. (6) 246

CAUSAL de improcedencia y sobreseimiento. (2) 228

CIRCULARES, inicio y vigencia de las mismas. (20) 322

COMPENSACIÓN prevista en el Código Fiscal de la Federación.- Es aplicable a pagos provisionales del impuesto al valor agregado. (23) 335

COMPETENCIA material y territorial. No es necesario fundarla en la parte relativa de la resolución en la que se precisa su emisión en suplencia del titular de la dependencia. (4) 236

COMPROBANTES fiscales.- Entrega de la orden de visita domiciliaria para la verificación de su expedición. (33) 391

DEDUCCIONES por adquisiciones de mercancías en el extranjero. (3) 232

DEPOSITARIO.- No afecta el interés jurídico del, la resolución por la cual se le remueve del cargo. (27) 358

DIFERENCIAS entre la notificación personal y por correo certificado con acuse de recibo. (21)..... 328

EL CUMPLIMIENTO de una resolución del recurso de revocación, que ordena la reposición del procedimiento, puede hacerse aun cuando haya transcurrido el plazo para conclusión de las facultades de comprobación que establece el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, por ser una excepción a dicho plazo que se establece en el último párrafo del artículo 133 del mismo Código. (18) 314

FIANZAS.- Los informes de asuntos no diligenciados y las notificaciones por estrados no interrumpen el cómputo de la prescripción de créditos fiscales respaldados con pólizas de fianza. (1) 220

FONDO de ahorro.- No debe considerarse para la integración del salario base de cotización, aun cuando su aportación por los patrones y trabajadores se efectúe no de manera semanaria o mensual, sino quincenal. (36)..... 417

FORMAS de extinción de obligaciones fiscales no contempladas en las leyes fiscales especiales.- Son aplicables las previstas en el Código Fiscal de la Federación. (24) 336

FORMULARIO múltiple de pago.- Cuando es impugnable en juicio de nulidad. (29) 369

FORMULARIO múltiple de pago ilegal. (30) 370

ILEGALIDAD de las determinaciones aduaneras, si se basan en actuaciones firmadas por los jefes de operación aduanera, virtud a que el funcionario en cuestión, no está contemplado en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ni en ley formal y materialmente legislativa. (25)..... 346

ILEGALIDAD de notificación del acto demandado, no causa la nulidad del acto, dentro del procedimiento contencioso administrativo, ya que sólo atiende sobre la temporalidad de la presentación de la demanda. (14) 297

INGRESOS derivados de un plan de jubilaciones.- Se ubica dentro del concepto de previsión social y, por ende, el ingreso obtenido se encuentra exento del impuesto sobre la renta, con la limitación prevista en el artículo 77, último párrafo de la Ley de la materia. (13) 286

LEGALIDAD de una notificación realizada por correo certificado con acuse de recibo. (22) 328

LEY Federal de Protección al Consumidor.- Al inicio de la visita el verificador deberá exhibir su credencial así como la orden de verificación respectiva, de la cual deberá entregar una copia a la persona con la cual se entienda la diligencia. (12) 277

NEGATIVA ficta. Se configura en los términos previstos por el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al no resolverse el recurso de inconformidad dentro del plazo de tres meses. (5) 243

NOTIFICACIÓN por correo certificado en materia fiscal.- La practicada dentro del período vacacional del Tribunal, surte efectos al día hábil siguiente. (26)... 352

PLAZO de prescripción previsto por los artículos 22, párrafo antepenúltimo y 146 del Código Fiscal de la Federación. Cuando inicia, tratándose de cantidades pagadas indebidamente mediante declaraciones provisionales mensuales del impuesto al valor agregado. (34) 396

PLAZO para concluir la revisión efectuada en términos de lo dispuesto por el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación. (28) 364

QUEJA. Es procedente aun cuando se haya promovido por el abogado autorizado del demandante. (10) 271

QUEJA. Procede la devolución del vehículo materia del procedimiento administrativo, al ser declarada la nulidad de la resolución impugnada. (11) 271

RECURSO de revocación.- En el puede impugnarse la legalidad de los actos realizados en el procedimiento administrativo de ejecución por autoridades dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. (31) 379

RECURSO de revocación.- La resolución que ordena a realizar un acto o iniciar la reposición del procedimiento, debe cumplirse en el plazo de cuatro meses, computados a partir de que la resolución del recurso quede firme y no a partir de que se notifique. (19) 315

REMOCIÓN de depositario.- No es una resolución definitiva ni afecta el interés jurídico del depositario removido, por lo que es improcedente el recurso de revocación. (15) 303

RESOLUCIONES favorables en consultas formuladas en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Cuando no opera el límite temporal establecido por el artículo 36 Bis del mismo Ordenamiento legal respecto de sus efectos. (35) 397

SANCIONES.- Tratándose de presentación de declaraciones o avisos y se omita hacerlo, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida, ya que ello se encuentra dentro de los supuestos de excepción a la regla general prevista en la fracción V del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. (8) 259

SUSPENSIÓN de la ejecución del acto administrativo.- Procede otorgarla en juicio de nulidad por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (9) 265

VISITA domiciliaria.- Concluye con el acta final de visita, en términos del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación. (16) 309

VISITA domiciliaria.- La identificación de los visitadores, no implica que se acredite su nombramiento o su relación laboral con la autoridad fiscal. (17).... 309

VISITA domiciliaria, las facultades de los verificadores para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en relación con la expedición de comprobantes fiscales, comprende el periodo sujeto a revisión citado en la orden respectiva. (32) 388

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ACUERDOS GENERALES

ADSCRIPCIÓN de Magistrados de Sala Regional. G/6/2003 442

ADSCRIPCIÓN del Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. G/2/2003 434

ADSCRIPCIÓN del Magistrado Luis Malpica de Lamadrid. G/1/2003 433

CALENDARIO de suspensión de labores para el año 2003. G/3/2003 435

DESIGNACIÓN de Magistrados Visitadores. G/4/2003 436

DESIGNACIÓN del Presidente de la Primera Sección para el periodo de 2003. G/S1-1/2003 444

DESIGNACIÓN del Presidente de la Segunda Sección para el periodo de 2003. G/S2/1/2003 445

INTEGRACIÓN de las Comisiones. G/5/2003 440

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

ACTO reclamado. Debe tenerse por conocido desde el momento en que se reciben las copias solicitadas a la autoridad responsable. (1a./J. 42/2002) 449

IMPROCEDENCIA. Las pruebas que acreditan la actualización de alguna causal, pueden admitirse en el juicio de amparo directo o en revisión, salvo que en la primera instancia se haya emitido pronunciamiento al respecto y no se hubiese combatido. (1a./J. 40/2002) 449

ORDEN de visita. Requisitos que debe contener, tratándose de una diligencia de verificación administrativa de naturaleza extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional y 18 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal. (2a./J. 103/2002) 450

RECURSO de revisión fiscal. Carece de legitimación para interponerlo el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. (I.6o.A. J/8) 453

VISITA domiciliaria. Si la autoridad omite especificar que el citatorio es para recibir la orden de visita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dicha omisión se subsana si la diligencia respectiva se lleva a cabo, con el visitado o su representante legal. (2a./J. 100/2002) 452

ÍNDICE ALFABÉTICO DE TESIS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

ADUANAS. Es procedente que el administrador se auxilie de personal subalterno para el reconocimiento o verificación de mercancía extranjera. (VII.3o.C.10 A) 490

AGENTE aduanal autorizado. Es responsable de la veracidad y exactitud de los datos asentados en un pedimento de importación. (I.7o.A.189 A) 471

AGRAVIOS. Caso en que técnicamente no existen. (XVII.1o.10 K) 494

ALEGATOS. Cuando en ellos se plantea una causal de improcedencia, deben atenderse en el juicio fiscal. (VI.3o.A.97 A) 486

AMPARO directo. Cuando en una ejecutoria pronunciada en un juicio anterior el Tribunal Colegiado de Circuito omite el estudio de la inconstitucionalidad de una norma, es válido que en uno posterior la parte quejosa esté en aptitud de plantear, respecto del mismo precepto, dicha inconstitucionalidad. (1a. LXX/2002) 454

APARIENCIA del buen derecho. Alcances. (VI.3o.A.12 K) 486

CADUCIDAD de las facultades de las autoridades fiscales. Interpretación del artículo 239, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación. (I.2o.A.30 A) 464

CADUCIDAD de los procedimientos administrativos. Presupuestos o condiciones para declararla de oficio, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (I.4o.A.369 A) 465

COMERCIO exterior. Las facultades extraordinarias para legislar otorgadas al Presidente de la República en el artículo 131, segundo párrafo, de la Constitución Federal, incluyen no sólo las relativas a la posibilidad de aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el Congreso de la Unión, y de crear otras, sino también la facultad para derogarlas. (1a. LXVII/2002) 454

CONTRIBUCIONES. El lapso para calcular su actualización no puede ser menor a un mes (interpretación de la parte final del párrafo primero del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación). (I.9o.A.60 A) 474

CONTRIBUCIONES federales y sus accesorios. Autoridad facultada para determinarlas tratándose de empresas que operan en el régimen de consolidación fiscal. (I.13o.A.49 A) 478

CUOTA compensatoria, resolución provisional que impone una. Si se dictó la definitiva que la modifica, las violaciones cometidas en la provisional quedan consumadas irreparablemente, en virtud del cambio de situación jurídica. (I.13o.A.63 A) 479

CUOTAS compensatorias provisionales y definitivas. Su garantía o pago constituye el primer acto de aplicación de la resolución que las impone y de las normas que regulan su emisión. (I.13o.A.62 A) 480

DECLARACIONES fiscales presentadas por medios electrónicos (vía internet). El primer acto de aplicación se acredita con acuse de recepción que contenga los datos referentes a la hora, fecha, folio y tipo de operación, transmitido por la autoridad correspondiente. (I.7o.A.183 A) 471

DEDUCCIÓN de gastos fiscales para efectos del impuesto al valor agregado. El contribuyente sólo está obligado a cerciorarse que la documentación que ampare aquéllos reúna los requisitos que señala el artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (XV.1o.30 A) 492

DEMANDA de nulidad. Para su admisión es necesario que el actor señale el nombre y domicilio de los terceros interesados, cuando la materia de la controversia sea la modificación al ingreso global gravable para efectos de reparto de utilidades. (I.7o.A.182 A) 472

DEVOLUCIÓN de saldo a favor. Las reglas 3.1.15. y 3.3.2. de la segunda resolución que modifica a la de facilidades administrativas en el régimen simplificado para mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de ese año, no constriñen la devolución de cantidades pagadas en exceso a que las declaraciones respectivas se presenten con oportunidad. (III.3o.A.7 A) 484

EMBARGO coactivo. Es jurídicamente apto para garantizar el interés fiscal si colma los extremos del artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. (VI.3o.A.98 A) 487

FIANZAS. Excepciones que pueden oponer las instituciones afianzadoras cuando se trata de hacerlas efectivas. (I.4o.A.367 A) 466

FUSIÓN de sociedades. El artículo 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, al establecer que el derecho a disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente y no puede ser transmitido ni como consecuencia de aquélla, no viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. (1a. LVIII/2002) 456

FUSIÓN de sociedades. El artículo 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, al establecer que el derecho a disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente y no puede ser transmitido ni como consecuencia de aquélla, no viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal. (1a. LIX/2002) 456

IMPUESTO sobre la renta. La regla 2.1.1. de la Resolución de facilidades administrativas en el régimen simplificado para el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y el artículo 16, fracción IV, del

Código Fiscal de la Federación, no exigen que la actividad ganadera sea realizada por el propietario del ganado para gozar de la exención de dicho impuesto. (XIV.2o.66 A) 491

INGRESOS. El artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación que permite su determinación presuntiva no es violatorio de la garantía constitucional de proporcionalidad. (2a. CXIV/2002) 460

LEYES expedidas por el Congreso de la Unión en materia de Comercio Exterior. Su reforma por el Presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias, no está prohibida por el artículo 72, inciso f), de la Constitución Federal. (1a. LXVI/2002) 457

MAGISTRADOS del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Requisitos para ser designados. Falta de interés jurídico de un Magistrado de una Sala Regional aspirante a la Sala Superior porque se trata de garantías jurisdiccionales cuya titularidad es de los justiciables. (I.4o.A.348 A) 467

MULTAS. Hipótesis prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. (I.9o.A.62 A) 475

MULTAS. Son fiscales cuando su origen es una resolución de naturaleza fiscal. (I.6o.A.35 A) 470

NEGATIVA ficta. Interpretación del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación (reformado por Decreto publicado el 31 de diciembre de 2000). (I.13o.A.53 A) 481

NOTIFICACIONES en el juicio de amparo. Se presumen válidas por lo que para destruir tal presunción debe promoverse incidente de nulidad. (2a. CIX/2002) 461

NOTIFICACIONES por lista en el amparo. Son legales si no se ha señalado domicilio para recibirlas en el lugar de residencia del Tribunal Federal. (XI.2o.33 K) 491

PENSIONES militares. No comprenden el sobrehaber. Artículos 21 y 29 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. (I.9o.A.50 A) 475

PRUEBAS en el juicio de nulidad. No deben tomarse en cuenta al dictar sentencia, las ofrecidas y exhibidas con el escrito de contestación a la demanda, si éste fue extemporáneo. (I.9o.A.57 A) 476

QUEJA prevista en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo. Cuando se presenta el escrito de agravios ante una autoridad diversa al juez que dictó el auto en el que se decide sobre la suspensión provisional del acto reclamado, no se interrumpe el término para su interposición. (I.7o.A.46 K)... 472

QUEJA, recurso de. No pueden ser materia del mismo los agravios dirigidos a combatir la validez de la notificación de la resolución impugnada o de otras resoluciones o actuaciones. (XVII.1o.11 K) 494

RECONSIDERACIÓN administrativa. Las resoluciones dictadas en ella, sólo son inimpugnables cuando favorecen al particular. (XVII.3o.10 A) 495

RENTA. El artículo 25, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley que establece el impuesto relativo, vigente en mil novecientos noventa y ocho, al prever que para que sean deducibles las pérdidas originadas por la enajenación de acciones y otros títulos valor, se requiere que esa operación se haya efectuado conforme a los lineamientos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, constituye una norma de naturaleza heteroaplicativa. (1a. LXII/2002) 458

RENTA. El artículo 25, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley que establece el impuesto relativo, vigente en mil novecientos noventa y ocho, al prever que para que sean deducibles las pérdidas originadas por la enajenación de acciones y otros títulos valor, se requiere que esa operación se haya efectuado conforme a los lineamientos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, transgrede la garantía de legalidad tributaria. (1a. LVI/2002) 459

RENTA. El pago definitivo del tributo previsto en el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Impuesto relativo, sobre el monto de lo que el patrón dispone de los recursos que integran el fondo de pensiones, jubilaciones y pago de primas de antigüedad, no viola el principio de proporcionalidad tributaria. (2a. CXII/2002) 461

RENTA. Los artículos 31 y cuarto transitorio, fracción I, primer párrafo, de la Ley del impuesto relativo, violan el principio de equidad tributaria, al limitar únicamente a los prestadores de servicios turísticos del sistema de tiempo compartido, la opción de deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de la prestación del servicio. (2a. CXV/2002) .. 463

RENTA. Requisitos para deducir, para efectos de ese impuesto, el monto original pagado por terrenos adquiridos que se destinan a desarrollos inmobiliarios (interpretación de la regla 3.6.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil). (XV.1o.31 A) 493

SEGURO Social. El artículo 294 de la Ley relativa, que establece a cargo de los patrones la obligación de agotar el recurso de inconformidad antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a demandar una resolución definitiva dictada por el Instituto, no transgrede el derecho al acceso efectivo a la justicia garantizado en el artículo 17 Constitucional (legislación vigente en el año dos mil uno). (VI.3o.A.90 A) 488

SENTENCIAS del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como Órgano de plena jurisdicción. Reglas y prelación de los temas a considerar en ellas (precisiones al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación). (I.4o.A.373 A) 468

SENTENCIAS del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Principio de congruencia externa. (I.4o.A.371 A) 469

SERVIDORES públicos. Las autoridades competentes para nombrarlos en sus cargos tienen facultades para expedir las credenciales, oficios o documentos que los identifiquen. (VI.3o.A.89 A) 489

SUSPENSIÓN de obra pública. Es improcedente por contravenir el interés social consagrado en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. (VI.1o.A.121 A) 485

SUSPENSIÓN definitiva. Para que surta efectos la que se concede contra el cobro de multas, no es necesario que el Juez de Distrito fije como condición garantía alguna. (I.7o.A.188 A) 473

SUSPENSIÓN del acto reclamado en el juicio de amparo directo. Corresponde a la autoridad responsable fijar los requisitos de efectividad para que surta efectos dicha medida. (I.9o.A.7 K) 477

SUSPENSIÓN del procedimiento administrativo de ejecución. Improcedencia del recurso de revocación en contra del acto de requerimiento previo a su calificación. (I.1o.A.69 A) 464

SUSPENSIÓN. No procede cuando con ella se vulnera el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. (III.1o.A.96 A) 482

SUSPENSIÓN provisional. Para su otorgamiento debe demostrarse, cuando menos en forma indiciaria, que el quejoso es titular del derecho que estima violado. (I.9o.A.8 K) 477

TERCERO perjudicado en materia administrativa. Para tener tal carácter, es necesario ser titular de un derecho público subjetivo, cuya existencia dependa de la subsistencia del acto reclamado. (I.13o.A.61 A) 482

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto. (I.4o.A.372 A) 470

VISITAS para comprobar el cumplimiento de la obligación de expedir comprobantes fiscales. Inaplicabilidad de los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación que regula las notificaciones de los actos administrativos. (III.2o.A.86 A) 483

DIRECTORIO DE LA REVISTA

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Mag. Alejandro Sánchez Hernández

DIRECTORA DE LA REVISTA:
Lic. Cristina Angélica Solís de Alba

Compilación, clasificación, ordenación y revisión de tesis, elaboración de índices, corrección tipográfica y vigilancia de la edición:

Lic. Juan Carlos Ramírez Villena
C. Ana Lidia Santoyo Ávila

PUBLICACIÓN OFICIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Certificado de Licitud de Título No. 3672
Certificado de Licitud de Contenido No. 3104
Número de Reserva al Título en Derechos de Autor: 04-2001-012517410700-102
Distribuidor principal: Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo,Varsovia 9, 4° piso, Colonia Juárez C.P. 06600, México , D.F.
Impresión:Talleres Gráficos de México. Secretaría de Gobernación, Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, C.P. 06280, México D.F.

Varsovia 9, cuarto piso, Colonia Juárez C.P. 06600, México, D.F.

Las obras podrán adquirirse en la Dirección General de Publicaciones, en las Librerías Jurídicas Especializadas y en las Salas Regionales Foráneas, o bien, por correo, enviando cheque a nombre del Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, a la siguiente dirección:

DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES

Varsovia 9, piso 4°. Col. Juárez. CP 06600.
México, D.F.

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

METROPOLITANAS

SUCURSAL VARSOVIA
VARSOVIA No. 9 P.B.
COL. JUÁREZ
C.P.06600 MÉXICO, D.F.
TEL. 55 11 70 70

SUCURSAL MISSISSIPPI
RÍO MISSISSIPPI No. 49 - P.B.
COL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06500 MÉXICO, D.F.
TEL. 55 25 15 00 AL 09. EXT. 4144

SUCURSAL TLALNEPANTLA
AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No. 18 - P.B. COL. CENTRO
C.P. 54000 TLALNEPANTLA EDO. MÉX.
TEL. 53 84 05 44

FORÁNEAS

SUCURSAL TORREÓN
BLVD. INDEPENDENCIA No. 710
PONIENTE, ENTRE FALCÓN Y TREVIÑO
COL. MODERNA, C.P. 27170,
TORREÓN, COAH.
TEL. 01 87 17 16 24 65

SUCURSAL CELAYA
EJE VIAL MANUEL J.CLOUTIER
NORPONIENTE 508
C.P. 38020 CELAYA, GTO.
TEL. 01 461 61 420 89

SUCURSAL OAXACA
AV. PINO SUÁREZ No. 700 INT. 16 -B
COL. CENTRO
C.P. 68000 OAXACA, OAX.
TEL. 01 951 51 3 78 99

SUCURSAL CULIACÁN
PASEO NIÑOS HÉROES No. 520
ORIENTE, P.B.
COL. CENTRO
C.P. 80120, CULIACÁN, SIN.
TEL. 01 66 77 12 90 39

SUCURSAL ACAPULCO
COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 63-2° NIVEL
Y C-1 Y C-2 FRACC. CLUB DEPORTIVO.
C.P. 33690, ACAPULCO, GRO.
INTERIOR DEL CENTRO DE COPACABANA
TEL. 01 74 44 81 36 39

DIRECTORIO
SALAS REGIONALES FORÁNEAS

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE
PRIVADA 5B-SUR, No. 4302,
ENTRE 43 PTE. Y 7 SUR
COL. HUEXOTITLA,
C.P. 72530
PUEBLA, PUEBLA
TEL. 01 (222) 2 40 34 05 EXT. 5403

SALA REGIONAL PENINSULAR
CALLE 56-A No. 483B, (PASEO DE MONTEJO)
ESQ. CON CALLE 41, COL. CENTRO
C.P. 97000
MÉRIDA, YUCATÁN
TEL 01 (99) 99 28 04 19 EXT. 5549

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE
CERRO DE PICACHOS No. 855 SUR
COL. OBISPADO
C.P. 64060
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL. 01 (81) 81 23 21 59

SALA REGIONAL DEL NOROESTE I
AV. PASEO DE LOS HÉROES 10105-302,
3° Y 4° PISOS
FRACC. DESARROLLO URBANO
DEL RÍO TIJUANA
C.P. 22320
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
TEL. 01 66 66 84 84 61 EXT. 5459

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II
CALLE CHIHUAHUA No. 133 NTE.
ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE
COL. CENTRO
C.P. 85000
CD. OBREGÓN, SONORA
01 (644) 414 07 05 EXT. 5423

SALA REGIONAL DEL GOLFO
AV. CIRCUITO CRISTOBAL COLÓN No. 5,
OCTAVO Y DÉCIMO PISOS.
COL. JARDINES DE LAS ÁNIMAS,
SECCIÓN "TORRES ÁNIMAS"
C.P. 91190
JALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ
TEL 01 (228) 813 50 21 EXT. 5480

PRIMERA Y SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE
AV. AMÉRICA No. 877-2° Y 3er PISO
ENTRE COLONOS Y FLORENCIA
COL. PROVIDENCIA, SECTOR HIDALGO
C.P. 44620
GUADALAJARA, JALISCO
TEL 01 (33) 38 17 15 25 EXT. 5467

SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO I
AV. FRANCISCO ZARCO No. 2656
COL. FRANCISCO ZARCO
C.P. 31020
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL. 01 (614) 418 84 77 EXT. 5453

SALA REGIONAL DEL CENTRO I
PLAZA KRISTAL, TORRE "A" ÚLTIMO PISO,
AV. LÓPEZ MATEOS, ESQUINA CON HÉROES
DE NACOZARI SUR No. 1001,
COL. SAN LUIS
C.P. 20250
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL. 01 (449) 915 29 12 EXT. 5473